

nuestra historia

Revista de Historia de la FIM

Núm. 16, 2º semestre de 2023



A 50 años del golpe de estado:

Unidad Popular, dictadura militar y batallas por la memoria histórica en Chile

fundación de
investigaciones
marxistas



Nuestra Historia

Revista de Historia de la FIM

ISSN: 2529-9808



Usted es libre de:

- Copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra.

Bajo las siguientes condiciones:

- No comercial: No puede utilizar los contenidos de esta revista para fines comerciales.
- Sin obras derivadas: No puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

Con el siguiente caso particular:

- Esta licencia no se aplica a los contenidos publicados procedentes de terceros (textos, gráficos, informaciones e imágenes que vayan firmados o sean atribuidos a otros autores). Para reproducir dichos contenidos será necesario el consentimiento de dichos terceros.

Nuestra Historia: Revista de Historia de la FIM

ISSN: 2529-9808 • **Edita:** Fundación de Investigaciones Marxistas • **Coordinadores:** Manuel Bueno Lluch, José Gómez Alén, Julián Sanz Hoya y Santiago Vega Sombría • **Consejo de Redacción:** Irene Abad Buil, Eduardo Abad García, Juan Andrade Blanco, María Ayete Gil, Sergio Cañas Díez, Ángel Duarte Montserrat, Francisco Erice Sebares, Carlos Fernández Rodríguez, Sergio Gálvez Biesca, Juan Carlos García-Funes, José Luis Gasch Tomás, David Ginard i Féron, Paula González Pons, Patricia González-Posada Delgado, Fernando Hernández Sánchez, Gustavo Hernández Sánchez, José Hinojosa Durán, Mélanie Ibáñez Domingo, José Luis Martín Ramos, José Emilio Pérez Martínez, Guillem Puig Vallverdú, Xavier Ramos Díez-Astrain, Sofía Rodríguez Serrador, Víctor Santidrián Arias, Jorge Torres Hernández y Julián Vadillo Muñoz • **Diseño de portada:** Francisco Gálvez • **Diseño del interior y maquetación:** Manuel Bueno Lluch • **Imagen de portada:** Funeral de Salvador Allende, 4 de noviembre de 1990 (Detalle de foto de Luis Navarro Vega, Biblioteca Nacional Digital de Chile). • **Envío de colaboraciones:** nuestrahistoriafim@gmail.com • **DL:** M-3046-2017.

Impresión subvencionada por transform! europe.

transform! europe se financia parcialmente a través de una subvención del Parlamento Europeo.

Nuestra Historia

Revista de Historia de la FIM

Número

16

Segundo semestre de 2023

ÍNDICE

EDITORIAL

Número 16

Consejo de Redacción de *Nuestra Historia* 7

A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO: UNIDAD POPULAR, DICTADURA MILITAR Y BATALLAS POR LA MEMORIA HISTÓRICA EN CHILE

Presentación

Rolando Álvarez Vallejos 11

La Unidad Popular y los debates políticos e historiográficos

Rolando Álvarez Vallejos 17

El experimento chileno y las izquierdas europeas en la encrucijada de los setenta

Alessandro Santoni y Mariana Perry Fauré 37

La «relación civil-militar». Un balance provisional

Pablo Seguel Gutiérrez 59

La refundación capitalista de la dictadura cívico-militar, 1973-1983: Todo lo sólido se desvanece en el aire

Eduardo López Bravo 87

Arte, cultura y dictadura: balance historiográfico

Karen Esther Donoso Fritz 111

Movimiento social y político de mujeres durante la dictadura militar 1973-1989.

Cristina Moyano Barahona y Valentina Pacheco Parra 129

Nuestros pasados que no pasan. Tensiones entre la historia, las memorias y la justicia

María Olga Ruiz, Consuelo Telechea y Franco Carreño 149

NUESTROS CLÁSICOS**Introducción**

Victoria López Barahona 165

Mujeres, Clase y Políticas de Identidad. Reflexiones sobre el Feminismo y su Futuro

Martha E. Gimenez 167

LECTURAS**Sobre culturas históricas marxistas y marxismo difuso**

Francisco Erice 179

Para entender la ofensiva social y cultural del nacionalismo español

Julián Sanz Hoya 183

La recuperación de la democracia desde abajo y por los de abajo

Óscar J. Martín García 186

El asalto a las ondas

Vicent Bellver Loizaga 190

La relevancia histórica de los instrumentos represores para entender el franquismo

Irene Abad Buil 194

MEMORIA**La memoria de la XIII Brigada Internacional en el norte de Córdoba**

Manuel Vacas Dueñas 199

Crónica de una exhumación: las cuatro víctimas de Bértoa

Carmen García-Rodeja y Carmela Galego 207

Ferrol, una historia de sangre silenciada	
Antonio Blanco Carballo	212
José Gómez Gayoso. Vivir y morir por la causa	
Carlos A. Portomeñe Pérez	221
<hr/>	
AUTORES (DOSSIER, ESTUDIOS Y ENTREVISTA)	229

EDITORIAL

Número 16

Consejo de Redacción de *Nuestra Historia*

El lanzamiento del n°16 de *Nuestra Historia* cierra ocho años de publicación ininterrumpida de la revista. Una década si tenemos en cuenta el primigenio *Boletín de la sección de Historia de la FIM*. Una trayectoria que —tal y como decíamos en nuestro anterior número— se va consolidando y que, sin caer en triunfalismos, resulta un modesto pero estimulante logro para la pequeña comunidad de historiadores/as que venimos impulsando con esfuerzo militante la publicación de dos números anuales. Lejos de los formalismos clásicos de una parte de la Academia, lo que hace diferente a nuestras páginas es que están pensadas siempre desde una perspectiva crítica, comprometida y plural. Un punto de partida que no ponga en segundo plano el rigor propio de la disciplina y que —como decía el maestro Pierre Vilar— anime a nuestros/as lectores/as a pensar históricamente y contribuya con humildad a la construcción científica (o, al menos, razonada) de la Historia. Lo que nos mueve no es otra cosa que el objetivo de que la comprensión del pasado nos ayude a conocer el presente y, en consecuencia, a intentar comprenderlo mejor. Esperamos que las reflexiones y análisis esbozados en *Nuestra Historia* puedan ser de alguna manera útiles al pensamiento crítico contemporáneo y contribuir a enriquecer sus perspectivas frente a un futuro que se torna cada vez más incierto.



La salida a la luz de este número coincide con varios acontecimientos terribles ocurridos en diversas latitudes del planeta. La elección de Javier Milei en Argentina muestra la potencia de la nueva ola reaccionaria que se cierne sobre los pueblos del mundo y que sufrirán especialmente las clases populares. Pues si hay algo que destaca especialmente detrás de estos movimientos populistas que trafican con la palabra libertad es una clara perspectiva de clase que no pre-

tende otra cosa que arrancar de cuajo todas las conquistas obtenidas fruto de décadas de ardua lucha social. En lo concerniente a nuestros/as colegas argentinos, mostramos nuestra total solidaridad con ellos/as frente a los drásticos recortes anunciados por el gobierno en el campo de la investigación y las primeras tentativas incluso de negar o relativizar los terribles crímenes de la dictadura militar que padeció el país hace varias décadas. Le temen a la Historia por su potencial uso para entender el presente, un peligroso punto de partida para transformar el futuro.

También resultan muy preocupantes los dramáticos acontecimientos de Palestina. El ejército israelí continúa la masacre indiscriminada de personas, especialmente niños, desde hace meses. En el momento que escribimos estas palabras se alcanza ya la intolerable cifra de 23.357 muertos y 59.410 heridos en la franja de Gaza. Esta limpieza étnica al más puro estilo colonial se enmarca dentro de un proceso de expansión de Israel que, desde 1948, practica el terrorismo de Estado con la impunidad de saberse un aliado indispensable del imperialismo norteamericano en Oriente Próximo. Ni la Unión Europea ni los países árabes hermanos de los palestinos han exigido a Israel el fin de las hostilidades. Solo Sudáfrica —cuya población negra sufrió el apartheid impuesto por la minoría colonialista blanca— ha denunciado por genocidio a Israel ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, si algo ha demostrado el pueblo palestino a lo largo de estas décadas —y la Historia debe ponerlo de relieve— es que donde hay opresión también hay resistencia. Estos hechos, aparentemente aislados, no lo están. Todo lo contrario, nos indican que nos encontramos ante la consolidación de un momento histórico global tremendamente sombrío y complejo. No viene mal recordar la frase del pensador sardo Antonio Gramsci cuando

decía aquello de «El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos».

En esta ocasión, el *Dossier* central de la revista trata sobre la historia reciente de Chile, las batallas por la memoria y los debates historiográficos. Bajo el título «A 50 años del golpe de Estado: Unidad Popular, dictadura militar y batallas por la memoria histórica en Chile» se agrupan siete artículos, introducidos por el historiador de la Universidad de Chile y coordinador del monográfico Rolando Álvarez Vallejos. El primer texto corre a cargo de la pluma de este mismo autor y se centra en los debates sobre la experiencia política de la vía chilena al socialismo producidos en el seno del campo historiográfico y también en las comunidades de memoria. Una batalla por las ideas que se encuentra lejos de estar acabada y donde cada año se suceden nuevas polémicas. El segundo texto es de Alessandro Santoni y Mariana Perry. A lo largo de sus páginas se analizan con esmero las transferencias e interconexiones existentes entre la experiencia chilena y la izquierda socialista y comunista europea. A continuación, los artículos de Pablo Seguel Gutiérrez y Eduardo López Bravo estudian las complejas conexiones existentes entre el ejército chileno y las fuerzas civiles, así como con las políticas neoliberales de la dictadura de Pinochet. Por su parte, Karen Donoso analiza en el cuarto artículo el impulso de la cultura comprometida durante el periodo de la Unidad Popular en contraste con el lógico retroceso posterior y la reformulación de las políticas culturales durante los años del pinochetismo. El ensayo escrito por Cristina Moyano y Valentina Pacheco se adentra en la autoorganización y resistencia desarrollada por las mujeres chilenas para plantar cara al régimen. Unos hechos históricos poco resaltados, pero que revisten una gran importancia para tener una visión global

del fenómeno. Si por algo destacó la dictadura fue por su gran labor represiva. En este sentido, el último trabajo, a cargo de Olga Ruiz, Consuelo Telechea y Franco Carreño, realiza un exhaustivo recorrido por los principales debates ocurridos en torno a los intentos de construcción de una memoria histórica que no ha sido precisamente bien recibido por las élites del país.

Los artículos de este dossier están reforzados por un número de ilustraciones que excede lo habitual. Nuestro agradecimiento a fotógrafos e instituciones por su autorización deseamos personalizarlo en la autora de las fotografías del último texto, Diana Duhalde, militante del MIR detenida y torturada durante la dictadura pinochetista. Rendimos así desde Nuestra Historia un homenaje de memoria y solidaridad a todas las víctimas de la terrible represión ejercida por la Junta Militar presidida por el general Pinochet que cercenó, por la fuerza de las armas, el Gobierno democrático del Presidente Allende que, a comienzos de los años setenta, había despertado la simpatía y las esperanzas de transformación social en todos los sectores progresistas del mundo^[1].

La sección de *Nuestros Clásicos* nos trae una brillante reflexión de la teórica del feminismo marxista Martha E. Giménez, quien ha dedicado su ya larga trayectoria académica a investigar sobre las conexiones entre la realidad material de las mujeres y las múltiples construcciones teóricas que desde distintas corrientes feministas han tratado de explicar su existencia. En este

1.- Diana Duhalde Ruiz, fotógrafa, detenida ilegalmente y torturada en el cuartel de Silva Palma y en Villa Grimaldi, consiguió una sentencia de reconocimiento y reparación como víctima de crímenes de lesa humanidad y torturas por agentes del Estado, al que condena a su reparación, véase «Poder Judicial de Chile» 26 Juzgado Civil de Chile, fallo de 1ª instancia, 10 septiembre de 2020 (Unexpp de Chile y Observatorio de Justicia Transicional, Centro de Derecho Humanos, Facultad de Derecho UPP).

sentido, el presente texto realiza una notable contribución sobre la trascendencia del papel de la clase social a la hora de analizar las formas en que se materializa la opresión de las mujeres en el seno del contexto concreto de nuestro ciclo histórico, el del modo de producción capitalista. Un enriquecedor ensayo que —tal y como plantea Victoria López Barahona en su introducción— puede ser un interesante revulsivo para continuar incorporando en el seno de nuestra revista traducciones que nos ayuden a profundizar mejor en los debates existentes dentro del feminismo y el marxismo.

La sección de *Lecturas* despliega un abanico de reseñas que exploran una variedad de novedades bibliográficas, seleccionadas por su destacada contribución a diferentes áreas de estudio. Cinco autores se sumergen en el análisis de obras de índoles muy diversas, ofreciendo así una perspectiva ecléctica y enriquecedora. Desde las culturas históricas del marxismo occidental y su relación con los movimientos sociales en la obra editada por Stefan Berger y Christoph Cornelissen que analiza Paco Erice, hasta el siempre sugerente libro de Pablo Batalla sobre las construcciones simbólicas del nacionalismo español que nos trae Julián Sanz. Pasando también por otros temas de interés como el último libro de Xavi Domènech sobre las relaciones entre obreros y empresarios en el contexto de la dictadura y la transición (Óscar J. Martín) o el papel de las radios libres en España durante los años setenta y ochenta del s. XX que ha estudiado con esmero José Emilio Pérez (Vicent Bellver). Para finalizar, Irene Abad reseña el sugerente libro de Melanie Ibáñez, quien partiendo del caso concreto de cómo afectó la Ley de Responsabilidades Políticas a las mujeres valencianas en el primer franquismo, se adentra en uno de los aspectos menos investigados de la represión de la dictadura.

Por último, la siempre estimulante sección de *Memoria* viene cargada de cuatro artículos que invitan a recorrer aspectos poco conocidos. En primer lugar, Manuel Vacas Dueñas relata el paso de la XIII Brigada Internacional por el norte de Córdoba durante la Guerra Civil. A continuación, Carmen García-Rodeja y Carmela Galego realizan una crónica sobre los hechos que se esconden detrás de la fosa de Bértoa (A Coruña). Los siguientes dos artículos también tienen como protagonistas las tierras gallegas. Antonio Blanco Carballo relata la ardua lucha de la Comisión Pro-Memorial a las Víctimas del Franquismo en Ferrol por el reconocimiento de los represaliados por el régimen en el municipio. Por último, Carlos A. Portomeñe Pérez aborda la biografía de José Gómez Gayoso, guerrillero comunista asesinado por la dictadura franquista en 1948.

No quisiéramos concluir este editorial sin rendir un sentido homenaje a nuestro compañero José Carlos Rueda Laffond, fallecido recientemente. Aunque la revista dedicará algunas páginas en su próximo número a su enorme aportación intelectual, desde el Consejo de Redacción de *Nuestra Historia* queremos anticipar nuestras condolencias a sus familiares, colegas y amigos en este momento de pesar. Su deceso supone una dura pérdida para la Historia sociocultural en su conjunto y los estudios sobre el comunismo en España en particular. Durante décadas, José Carlos destacó por su sentido del compañerismo y su incansable dedicación hacia la disciplina histórica. Su ausencia deja un vacío irreparable, pero su legado perdurará en la memoria de quienes lo conocimos y aprendimos de su sabiduría.

DOSSIER

A 50 años del golpe de Estado: Unidad Popular, dictadura militar y batallas por la memoria histórica en Chile

Rolando Álvarez Vallejos

Universidad de Santiago de Chile

En la madrugada del día martes 11 de septiembre de 1973 llegaron a oídos de las máximas autoridades del gobierno encabezado por Salvador Allende que se estaban produciendo movimientos de tropas. Joan Garcés, un académico español y cercano asesor del presidente socialista chileno desde 1970, se aprontó a dirigirse al palacio de La Moneda, sede del poder ejecutivo. No era la primera asonada contra el gobierno. La anterior, ocurrida unos meses antes, había sido sofocada a sangre y fuego. Ese día estaba contemplado que el presidente Allende realizara un discurso en la Universidad Técnica del Estado. En este, el presidente anunciaría la convocatoria a un plebiscito para dirimir democráticamente la crisis política que sufría el país. El día antes, Garcés había participado en diversas reuniones con autoridades de gobierno, incluida una con los directivos de la televisión estatal para preparar el mensaje que daría el presidente esa mañana. Una vez en La Moneda, se pudo constatar que la intentona golpista contaba con el respaldo de los altos mandos castrenses y que el presidente Allende estaba indefenso ante el poder de fuego de los militares. Antes del bombardeo final del palacio, el mandatario deja en libertad de



Funeral de Salvador Allende, 4 de noviembre de 1990 (Detalle de foto de Luis Navarro Vega, Biblioteca Nacional Digital de Chile).

acción a los numerosos civiles que lo acompañaban, grupo compuesto por lo más granado de sus principales asesores. Aunque nadie aceptó salir, Allende rogó a sus hijas que se retiraran, ante el inminente inicio del ataque aéreo. Asimismo, encaró a Joan

Garcés, conminándolo a dejar La Moneda. En una entrevista reciente, el jurista recordaba así sus últimas palabras con el entonces presidente de Chile: «Yo naturalmente digo que no, pero insiste: ‘alguien tiene que contar lo que aquí ha pasado, y solo usted puede hacerlo’. Y eso salvó mi vida».

Pocos años más tarde, Garcés escribió la obra *Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política*, tal vez la más lúcida escrita por uno de los actores cercano a los sucesos que rodearon los mil días del gobierno de la Unidad Popular. En sus primeras páginas se sintetiza de manera contundente el por qué este proceso llevado a cabo en un pequeño y recóndito país ubicado en América Latina cautivó la atención del mundo occidental. Según su análisis, la vía chilena al socialismo contenía las características para convertirla

«en la experiencia más moderna hasta la fecha de revolución anticapitalista, conteniendo los gérmenes de una modalidad de transición al socialismo nunca antes desarrollados a nivel comparable: plena vigencia de la democracia como forma de vida... reconocimiento de derechos políticos y civiles iguales a la oposición, respeto del estado de derecho como norma de regulación de la vida colectiva, rechazo de la guerra civil como vía de resolución de las contradicciones sociales, libre ejercicio de las libertades de organización, conciencia y expresión sin más restricciones que las contempladas en un régimen legal fundamentado en la voluntad nacional manifestada a través del sufragio universal, libre, secreto y con pluralidad de partidos, etc.»^[1].

Así, la Unidad Popular encarnó una resurrección de la perspectiva socialista, gol-

peada en diversas partes del mundo, ya sea por el fracaso de las experiencias guerrilleras en América Latina o por la devastadora decepción que generó en otras latitudes el aplastamiento de la Primavera de Praga por parte de la Unión Soviética. La visualización que un proceso de cambio estructural del capitalismo se pudiera hacer democráticamente, evitando una guerra civil, puso la atención mundial sobre Chile y su singular experiencia. La simpatía que despertó la Unidad Popular fue inversamente proporcional al repudio que generó la dictadura militar que la derribó. Las imágenes de toscos generales de lentes oscuros, unidas al bombardeo de La Moneda, la dramática muerte del presidente Allende y las noticias de la feroz represión desatada contra la población, despertaron la solidaridad planetaria con el «caso chileno».

A partir del mandato de hierro de la dictadura pinochetista, Chile pasó de ser el laboratorio de las izquierdas, en búsqueda de una vía democrática de construcción del socialismo, a ser «la experiencia piloto para el nuevo neoliberalismo en los países avanzados de Occidente»^[2]. En efecto, luego de un inicio dubitativo, Pinochet optó por ponerse en manos de un equipo de economistas radicalmente liberales, que pudieron aplicar sus recetas sin la oposición de las organizaciones sociales, férreamente controladas por las medidas represivas del régimen. De esta forma, como lo señala Perry Anderson, la dictadura cívico-militar que derribó a la Unidad Popular «tiene el mérito de haber sido el verdadero pionero del ciclo neoliberal de la historia contemporánea»^[3]. Con el despliegue del proyecto neoliberal desde fines de la década de 1970, Chile comenzó un ciclo de reformas estructurales

1.- Joan E. Garcés, *Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política*, Bat ediciones, 1991, 3° edición, pp.7-8.

2.- Perry Anderson, «Balance del Neoliberalismo: lecciones para la izquierda», *Viento del Sur*, 6 (1996), pp. 37-47.

3.- *Ibid.*



Manifestación de apoyo a la Unidad Popular, 28 de mayo de 1973 [Foto: Armindo Cardoso, fuente: Biblioteca Nacional Digital de Chile).

de su modelo de acumulación capitalista. La privatización del sistema educacional, de salud, de seguridad social y de la mayoría de las más importantes empresas del Estado, provocaron profundos cambios en la estructura de clases, gracias a la atomización de la clase obrera fabril y el crecimiento del sector servicios. El carácter proyectual de la dictadura y su vocación por hacer irreversible su «revolución neoliberal» fue el hecho que marcó la transición democrática. A diferencia de los casos de las otras dictaduras del Cono Sur de ese periodo, como la argentina o uruguaya, el entramado jurídico-político (Constitución de 1980) y el modelo económico del régimen de Pinochet, se perpetuaron más allá de su término formal a comienzos de 1990. El gran éxito de la dictadura, fue lograr que su herencia política y económica se legitimara bajo los gobiernos democráticos que le sucedieron. Eran las «largas sombras» del pinochetismo

sobre la nueva democracia chilena^[4].

La prolongación del legado dictatorial explica, en buena medida, la centralidad que tuvo en el debate político chileno la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La fecha estuvo muy lejos de ser solo un dato más dentro del calendario de efemérides del año. Por el contrario, el debate sobre las circunstancias que condujeron al golpe y la brutal oleada represiva que caracterizó a la dictadura, se actualizó en el nuevo contexto. Este estuvo marcado por el curso del gobierno del presidente de izquierda Gabriel Boric, el cual se vio severamente golpeado por la derrota de la opción «apruebo» al proyecto de nueva Constitución en septiembre de 2022 y el triunfo de la ultraderecha en mayo de 2023 en las elecciones para el nue-

4.- Julio Pinto (editor), *Las largas sombras de la dictadura: a 30 años del plebiscito*, Santiago, Lom Ediciones, 2019.

vo proceso constituyente. En todo caso, el telón de fondo del debate es la crisis de la herencia dictatorial, modelo que generó inequidades que gatillaron la revuelta social popular de octubre de 2019.

En este marco, la conmemoración de los 50 años del golpe en Chile es una bisagra entre dos momentos políticos, económicos, sociales y culturales muy distintos en Chile. Es un hiato entre dos experimentos que pretendían cambiar de raíz las bases del modelo de desarrollo chileno. El presente dossier optó por colocarse en uno de los lados de la bisagra, el de las consecuencias que tuvo la dictadura sobre diversas esferas, como la economía, los militares, el mundo de la cultura y la izquierda europea, así como en algunos actores que resistieron al régimen pinochetista, como las fuerzas de izquierda locales, el naciente movimiento de mujeres y los agentes de memoria. El objetivo del presente dossier es ofrecer una mirada sobre los efectos que tuvo el ciclo político iniciado esa mañana del 11 de septiembre de 1973. Como lo ha señalado una de las principales expertas en la materia, la historiografía sobre la dictadura de Pinochet todavía no ha sido capaz de generar un campo de estudios consolidado, puesto que el foco ha estado centrado en el periodo anterior (la construcción de la «vía chilena al socialismo») y/o en la proyección del legado dictatorial en la nueva fase democrática^[5]. En este sentido, los artículos que componen el dossier constituyen aportes originales a temáticas que han tenido distintos niveles de tratamiento por parte de los especialistas sobre la dictadura chilena.

El primer trabajo está a cargo de Rolando Álvarez y tiene como objetivo fundamental

5.- Verónica Valdivia, «Gritos, susurros y silencios dictatoriales. La historiografía chilena y la dictadura pinochetista», *Revista Tempo e Argumento*, vol. 10, 23 (2018), pp. 167-203.

contextualizar la contingencia del debate político e historiográfico chileno en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra la administración de Salvador Allende. En este sentido, algunos de los hitos de este nuevo aniversario ha sido la irrupción de las voces conservadoras que justifican el quiebre democrático y relativizan o derechamente niegan la sistemática violación de los derechos humanos perpetrados por el gobierno castrense. Por su parte, examina el desarrollo del debate historiográfico existente sobre la Unidad Popular, mostrando cómo este ha sido fundamental para el análisis de tendencias de larga duración en el siglo XX chileno.

En segundo lugar se encuentra el texto de Alessandro Santoni y Mariana Perry, especialistas en la recepción internacional de los procesos políticos chilenos. Este trabajo ofrece una mirada sobre el impacto que tuvo el desarrollo y derrocamiento de la Unidad Popular en las izquierdas europeas occidentales. En particular, se examina cómo la izquierda socialdemócrata, socialista y comunista de esa región utilizó el desenlace de la Unidad Popular como un recurso legitimante de los alcances y límites de sus políticas de alianzas a nivel local. Dependiendo de los contextos de cada país, los «lecciones de Chile» se amoldaron de acuerdo a las necesidades de la coyuntura.

Uno de los aspectos que generó un fuerte impacto en la política y en el mundo académico chileno después de 1973 radicó en la supuestamente sorpresiva irrupción política de las fuerzas armadas. Hasta esa fecha, predominaba el mito sobre el supuesto carácter «constitucionalista» y no deliberantes de los uniformados chilenos, lo que los diferenciaría de sus pares del resto del continente. Sin embargo los hechos demostraron lo contrario. El artículo de Pablo Seguel Gutiérrez revista la trayectoria de las relaciones entre civiles



Pinochet recibe a Kissinger en su oficina, en Santiago de Chile, el 8 de junio de 1976 (fuente: Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile).

y militares en la historia de Chile. A pesar de haber sido actores claves tanto en la génesis del golpe de 1973 como en la definición de las características de la transición democrática chilena, Seguel plantea que las fuerzas armadas no han sido objetos centrales de las pesquisas historiográficas. Desde el punto de vista del autor, el examen de las relaciones cívico-militares durante los últimos 50 años revela que sigue pendiente recomponer un vínculo entre ambos sectores, aspecto básico para lograr una gobernabilidad democrática. La raíz de esta problemática radica en que sigue pendiente por parte del mundo castrense la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

Como dijimos más arriba, una de las facetas más singulares de la dictadura pinochetista fue el carácter refundacional

de su proyecto político, económico, social y cultural. En dicha faceta, el aspecto más llamativo fue la construcción de un modelo que ha sido denominado como de «neoliberalismo radical». El artículo de Eduardo López busca contestar la pregunta acerca de por qué los militares chilenos decidieron aplicar este proyecto propuesto por un destacado equipo de economistas liberales. A través de este artículo, es interesante constatar el severo costo social que tuvo la implementación del proyecto neoliberal en Chile. Además, se exponen con claridad los profundos cambios estructurales que llevó a cabo el régimen de Pinochet durante su extenso mandato.

Los años de la Unidad Popular fueron conocidos, entre otras cosas, por las canciones y expresiones artísticas que difundieron sus propuestas y principales consignas. Por su parte, en el caso de la dictadura,

es mucho menos conocido este aspecto, lo que no significa que no haya desarrollado políticas culturales para contraponerlas al mensaje representado por músicos, poetas y el diverso mundo artístico que apoyó al gobierno de Salvador Allende. La contribución de Karen Donoso expone la importancia que tuvo la dimensión cultural antes y después de la experiencia de la Unidad Popular. Por medio de una exhaustiva revisión bibliográfica, Donoso explica que durante el gobierno allendista, el mundo de la cultura manifestó la larga tradición de combinar el compromiso político con la creación artística. En cambio, la dictadura, acorde con su proyecto refundacional, intentó imponer un modelo cultural alternativo, en el que chocaron las miradas nacionalistas y neoliberales. Con todo, la autora constata la necesidad de profundizar lo ocurrido con esta materia durante la dictadura.

La oposición al régimen militar se desarrolló bajo las difíciles condiciones impuestas por el poderoso sistema represivo de este. Además, debió enfrentar los debates internos que dejó la derrota del mandato de Allende y superar los obstáculos que impedían la unidad. El texto de Cristina Moyano y Valentina Pacheco exploran en uno de los movimientos sociales y políticos más innovadores de la época: el movimiento de mujeres. En su caso, la reflexión teórico-político implicó tópicos tales como las formas organizativas, las prácticas políticas, la democracia y democratización, la autonomía feminista y la participación político partidaria. El desarrollo de esta labor colaboró a repensar tempranamente las construcciones políticas patriarcales. Además, politizó la vida cotidiana, echando las bases de la reflexión feminista durante los periodos siguientes.

La traumática interrupción de la experiencia de la Unidad Popular tuvo como uno de sus principales episodios la extendida y masiva represión política. Es más, esta se constituyó en uno de los sellos distintivos del régimen pinochetista. Producto del carácter pactado de la transición democrática, uno de los principales objetivos que buscó consagrar la derecha y las fuerzas armadas, fue lograr impunidad para los culpables de violación a los derechos humanos durante la dictadura. El trabajo de Olga Ruiz, Consuelo Telechea y Franco Carreño examina el papel de distintos actores e instituciones que han cuestionado la memoria, cuyos énfasis en los consensos y reconciliación eran funcionales a la impunidad. El artículo destaca el protagonismo de los testigos directos de los hechos, de los y las descendientes de las víctimas y de los tribunales de justicia, los que en distintas etapas han cuestionado los contenidos de los relatos oficiales de memoria.

Para terminar, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende ha puesto de relieve el carácter volátil de la memoria histórica. Amplios sectores sociales y políticos en Chile creyeron que las consignas «Nunca Más» —alusivas a la violación a los derechos humanos— y la defensa irrestricta de la democracia, eran ganancias históricas irreversibles. Sin embargo, esta coyuntura demostró la fragilidad relativa de estos y otros conceptos básicos para la convivencia en una sociedad democrática. En este contexto, el desarrollo de la historiografía sobre la Unidad Popular y la dictadura cívico-militar que la sucedió, seguirá jugando un papel relevante en la construcción de un futuro democrático en Chile.

La Unidad Popular y los debates políticos e historiográficos

The Popular Unity and the political and historiographic debates

Rolando Álvarez Vallejos
Universidad de Santiago de Chile

Resumen

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, fue el marco para que se activara en el país el debate sobre el significado de esta fecha. A nivel político, la discusión se centró en la reaparición de las voces conservadoras que justificaron la asonada golpista. Por su parte, desde el punto de vista historiográfico, se reactivó la pugna sobre el significado de los años de la Unidad Popular. El artículo describe algunos de los ejes de estos debates, reafirmando los importantes avances que se han realizado para refutar las tesis monocausales y anticomunistas de la historiografía conservadora.

Palabras: Unidad Popular; Salvador Allende; historiografía; golpe de Estado.

Abstract

The commemoration of the 50th anniversary of the coup d'état in Chile against the constitutional government of Salvador Allende, which took place on September 11, 1973, was the framework for the debate on the meaning of this date to be activated in the country. At the political level, the discussion focused on the reappearance of conservative voices that justified the coup. On the other hand, from the historiographical point of view, the struggle over the meaning of the years of the Popular Unity was reactivated. The article describes some of the aspects of these debates, reaffirming the important advances that have been made to refute the monocausal and anticomunist theses of conservative historiography.

Keywords: Popular Unity; Salvador Allende; historiography; coup d'état.

El año 2003 se conmemoraron en Chile los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno encabezado por el presidente Salvador Allende. La agenda pública todavía estaba remecida por el impacto que produjo la detención del general Pinochet en Londres entre fines de 1998 y principios del año 2000. Este inusitado hecho significó cuestionar uno de los pilares de la transición pactada entre la dictadura y la mayor parte de la oposición: la impunidad de Pinochet por su responsabilidad en las brutales violaciones a los derechos humanos durante su extenso mandato. Fue un momento en que la batalla por la memoria sobre la violencia estatal durante la dictadura, superando los intentos gubernamentales de aprobar leyes de «punto final» y consagrar la impunidad de los perpetradores de los crímenes, se amplió para intentar establecer las verdaderas dimensiones de lo ocurrido^[1]. En todo caso, como lo señaló un historiador chileno, el país estaba lejos de compartir sus visiones sobre el pasado reciente del país. Como era la tónica de la «transición pactada» chilena, los medios de comunicación optaron por mantener un supuesto equilibrio entre los puntos de vista en pugna. Era la versión chilena de la teoría de «los dos demonios» existente en Argentina: «...La historia chilena reciente se nos presentaba algo así como el resultado de un ‘empate histórico y moral’: todos nos equivocamos y la historia tomó entonces un curso trágico, que por cierto ‘todos’ no queremos que se vuelva a repetir»^[2].

Frente a esta coyuntura, la historiadora María Angélica Illanes planteó la necesidad que la historiografía entrara al debate

sobre cuál era el proyecto político que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos encarnaban. Esta pregunta tenía como objeto llegar a lo que consideraba como el meollo de la polémica sobre el pasado reciente de Chile, basado en «la relación histórica que existió entre el proyecto de cambio de la estructura de la propiedad y el genocidio» que representó el régimen pinochetista^[3]. Esta «batalla por la memoria», implicaba no solo denunciar los crímenes dictatoriales, sino que «re-escribir y enseñar» el proyecto de sociedad que fue cercenado el 11 de septiembre de 1973.

El año 2023, a 50 años del golpe de Estado, sigue vigente parte fundamental del diagnóstico que reseñamos más arriba. En todo caso es necesario puntualizar algunas diferencias importantes. Nos referimos especialmente al hecho que el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe se produce con un gobierno apoyado por una coalición de centroizquierda a la defensiva, frente a una oposición de ultraderecha envalentonada. Como lo han reconocido historiadores conservadores, esto se ha traducido en que se han escuchado con fuerza las voces de este sector político. Promovidos de manera permanente por la prensa de derecha (monopólica en el país), han logrado imponer una agenda de discusión más centrada en la justificación del golpe de Estado, que en los crímenes de la dictadura y el carácter antidemocrática de esta. Esta situación deja de manifiesto que la «batalla por la memoria histórica» es algo permanente, y no porque en una etapa pareciera haber consenso en torno a consignas como «Verdad y justicia» o «Nunca Más», esto significa que en otras no reaparezcan los discursos que justifican la ruptura democrática y la violación a los derechos humanos.

1.- Steve Stern, «Memorias en construcción: Los retos del pasado presente en Chile, 1989-2011», *Anuario de Escuela de Historia*, 24 (2012), p. 108.

2.- Mario Garcés y Sebastián Leiva, *El golpe en La Legua. Los caminos de la historia y la memoria*, Santiago, Lom Ediciones, 2005, p.9.

3.- María Angélica Illanes, *La batalla de la memoria. Ensayos históricos de nuestro siglo. Chile, 1900-2000*, Santiago, Planeta-Ariel, 2002, pp. 15-16.

Las consecuencias que tuvieron los acontecimientos que se desencadenaron la mañana del 11 de septiembre de 1973 implicaron una bisagra crucial en la historia de Chile. Fue el inicio de un profundo proceso de modernización autoritaria encabezado por la dictadura pinochetista. En su génesis, esta justificó su origen por la supuesta «amenaza marxista» que encarnaba el mandato de Salvador Allende. Al ser aniquiladas prontamente las fuerzas de izquierda, Pinochet optó por fundamentar la perpetuación de su régimen por medio de la adopción de un proyecto económico neoliberal, que buscó destruir las raíces políticas y sociales que habían permitido el triunfo de la Unidad Popular. El legado de la dictadura sería refundar la sociedad chilena^[4]. En esta línea, Pinochet creó una nueva legislación laboral, que debilitó estructuralmente al mundo sindical en beneficio del sector patronal. También privatizó el sistema de pensiones y las principales empresas estatales (salvo CODELCO, de la gran minería del cobre). Introdujo la lógica de mercado en el sistema universitario, haciendo estructural el problema del acceso a este para los sectores más pobres. Asimismo, fortaleció los gobiernos locales (municipalidades) buscando debilitar la labor social del estado, entregando tareas claves, como la salud y la educación, a entes administrativos que reproducían las inequidades sociales existentes en el país^[5].

El fin de la dictadura civil militar chilena, a diferencia de otros casos, no significó un cambio radical del orden establecido por Pinochet. Por el contrario, la denominada «transición pactada» implicó notables rasgos de continuidad entre las etapas de

dictadura y la renaciente democracia. El aspecto más evidente se produjo en relación al modelo económico basado en un capitalismo neoliberal, el que durante los mandatos democráticos no sufrió modificaciones sustanciales, más allá de las «correcciones» en materias sociales que se implementaron durante los 20 años de gobiernos de centroizquierda^[6]. Por su parte, desde el punto de vista institucional, la permanencia de la Constitución de 1980, aprobada fraudulentamente bajo dictadura, constituyó otro símbolo de la pervivencia del legado pinochetista a 50 años del golpe de Estado. A pesar de las numerosas modificaciones que ha sufrido desde el inicio de la transición pactada, esta carta fundamental representa la continuidad de un aparato jurídico-institucional creado al margen de la legitimidad ciudadana^[7]. De hecho, su reemplazo se convirtió en la principal fórmula para encauzar por carriles institucionales la sorpresiva revuelta social que experimentó el país a partir del mes de octubre de 2019. La aplastante mayoría que votó el año 2020 en favor de su reemplazo por una nueva constitución creada bajo un régimen democrático, pareció concretar un momento largamente esperado por un segmento de la sociedad chilena. Los sectores desencantados del modelo democrático chileno, neoliberal en lo económico y heredero de Pinochet en lo institucional, parecían ver realizada la aspiración de terminar el legado dictatorial. Sin embargo, los hechos posteriores han reafirmado la fortaleza de las continuidades históricas en Chile. El triunfo de la opción rechazo a la nueva Constitución en septiembre de 2022 y de la ultraderecha en las elecciones de los repre-

4.- Tomás Moulian, *Chile actual. Anatomía de un mito*, Santiago, Lom Ediciones, 1997.

5.- Verónica Valdivia et al., *La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista*, Santiago, Lom Ediciones, 2012.

6.- Manuel Antonio Garretón, *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*, Santiago, Editorial ARCIS-FLACSO, 2012.

7.- Julio Pinto (editor), *Las largas sombras de la dictadura: a 30 años del plebiscito*, Santiago, Lom Ediciones, 2019, p. 22.

sentantes del nuevo proceso constituyente en mayo de 2023, demostraron la capacidad de reacción de los sectores conservadores. Estos supieron capitalizar las nuevas inquietudes de la ciudadanía, ligadas a los problemas socioeconómicos de arrastre, la crisis económica vinculada a las consecuencias de la pandemia del Covid-19 y a las problemáticas asociadas al fenómeno de la migración y al incremento de la percepción de inseguridad por la delincuencia.

De esta manera, es preciso tener en cuenta que la conmemoración en Chile de los 50 años del golpe de Estado está lejos de ser una efeméride de interés solo para los especialistas. Ha estado muy presente en la agenda política, marcada por la coyuntura constitucional y el debate sobre cuál o cuáles son las mejores fórmulas para superar la deuda social del modelo económico chileno. Por ello, esta fecha recuerda un quiebre histórico cuya magnitud queda expresada en los polarizados debates políticos e historiográficos que generan en el país. Constituye una fecha emblemática, casi prototípica de aquellos «pasados que no pasan», o como lo resume el historiador galo Henry Rousso, de «un pasado que no está terminado ni concluido, donde el tema de su relato es un ‘aún aquí’»^[8].

La coyuntura de los 50 años se ha concentrado en torno a dos tópicos que han marcado la agenda del debate público. Por una parte, el supuesto carácter acríptico de los sectores de izquierda, quienes se negarían a debatir sobre «las causas» del golpe de Estado. Y, por otro lado, muy ligado a lo anterior, sobre las características del proceso de la Unidad Popular y la supuesta existencia de razones que justificarían la asonada golpista del 11 de septiembre de 1973. De esta manera, el escenario se ha trasla-

8.- Henry Rousso, *La última catástrofe. La historia, el presente, lo contemporáneo*, Santiago, Editorial Universitaria, 2018, p.18.

do al campo de los sectores de izquierda, que se han visto a la defensiva ante la arremetida de los partidos políticos, de los medios y de los especialistas conservadores y ultraconservadores.

Paradójicamente, el presidente Gabriel Boric incidió en este rumbo que tomó el debate. En una entrevista televisiva fijó la política del gobierno frente a la conmemoración de los 50 años. En primer lugar, llamó a todos los sectores políticos a llegar a

«un consenso básico de que la defensa de los derechos humanos es irrestricto, sin ningún doble estándar, independiente de quien gobierne. Invito a la sociedad chilena a que estemos de acuerdo con que ninguna diferencia política que tengamos justifica ni el quiebre de la democracia ni la violación de los derechos humanos de quienes piensan distinto»^[9].

Esta frase resumía el tradicional emplazamiento a la derecha y a los nostálgicos de la dictadura, aún reacios a condenar de manera tajante el golpe de Estado y los crímenes asociados a este. Por lo tanto, fue una declaración de principios importante, pero carente de novedad, pues constituía un lugar común de los sectores pertenecientes al centro y a la izquierda desde 1990. Por ello, lo más novedoso fue el emplazamiento realizado por el presidente hacia las fuerzas de su propio sector. En efecto, luego de haber repasado a la derecha, a modo de supuesta ecuanimidad, Boric se refirió a los años de la Unidad Popular. Según él,

9.- «Boric: En la izquierda debemos ser capaces de analizar la Unidad Popular no sólo desde lo mítico», en *Cooperativa*, del 4 de junio de 2023, <https://cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-boric/boric-en-la-izquierda-debemos-ser-capaces-de-analizar-la-unidad-popular/2023-06-04/221210.html> (consulta: 8 de agosto de 2023).



Allende junto a su comitiva saluda al público durante una visita a Nave Sierra Maestra, en Talcahuano (Foto de Armindo Cardoso, fuente: Biblioteca Nacional de Chile).

«en la medida de que podamos tener ese consenso básico, uno podrá analizar con mayor o menor detalle las circunstancias de la época. Se habla mucho de la Unidad Popular, y vale la pena [decir] que es un período a revisar. Desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y no solamente desde una perspectiva mítica».

Remató sus declaraciones recomendando dos libros: *Allende y la experiencia chilena: las armas de la política*, del español Joan Garcés, y el del analista de derecha Daniel Mansuy titulado *Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular*. Según Boric, «desde dos vertientes distintas, son reflexiones que aportan al debate, que está muy lleno de pasiones, de cuñas y titulares, pero a veces falta hincar un

poquito más el diente»^[10]. De esta forma, gran parte de la derecha no tuvo problemas en seguir justificando la «necesidad» del golpe de Estado, pero la izquierda apareció en deuda respecto a su papel en el pasado y en la evaluación del gobierno de Salvador Allende. Este planteamiento era, justamente, la tesis central del elogiado ensayo de Mansuy.

Esto se comprobó cuando unos días más tarde, a mediados de junio de 2023, Patricio Fernández, asesor presidencial para la coordinación de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, realizó una entrevista radial en la que ahondó en la misma línea argumental que el presidente. Consultado sobre el sentido que el gobierno de Boric pretendía lograr al recordar la emblemática fecha, Fernández afirmó:

10.- *Ibid.*

«¿cuál creo yo que es el empeño central que estamos retados a estas alturas? La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones del golpe de Estado. Eso lo vemos o vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir: ‘Okey, tú podrás, y los historiadores y los politólogos, podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio’. O sea, si tú aceptas que efectivamente para llevar adelante tus ideas es una posibilidad válida el perseguir con las fuerzas del Estado al que piensa distinto, eliminarlo, suprimirlo, etcétera, la construcción de la convivencia pacífica se vuelve imposible»^[11].

Estas declaraciones, realizadas por el principal vocero del ejecutivo en materia de conmemoración de los 50 años del golpe, despertó la indignación del mundo de los derechos humanos. Este, representado por las agrupaciones de los familiares de víctimas de la represión, abogados, dirigentes políticos y numerosas organizaciones sociales, consideraron que Fernández abría espacio a la justificación del golpe de Estado. Por lo demás, recordaron declaraciones anteriores realizadas por el asesor presidencial, en la que señalaba que «apoyar el golpe de Estado en 1973 es algo comprensible —se vivían tiempos de mucha tensión y nadie sabía lo que vendría» (twitter del 5 de octubre de 2019)—. En una carta pública dirigida al presidente Boric, 162 organizacio-

nes de derechos humanos rechazaron los dichos de Fernández, por considerar que nada menos que «el encargado de la conmemoración de estos alevosos hechos no condena el golpe de Estado, restándole valor y desconociendo la relación de causa y efecto entre el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos, las que solo son explicables por el golpe militar»^[12]. Para este sector, no era concebible disociar este hecho con la tragedia que trajo para quienes fueron víctimas de la represión. Por estos motivos, exigían la salida de Fernández de su cargo. Además, como lo explicitó la diputada comunista Carmen Hertz —conocida referente del mundo de los derechos humanos—, se deslizó una crítica a que la conmemoración de los 50 años no podía reducirse a «un evento artístico o cultural», por tratarse de «un hecho político de la mayor relevancia»^[13].

La posterior renuncia de Patricio Fernández fue lamentada por sectores del oficialismo. Acusaron a lo que indistintamente se denominó como «izquierda radical» o «extrema izquierda» de negarse a la autocrítica. En este sentido, el jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista afirmó que «en la izquierda debemos hacer una revisión crítica del rol jugado durante el Gobierno de Salvador Allende, algo como lo que aconteció con la renovación socialista a inicios de la década de los 80»^[14]. Por su parte, la derecha acentuó su

11.- «El escritor Patricio Fernández renuncia como coordinador de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile», *El País*, 5 de julio de 2023, <https://elpais.com/chile/2023-07-05/el-escriptor-patricio-fernandez-renuncia-como-coordinador-de-la-conmemoracion-de-los-50-anos-del-golpe-de-estado-en-chile.html> (consulta: 9 de agosto de 2023).

12.- «Más de un centenar de organizaciones de pro defensa de derechos humanos piden la salida de Patricio Fernández» *BioBiochile.cl*, <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/07/03/mas-de-un-centenar-de-agrupaciones-pro-defensa-de-derechos-humanos-piden-salida-de-patricio-fernandez.shtml> (consulta: 9 de agosto de 2023).

13.- «El golpe de Estado en Chile. Un crimen fundacional», *El País*, 6 de julio de 2023, <https://elpais.com/chile/2023-07-06/el-golpe-de-estado-en-chile-un-crimen-fundacional.html> (consulta: 9 de agosto de 2023).

14.- «Oficialismo se divide por renuncia de Fernández»,

campaña anticomunista, acusando al Partido Comunista —parte del oficialismo— de manipular al gobierno y de querer imponer una visión oficial sobre los hechos. En el caso de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los principales conglomerados de derecha, fue evidente cómo la polémica suscitada por las declaraciones de Fernández fue funcional a la justificación del golpe de Estado. La UDI rechazaba la renuncia del asesor presidencial, por considerar que «de manera absolutamente legítima decidió abrir el debate respecto a las graves circunstancias y acontecimientos que fueron derivando en un quiebre institucional en nuestro país, y que quedaron expuestos cuando la Cámara de Diputados declaró como ilegítimo el Gobierno de Salvador Allende». En paralelo, algunos de sus principales dirigentes sinceraban posiciones declarando que justificaban el golpe de Estado^[15].

Esta polémica dejó instalada la discusión en torno a la supuesta incapacidad e intolerancia de la izquierda para revisar su pasado. Esto en el marco del debate más cómodo para los antiguos partidarios de la dictadura, a saber, la necesidad de revisar el contexto en que se produjo la asonada castrense, tradicional argumento utilizado de manera más o menos oblicuamente para justificar la asonada. Así, es posible

El Mostrador, 5 de julio de 2023, <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2023/07/05/oficialismo-se-divide-por-renuncia-de-patricio-fernandez/> (consulta: 9 de agosto de 2023).

15.- «Bancada de diputados UDI ante renuncia de Fernández: 'El Gobierno ha cedido a las presiones del PC'», *El Mostrador*, 5 de julio de 2023, <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2023/07/05/bancada-de-diputados-udi-ante-renuncia-de-fernandez-el-gobierno-ha-cedido-a-las-presiones-del-pc/>; «Diputado Alessandri (UDI) en marco de los 50 años: 'Yo justifico el golpe militar'». *El Mostrador*, 6 de julio de 2023, <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2023/07/06/diputado-alessandri-udi-en-marco-de-los-50-anos-yo-justifico-el-golpe-militar/> (consultas: 9 de agosto de 2023).

apreciar la vigencia del desafío que el año 2003 planteó la historiadora María Angélica Illanes: Comprender la violación de los derechos humanos cometidos durante la dictadura, como expresión del mecanismo político empleado por los sectores conservadores para destruir el proyecto de la Unidad Popular. Como se puede apreciar, el punto de los detractores de la tesis que separa las razones del alzamiento militar contra Salvador Allende con las posteriores violaciones de los derechos humanos no era impedir el debate sobre esta etapa histórica. Por el contrario, buscaba evitar que por la vía de justificar la «necesidad» de la asonada contra el gobernante socialista, se relativizara la política de exterminio de la disidencia implementada por la dictadura. Pero a 50 años del golpe y luego de 33 años del retorno a la democracia en Chile, el peso de «la culpa» de lo ocurrido era nuevamente traspasado a los derrotados y víctimas de los crímenes.

La historiografía de la Unidad Popular: ¿El caso de una historia inventada?

En el contexto del debate público que se ha producido en Chile en torno a la coyuntura de los 50 años del golpe, ha sido permanente la interpelación a la Historia (como disciplina). Recientemente, desde una óptica revisionista, se ha invocado la necesidad de realizar una «revisión descarnada de todos los aspectos que puedan oscurecer o eclipsar a la Unidad Popular». Esto surge a partir de un diagnóstico que plantea que la historiografía de izquierda sería «complaciente» en sus análisis sobre este periodo; constituiría una «historia inventada» de la Unidad Popular, ajena a lo que realmente habrían sido estos años^[16].

16.- Jorge Rojas Flores, «La historia (inventada) que queremos: el caso de la Unidad Popular (Chile, 1970-1973)» en Christian Matamoros y Sebastián Neut (coord.), *Nuevas*

De acuerdo con esto, existiría una tendencia a considerar que los años de la UP han sido evaluados básicamente como «años positivos» y que la historiografía conservadora, que la consideraba una vía para crear una «dictadura comunista», tendría pocos seguidores. Además, que los especialistas simpatizantes del proceso no estarían disponibles, supuestamente, a debatir con aquellos que critican aspectos sustanciales de la experiencia allendista, tales como:

«que se trató de un proyecto con visos totalitarios o cuando menos antidemocráticos, que pasó a llevar la legalidad (o algunos aspectos de ella), que no respetó los límites de su propio programa, que buscaba hacer irreversible el proceso, que toleró la violencia de los grupos que lo apoyaban, que violentó a la oposición usando el poder del estado, que intentó concentrar el poder en varias esferas y que nunca descartó el uso de la fuerza»^[17].

Al respecto, es necesario realizar algunas puntualizaciones. En primer lugar, los planteamientos de la mirada conservadora sobre este periodo tuvieron un momento fundante a los pocos días de ocurridos los hechos. Exactamente una semana después del 11 de septiembre de 1973, el medio periodístico *El Mercurio* —feroz opositor a Allende— dio a conocer un supuesto «Plan Zeta». Este consistía en la planificación de una acción concertada para descabezar los altos mandos castrenses y asesinar a dirigentes y periodistas de oposición a la Unidad Popular. Se afirmaba que los implicados en el diseño e implementación del plan eran «miles», lo que era funcional a la masiva represión contra los partidarios

del depuesto gobierno. En estricto rigor, la existencia del Plan Zeta era una pieza más dentro del argumento de fondo: El golpe de Estado («pronunciamiento militar», de acuerdo a la jerga de sus partidarios), había sido un movimiento que respondió al clamor popular, que exigía salvar a Chile de la instauración de una dictadura comunista en Chile, similar a los socialismos reales de Europa del Este. En el fondo, era el triunfo de los demócratas contra una izquierda intrínsecamente antidemocrática. Este motivo justificaba la represión con este sector político.

Esta versión fue masivamente difundida por la prensa partidaria de la conjura golpista realizada por el alto mando uniformado. Además, tres publicaciones editadas en esos primeros meses se encargaron de darle un carácter «serio» a las acusaciones. En octubre de 1973, el nuevo régimen publicó *El libro blanco del cambio de gobierno en Chile*. En sus anexos incluía, como pieza clave para sostener sus planteamientos, el texto del supuesto Plan Zeta. En esa misma época, los periodistas Luis Álvarez, Francisco Castillo y Abraham Santibáñez editaron *Septiembre. Martes 11. Auge y caída de Allende*. Por último, en enero de 1974 los periodistas Emilio Filippi y Hernán Millas lanzaron *Chile 70-73. Crónica de una experiencia*. Ambos textos se sostenían en la existencia del Plan Zeta para caracterizar al período de la Unidad Popular y justificar la ruptura democrática en Chile^[18]. Esta versión satanizada de los hechos se difundió durante los años de la dictadura y fue defendida con mayor o menor énfasis por el mundo de la derecha. 30 años más tarde, el historiador conservador Gonzalo Via Correa, uno de los redactores del mencionado *Libro blanco* to-

historias de la educación durante la Unidad Popular. Vol. I, Santiago, Editorial Sole, 2022, p. 231 y 233.

17.- *Id.*, p.233.

18.- Jorge Magasich, «El plan Z que horrorizó a Chile», *Le Monde Diplomatique*, enero 2010, p. 22.

davía planteaba la veracidad del Plan Zeta. Esto a pesar de que Federico Willoughby, designado secretario de prensa de la Junta Militar pocos días después del golpe, reconocía que fue un montaje que formó parte de la guerra psicológica implementada por el régimen^[19].

Por otra parte, años más tarde el propio Gonzalo Vial planteó que el golpe de Estado de 1973 fue expresión de una larga decadencia del sistema político chileno, que se tradujo en la pérdida de la «unidad nacional» y condujo a la «inevitable» intervención castrense encabezada por el general Pinochet. Los partidos políticos habrían sido los culpables de horadar la autoridad del poder ejecutivo, considerada por Vial la base del desarrollo institucional chileno. Al no lograr acuerdos programáticos sobre cómo desarrollar la economía, habrían sido los responsables de la crisis. En este sentido, especialmente los partidos de izquierda fueron factores de desquiciamiento del sistema^[20].

En este punto, es necesario hacer una primera consideración. La historiografía chilena ha recorrido un largo sendero sobre el examen de la historia del siglo XX del país. Uno de sus principales aportes ha sido responder a las infames deformaciones históricas contenidas en las obras que son tributarias de las tesis que sostienen la existencia del supuesto plan Z. Esto no debe ser considerado una tarea menor por el supuesto hecho que ya nadie las toma en cuenta o que están debidamente desmentidas. Si esto es así, es gracias al enorme esfuerzo colectivo de historiadores e historiadoras que han contribuido a desmontar la satanización del papel de las izquierdas du-

rante el siglo XX chileno^[21]. Por este motivo, es posible sostener que los especialistas que han investigado los años de la Unidad Popular desde la empatía han desarrollado su trabajo «en diálogo» constante con las afirmaciones provenientes de los sectores conservadores. Un hito fundamental fue responder a la versión criminalizadora y unidimensional sobre la experiencia de la UP, proveniente de la dictadura y recogida por historiadores y periodistas afines.

En otro plano, dos influyentes textos colectivos sobre la Unidad Popular han reivindicado el carácter de «fiesta» del proceso^[22]. Esta categoría fue acuñada por Tomás Moulian, destacado sociólogo que desarrolló gran parte de su obra en torno al origen y las consecuencias que tuvo la suerte de la Unidad Popular. Según él, esta tuvo una dimensión negativa, fundamentalmente determinada por la feroz dictadura que dio origen. Sin embargo, también tuvo una dimensión festiva. Fue una catarsis después de décadas de privaciones:

«Los trabajadores, expulsaban al ‘pulpo explotador’ y se tomaban la fábrica, sin importarles si ese acto convenía a la racionalidad global del proceso; los campesinos impedían la entrada del patrón hasta las casas del fundo, a veces sin dejarle rescatar siquiera sus tesoros familiares...[la fiesta] adoptaba el carácter de una venganza por años de sufrimiento, silencio e impotencia....no era alegre; tenía la gravedad de los ritos en que el pueblo se asume como juez»^[23].

19.- *Ibid.*

20.- Gonzalo Vial, «Decadencia, consensos y unidad nacional en 1973», *Dimensión Histórica de Chile*, 1 (1984), pp.140-164.

21.- Rolando Álvarez, «La historiografía sobre las izquierdas en Chile: un campo en expansión», *Archivos*, 14 (marzo de 2019), pp. 121-140.

22.- Julio Pinto (compilador), *Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular*, Santiago, Lom Ediciones, 2005 y Julio Pinto (editor), *Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular*, Santiago, Lom Ediciones, 2014.

23.- Tomás Moulian, *La forja de ilusiones: El sistema de*

Pero para Moulian, la fiesta de la Unidad Popular también estuvo representada por la intensidad con que se vivió la dimensión comunitaria de las relaciones sociales; por el despliegue de un intenso compromiso militante, reflejado en una sociedad intensamente movilizadora; por una etapa de plena libertad de expresión, en la que muchos «se sumergieron en las quimeras y en los sueños escatológicos, [y] se creyó poder tomar venganza de tantas humillaciones y de tanta explotación»^[24]. Es decir, la noción de «fiesta» busca explicar la manera cómo los partidarios de Salvador Allende experimentaron el proceso, tratando de complejizar las subjetividades que este proceso despertó entre la población del país, pero sin idealizar el periodo.

Por este motivo, lejos de la idealización o de la mirada hagiográfica, Moulian reconoce que el proceso allendista tuvo una dimensión de «drama», relacionado con la dura batalla política que caracterizaron los años de la presidencia de Salvador Allende. Y como lo sabe cualquier conocedor de la extensa obra de Moulian, sus consideraciones sobre las posibilidades que la experiencia de la UP hubiese tenido éxito, implican una crítica al papel de las fuerzas de izquierda durante esa época. Según Moulian, la caída de Allende tiene una constelación de razones, entre las cuales ocupa un papel relevante el papel de sus propios partidarios. En primer lugar, señala Moulian, la convivencia de dos proyectos dentro de la Unidad Popular fue clave en su deriva negativa. Uno apostaba a la vía político-institucional para transitar al socialismo, por lo tanto, requería de triunfar en las elecciones parlamentarias y las futuras elecciones

presidenciales. El otro proyecto criticaba la opción anterior por considerarla reformista y, en cambio, proponía el desborde de la institucionalidad y fortalecer el «poder popular» para hacer frente a un enfrentamiento armado que se consideraba inevitable. Al respecto, la conclusión sobre lo que sucedió no es para nada condescendiente. Según él, el empate catastrófico entre ambas posturas produjo que, en la práctica, no se desarrolló una «vía chilena» al socialismo, basada en el uso de las instituciones del estado burgués para poder sustituirlo. Por el contrario, se llevó a cabo «una línea ecléctica que tomaba elementos de una y otra fórmulas», que dio origen a una «mezcolanza...más que una estrategia»^[25]. En definitiva, Moulian no desconoce que, para algunos grupos sociales, el recuerdo de estos años implica revivir una pesadilla, mientras que para quienes fueron sus partidarios fue una mezcla de «fiesta y drama».

A mediados de la década de 2000 vio la luz *Cuando hicimos historia*. En su presentación, el historiador Julio Pinto —editor del libro— fundamentaba su publicación en base a una consideración historiográfica distinta a las críticas que enunciamos al comienzo de esta sección. Según Pinto, hasta ese momento, se había insistido en el análisis de los errores de la Unidad Popular y los crímenes que se produjeron postgolpe de Estado de 1973. Por este motivo, se afirmaba que «hemos perdido de vista lo que la Unidad Popular tuvo de ‘positividad’ histórica, de esfuerzo vivo y entusiasta por construir una sociedad más humana, más justa y mejor»^[26]. El contenido de la obra no es una historia militante ni mucho menos. Aborda aspectos del «drama» de la Unidad Popular, como el texto de Julio Pinto sobre

partidos 1932-1973, Santiago, ARCIS-Lom Ediciones, 1993, pp.271-272.

24.- *Ibid.*, p.273

25.- *Ibid.*, p.278,

26.- J. Pinto, *Cuando hicimos historia*, p. 5.



Público durante la intervención de Allende en un acto de apoyo a la Unidad Popular, 28 de mayo de 1973 (Foto de Armindo Cardoso, fuente: Biblioteca Nacional de Chile).

las divisiones dentro de la izquierda^[27] o el de Tomás Moulian respecto a las indefiniciones teóricas de la «vía chilena»^[28]. Otros son definitivamente iconoclastas, como el referido al movimiento sindical y los cordones industriales, que propone sacar estas temáticas de «la mitología: no fueron ni soviets a la chilena, ni un peligroso ejército paralelo como intentó hacer creer la dictadura»^[29]. Se deben sumar los aportes de trabajos centrados en el mundo de los pobres de la ciudad («pobladores»), de la cultura y de los cristianos por el socialis-

mo, todas materias abordadas de manera incipiente por los especialistas en esa época^[30]. Cierra la obra un artículo que aborda materias complejas, como lo fue la relación del gobierno y las fuerzas armadas. A contrapelo de las miradas dominantes en el mundo de la izquierda, la autora describe la existencia de una política militar de Salvador Allende, la que no consistía en armar al pueblo, sino en intentar sumar a los uniformados al proceso^[31].

Diez años más tarde se publicó lo que

27.- Julio Pinto, «Hacer la revolución en Chile», en J. Pinto, *Cuando hicimos historia*.

28.- Tomás Moulian, «La vía chilena al socialismo: Itinerario de la crisis de los discursos estratégicos de la Unidad Popular», en J. Pinto, *Cuando hicimos historia*.

29.- Franck Gaudichaud, «Construyendo 'poder popular': El movimiento sindical, la CUT y las luchas obreras en el periodo de la Unidad Popular», en J. Pinto, *Cuando hicimos historia*, p.105.

30.- Nos referimos a los artículos de Mario Garcés, «Construyendo 'las poblaciones': El movimiento de pobladores durante la Unidad Popular»; de César Albornoz, «La cultura en la Unidad Popular: Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente» y de Mario Amorós «La Iglesia que nace del pueblo: Relevancia histórica del Movimiento de Cristianos por el Socialismo», en J. Pinto, *Cuando hicimos historia*.

31.- Verónica Valdivia, «Todos juntos serenos la historia. Venceremos. Unidad Popular y fuerzas armadas», en J. Pinto, *Cuando hicimos historia*.

se puede considerar el segundo volumen de esta obra, titulado *Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular*, cuyo editor fue nuevamente el historiador Julio Pinto. Según se indica en su presentación, los acontecimientos de la historia reciente de Chile, como las masivas movilizaciones estudiantiles y de otros actores sociales durante el año 2011 y la irrupción de la memoria histórica alrededor de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, motivaron la realización de este trabajo. Nuevamente el esfuerzo consistió en intentar rescatar la «fiesta» que describió Moulian en su célebre ensayo, pero sin olvidar la dimensión de «drama» que los conflictos que desataron algunas de las medidas tomadas por la Unidad Popular. Un ejemplo es el artículo sobre las políticas educacionales del período, uno de cuyos proyectos generó enfrentamientos callejeros entre la oposición y el oficialismo pocos meses antes del golpe^[32]. Otro es el referido a la ley de control de armas aprobado por la mayoría parlamentaria opositora a Allende, que se constituyó en un factor clave para preparar el camino al golpe de Estado. La acusación infundada de la prensa opositora, en el sentido que existían grandes arsenales de armas en manos de los partidarios del gobierno, fueron el preámbulo para la publicación del Plan Zeta después del golpe^[33]. Por su parte, el volumen presentó tópicos novedosos sobre el período, ligados al papel de la televisión durante estos años o la masiva experiencia de los trabajos voluntarios^[34]. Completan la

obra un novedoso texto interpretativo del proceso de la reforma agraria en estos años, realizado por María Angélica Illanes, una de las principales investigadoras sobre la historia del movimiento campesino chileno^[35]. Por último, Mario Garcés propone ampliar las miradas sobre la Unidad Popular, descentrándola de lo «político-estatal» hacia otra «político-social». En el fondo, avanzar hacia una historia de la Unidad Popular más allá de las élites políticas y rescatar lo que se denomina la historicidad popular^[36].

Nos hemos detenido en estas obras por constituir ejemplos de cómo la historiografía chilena ha examinado los años de la Unidad Popular. Han estado presentes en esta labor el conflicto político, la reforma agraria, el movimiento popular (campesino, territorial, sindical), materias relativas a la cultura, las fuerzas armadas, entre otros tópicos. Algunos de estos mismos autores y autoras, han entregado obras monográficas fundamentales para explicar el papel de la derecha y el de los cordones industriales en estos años^[37]. Asimismo, otros han publicado textos que salen del formato monográfico, intentando dar una panorámica global sobre todo el periodo^[38]. Como ocurre en

32.- Luis Osandón y Fabián González, «La educación de masas durante la Unidad Popular: una nueva escuela para toda la comunidad», en J. Pinto, *Cuando hicimos historia*.

33.- Verónica Valdivia, «Chile: ¿Un país de excepción? La ley de control de armas y la máquina represiva puesta en marcha», en J. Pinto, *Cuando hicimos historia*.

34.- César Albornoz, «La experiencia televisiva en el tiempo de la Unidad Popular. La Caldera del Diablo» y Rolan-

do Álvarez, «Trabajos voluntarios: el 'Hombre nuevo' y la creación de una nueva cultura en el Chile de la Unidad Popular», en J. Pinto, *Cuando hicimos historia*.

35.- María Angélica Illanes y Flor Recabal, «Liberación y democracia en la tierra. Historia y memoria de la Reforma Agraria-Unidad Popular. Chile, 1971-2012», en J. Pinto, *Cuando hicimos historia*.

36.- Mario Garcés, «Los años de la Unidad Popular: cuando los pobladores recreaban las ciudades chilenas», en J. Pinto, *Cuando hicimos historia*.

37.- Nos referimos a los libros de Verónica Valdivia *Nacionales y gremialistas. El parto de la nueva derecha política chilena, 1964-1973*, Santiago, Lom Ediciones, 2008 y Franck Gaudichaud, *Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende*, Santiago, Lom Ediciones, 2016.

38.- Mario Garcés, *La Unidad Popular y la revolución en Chile*, Santiago, Lom Ediciones, 2020.

el quehacer historiográfico, se podrán o no compartir las hipótesis de tales o cuales autores, pero los trabajos que hemos mencionado son investigaciones ceñidas rigurosamente a las exigencias disciplinarias de la historia. El que sus autores sean empáticos con el proceso no nubla la razón de sus reflexiones. Y en base a pesquisas que constituyen programas de investigación de largo plazo, enfrentan el diálogo con la historiografía conservadora sobre el papel de las izquierdas, de las derechas, de las organizaciones sociales o el desarrollo de las políticas públicas durante esos agitados años.

En resumen, las investigaciones historiográficas sobre la Unidad Popular de las últimas décadas han realizado un aporte sustancial a su comprensión, y, en primer lugar, para desmontar la óptica unidimensional y satanizada del período, fomentada por la dictadura y sus partidarios durante décadas. Asimismo, la empatía hacia el proceso encabezado por Salvador Allende no ha impedido el desarrollo de investigaciones innovadoras sobre actores protagónicos del periodo, pero hasta hace poco no abordados. Un ejemplo reciente de esto es la publicación de una pesquisa sobre el papel de las organizaciones de clase media y sus entidades gremiales^[39]. En todo caso, existe consenso que la historia de la Unidad Popular todavía ofrece flancos y aspectos sobre los que se puede y debe seguir profundizando, pero nada más lejos de la realidad afirmar, de manera descalificatoria, que lo avanzado hasta ahora responde a pura añoranza o nostalgia por épocas pretéritas^[40].

39.- Marcelo Casals, *Contrarrevolución, colaboracionismo y protesta. La clase media chilena y la dictadura militar*, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2023.

40.- Un completo examen de las nuevas investigaciones y las posibles lagunas historiográficas sobre este período, en José del Pozo, Danny Monsálvez y Mario Valdés, «Los estudios sobre la Unidad Popular en Chile en el nuevo milenio. ¿Están en deuda los historiadores?», *Radical Americas*, Vol. 6, 1 (2021), pp. 1-30.

La Unidad Popular y la mirada conservadora: ¿Algo nuevo bajo el sol?

La historiografía conservadora ha logrado evolucionar de los planteamientos más groseramente basados en falsedades y deformaciones históricas, generando trabajos de buena factura y que abren importantes debates historiográficos. El hito de la Unidad Popular, como lo hizo señeramente Gonzalo Vial Correa en el artículo citado más arriba, ha dado pie a interpretaciones de hunden sus raíces en la mediana y/o larga duración histórica.

Un caso representativo son los trabajos del historiador Joaquín Fernandois^[41]. Su investigación sobre la Unidad Popular puede ser perfectamente considerada una historia de Chile en el siglo XIX y XX. En efecto, a través de varias hipótesis generales sobre el pasado del Chile republicano, arriba a su interpretación acerca del significado histórico del gobierno de Salvador Allende. Su planteamiento parte de la típica matriz historiográfica conservadora, que considera que el estado chileno constituye un «excepcionalismo» a nivel latinoamericano. Esta consideración arranca del supuesto de la existencia de un temprano orden institucional, el que, aunque con ripios, habría logrado conformar una institucionalidad acorde a los cánones de las democracias occidentales. De esta manera, cuando surgió la protesta social organizada (fines del siglo XIX y principios XX), las fuerzas revolucionarias de izquierda pudieron incorporarse al sistema político democrático. En este punto, es importante la hipótesis sobre cómo se define a la izquierda. Esta

41.- Nos referimos especialmente a su extenso libro *La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular*, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2013. También *La democracia chilena. Trayectoria de Sísifo*, Santiago, Ediciones Universidad Católica- Centro de Estudios Públicos, 2020.

habría sido revolucionaria, no reformista, razón por la cual siempre habría estado en contra del sistema democrático liberal. Es decir, en la óptica de Fernandois es fundamental entender de manera unidimensional tanto al marxismo (como ideología política) como a los partidos de izquierda chilenos. Estos, por lo tanto, siempre habrían sido una fuerza desestabilizadora del sistema democrático, que como ya dijimos, hundía sus raíces en el temprano siglo XIX y que se habría perfeccionado con el paso del tiempo. Por ello, la participación de las fuerzas de izquierda dentro del sistema democrático era solo instrumental; se señala que, dadas las características del sistema político chileno, simplemente no les quedaba otra alternativa. Pero detrás de esto, según el argumento de Fernandois, siempre estuvo presente la meta revolucionaria de la izquierda chilena, orientada a reproducir en el país el modelo de sociedad de los socialismos reales. Por este motivo, el título de su libro es *La revolución inconclusa*, en el sentido que la caída del gobierno de Salvador Allende habría impedido llegar a la meta final del proyecto izquierdista, a saber, una dictadura comunista equivalente al modelo soviético. Por último, para explicar el innegable arraigo social de la izquierda chilena, presente en el movimiento sindical, territorial, estudiantil, la cultura, etc., Fernandois apela a una conocida tesis estructural funcionalista. Según esta, durante el siglo XX chileno habría existido un desajuste entre el desarrollo político-institucional democrático, relativamente «avanzado», versus el estancado desarrollo económico, que generaba bolsones de pobreza. De acuerdo a esta perspectiva, la incapacidad sistémica de resolver esta problemática habría sido el caldo de cultivo en donde fermentaron los respaldos sociales de las izquierdas en Chile.

Los planteamientos realizados por Fer-

mandois merecen varias consideraciones, sobre todo porque a diferencia de los planteamientos más rústicos provenientes de la historiografía conservadora, su obra no introduce las burdas falacias provenientes del Plan Zeta. Por el contrario cita gran parte de la bibliografía académica sobre la UP y sus principales actores (partidos de izquierda, la derecha, las organizaciones sociales, etc.) Es más, integra parcialmente algunos planteamientos, así como se intenta rebatir de manera argumentada algunos de las hipótesis más importantes contrarias a sus perspectivas. No obstante, también es importante recalcar que detrás de una obra pulcra y bien elaborada, sus conclusiones sobre el proceso de la Unidad Popular son, básicamente, similares a las que plantearon los integrantes de la Junta Militar encabezadas por el general Pinochet durante la tarde del día martes 11 de septiembre de 1973: que el golpe de Estado de aquel día salvó a Chile de fuerzas que buscaban alterar el orden institucional chileno, las que pretendían instaurar un régimen de tipo dictatorial. Al terminar la lectura de la obra, queda claro que para el historiador conservador que la ruptura de la democracia en Chile fue responsabilidad de lo que se define como el proyecto revolucionario de la izquierda. En este plano, la obra presenta como un notorio déficit el hecho que el autor se limita a mencionar la bibliografía que ha examinado la trayectoria de la izquierda en el siglo XX, «pero sin hacerse cargo del debate académico existente»^[42]. Esto lo conduce a una mirada tradicional de la izquierda y considerar su arraigo social como un efecto no deseado, generado solo gracias al estancamiento económico.

42.- Verónica Valdivia, «La revolución inconclusa: La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular, de Fernandois, J. Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2013. 851 pp», en *Hispanic American Historical Review* (2015) 95 (2), pp. 373-374.

Las principales aristas de la obra que reseñamos más arriba han sido convincentemente rebatidas por la historiografía chilena. En este breve ensayo no pretendemos dar cuenta de todos los planteamientos, sino que mencionaremos algunos que ayudan a comprender, desde una perspectiva histórica de mediana y larga duración, el significado de la Unidad Popular. Respecto al siglo XIX chileno, numerosas investigaciones han resaltado el carácter represivo del Estado chileno. Lejos de ser descrito como un período de asentamiento de una institucionalidad inclusiva y progresivamente democrática, antiguas y nuevas investigaciones han descrito un escenario diametralmente opuesto^[43]. Sobre el supuesto carácter integrador del sistema político chileno a comienzos del siglo XX, existe una obra fundamental que analizó las transformaciones de las formas de relación entre el Estado y la sociedad en este período. Ese proceso es descrito como un «orden estatal excluyente» en lo político, lo social, lo administrativo y lo cultural. Y que a pesar del proceso de inclusión producto de la protesta social que se produjo en las primeras décadas del siglo XX, el Estado chileno conservó en su quehacer las prácticas oligárquicas heredadas del siglo XIX. Por lo tanto, a lo largo del siglo XX chileno habría predominado una «lógica estatal excluyente», y no las supuestas bondades producto de la existencia de un sistema institucional democrático^[44]. Por su parte, el bajo perfil que se asigna a la represión estatal contra el movimien-

to obrero de la época es desmentido por la numerosa producción que existe sobre este periodo. Esta ha documentado que no se trató de hechos aislados, y que las clases dominantes estuvieron lejos de conceder de manera consensuada mayores espacios institucionales y derechos sociales a los sectores subalternos^[45].

Un debate fundamental que implican los planteamientos conservadores sobre la Unidad Popular se refiere a las características del sistema democrático chileno durante el siglo XX. Una obra señera en este ámbito propone una mirada extensa en el tiempo para entender el golpe de Estado de 1973. Al contrario de la tesis partidaria del «excepcionalismo» histórico de la democracia chilena en el ámbito sudamericano, se establece que solo a fines de 1967 se puede hablar de la existencia de un régimen realmente democrático en Chile. Esto producto de la aprobación de las reformas legales que modificaron los principios liberales del derecho a la propiedad privada, a la promulgación de la sindicalización campesina y a las reformas políticas de 1969. Cruzando la mirada histórica con la politología, se concluye que las clases dominantes, al visualizar que el Estado y el régimen democrático no protegían sus intereses de clase, tal como había ocurrido hasta fines de la década de 1960, restaron su apoyo a la democracia. Esto explicaría los tempranos complots contra Salvador Allende, su posterior derrocamiento y la instauración de la dictadura pinochetista^[46].

43.- Por ejemplo, María Angélica Illanes, *Chile des-centrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista (1810-1910)*, Santiago, Lom Ediciones, 2003 e Igor Goicovic, *Estado oligárquico y protesta popular en Chile (1810-1891)*, Santiago, Editorial América en Movimiento-Ediciones Universidad Cantabria, 2023.

44.- Enrique Fernández, *Estado y sociedad en Chile, 1891-1931. El estado excluyente, la lógica estatal oligárquica y la formación de la sociedad*, Santiago, Ediciones Lom, 2003.

45.- La represión como lógica sistemática para resolver los diferendos políticos en el siglo XIX y XX fue descrita en los volúmenes de Brian Loveman y Elizabeth Lira *Las suaves cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política, 1814-1932*, Santiago, Lom Ediciones, 1999 y *Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de reconciliación política, 1932-1994*, Santiago, Lom Ediciones, 2000.

46.- Juan Carlos Gómez, *La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile, 1925-1973*, Santiago, Lom Ediciones, 2004.

Siguiendo esta línea de análisis, se ha cuestionado que el proceso de democratización iniciado en la década de 1930 haya dado como producto un sistema democrático ejemplar. Por el contrario, dicho proceso habría levantado severos cuestionamientos entre los sectores dominantes. A través del examen del proceso de transición del modelo de dominación oligárquico al supuestamente «democrático» —producido entre las décadas de 1920 a 1940— se aprecia que se perfeccionaron los dispositivos de vigilancia sobre la población; además, tampoco se abandonó la represión física y también se crearon nuevas leyes represivas. Es por ello, se concluye, que el proceso de democratización chileno durante el siglo XX no fue un avance lineal, sino que estuvo marcado por la fuerte permanencia del legado anticomunista de la oligarquía y las fuerzas armadas^[47]. Por su parte, el episodio de la apertura en 1948 de un campo de prisioneros políticos en el pequeño puerto de Pisagua, ubicado en el extremo norte del país, ha sido empleado para evaluar las severas restricciones democráticas existentes en Chile a mediados del siglo XX. Las corrientes anticomunistas, se plantea, tuvieron una deriva autoritaria que restringió durante esa etapa la existencia de libertades públicas y la existencia de un Estado garantista de derechos sociales y políticos. A contrapelo, la izquierda era la promotora de la democracia representativa, las libertades de asociación y de prensa y la existencia de un Estado democrático que garantizara derechos^[48].

En este estado del debate, parece mucho más plausible reconocer que desde media-

dos del siglo XX en Chile el concepto de democracia fue un concepto en disputa, lo que permite entender el conflicto político y social desde una perspectiva ampliada^[49]. Esto evita la mirada unívoca de la tesis conservadora, cuyo argumento central en este debate radica en considerar que la única definición posible es la liberal. Por el contrario, la diversidad de significados y definiciones de la democracia habría incluido a los sectores de izquierda. En el caso del Partido Comunista de Chile, producto de su experiencia sometida a la represión, avanzó a planteamientos que lo apartaron de la ortodoxia marxista-leninista, incluyendo elementos de la democracia representativa. Esto ha sido considerado parte fundamental del proceso de elaboración colectiva que dio origen a la «vía chilena al socialismo»^[50].

La reflexión en la izquierda chilena sobre la relación entre democracia y el socialismo fue un proceso plagado de trabas y problemas. No ha sido solo Tomás Moulian quien ha reflexionado sobre eso. Un planteamiento ha resaltado el carácter contradictorio del proceso que dio origen a la Unidad Popular. Se ha propuesto que el meollo de la problemática de la Unidad Popular fue que su triunfo conjugó dos promesas complejas de conjugar. Por un lado, la transformación radical de la estructura y del orden social, en el sentido más tradicional de los cánones revolucio-

47.- Verónica Valdivia, *Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX (1918-1938)*, Santiago, Lom Ediciones, 2017.

48.- Verónica Valdivia, *Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización en Chile*, Santiago, Lom Ediciones, 2021.

49.- Es el planteamiento de Marcelo Casals y Mariana Perry «De la democracia revolucionaria a la democracia posible: Trayectoria políticas y conceptuales en la izquierda marxista chilena, 1950-1990», *Historia*, 53 (enero-junio 2020), pp. 11-44.

50.- Camilo Fernández Carrozza, «El discurso del Partido Comunista de Chile sobre la democracia, 1956-1964», *Autoctonía Revista de Se Ciencias Sociales e Historia*, 2 (Julio-diciembre 2018), pp. 199-218 y Rolando Álvarez, *Forjando la vía chilena al socialismo. El Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales (1931-1970)*, Santiago, Editorial América en Movimiento, 2020.



Funerales del Ex- Presidente de la República de Chile Salvador Allende, 4 de noviembre de 1990 (Foto: Luis Navarro Vega, fuente: Biblioteca Nacional Digital de Chile).

narios del marxismo. Por otro lado, que el proceso respetaría la continuidad del Estado de derecho y las libertades públicas que aseguraba el orden liberal chileno. De acuerdo a esto, el principal obstáculo que tuvo la izquierda para sistematizar teóricamente la «vía chilena al socialismo», radicó en la incapacidad para describir su praxis política de reformas sucesivas fuera de la imaginación revolucionaria que predominaba entre sus dirigentes y militantes. Era el temor «a transgredir el límite imaginario que separaba al marxismo revolucionario de la socialdemocracia»^[51]. En la incipiente producción de Allende, de sus consejeros y algunos integrantes del Partido Comunis-

ta, hubo asomos de intentar sistematizar la reflexión teórica que implicaba un proceso, como el de la Unidad Popular, que pretendía fundir socialismo y democracia en un mismo momento histórico. Sin embargo, habría primado el menosprecio de las prácticas reformistas de la izquierda, que habían contribuido durante el siglo XX a incrementar los derechos sociales, políticos y económicos de los sectores más empobrecidos del país. Al imponerse el discurso reificado de los modelos revolucionarios internacionales, la izquierda chilena no logró, se señala, terminar de cristalizar de manera unitaria su propuesta de una vía democrática hacia el socialismo^[52].

51.- Alfredo Riquelme, «1970: Utopía revolucionaria», en Alessandro Guida et al, *De la utopía al estallido. Los últimos cincuenta años en la historia de Chile*, Santiago, Fondo de Cultura Económica-Univerta Di Napoli L'Orientale, 2022, p.24.

52.- Alfredo Riquelme, «Políticas de reformas e imaginación revolucionaria en el Chile constitucional (1933-1973)», en Marianne González y Eugenia Palieraki (comps.), *Revoluciones imaginadas. Itinerarios de la idea revolucionaria en América Latina contemporánea*, Santiago, Ril Editores,

Por último, reflejo que la historiografía conservadora ha sido reacia al intercambio historiográfico es la manera que el citado trabajo de Fernandois aborda la intervención de los Estados Unidos en el proceso chileno. Es paradójal que siendo autor de un texto que es referencia obligada sobre la inserción de Chile dentro de la política mundial^[53], dentro de un volumen compuesto por más de 800 páginas, despache solo en dos la intervención norteamericana en Chile. Y esto para decir que esta solo jugó un «papel menor» en la generación y conducción del golpe de Estado del martes 11 de septiembre. Esta afirmación se hace a pesar de que las toneladas de archivos desclasificados por el gobierno norteamericano demuestran la importancia que tuvo el intervencionismo de este país dentro de los mil días de la Unidad Popular^[54].

Gracias al inesperado espaldarazo del presidente Gabriel Boric, el referenciado ensayo de Daniel Mansuy sobre Salvador Allende y la izquierda chilena adquirió notoriedad como una obra supuestamente novedosa proveniente desde el mundo conservador. Su hipótesis está pensada sobre todo para intervenir en la contingencia política del presente. Desde su perspectiva, la izquierda chilena ha sido incapaz de superar el mito de Salvador Allende y realizar un ajuste de cuentas certero sobre las causas del fracaso de su gobierno. Durante la

primera etapa de la «renovación socialista» (especialmente la obra primera de Tomás Moulian), algunos intelectuales y partidos que fueron parte de la UP habrían logrado extraer las conclusiones correctas sobre esta. Esto habría permitido a este sector concretar el período de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democrática, basados en una alianza con el centro representado por la Democracia Cristiana (1990-2010). Sin embargo, señala Mansuy, la posterior autocrítica hacia el moderado periodo concertacionista, provocó un retorno al supuesto mito allendista. Para decirlo de manera más directa, la izquierda chilena se habría vuelta sensata cuando se distanció de la herencia de la Unidad Popular y administró el modelo neoliberal impuesto por la dictadura. Pero cuando la antigua y nueva generación de izquierdistas se tornó crítica de esta etapa moderada, habría vuelto a caer en «el mito allendista». El retorno a Allende y renegar de la «renovación socialista», según Mansuy, simboliza la incapacidad de la izquierda chilena de generar un proyecto viable y democrático para Chile. En tanto todavía no se desprenden del legado fracasado de la UP, las fuerzas de izquierda no tendrían nada nuevo que ofrecer a la ciudadanía, sino un trasnochado proyecto fracasado. Por ello, la encrucijada que enfrentaría el presidente Gabriel Boric sería asumir este fracaso, para así comenzar un nuevo andar del sector que lidera. La ruptura con Allende y la UP sería el desafío pendiente de la izquierda chilena.

En tanto obra de ariete pensada para el debate político-contingente, en realidad no ofrece muchas novedades historiográficas. En efecto, si bien realiza una detallada reconstrucción del período basada en la literatura existente, no obstante, su matriz analítica no rompe con el tradicional corsé anticomunista del conservadurismo chileno. Una reseña realizada por un historiador

2003, pp.153-184.

53.- Joaquín Fernandois, *Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial, 1900-2004*, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004.

54.- Un texto que analiza en detalle esta documentación, Luis Corvalán Marquéz, *La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo. Lo que dicen los documentos norteamericanos y otras fuentes documentales. 1962-1976*, Santiago, Ceibo Ediciones, 2012. Un texto que reevalúa de manera original el papel de los Estados Unidos durante los años de la Unidad Popular, Tanya Harmer, *El gobierno de Allende y la Guerra Fría interamericana*, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.

sintetiza esto en torno a tres puntos fundamentales^[55]. Primero, al omitir las implicancias de la extensa trayectoria histórica de la izquierda chilena dentro de los márgenes institucionales y, además, la prolongada alianza del Partido Comunista con Salvador Allende, Mansuy reitera la mirada unívoca sobre la izquierda. Es decir, como antide-mocrática y como pura ortodoxia, con nula capacidad de adaptación a la realidad chilena. Una izquierda que era pura instrumentalización de la democracia, sin arraigo real en la sociedad e idiosincrasia democrática del país. En este caso, el texto simplemente omite la numerosa bibliografía existente al respecto. Por ello, mientras que Mansuy evalúa el triunfo de la Unidad Popular como una ruptura con el orden institucional, en miradas históricas de larga duración, ha sido considerado un punto de llegada de una larga apuesta por participar y profundizar el sistema democrático chileno^[56].

El segundo aspecto crítico señalado por Casals se refiere a la visión tradicional de la historia política, que no contempla el papel de los actores sociales. Como lo señala la historiadora Verónica Valdivia, esta visión es tributaria «de una definición de la izquierda como eminentemente partidista, ideológica, desalojada de su historicidad...y de esa revolución desde abajo que planteó el historiador Peter Winn»^[57]. El desarrollo de lo que en esa época se denominó el poder popular fue expresión de un desborde po-

pular que, como señala Casals, representó un fenómeno sociopolítico que complicó la hoja de ruta de la administración allendista. Esta materia ha sido objeto de múltiples investigaciones por parte de especialistas nacionales y extranjeros, que ofrecen ópticas novedosas acerca del fenómeno de la radicalización del movimiento obrero chileno^[58]. Sin embargo, las ópticas conservadoras no las contemplan en sus análisis, encerrándose en una mirada tradicionalista de la historia política, centrada en los «grandes personajes» (en este caso Allende) y los partidos políticos como únicos actores.

El tercer y último aspecto mencionado por Marcelo Casals que revela la matriz típicamente conservadora del ensayo de Mansuy, se vincula con la ausencia en el análisis del papel que tuvieron las fuerzas contrarrevolucionarias. Estas fueron fundamentales en la construcción del escenario cuesta arriba que enfrentó la Unidad Popular desde incluso antes de asumir el gobierno, momento en el que se produjo la intencional golpista que terminó con el asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider en octubre de 1970. En este sentido, «no puede dejarse de lado el enorme impacto que aquella masiva contrarrevolución tuvo en los manejos del gobierno y en la coalición»^[59]. A esto debemos sumar la ausencia del mencionado factor de la intervención norteamericana, tal como lo hacen otros autores conservadores. En definitiva, pocas novedades historiográficas encontramos en el libro que fuera recomendado por el presidente Gabriel Boric. Efectivamente abandona el estilo hiperbólico de las versiones recalcitrantemente anticomunistas de algunas voces provenientes de la derecha chilena, pero todavía reproduce supuestos

55.- Marcelo Casals, «Puntos ciegos. Balance crítico de 'Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular' de Daniel Mansuy», en <https://www.ciperchile.cl/2023/07/28/puntos-ciegos-balance-critico-de-salvador-allende-la-izquierda-chilena-y-la-unidad-popular-de-daniel-mansuy/> (consulta: 22 de agosto de 2023).

56.- María Angélica Illanes, «En torno a la noción de proyecto popular en Chile», en Manuel Loyola y Sergio Grez (compiladores), *Los proyectos nacionales en el pensamiento político y social chileno del siglo XIX*, Santiago, Ediciones UCSH, 2002, pp. 95-106.

57.- Verónica Valdivia, «La revolución inconclusa», p. 374.

58.- Destaca especialmente el citado trabajo de Franck Gaudichaud, *Chile 1970-1973*.

59.- Marcelo Casals, «Puntos ciegos».

que una gruesa producción bibliográfica ha puesto en tela de juicio y, en buena medida, ha desmontado.

Conclusiones

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile constituyó un ejemplo de aquellas fechas históricas que, a pesar de la distancia cronológica, persisten en actualizarse con inusitada vigencia. Las imágenes del bombardeo del palacio de La Moneda aquella mañana del martes 11 de septiembre de 1973 se convirtieron en el símbolo de un país cuyas pretéritas heridas están lejos de sanar. Tal vez la principal constatación que dejó este nuevo aniversario de la caída del experimento conocido como la «Vía Chilena al Socialismo», fue constatar que el avance de las posiciones conservadoras fueron caldo de cultivo para que asomaran las posturas negacionistas de la existencia de violación de los derechos humanos durante la dictadura y la justificación de la asonada golpista como mecanismo para resolver los diferendos políticos. Detrás de la palabra «inevitable», utilizada por dirigentes políticos y académicos conservadores para describir el drama desatado a partir del 11 de septiembre de 1973, estaba explícita la noción sobre lo «necesario» de los eventos que prosiguieron. Una parte de la derecha chilena logró sortear el emplazamiento sobre su posición ante la masiva violación a los derechos humanos cometidos durante la dictadura reconociendo su existencia. Pero eso no fue impedimento para valorar el carácter necesario del golpe de Estado producto –supuestamente– de la crisis que atravesaba el país. De esta forma se fraguó la estrategia de traspasar la responsabilidad de entregar explicaciones y exámenes autocríticos a los sectores de izquierda y a los integrantes del gobierno del presidente Boric. En este caso, el uso político del pasado por parte de la de-

recha radicó en intentar forzar a las actuales fuerzas de izquierda a renegar del legado de la Unidad Popular. Así, el mundo conservador, por cierto, que de una manera más sofisticada que antaño, reiteró su vocación anticomunista, expresada en su mirada satanizada y criminalizadora del gobierno de Salvador Allende. En rigor, la misma que ha sostenida desde las primeras horas después del golpe de 1973.

Por su parte, los debates historiográficos muestran una intensidad similar. El componente anticomunista que todavía inunda a los académicos pertenecientes al mundo conservador provoca que sus miradas historiográficas sobre la Unidad Popular repitan muchas de las muletillas que instauró la «versión oficial» en tiempos de la dictadura militar encabezada por el general Pinochet. Por su parte, especialmente desde principios del siglo XXI, numerosas investigaciones han apuntado a desmontar mitos sobre la historia de Chile, siempre ávida de considerarse una «excepción» a nivel continental. Esto ha permitido ampliar la comprensión histórica de la Unidad Popular, incorporando nuevas temáticas, actores y perspectivas de análisis. Esta labor ha sido la respuesta a las ópticas unidimensionales sobre el periodo que caracteriza a los analistas conservadores. En todo caso, si algo dejó en claro la conmemoración de los 50 años del golpe en Chile, es el peso hegemónico que tiene esta última visión en los medios. Pese a ello, el campo historiográfico sobre la Unidad Popular sigue ampliándose dentro y fuera de Chile. Nuevas líneas de investigación se abren, dejando en claro que la experiencia de la Unidad Popular continúa siendo una fuente permanente de debates disciplinares y políticos^[60].

60.- Ver por ejemplo el artículo de Marcos Morra; Eugenia Palieraki; Rafael Pedemonte, «La Unidad Popular chilena (1970-1973): balance historiográfico y nuevas perspectivas transnacionales», *Historia Crítica*, 90 (2023), pp. 3–28.

El experimento chileno y las izquierdas europeas en la encrucijada de los setenta*

The Chilean experiment and the European left at the crossroads of the 1970s

Alessandro Santoni

Universidad de Santiago de Chile

Mariana Perry Fauré

Universidad San Sebastián (Chile)

Resumen

El experimento de la Unidad Popular y su trágico desenlace fueron objeto de profundo interés y de activa solidaridad por parte de las distintas familias de la izquierda europea. Este trabajo se propone analizar el conjunto de las lecturas y análisis que esos acontecimientos generaron entre algunos de los principales partidos socialistas y comunistas del viejo continente, que en ese momento estaban pasando por una fase de profunda redefinición política. La vía chilena al socialismo y su abrupto fin, abrieron un complejo debate en torno a las lecciones que se podían extraer del caso del cono sureño, cuya brutalidad le dio aún más urgencia.

Palabras clave: socialismo, comunismo, nueva izquierda, Unidad Popular, golpe militar.

Abstract

The Popular Unity experiment and its tragic outcome were the object of deep interest and active solidarity for the different families of the European left. This work aims to examine the insights and analyses that these events generated among some of the main socialist and communist parties of the Old Continent, which at that time were going through a phase of profound political redefinition. The Chilean path to socialism and its abrupt end opened a complex debate about the lessons that could be drawn from the case of the Southern Cone, whose brutality made it all the more urgent.

Keywords: socialism, communism, new left, Popular Unity, military coup.

* Proyecto DICYT N° 032094AS de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Se agradece a DICYT la financiación aportada. Proyecto Fondecyt Iniciación N°11230135. Se agradece a ANID el apoyo.

Este trabajo plantea avanzar algunas reflexiones respecto al conjunto de pasiones, expectativas y aprensiones que la victoria de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970 y la conmoción causada por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, generaron a escala mundial. Su foco de interés son los partidos de la izquierda de la Europa occidental y las razones que explican su atención en los avances y retrocesos de la «vía chilena», así como el esfuerzo que llevaron adelante en su acción solidaria posterior al golpe.

En particular nos proponemos visualizar como esta atención y esfuerzos deben entenderse como reflejo directo de los desafíos que, al iniciarse la década de los setenta, interesaban a esa familia política. Lo anterior significa contextualizar el asunto chileno en los debates y las problemáticas que, en una época de redefinición ideológica y programática, caracterizaron la trayectoria y las interacciones recíprocas de las que eran entonces las tres grandes vertientes de la izquierda europea: la socialista/socialdemócrata, la comunista (en vísperas de ser definida eurocomunista) y la emergente «nueva izquierda», que había encontrado un potente catalizador en las protestas estudiantiles de 1968. El experimento allendista y su trágico desenlace pueden verse como modelo-ejemplo, lección o como causa/recurso simbólico, en que éstas vertientes proyectaron sus propias exigencias y definieron, en una lógica de convergencia-divergencia recíproca, sus respectivas posiciones. Por ello, en el primer apartado, realizaremos algunas consideraciones de orden más general que permiten entender los grandes debates por los cuáles se movía entonces la izquierda europea y el significado que se atribuyó, en este espacio, a la experiencia chilena.

Por otra parte, cabe considerar que este significado tuvo matices según el país y

su contexto político. Esbozaremos así, en los siguientes apartados, algunas reflexiones respecto al impacto de la vía chilena al socialismo en distintos casos nacionales, basándonos en la literatura existente y en nuestros propios trabajos al respecto. Esta decisión metodológica surge de la constatación de que, por valiosos que son, los trabajos enfocados en la recepción de la causa chilena en un único país han mostrado, a menudo, el límite de no visualizar con claridad las que eran especificidades y los que, en cambio, eran los rasgos comunes a un determinado contexto geográfico y político. A este respecto, también podríamos identificar tres categorías de países en Europa occidental, en función de las características de la situación política y del tipo de recepción del caso chileno que derivó de ellas. Si bien, en este texto por motivos de espacio, nos centraremos solo en dos de ellas.

La primera categoría está representada por aquellos países de la Europa latina con sistema democrático, en donde existían fuertes analogías y afinidades con el contexto político de Chile, siendo particularmente significativa la presencia de fuertes partidos comunistas. Esto despertó debates más profundos, lo que fomentó lecturas más articuladas y específicas, realizadas en clave de política interna, a partir de los sucesos chilenos. La categoría es representada fundamentalmente por Italia y Francia, que analizaremos en dos apartados separados.

En segundo lugar, están los países del norte de Europa, en donde la participación comunista era menor y la socialdemocracia ejercía un rol hegemónico, ocupando a menudo una posición de gobierno. En estos casos, la recepción del caso chileno presenta rasgos menos articulados a nivel de reflexión política local al presentar estructuras políticas muy divergentes a las chilenas, pero permite visualizar algunas tensiones internas al universo del socialismo. Si bien

esbozaremos algunas reflexiones de conjunto apoyado en otros casos, nos enfocaremos en el caso británico.

Una tercera categoría, está representada por los países de la Europa mediterránea que entonces vivían bajo regímenes autoritarios: otro tipo de contexto en que se daban las condiciones para una lectura local del caso chileno, en dónde se reflejaban preocupaciones particulares, relativas a las perspectivas de una salida democrática. En este artículo no abordaremos directamente a estos países, si bien desarrollaremos algunas reflexiones al respecto en el primer apartado.

Los grandes debates de la izquierda europea

La noticia de la victoria de Allende encontraba a las izquierdas socialista y comunista enfrentándose a las consecuencias de las movilizaciones estudiantiles de 1968. En particular asumió urgencia el desafío representado por la formación de movimientos y grupos de «nueva izquierda», izquierda radical y/o extraparlamentaria, que cuestionaban las credenciales revolucionarias de los partidos tradicionales, denunciados como aparatos burocráticos enquistados en lógicas propias de la democracia burguesa y el consenso de la posguerra. Partidarios de un tercermundismo que se oponía a los imperialismos norteamericano y soviético, los representantes de los movimientos del 1968 habían adoptado a un panteón de nuevos mitos revolucionarios, que marcaba diferencia con la «vieja izquierda», en que la revolución cubana, la figura del «Che» Guevara y las distintas guerrillas latinoamericanas ocupaban un sitio de honor^[1]. En muchos aspectos el éxito de la Unidad

Popular (UP) permitió a los partidos comunistas o socialistas revertir a su beneficio el clima de interés hacia América latina para responder al desafío, reivindicando el rol que les cabía en el proceso mundial de transformación social y alimentando la esperanza de acercar a toda una generación que en ese momento se les había escapado de las manos. De hecho, el análisis público que se hizo del proceso chileno en los años siguientes reflejó constantemente las tensiones entre las «viejas» y las «nuevas» izquierdas^[2]. Estas últimas se vieron reflejadas en las posiciones del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), considerando las dificultades y el fracaso de la vía chilena al socialismo como una confirmación de la inviabilidad del camino democrático, debido a la predecible respuesta de las fuerzas reaccionarias. También condenaron a las viejas izquierdas en su valoración del experimento chileno como ejemplo para sugerir la necesidad de políticas de amplias alianzas, sobre todo cuando éstas implicaban la convergencia de comunistas y socialistas con fuerzas de centro y centroizquierda. Después del golpe, a través del caso chileno y del ejemplo mirista, se dio curso a una identidad revolucionaria encargada de avanzar hacia el verdadero cambio, desestimando viejas tradiciones que probaban ser fallidas.

Por otra parte, la elección de Allende llegaba sólo dos años después de la Primavera de Praga, en donde el experimento de democratizar una sociedad comunista había sido finalizado abrupta y trágicamente. A diferencia del caso checo, el experimento de la Unidad Popular buscaba transitar del capitalismo a un socialismo democrático, usando los mecanismos de la democracia liberal. Este propósito convocaba enton-

1.- Robert Gildea, James Mark, Niek Pas, «European Radicals and the 'Third World'», *Cultural and Social History*, 8:4 (2011), pp. 449-471.

2.- Gerd-Rainer Horn, *The Spirit of '68: Rebellion in Western Europe and North America, 1956-1976*, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 131-177.

ces a las dos grandes vertientes del movimiento obrero organizado: la comunista y la socialista. Había en realidad elementos de no poca ambivalencia en relación con el contenido de lo que se denominaba «socialismo democrático». Ambivalencia también presente en el mismo proyecto de la UP, en que no había acuerdo ni claridad respecto a cuál era el tipo de socialismo que los partidos integrantes de la coalición estaban persiguiendo, ni respecto a los límites y posibilidades de mantenerse en el marco institucional de la democracia existente.^[3] Por su parte, entre los partidos políticos europeos, si bien muchos hablaban de socialismo por vía democrática, el concepto se mantenía abierto, albergando y tolerando distintas lecturas.

Tomemos el caso de los partidos socialistas que, sin distinción alguna, dieron su activa solidaridad a la causa de la izquierda chilena. La victoria de Allende impulsó un vínculo entre el socialismo europeo y el chileno aun cuando el PS chileno históricamente se había negado a mantener contactos oficiales con la IS, cuyo miembro reciente en Chile era el Partido Radical^[4].

3.- Alfredo Riquelme, «Política de reformas e imaginación revolucionaria en el Chile constitucional (1933-1973)», en Marianne González Alemán, Eugenia Palieraki (Comp.), *Revoluciones imaginadas. Itinerarios de la idea revolucionaria en América Latina contemporánea*, Santiago de Chile, Universidad Nacional de Tres de Febrero-Université de Cergy-Pontoise-RIL Editores, 2013, pp. 153-184. Para una revisión sobre las disputas en torno al concepto de democracia ver Marcelo Casals y Mariana Perry, «De la democracia revolucionaria a la democracia posible. Trayectorias políticas y conceptuales de la democracia en la izquierda marxista chilena, 1950s-1980s», *Historia*, 53-I (2020), pp. 11-44.

4.- Fue justamente en el trienio de la UP, a través de las visitas de dirigentes de los distintos partidos y de la misma IS a Chile, cuando se empezaron a estrechar los nexos entre estos dos mundos acercando las posiciones y permitiendo un trabajo en conjunto que generó a su vez impacto mutuo en el intercambio y circulación de prácticas e ideas políticas. Este vínculo fue clave, en los años posteriores al golpe, en crear las condiciones para la in-

Pese a que estos partidos habían consolidado hace décadas una praxis reformista basada en el mantenimiento del Estado Social de corte keynesiano, esto no había derivado necesariamente en un abandono abierto y declarado del horizonte de una sociedad socialista. En Gran Bretaña, el laborismo mantenía en su estatuto la referencia de la cláusula 4 relacionada con la socialización de los medios de producción. En Italia, el PSI aún no había removido la hoz y el martillo de su símbolo. En Francia el nuevo PSF lanzó su proyecto de unidad de la izquierda en nombre de un programa radical de reformas. Es decir, muchas de estas fuerzas no habían acompañado su evolución programática con una redefinición a nivel ideológico como la que desarrolló la socialdemocracia alemana en el congreso de Bad Godesberg.

Sin duda deben hacerse algunos matices, puesto que se trataba de un universo complejo en que al interior del mismo partido competían corrientes distintas y en que el tránsito teórico desde una perspectiva socialista hacia una programáticamente reformista (que parece haber marcado la trayectoria de esa familia política) estaba en distintas etapas. De hecho, a menudo, mientras las cúpulas que guiaban a los partidos quisieron formular su interpretación de un Allende socialdemócrata, los sectores más radicales adoptaron a Chile para relanzar su identidad de fuerzas de izquierda, comprometidas con el cambio, pese a décadas de prácticas reformistas.

El punto es que a principios de los setenta, los socialistas aún no ean conscientes del giro que los definiría en la década siguiente, puesto que recién se empezaban

fluencia de ese mundo socialista europeo en el proceso de renovación del socialismo chileno. Ver, en particular, Mariana Perry, *Exilio y renovación. Transferencia política del socialismo chileno en Europa Occidental, 1973-1988*, Santiago de Chile, Ariadna Ediciones, 2020.

a vislumbrar las primeras señales de crisis del modelo del Estado de bienestar que había dominado el escenario europeo de la posguerra⁵. A esa altura, el Estado social incluso podía parecer a algunos como un logro menor, mientras que permanecían vigentes las expectativas de un profundo cambio social⁶. Es en esa fase, de hecho, que se comenzaron incluso a sentar las bases de lo que Andry llama el proyecto de una Europa Social, entendido como un intento de la izquierda europea de renovarse a sí misma tras las demandas impuestas por las movilizaciones post 1968 y proponer una alternativa que iba más allá del estado de bienestar keynesiano⁷. Al interior de este proyecto adquirirían un renovado protagonismo las posiciones más radicales de transformación social, y se prestaba atención a nuevos sujetos sociales como los estudiantes; temáticas como el feminismo, el medioambiente y el activismo del tercer mundo. También se constataba el abandono de las prejudiciales prácticas anticomunistas de los años anteriores, en el marco de una época de distensión en donde la misma socialdemocracia alemana avanzaba su *Ostpolitik*, sin dejar de existir profundas diferencias en relación con la posibilidad de generar algún tipo de alianza o colaboración con los partidos comunistas occidentales.

5.- La crisis del petróleo, gatillada por la guerra de Yom Kipur justo un mes después del golpe en Chile, iba a revertir la tendencia a la expansión que había caracterizado la economía de esos países en las últimas décadas. Los años siguientes estarían marcados por el estancamiento de las economías, el aumento del desempleo y una fuerte inflación, factores que prepararon las condiciones para el cambio de paradigma de los 1980, cuando incluso los gobiernos socialistas tuvieron que plegarse frente a la exigencia de privatizaciones y desregulaciones económicas.

6.- Respecto a la respuesta de las izquierdas a la crisis véase Donald Sassoon, *Cien años de socialismo*, Barcelona, Edhasa, 2001, pp. 489-702.

7.- Aurelie Dianara Andry, *Social Europe, the Road not Taken. The Left and European Integration in the Long 1970s*, Oxford, Oxford University Press, 2022.

Para el caso del comunismo occidental, las dudas transitaban por la posibilidad de generar alianzas con la otra alma de la izquierda en función de un proyecto común. Sin embargo, en este caso, todo llamado a la democracia tenía que dar cuenta de su identificación con el modelo soviético. Es posible plantear que al igual que la Primavera de Praga, cuya finalización por mano de las fuerzas del Pacto de Varsovia había encontrado la condena y desaprobación de comunistas italianos y franceses, el Chile de la UP representó un hito que marcó un importante proceso de redefinición estratégica. Lo que se había iniciado con la crisis del movimiento comunista internacional posterior al XX congreso del PCUS, se condensó finalmente en la reivindicación abierta de un modelo democrático y pluralista de socialismo: eje central de la propuesta eurocomunista.

Por otra parte, se puede decir que el interés de estos partidos por la experiencia chilena también tuvo otras facetas que se vinculaban a los intereses de Moscú. Para el PCUS la vía chilena representaba una alternativa al modelo guerrillero planteado por Cuba y sus seguidores, que había generado numerosos roces con los soviéticos y los PC ortodoxos del continente. Además, reivindicaba la política formulada en el XX congreso de 1956 en torno a las vías pacíficas nacionales. De hecho, los dos grandes partidos, el francés y el italiano, habían estrechado vínculos de intercambio directo con el PC de Luis Corvalán, en la década de los sesenta, justamente a partir de la afinidad que percibían con su política y trabajo de masas.

Posteriormente al golpe, Chile se transformó, también por el impulso soviético, en causa frentista y antifascista que, en el marco de la distensión, operó como fuerte catalizador de una lógica unitaria entre comunistas, socialistas y otros sectores,

basando ese llamado a la cooperación en una interpretación que veía a esos acontecimientos a la luz del pasado europeo. Un fenómeno que se explicaba también en el interés de los comunistas chilenos en el exilio, que buscaban mantener la atención y condena transversal internacional hacia las violaciones de derechos humanos en Chile^[8]. Por otra parte, la causa chilena también fue utilizada desde la perspectiva comunista justamente para responder a la ofensiva occidental en materia de derechos humanos. Cabe considerar que las críticas que recibía la URSS en esa fase no apuntaban a prácticas terroristas de masas como las que habían caracterizado la época estalinista y más bien estaban enfocadas en la violación de los derechos civiles de los disidentes y la falta de libertad de expresión en la URSS. Los soviéticos podían denunciar la hipocresía detrás de ella, puesta la complicidad de Washington con una dictadura que en ese mismo momento adoptaba prácticas altamente represivas como la tortura y la desaparición de sus enemigos^[9].

El tópico de los DD.HH. marca además un nuevo tema de agenda, que iba a pesar cada vez más en las identidades de los partidos de izquierdas, situándose en la línea de evolución seguida por esta corriente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Chile jugó el papel de catalizador en instalar los DDHH en el centro de su agenda, y representó el caso más conocido y emblemático de la cuestión. El eje del antifascismo y la reivindicación de los DD.HH. se conectaban a su vez con otra preocupación de

la época, relativa a la apertura de transiciones democráticas en países del continente que aún mantenían régimen dictatorial.^[10]

Si bien no abordaremos estos casos, es interesante analizar algunas dinámicas que se desprenden de los estudios dedicados al caso griego y español, los que remiten a una dimensión que debe ser considerada también para entender la asimilación fascismos-dictaduras usada en Europa para poder hacer sentido del caso chileno. Estos países representaron en muchos aspectos como un antecedente para interpretar lo que estaba pasando en Chile. Para los partidos de izquierda de los países democráticos europeos, posteriormente al golpe de 1973, el caso chileno fue leído con los lentes con que se miraban las dictaduras en el sur del continente, asimilándolos como ejemplo de resabios del fascismo y de la amenaza que aún representaba treinta años después de la guerra^[11]. Y de alguna forma Pinochet heredó el lugar que era de Franco en el imaginario izquierdista. También ambos casos muestran interpretaciones que dialogaban con las de países en contexto democrático, puesto que pusieron el foco en la necesidad de amplias alianzas y servían para legitimar la línea de fuerzas que se diferenciaban de opciones radicales.

En su análisis del impacto de la experiencia chilena en Grecia, Palieraki destaca que el escaso interés manifestado inicialmente por la victoria de Allende contrasta con la solidaridad que, después del golpe, los opositores de la junta de los coroneles le brindan a la izquierda chilena. Al res-

8.- Olga Ulianova, «La nueva inserción internacional del comunismo chileno tras el golpe militar», en Tanya Harmer y Alfredo Riquelme (ed.), *Chile y la guerra fría global*, Santiago de Chile, RIL, 2014, pp. 281-284 (273-315).

9.- Kim Christiaens, «European reconfigurations of transnational activism: Solidarity and human rights campaigns on behalf of Chile during the 1970s and 1980s», *International Review of Social History*, 63:3 (2018), pp. 413-448 (419-425).

10.- Kim Christiaens, Magaly Rodríguez García y Idesbald Goddeeris, «A global perspective on the European mobilization for Chile (1970s-1980s)», en Kim Christiaens, Magaly Rodríguez García y Idesbald Goddeeris (eds.), *European solidarity with Chile 1970s-1980s*, Frankfurt, Peter Lang Editions, 2014, pp. 23 (7-46).

11.- Christiaens, «European Reconfigurations», pp. 425-428.

pecto recalca la relevancia del giro que en esos años produjo la recomposición de la izquierda moderada para hacer de la solidaridad con Chile una instancia de movilización contra los coroneles. Más en lo específico, la autora recalca cómo las lecturas con respecto al desarrollo de los eventos en Chile ofrecieron la oportunidad para los comunistas griegos (y para el mismo futuro fundador del PASOK y primer ministro Andréas Papandréou) de revertir a su favor el interés por América latina y el tercermundismo que había sido apropiado por la izquierda radical durante los sesenta en favor de su proyecto político^[12].

En España el caso chileno generó en cambio fuerte interés desde un principio, abarcando las percepciones respecto a la perspectiva socialista, la cuestión del autoritarismo, la violencia, y las alianzas que había que conformar. Los distintos actores de la izquierda ibérica tomaron posición respecto a la lección de Chile. Cada uno desde su perspectiva, presentaron sus lecturas sobre el golpe y las lecciones que se podían extraer sobre la política de alianza y la perspectiva socialista. Si bien no faltaron sectores que plantearon el camino revolucionario y violento a partir del fracaso de la UP, prevaleció un énfasis en la necesidad de una política de acuerdos y transacción, constatando que las divisiones internas a la UP habían favorecido el desenlace. Una lectura teñida por el temor de que una apertura democrática fuese aplastada por un retorno al autoritarismo^[13]. El PCE de

Santiago Carrillo estableció por ejemplo «la imposibilidad de quemar las etapas, evitar el aislamiento de la vanguardia y ser conscientes que antes de caer víctima de un Golpe de Estado, un gobierno socialista debe retirarse a tiempo»^[14]. Indicaciones que refrendaban la línea adoptada por el partido en el contexto transicional y preparaban su «adscripción» a la tendencia eurocomunista. De hecho, en 1977, el PCE pactó con los herederos de Franco la aprobación a la monarquía a cambio de la legalización del partido, con un discurso de alto compromiso con los canales de la Democracia, aspirando a no perder espacios de participación en la política nacional de transición.

Por su parte, el socialismo (PSOE) se renovó tras la cara del emergente líder político andaluz, Felipe González, quien, a diferencia del líder socialista en el exilio, Rodolfo Llopis, operaba al interior del país generando mayor conexión con las bases. González, en este sentido, se presentaba como un interlocutor válido tanto para avalar la transición española como el representante preferido por la Internacional Socialista para conducir al socialismo en España luego de la muerte de Franco, con un discurso que mezclaba marxismo y democracia, buscando convertir al PSOE en un partido de masas capaz de disputar las elecciones por venir. Estos aspectos son particularmente relevantes porque la experiencia de la transición española y las dinámicas entre el PSOE y el PCE fueron los prismas a través de los cuales, la IS leyó y abordó las divisiones generadas en la oposición chilena tras el golpe, modelando su intervención según estas directrices.

12.- Eugenia Palieraki, «'Le Chili est proche': Les mouvements antidictatoriaux grecs et les septembres chiliens», en en Olivier Compagnon, Caroline Moine (coord.), «Chili 1973. Un évènement mondial», *Monde(s)*, 8 (2015/2), pp. 61-62 (45-64), <https://www.cairn.info/revue-mondes-2015-2.htm> (consultado: 13 de marzo de 2023).

13.- Cristina García Gutiérrez, «La reacción de España ante el golpe militar en Chile», *Naveg@américa. Revista electrónica editada por la Asociación Española de Americanistas*, 6 (2011), pp. 1-21, <https://revistas.um.es/navegamerica/arti->

[cle/view/124451](https://doi.org/10.1016/j.navegamerica.2011.01.001) (consultado: 7 de junio de 2023).

14.- Citado por C. García Gutiérrez, «La reacción de España», p. 19.

La Unidad Popular y la Unión de la Izquierda francesa

En Francia la lectura del experimento chileno fue marcada por lo que la prensa definió el « *cousinage politique* » entre los dos países, refiriéndose a la presencia de varios partidos nominalmente afines (comunistas, socialistas y radicales) en los dos sistemas políticos^[15]. Además, lo que potenció la lógica de las analogías fue el hecho de que el experimento chileno encontró a la izquierda local en una fase de crisis y redefinición, por lo que la popularidad del caso conosureño se debe a que este se prestaba para ser utilizado como punto de encuentro entre un amplio espectro de sensibilidades de izquierda.

Tras la instauración de la quinta república en 1958, una izquierda que se encontraba dividida entre el Partido Comunista Francés (PCF) y varios grupos socialistas, no había podido presentar una real competencia a la hegemonía de De Gaulle y de su movimiento político en la lógica de un sistema semipresidencial. Solo en las presidenciales de 1965, un acuerdo entre estas distintas fuerzas había conseguido llevar a un candidato común; François Mitterrand, a un honorable 45% en segunda vuelta. A la crisis electoral se había sumado el cuestionamiento que le había venido en 1968 desde el mayo francés. Los líderes estudiantiles habían criticado vehementemente, su amoldamiento al sistema y/o por su estalinismo, a los comunistas locales. Estos, a su vez, condenaron el aventurismo de los estudiantes pequeñoburgueses, guiados

15.- Pierre Kalfon, «Les Chiliens ont surnommé M. Mitterrand l'Allende français», *Le Monde*, 15 novembre 1971. https://www.lemonde.fr/archives/article/1971/11/15/les-chiliens-ont-surnomme-m-mitterrand-l-allende-francais_2450107_1819218.html (consultado: 14 de marzo de 2023). Ver Pierre Vayssière, *Le Chili d'Allende et de Pinochet dans la presse française. Passions politiques, informations et désinformation*, Paris, L'Harmattan, 2005.

por Daniel Cohn-Bendit, a quien el dirigente comunista Georges Marchais definió despectivamente como el «anarquista alemán». Si bien los sindicatos y partidos de la izquierda se habían solidarizado contra la represión practicada por la policía en la noche de las barricadas (10-11 de mayo), las relaciones entre vieja y nueva izquierda habían sido ulteriormente tensionadas durante la oleada de tomas obreras que paralizó al país entre mayo y junio. El intento de los sindicatos y políticos tradicionales de cooptar al movimiento terminó debilitando sus credenciales de izquierda, mientras se daba la progresiva conformación, dentro de las fábricas, de un sector autogestionario que se negó a seguir las directrices de las cúpulas sindicales. Adicionalmente, la aplastante victoria de De Gaulle en las elecciones anticipadas de ese año, y los resultados electorales de los años siguientes, poco alentadores sobre todo para los sectores socialistas, evidenciaron la necesidad de replantearse o desaparecer.

En ese momento, se reinició un proceso de refundación. El PCF, que ya en 1968 había tomado distancia de Moscú desaprobando la invasión de Checoslovaquia, entró gradualmente en una fase de redefinición programática e ideológica, que lo llevó a visualizar la necesidad de una política unitaria en Francia y que, en los años siguientes, derivó en la convergencia con otros partidos comunistas de la Europa occidental en función de un modelo de socialismo alternativo al de la URSS (el que será definido como eurocomunismo).

En el área socialista, que estaba fragmentada en distintos grupos, se avanzó primero hacia la fundación de un partido unitario, el Partido Socialista (PSF) en 1969, y luego, el Congreso de Epinay de junio 1971 se dio la imposición del liderazgo de Mitterrand, en base a la propuesta de un programa común con el PCF y otros sectores de la izquier-



Actuación de Quilapayún en la fiesta de *l'Humanité*, París, septiembre de 1973 (Fuente: *l'Humanité*).

da, que finalmente fue firmado en junio de 1972. El experimento allendista llegó como anillo al dedo para la izquierda, puesto que la UP prefiguraba el tipo de alianzas que se pretendía imponer a Francia y otorgaba las credenciales revolucionarias que la izquierda tradicional había perdido durante las movilizaciones del 68.

Por lo que concierne a los comunistas franceses, estos podían contar además con la existencia de buenas relaciones con el PC chileno; sus dirigentes visitaron en distintas oportunidades a Chile y pudieron contar con información de primera mano. Su lectura del proceso chileno se expresó a menudo en clave de polémicas con la izquierda radical, hija del 1968, haciendo hincapié en los problemas causados al gobierno por la política del MIR y en la insistencia en la necesidad de una línea unitaria^[16].

16.- Olivier Compagnon, Caroline Moine, «Pour une histoire globale du 11 septembre 1973», en O. Compagnon, C. Moine (coord.), «Chili 1973. Un événement mondial», pp. 9-26.

En relación al socialismo, cabe recordar el viaje a Chile que Mitterrand realizó en noviembre de 1971, el primero después de su investidura como líder socialista: un gesto significativo, funcional al proyecto de un programa común. Como el mismo Mitterrand le planteó a Allende: «El Partido Socialista Francés busca llegar a la firma de un programa común de gobierno con toda la izquierda, así como lo ha hecho usted mismo. Por lo tanto, no es casualidad que hayamos reservado nuestro primer viaje a Chile».^[17] En la misma línea, a su retorno, el líder socialista declaró a la prensa que

«Chile es el único país del mundo donde la síntesis entre reformas estructurales y respeto a las libertades civiles ha sido exitosa.

17.- Claude Estier, «Mitterrand et Allende», *La Lettre* (Institut François Mitterrand), 45, 8 de octubre de 2013, en <https://www.mitterrand.org/miterrand-et-allende.html> (consultado: 14 de marzo de 2023). Ver también Claude Estier, *J'en ai tant vu : memoires*, Paris, Le Cherche midi, 2008, p. 133.

Para lograrlo, es necesario concluir acuerdos electorales y, sobre todo, establecer una plataforma común previa a un acuerdo de gobierno»^[18].

Otros aspectos que explican el interés de Mitterrand por Chile podían encontrarse en la posibilidad de lograr dos objetivos paralelos: el de refrendar frente al electorado sus credenciales izquierdistas (puesto que estas podían ser objetadas por su trayectoria personal) y, al mismo tiempo, el de acreditar su figura como candidato presidencial, presentándose como un «Allende francés». Algo fundamental en un sistema semi-presidencial donde a la izquierda había faltado hasta ese momento un líder competitivo, capaz de equilibrar a De Gaulle y su sucesor Georges Pompidou.

Respecto a si la UP hubiese efectivamente inspirado las opciones de la izquierda francesa existen distintos puntos de vista. Olivier Compagnon y Caroline Moine, notando las analogías entre los preámbulos de la plataforma de la UP y del programa común adoptado por la izquierda francesa, destacan que: «por lo tanto la ‘vía chilena al socialismo’ no fue ajena a la adopción, el 26 de junio de 1972, del Programa Común de la izquierda francesa, y que puede plantearse como una declinación europea de las opciones tácticas tomadas por los socialistas chilenos»^[19]. Por su parte, Judith Bonnin ha planteado que no hubo realmente un impacto teórico y que «consideradas las grandes diferencias entre las estructuras socioeconómicas de los dos países, nunca se planteó realmente la posibilidad de un modelo chileno»^[20].

18.- Citado en Moine Compagnon, «Pour une histoire globale du 11 septembre 1973», p. 12.

19.- Moine Compagnon, «Pour une histoire globale du 11 septembre 1973», p. 13.

20.- Judith Bonnin, «François Mitterrand à la découverte de l'Amérique latine (1971-1981)», *Le Genre Humain*,

Lo que queda en evidencia es que Chile, más allá del valor que pueda haber tenido o no como modelo o fuente de inspiración, fue adoptado como recurso simbólico y resignificado en función de los intereses propios de las distintas izquierdas francesas. Al mismo tiempo, fue leído con los ojos puestos en la política local, en la medida en que los éxitos y fracasos de la UP parecieron efectivamente dar indicaciones relevantes de los posibles escenarios que se perfilaban en Francia.

De hecho, el golpe derivó más bien en una toma de distancia del «modelo chileno» por parte de los socialistas franceses, para los cuales se trató de explicar que el fracaso de la vía chilena no debía ser leído como prueba de la inviabilidad de su misma política, marcando los puntos de diferencia a nivel socioeconómico, político y geopolítico, entre los dos contextos. El mismo Mitterrand declaró el 12 septiembre 1973 que «no podemos asimilar el proceso político y económico de un país como Francia que pertenece al mundo altamente industrializado con lo que está pasando en países [...] que pertenecen a un mundo que no es el nuestro»^[21]. Como destaca Renée Fregosi:

«Al implementar una fuerte solidaridad con los compañeros chilenos, los socialistas franceses tenderán a afirmar que, en Francia, a diferencia de Chile, la experiencia de un gobierno de izquierda puede tener éxito

LVIII/1 (2017), p. 38 (29-53), <https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-2017-1-page-29.htm> (consultado : 13 de marzo de 2023). Ver también la opinión expresada por Bonnin en François-Xavier Gomez, «Il y a une passion de la gauche française pour l'Amérique latine», *Liberation*, 15 de diciembre de 2017. https://www.liberation.fr/planete/2017/12/15/il-y-a-une-passion-de-la-gauche-francaise-pour-l-amerique-latine_1617011/ (consultado: 14 de mayo de 2023).

21.- Citado en Renée Fregosi, «Le Parti Socialiste français face au coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili», *HAL*, 2019, p. 9. <https://shs.hal.science/halshs-02062925/document> (consultado: 14 de abril de 2023).

por tres razones principales: la naturaleza de los militares francés, la posición geoestratégica del país, la fuerza de la alianza política»^[22].

Todo ello se combinó con un esfuerzo solidario que convirtió a Francia, en los años siguientes, en un importante centro del exilio chileno^[23]. Un esfuerzo que fue pensado para relanzar las credenciales de izquierda anti-imperialistas del PSF, consolidando, a través de la constitución del Comité Solidarité-Chili, la alianza con los comunistas. Estos estaban interesados, a su vez, en reactivar en torno a la causa de Chile la lógica del frentismo antifascista. Ese objetivo quedaba particularmente evidente en la organización de una iniciativa como la *Conferencia paneuropea de solidaridad con Chile*, realizada en París en julio de 1974, por impulso del Comité Solidarité-Chili y con la colaboración de las izquierdas italianas. La finalidad, por lo menos desde la perspectiva del PCF y del PCI, era justamente la de congregar en un mismo foro a partidos comunistas del este europeo junto con fuerzas significativas de la socialdemocracia occidental, poniendo fin a prejuicios anticomunistas que afectaron a su posición en los respectivos países desde la inmediata posguerra. En palabras del dirigente del PCF, Gaston Plissonier, en una misiva enviada a los compañeros italianos, la iniciativa «reuniría por primera vez en un mismo foro a las fuerzas comunistas y a un gran número de fuerzas socialistas de toda Europa»^[24].

22.- Fregosi, «Le Parti Socialiste français face au coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili», p. 1.

23.- Nicolás Prognon, *Les exilés chiliens en France, entre exil et retour (1973-1994)*, Sarrebrücken, Editions Universitaires Européennes, 2011.

24.- Messaggio di Gaston Plissonier, comitato centrale del PCF al comitato centrale del PCI, 18 de junio de 1974, Archivio del Partito Comunista Italiano (APC), 1974 IV, Estero, Cile, 080, 173-175, Fondazione Gramsci, Roma.

En muchos aspectos, por otra parte, la movilización solidaria también reflejó a menudo las dinámicas e intereses internos de la coalición, expresando la competencia entre los dos partidos para la hegemonía dentro del bloque que en los años siguientes habría marcado la vida de la coalición, derivando finalmente en la imposición del PSF y el declive del PCF. Como expresaba Bonnin a Liberation: «El PS quiere estar al frente de la solidaridad, siguiendo la idea de que, al ser unos socialistas víctimas del imperialismo, era importante no dejar este terreno al aparato comunista y sus organizaciones»^[25].

La «lección de Chile» en Italia: la propuesta del compromiso histórico

En el caso de Italia es válida la consideración hecha respecto al caso francés en relación a la existencia de un «cousinage politique», pero con algunas diferencias sustanciales. Incluso en el país transalpino existía un conjunto de fuertes analogías políticas con Chile que incluía, la existencia de dos importantes conglomerados políticos de la izquierda tradicional: el Partido Comunista Italiano (PCI) y el Partido Socialista Italiano (PSI). Sin embargo, a diferencia de Francia, dentro de esas analogías destacaba también la gravitante presencia de un partido demócratacristiano (DCI), que

25.- François-Xavier Gomez, «Il y a une passion de la gauche française pour l'Amérique latine» ; ver también Fregosi, «Le Parti Socialiste français face au coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili», pp. 9-10. Cabe señalar que la documentación conservada en el archivo del Partido Comunista Italiano da una visión bastante aclaradora de los intereses, razones y preocupaciones que inspiraban a los partidos organizadores, incluyendo la competencia entre PCF y PSF, así como la hostilidad de ambos partidos comunistas hacia la participación de los grupos de «nueva izquierda». Nota di Angelo Oliva per la Segreteria, 29 de marzo de 1974, APC, 1974 II, Estero, Cile, 076, 801-805; nota di Ignazio Delogu, 20 de junio de 1974, APC, 1974 III, Estero, Associazioni di amicizia, 078, 935-937.



Roma, manifestación de apoyo al pueblo chileno, 1973 (fuente: Archivio Luce).

había sido el eje de todas las coaliciones de gobierno desde la inmediata posguerra. Un partido que estaba estrechamente vinculado a la DC chilena, con que colaboraba en el marco de la Unión Mundial Demócrata Cristiana y a cuyo proyecto de Revolución en Libertad había prestado apoyo político y financiero durante los 1960^[26].

El otro gran partido italiano y el rival histórico de la DCI desde la oposición era el PCI, el principal partido comunista del mundo occidental. También esta colectividad desde la década de los 1960 mantenía estrechos vínculos y constantes relaciones de intercambio con su análogo chileno, el PCCh liderado por Luis Corvalán. Durante esos años existió un interés específico de los chilenos para conocer el trabajo desa-

rollado a nivel organizativo por el partido italiano, además de la mutua percepción de una especial afinidad teórica entre las dos vías al socialismo: elementos de convergencia que se vieron potenciados frente al desafío común que representaba el reformismo democristiano. La política del PCCh, además, cobraba un significado especial desde el punto de vista de los partidos filsoviéticos, representando una alternativa a las posiciones radicalizadas del régimen cubano^[27]. Cuando Allende asumió el poder en 1970, la DCI y PCI ya tenían contactos establecidos y manejaban antecedentes que fueron clave para su lectura de la situación.

Todos los partidos italianos trataron de sacar lecciones útiles del escenario chileno, que se convirtió, en la prensa política italiana, en una suerte de espejo de la políti-

26.- Sobre la relación entre los dos partidos democristianos véase el trabajo de Raffaele Nocera, *Acuerdos y desacuerdos. La DC italiana y el PDC chileno, 1962-1973*, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2015.

27.- Véase Alessandro Santoni, *El comunismo italiano y la vía chilena. Los orígenes de un mito político*, Santiago de Chile, RIL, 2011, pp. 49-67.

ca local. El aspecto central en este debate fue la posibilidad de que, en un momento de crisis de la coalición de centroizquierda formada por DCI y socialistas al inicio de los 1960, el PCI pudiese llegar a gobernar al país. En particular, el mismo PCI vio en la Unidad Popular un ejemplo o un ensayo que prefiguraba la «alternativa de gobierno» a la DCI, es decir una alianza de los dos grandes partidos de la izquierda italiana con los sectores progresistas que se estaban perfilando en el mundo católico^[28]. Con esta perspectiva en la mente, por ejemplo, en las páginas de la revista teórica del partido *Rinascita*, se ponía en valor el «encuentro entre el movimiento obrero de inspiración marxista y leninista y el mundo católico chileno, atravesado por profundas inquietudes, sacudido por el enfrentamiento entre las viejas costumbres y el ansia del resurgimiento cristiano, que el PDC, en el terreno ‘mundano’, no habría podido enredar y reabsorber completamente»^[29].

El punto sobre el cual es preciso llamar la atención es que esa era una lectura diametralmente opuesta a la que el mismo PCI iba a avanzar tres años más tarde. Para entender el giro debe considerarse el contexto italiano de esos años. En la península, además de la crisis de credibilidad de los partidos de gobierno, se estaba abriendo una fase de polarización y radicalización que iba a extenderse durante toda la década de los 1970, los llamados «años de plomo», caracterizados por las acciones de dos opuestos terrorismos, uno de extrema izquierda y otro de marca neofascista, que pusieron en jaque a las instituciones democráticas. El impacto que suscitó el golpe chileno en Italia debe así ser comprendido a la luz de la existencia de un riesgo autoritario. A

28.- A. Santoni, *El comunismo italiano y la vía chilena*, pp. 117-125.

29.- Renato Sandri, «Chile. Una vittoria che viene da lontano», *Rinascita*, 11 de septiembre de 1970, pp. 5 y 6.

esta preocupación respondía la lección que el PCI sacó del golpe, funcional a reivindicar ahora la necesidad de un «compromiso histórico» entre PCI y DCI para evitar todo giro autoritario. La propuesta fue formulada por el secretario general del PCI Enrico Berlinguer, en una serie de tres ensayos aparecidos entre septiembre y octubre en *Rinascita*:

«Hoy la experiencia chilena nos confirma en esta convicción, que la unidad de los partidos de los trabajadores y de las fuerzas de la izquierda no es condición suficiente para garantizar la defensa y el progreso de la democracia en donde a esta unidad se contraponen un bloque de partidos que se ubica desde el centro hasta la extrema derecha»^[30].

Esa propuesta se enmarcaba en una operación política con que el partido se planteaba poner al drama chileno en el centro del debate político en Italia. Desde que se recibe la noticia del golpe, en una reunión de emergencia de su directiva, el PCI había abordado la cuestión de las posibles consecuencias para su política^[31]. Ahí se habían determinado las orientaciones de un esfuerzo unitario de solidaridad, que se consideraba complementario a los objetivos políticos del partido: defenderse de todo ataque que buscara ver en lo sucedido la prueba de la imposibilidad de realizar una sociedad socialista en contexto democrático, y plantear a la DCI la necesidad de establecer este «compromiso», en el espí-

30.- Enrico Berlinguer, «Imperialismo e coesistenza alla luce dei fatti cileni», *Rinascita*, 28 de septiembre de 1973, pp. 3-4; Enrico Berlinguer, «Via democratica e violenza rivoluzionaria», *Rinascita*, 5 de octubre de 1973, pp. 3-4; Enrico Berlinguer, «Alleanze sociali e schieramenti politici», *Rinascita*, 12 de octubre de 1973, pp. 3-5.

31.- Riunione della direzione del PCI, 12 de septiembre de 1973, APC, 1973 III, Direzione, 047, 0331-0351.

ritu del antifascismo. Esto significaba presionarla a tomar distancia de la directiva demócratacristiana chilena, y a unirse a la movilización unitaria en contra del golpe. En palabras de Gian Carlo Pajetta, uno de los máximos dirigentes del partido:

«Tenemos que atacar la DC de Frei, ya sea que este último llegue a ser presidente sobre el cadáver de Allende, o, con mayor razón, si incluso él fuese condenado a vivir en el exilio. Porque en esta segunda eventualidad, los sucesos chilenos deberían significar aún más una advertencia para la DC italiana»^[32].

Cabe notar que esa lectura de la enseñanza que era preciso sacar del golpe, tenía en realidad su génesis en la política local, donde Berlinguer había establecido un canal de diálogo con el dirigente de la DCI, entonces ministro de asuntos exteriores, Aldo Moro. Este último había advertido al líder comunista de los peligros de impulsar a la escisión de los sectores demócratacristianos más progresistas, invitándolo a establecer una «nueva relación» con el conjunto del partido católico^[33]. El mensaje era que la DC representaba el eje de la estabilidad democrática del país y el referente de las clases medias, por lo tanto, el efecto de todo intento de causar una escisión a la izquierda terminaría empujándola hacia la derecha.

De forma parecida a lo que había pasado en Francia, Chile no estaba al origen de las opciones de la izquierda local. Más bien, ésta encontraba en lo acontecido en Chile elementos de reflexión para su estrategia, además de un recurso a nivel de propaganda. A diferencia del caso francés, cabría

recalcar, que en Italia se impuso, entre los partidos de la izquierda tradicional, una lectura de los acontecimientos chilenos que, al criticar la falta de un acuerdo entre UP y DC, servía para tomar distancia de la fórmula de una alianza comunista-socialista. Esto aplicaba, con matices distintos, incluso al caso del PSI, cuyo sector mayoritario quiso ver en el golpe la prueba que, para evitar el riesgo autoritario, se debía dar continuidad a la alianza de centroizquierda con la DCI (es decir una perspectiva diferente de la alternativa de gobierno, pero también del «compromiso histórico»), si bien con la indicación de que fuera necesario mantener un diálogo permanente con la oposición comunista.

De todos modos, al margen de las diferencias en las respectivas lecturas, los dos partidos de la izquierda tradicional impulsaron, en los meses y años siguientes, un esfuerzo de movilización y solidaridad, que era funcional a una política unitaria entre fuerzas del antifascismo: lo que incluía a las izquierdas y a la DCI, junto con partidos menores. Es decir, la coalición que había participado de la lucha de resistencia durante la segunda guerra mundial y que había plasmado la Constitución republicana. Roma, donde funcionó la oficina en el exterior de la izquierda chilena, «Chile Democrático», con el apoyo directo de partidos y sindicatos italianos, y donde se publicó la prestigiosa revista *Chile-América*, se transformó en un centro importante del exilio chileno.

En ese contexto debe entenderse y medirse la posición de la DCI y del gobierno local. El gobierno retiró a su embajador en Santiago e instruyó un encargado de negocios para hacerse cargo de la misión, dando asilo a numerosos opositores de la junta militar. El partido se vio impulsado, también por la presión de las izquierdas, a tomar distancia de la línea de Eduardo Frei,

32.- APC, 1973 III, Direzione, 047, 335.

33.- Luciano Barca, *Cronache dall'interno del vertice del PCI*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, p. 524.

quien había apoyado al golpe de Estado, y casarse con la interpretación del grupo de los democratacristianos chilenos que habían condenado inmediatamente lo sucedido^[34]. Una posición que suscitó la indignación de Frei y condujo, durante unos dos años, a un duro enfriamiento de las relaciones entre los dos partidos.

Paralelamente, la política de mano tendida a la DCI se cruzó con la otra cuestión que alimentó el debate sobre el golpe e impulsó la iniciativa de los comunistas italianos, es decir la polémica con la izquierda extraparlamentaria hija del 1968. A diferencia de la tendencia en otros países europeos, en donde la causa chilena constituyó un puente entre todas las almas de la izquierda, en Italia los comunistas la interpretaron como una fórmula para abrir un diálogo entre fuerzas democráticas, que excluyera a la derecha y a las izquierdas radicales. El fracaso de la UP obligaba a defenderse de la ofensiva de aquellos sectores que, no solo desde la derecha, sino que incluso desde la izquierda, podían ver en ese desenlace la prueba de la inviabilidad de la misma «vía italiana al socialismo». En particular, grupos como *Lotta Continua* y diarios como *Il Manifesto*, avanzaron sus interpretaciones modelándolas en la lectura hecha por el MIR, y denunciaron, si bien con distintos matices, lo errado de la estrategia pacífica y consensuada seguida por el gobierno de Allende y la conducta moderada del PC chileno^[35]. Críticas que en el contexto italiano

se extendieron a la estrategia de alianzas que el PCI estaba indicando. Por ejemplo, Rossana Rossanda, una de las principales figuras del grupo reunido entorno a la revista *Il Manifesto*, expulsado del PCI en 1969 por sus posiciones radicalizadas, escribía que Chile exponía «muchas pseudoverdades» difundidas por los partidos comunistas, en función de «la confirmación de la necesidad de dialogar con la DC y las capas medias, considerados potenciales aliados en un ideal programa de unidad nacional»^[36]. *Lotta Continua* por su parte, veía en el golpe «el fin de las ilusiones revisionistas, incluso y sobre todo en Italia, donde con más obstinación y más cinismo la vía chilena ha sido usada para encubrir la búsqueda de una alianza con la DC»^[37].

El PCI dedicó muchas energías a responder a estas posiciones en la prensa partidista. *Rinascita* denunció al «sectarismo» presente en estas posiciones, las que traslucían «ilusiones propias» de esos grupos, «proyectadas hacia Chile» y en que existía la voluntad de alimentar «una polémica de facción contra el Partito comunista italiano»^[38]. Al mismo tiempo el partido buscó operar para marginar a estos grupos de las actividades solidarias, procurando que no fueran involucrados en la convocatoria de varias iniciativas o preocupándose de neutralizar los efectos de su eventual participación^[39].

34.- Uno de sus más prestigiosos exponentes, Bernardo Leighton, fue invitado a viajar a Roma para dar su testimonio y, después que la dictadura le prohibió regresar a Chile, se quedó en exilio forzado en la capital italiana donde será el blanco de un atentado orquestado por la DINA con la colaboración de grupos neofascistas italianos. Ver Patricia Mayorga, *El cóndor negro. El atentado a Bernardo Leighton*, Santiago de Chile, El Mercurio Aguilar, 2003.

35.- Alessandro Guida, *La lezione del Cile. Da Unidad Popolare al golpe del 1973 nella stampa italiana di sinistra*, Napoli, UNIOR, 2015, pp. 183-189.

36.- Rossana Rossanda, «Che fare per il Cile e che cosa imparare», en *Il Cile: saggi-documenti-interviste*, Roma, Il Manifesto, 1973, pp. 9-14.

37.- «La borghesia non rinuncerà mai pacificamente alla propria dittatura», *Lotta Continua*, 12 settembre 1973, p. 1. Citado en A. Guida, *La lezione del Cile*, p. 188.

38.- «Settarismo di ritorno», *Rinascita*, 19 ottobre 1973, p. 6.

39.- Ver al respecto Alessandro Santoni, «El Partido comunista italiano y el otro «compromesso storico»: los significados políticos de la solidaridad con Chile (1973-1977)», *Historia*, 43, vol. II (2010), pp. 532-539.

La convergencia entre el laborismo y las otras izquierdas británicas en torno a la causa chilena

En el caso de países con hegemonía socialdemócrata en el espacio de la izquierda, la recepción del caso chileno plantea ciertas distancias con los casos mencionados. El sistema político de estos países difería altamente del chileno, y no permitía una discusión que se basara en las asociaciones directas en términos de alianzas y estrategias que se daban en Italia y Francia. Por lo general Chile sirvió de causa para relanzar las credenciales de izquierdas y tercermundistas de los partidos, fortaleciendo su hegemonía en el ámbito de la izquierda local. Optamos acá por analizar el caso británico, aunque nos reservaremos algunas consideraciones respecto de otros casos al final del apartado. El contexto nacional escogido tiene especial interés, porque permite visualizar, proyectados en la causa chilena, a los dilemas de un socialismo que estaba atravesado por opciones y sensibilidades distintas, que dividían a reformistas y a socialistas «puros»: esto en el mismo país que iba a ser el teatro central de la crisis del modelo keynesiano y de la ofensiva neoliberal, encarnada por el thatcherismo. También este caso tiene interés para mostrarnos de manera significativa la lógica de convergencia unitaria que la causa chilena impulsó entre distintas alas de la izquierda, puesto que se dio en torno a la solidaridad con Chile una instancia de colaboración entre laboristas y grupos minoritarios de la izquierda británica, comunistas y «nueva izquierda».

Cabe considerar que la hegemonía del Partido Laborista en el mundo sindical y el escaso arrastre de opciones más radicales disminuyó la importancia de las voces de la izquierda extraparlamentaria. En este país la nueva izquierda y la rama del co-

munismo soviético, aun existiendo, no se constituyeron en un desafío concreto para el laborismo^[40]. La actitud de la nueva izquierda británica (NIB) hacia el laborismo siempre fue marcada por ambivalencia y los límites impuestos por la marginalidad de estos grupos. Como señala Davis, esta izquierda cuestionaba la factibilidad de que los partidos tradicionales fueran los encargados de amplificar las ideas y políticas socialistas, pero al mismo tiempo buscaba generar un viraje al interior del aparato, reconociendo la hegemonía del partido en la clase trabajadora^[41]. De los grupos que destacan en esta línea, cabe resaltar al International Marxist Group que surge de un desprendimiento tanto del comunismo británico como del laborismo y que, a pesar de una importancia limitada o casi nula en términos electorales, representaba a voces académicas y del mundo editorial de cierta importancia.

El Partido Comunista Británico, también relegado a los márgenes del movimiento obrero, tuvo alguna importancia desde los sindicatos en la década de 1940, pero la enorme merma de miembros luego de la invasión soviética a Hungría el año 1956, lo llevó a jugar un rol secundario en relación al laborismo. A pesar de contar con miembros de renombre intelectual, al igual que la nueva izquierda británica, el comunismo inglés se orientó más bien a buscar espacios dentro del área laborista para influir en su dirección.

Por otra parte, cabe señalar que la crisis de comienzo de los 1970, se experimentó

40.- Holger Nehring, «Great Britain», en Martin Klimke, Joachim Scharloth (eds.), *1968 in Europe: A History of Protest and Activism, 1956-1977*, New York-Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008, p. 128.

41.- Madeleine Davis, «Labourism and the New Left», en John Callaghan, Steven Fielding, Steve Ludlam (eds.), *Interpreting the Labour Party. Approaches to Labour politics and history*, Manchester, Manchester University Press, 2003, pp. 39-56.

con fuerza en Gran Bretaña teniendo ramificaciones en el mudo político, social y económico, acusando las primeras señales de agotamiento del consenso socialdemócrata, lo que a su vez impulsó una radicalización tanto dentro de la sociedad como al interior del movimiento laborista. Como ejemplo, en el Congreso del Partido en 1971, se aprobó un programa de mayor radicalidad en vista a las próximas elecciones, incluyendo un «plan socialista de producción, basado en la propiedad pública, con una compensación mínima a los mandos superiores de la economía» (que durante los gobiernos 1974-79 sin embargo tuvo poca incidencia)^[42]. De hecho, Tony Benn, líder de la izquierda al interior del laborismo, señaló que la crisis del sistema en 1970 le permitió al PL reencontrarse con su ideario socialista^[43].

En este contexto, las lecturas tanto de la experiencia de la UP, como de las causas del golpe militar fueron distintas, dependiendo de la versión al interior de la izquierda. Sin embargo, el rol del caso chileno al interior de la política contingente local tuvo un impacto menor que en los casos mencionados y si bien hubo divergencias en las lecciones extraídas del golpe, desde el laborismo tradicional se aprovechó el caso para apelar a la necesidad de la unidad. De este modo, fue el foco en la solidaridad con las víctimas de violaciones de derechos humanos a manos del régimen militar, lo que aunó voluntades y permitió homogeneizar la posición respecto a Chile. En primer lugar, el Partido Laborista condenó enérgicamente el golpe, denunciando las atrocidades del régimen militar. De hecho, el Comité Ejecutivo

Nacional del partido, realizado en octubre de 1973, declaró que el derrocamiento del gobierno de Allende era un fuerte golpe para aquellos que buscaban establecer el socialismo por medios democráticos. En el mismo documento se condenó la prisa con que el gobierno de Su Majestad reconoció al gobierno de facto en Chile. Finalmente se hacía un llamado a la solidaridad con el pueblo perseguido chileno, subrayando que la solidaridad con los chilenos es un aporte para todos quienes buscan el socialismo por medios democráticos^[44].

El grupo Tribune, representante de una versión más radical al interior del partido, controló la narrativa en torno al caso chileno. Uno de sus miembros, Eric Heffer, ya en 1972, había escrito una columna titulada *Chile's peaceful road to socialism*^[45], exponiendo los principales puntos del programa de la UP. En su columna, el parlamentario reforzaba el carácter democrático de la UP y subrayaba que la administración de Allende buscaba alcanzar la sociedad socialista vía democracia, por lo que era un deber de todos los socialistas de izquierda, apoyarlo. Heffer, terminaba su escrito expresando la confianza en que alguna vez su propio partido pudiese imitar el carácter de este programa, advirtiendo que la reacción vivida en Chile, también se podría experimentar en Gran Bretaña.

Judith Hart, representante de Tribune, miembro del parlamento y posterior ministra de desarrollo de ultramar en la administración de Wilson, ordenó los debates y cuestionamientos de la izquierda tradicional británica en una columna titulada *The*

42.- Colin Leys, *Politics in Britain. From Labourism to Thatcherism*, London, Verso, 1989, p.94.

43.- Tony Benn, «Se habla de la libertad en Polonia, pero se oprime en El Salvador. Entrevista por Raimundo Elgueta y Fernando Ruz», *Convergencia*, 5-6, (1981 -1982), pp. 3-10.

44.- Report of the Seventy Second annual conference of the Labour Party, «Emergency Resolution on Chile», 1-5 octubre 1973, Blackpool, p.298, The Labour Party Annual Report 1973, Labour History Archive and Study Centre (LHASC), People's History Museum (PHM), Manchester.

45.-Eric Heffer, «Chile's peaceful road to socialism», *Labour Monthly*, mayo, (1972), pp. 211-215.

echoes of Allende's death. En primer lugar, subrayaba el dilema que el golpe en Chile impuso a los socialistas demócratas del mundo sobre la factibilidad de la vía democrática para alcanzar el socialismo. Sin aventurar una solución, Hart ponía el foco entre las similitudes del caso chileno con la realidad británica. Al respecto, enumeraba ciertos criterios que evidenciaban una crítica directa a la contingencia política local haciendo uso del caso latinoamericano. En este sentido, denunciaba una derecha británica, dueña de la prensa, que prefería la represión violenta a tolerar el socialismo. Evidenciaba la existencia de una noción de respeto generalizado por la constitución y sistema parlamentario, que —como fue el caso chileno— bien podía ser autocomplaciente y desactualizado, así como la creencia de una supuesta neutralidad y lealtad de las fuerzas armadas al gobierno electo. En concreto ejemplifica cómo los intereses financieros británicos se aprestaron para sabotear el interés económico nacional durante el último gobierno laborista reformista.

En segundo lugar, Hart utilizando el caso chileno para interpelar a la izquierda local, especialmente en la antesala de un período electoral en Gran Bretaña, subrayaba que la única fórmula para enfrentar tanto a la derecha chilena como la derecha global es a través la cooperación al interior de la izquierda. El caso chileno, sostuvo Hart, ha unido casi a todas las tendencias de la izquierda europea incluyendo al Partido Comunista y la Internacional Socialista. El mensaje de la política laborista, en otras palabras, era que la única defensa para instalar programas socialistas por vía democrática era a través de la cooperación entre la clase trabajadora y la clase media^[46].

En este contexto, en las elecciones de

1974, el laborismo volvió al poder. La izquierda al laborismo desde 1974 presionó al gobierno de Wilson y luego al de Callaghan para tomar una política condenatoria a la dictadura chilena, contra la opinión del Foreign Office, del mundo de los negocios y de los conservadores. Una situación que conocerá un giro de 180 grados con la asunción de Thatcher cinco años más tarde.

Para el comunismo británico pro-soviético, la respuesta frente a las lecciones del caso chileno transitaba por una senda similar a la visión unitaria del laborismo. Jack Woddis, líder del Departamento Internacional del Partido Comunista Británico, en una columna titulada «Mitin para apoyar la democracia chilena»^[47], apelaba a todos los demócratas ingleses para exigir la liberación de los prisioneros y detener la represión, desmarcándose de las lógicas izquierda y derecha. Esta intención era parte de la temprana política de la Unión Soviética respecto al caso chileno de incentivar amplias alianzas antifascistas demócratas, buscando evocar las alianzas frentepopulistas y antifascistas de los 1940 europeos^[48]. Asimismo, Woddis, buscó usar el caso chileno para generar alianza con las capas medias de la sociedad británica en la necesidad de construir una fuerza más transversal para lograr las metas socialistas. Si se lograba democratizar el Estado y las fuerzas armadas, desde adentro, era posible evitar una reacción como la vista en Chile.

Con respecto a la izquierda radical, al igual que sus símiles europeos, la Nueva Izquierda Británica, interpretó el abrupto fin de la UP como una confirmación del peligro yacente en confiar en la democracia liberal para conseguir el socialismo. Emblemático fue el caso de Tariq Ali, la cara más visible

46.- Judith Hart, «The echoes of Allende's death», *The Guardian*, (September 19, 1973), p.21

47.- Jack Woddis «Rally to the support of Chilean democracy». Judith Hart Collection (JHC), LHASC, PHM, Sección 4. Del 4 al 9.

48.- K. Christiaens, *European reconfigurations*, pp. 413-448.



Acto en Trafalgar Square tras una manifestación de solidaridad con Chile, Londres, el 16 de septiembre de 1979 (Foto: Gillfoto, fuente: Wikimedia Commons).

de la Nueva Izquierda británica. Su crítica, plasmada en un artículo escrito el año 1977^[49], criticaba especialmente al Partido Comunista por no preparar a la clase trabajadora para un posible encuentro armado, acusándolo de reformista y colaboracionista, al aliarse con partidos burgueses y defender el camino democrático-burgués. Para Ali, los eventos en Chile reafirmaron las visiones esenciales desde el marxismo-leninismo sobre el Estado y sus aparatos, los que debían ser destruidos para pavimentar el poder de la clase trabajadora. Por lo mismo, Ali concluía que no había mayor novedad en las lecciones que se extraían del golpe en Chile. Sobre la campaña de solidaridad que tanto en Gran Bretaña como en Europa se había organizado, Ali denunciaba el carácter engañoso del llamado del co-

munismo británico (soviético) de «apoyar la democracia chilena». El llamado no debía ser restablecer una democracia «burguesa», puesto que el contexto general por el que se luchaba era el socialismo. En este sentido en consonancia de movimientos similares en el resto de Europa, se condenaron los llamados por parte del establishment de la izquierda troncal socialista y comunista para mantener los intereses del capital por sobre las necesidades del pueblo.

Independiente de las lecturas que el caso chileno generó para las distintas versiones de la izquierda en Gran Bretaña y su uso en la política local, lo que sin duda promovió un acuerdo, fue la organización de una campaña de solidaridad enfocada en denunciar las violaciones de los derechos humanos del régimen militar en Chile. De manera activa, el equipo administrativo de la Chilean Solidarity Campaign, buscó incluir entre sus miembros, representantes de las diversas versiones del movimiento obrero británico para asegurar la transversalidad

49.- Tariq Ali, «Lessons of the Coup». En Chile: Lessons of the Coup. Which way to workers

power? *International Marxist Group Pamphlet*, Red Pamphlet, 7, (1977), pp. 1-23.

de representación y concentrar la campaña en torno a la defensa de los derechos humanos. En una minuta de la reunión, el secretario explica la composición de la Campaña y nombra a todos a quienes se les ha hecho llegar invitación para ser parte del Comité Ejecutivo, buscando amplia representación política, incluso asociaciones no necesariamente de izquierda^[50]. De hecho, las minutas de las reuniones sostenidas desde el Comité ejecutivo dan cuenta del esfuerzo por mantener al margen las diferencias políticas, para enfocar la gestión y desarrollo de la solidaridad en el objetivo de los derechos humanos. Como escribimos en otra instancia, la campaña de la solidaridad, «permitió unir y dar sentido colectivo a está dividida y a veces contrapuesta izquierda, representando un caso excepcional en el escenario de Europa occidental»^[51].

El caso británico por supuesto no es totalmente representativo de todo el universo de los países con fuerte partido socialdemócrata/laborista. Por supuesto había muchos matices y diferencias según el país^[52]. Un caso que alberga muchas simili-

tudes con Gran Bretaña es el de los Países Bajos, al presentar un partido obrero que logró incluir al interior de su organización algunos de los temas de la agenda de los movimientos juveniles de fines de los años 1960. Como resultado, en las elecciones de mayo de 1973, el Partido del Trabajo (PvdA) logró obtener la mayoría para formar gobierno con un enfoque más inclinado hacia la izquierda, especialmente en temas de política exterior. Específicamente en relación con el caso conosureño, los líderes de relevancia del partido como el primer ministro Joop Den Uyl y quien sería su ministro de cooperación al desarrollo, Jan Pronk, habían tenido un contacto estrecho con el gobierno de la Unidad Popular. En tanto miembros del parlamento neerlandés, habían viajado a Santiago a la reunión de la UNCTAD III en 1972, sosteniendo reuniones claves con personalidades de la admi-

VII (2007), pp. 65-85. Otra realidad presenta la reacción del partido socialdemócrata alemán (SPD) partido que ya había cortado, en el congreso de Bad Godesberg de 1959, todo vínculo con la «meta final», gobernando en una línea de sustancial convergencia hacia el centro. Si bien después del golpe, la SPD manifestó su solidaridad con la izquierda chilena, desde una posición de gobierno procuró mantener una línea pragmática en las relaciones diplomáticas y comerciales con Chile. La balanza buscaba, por un lado, no dar municiones a sus opositores de la CDU respaldando a radicales latinoamericanos, y por otro mantener cerca de la socialdemocracia a los electores jóvenes de izquierda que se habían adherido al partido a partir de 1966 y que habían sido cruciales para la victoria de Willy Brandt en 1969. Ver Felix Jiménez Botta, «The Foreign Policy of State Terrorism: West Germany, the Military Juntas in Chile and Argentina and the Latin American Refugee Crisis of the 1970s», *Contemporary European History*, 27(4), (2018), pp. 627-650. El caso alemán es particular, además porque se incorporaba el delicado equilibrio que la República Federal Alemana buscaba mantener con la República Democrática Alemana, quien desde la cúpula de gobierno había apoyado abiertamente al socialismo chileno, siendo incluso la STASI quien rescatara al polémico líder del socialismo chileno, Carlos Altamirano de la represión del régimen militar. Respecto a la situación de los dos partidos socialdemócratas, el sueco y el alemán, en esta época ver D. Sasson, *Cien años de socialismo*, pp. 526-534 y pp. 554-574.

50.- Chile Solidarity Campaign, Executive Committee, «Minutes of the meeting» 31 de mayo 1974. Chilean Solidarity Campaign (CSC). Box 1. Folder 1 al 11, PHM.

51.- Mariana Perry, «El poder de la solidaridad con Chile. La izquierda británica frente al golpe de Estado, 1973-1979», *Revista Secuencia*, 108 (2020), p. 1.

52.- En Suecia, el enérgico e incondicional compromiso de la socialdemocracia sueca (SAP) con la causa chilena fue la expresión de un proyecto político de estado social avanzado y de una opción de política exterior que favorecía un acercamiento a la causa tercermundista en el contexto de un país que mantenía una política neutral y no estaba integrado a la OTAN. Por otra parte, el apoyo hacia la causa democrática chilena se enmarcó en una activa política partidista pero no generó el mismo nivel de especificidad en los cuestionamientos locales como en los casos analizados. Fernando Camacho Padilla, «El movimiento de solidaridad sueco con Chile durante la Guerra Fría», en T. Harmer y A. Riquelme (eds.), *Chile y la guerra fría global*, pp. 225-255; Fernando Camacho Padilla, «Las relaciones entre Chile y Suecia durante el primer gobierno de Olof Palme, 1969-1976», *Iberoamericana*, 25,

nistración chilena y en tanto miembros de la Internacional Socialista viajaron en marzo de 1973 para apoyar al Partido Radical chileno y a la coalición en el marco de las elecciones municipales de marzo de 1973.

En este escenario, y a diferencia de los casos mencionados, el apoyo a la causa democrática chilena no generó grandes debates teóricos ni prácticos en la izquierda de los Países Bajos. Existió tempranamente una interpretación homogénea en donde la izquierda democrática de Salvador Allende había sido cruelmente derrotada por el golpe fascista de Pinochet, por lo que la energía a nivel estatal se concentró en la solidaridad en torno a la defensa de los derechos humanos. De hecho, a raíz del caso chileno, se consideró el tema de derechos humanos como un elemento válido para intervenir en política interna, rompiendo una larga tradición en la política exterior de los Países Bajos.

Conclusiones

La elección vía democrática liberal del primer presidente declarado marxista despertó la atención y la solidaridad de los partidos socialistas y comunistas europeos que, desde la inmediata posguerra, estaban jugando un papel protagónico en la vida política de prácticamente todos los países del viejo continente. El hito abrió un profundo debate en torno a las lecciones que el proceso chileno podía ofrecer, un debate al cual la brutalidad del golpe y su difusión internacional dieron aún más urgencia, concentrando una inusitada atención en comparación con casos similares de América Latina. Dicha atención, además, se complementó con una masiva llegada de exiliados políticos chilenos a suelo europeo que trabajaron por sostener la atención sobre las diversas violaciones a los derechos humanos por parte del régimen en Chile.

A raíz de tanto interés despertado por la causa chilena como de la flexibilidad del caso chileno, que permitía la extracción de variadas y a veces contrapuestas lecciones, podemos encontrar características comunes y nudos problemáticos recurrentes que se relacionan directamente con la que era una fase de redefinición político-programática de la familia de izquierda a nivel internacional. Por supuesto existía la perspectiva de construir una sociedad socialista en democracia. Perspectiva en que se podían aún reconocer aquellos sectores del socialismo que, lejos de plantear una renovación de corte reformista, impulsaban en ese momento un giro a la izquierda. Y en que confluía también la elaboración de los principales partidos comunistas occidentales, en un camino que arrancando del giro de 1956 lo iba a conducir hacia el eurocomunismo, pasando por las ilusiones fallidas de los experimentos checoslovaco y chileno.

El éxito de la UP, además, contrabalanzaba a la nueva izquierda y a la izquierda radical, permitiendo revertir en favor propio la tendencia tercermundista y antimperialista que éstas mismas habían impulsado en los años anteriores. El fracaso del gobierno Allende ponía por ende a los partidos tradicionales en la necesidad de defender su estrategia electoral y gradualista de la ofensiva de estos grupos en referencia a las vías para alcanzar el socialismo.

También a menudo las campañas de solidaridad gestadas en suelo europeo se prestaron como instancia para consolidar el llamado a una mística antifascista y de unidad de las fuerzas democráticas. Unidad que, a su vez, asumió caracteres distintos según los significados políticos que en cada contexto se le atribuyó a la lección recibida del fracaso de la UP, en función de intereses y perspectivas políticas de los distintos actores locales.

Por lo que concierne a las especificidades locales, en Francia y Gran Bretaña el tema chileno permitió ensalzar las credenciales de izquierda de los partidos tradicionales. En otros países como Italia (y España), la interpretación fue más bien defensiva, e implicó refrendar la necesidad de una apertura a la colaboración con otros sectores políticos democráticos, no solo de izquierda, con fines de preservación o recuperación democrática.

Como corolario de lo anterior, la relación que se estableció entre «viejas» y «nuevas» izquierdas fue compleja, más allá de sus diferencias en torno a la lección que venía de Chile respecto a la posibilidad de perseguir al socialismo por medios legales. Si en algunos contextos, como Gran Bretaña, la solidaridad creó una instancia para la búsqueda de acciones comunes entre laboristas y NIB, en otros casos, como Italia, se dio incluso el intento —de parte comunista— de excluir a los grupos extraparlamentarios de la solidaridad. La unidad, por otra parte, se mantenía supeditada a la narrativa de derechos humanos —la «última utopía», al decir de Samuel Moyn— que comenzó a posicionarse como discurso homogeneizador^[53]. Considerando también que in-

troduce el tema de los derechos humanos como un eje central en los programas de toda fuerza progresista, Chile debe ser visto como uno de los momentos definitorios, emblemáticos, en el camino de la izquierda del siglo XX.

Para concluir, podría esbozarse una respuesta a la pregunta por el impacto y significado que la vía chilena y su fracaso habrían tenido para la izquierda europea. En realidad, es difícil plantear en qué medida hubiese habido algún tipo de influencia, a nivel teórico e ideológico. Lo que hubo fue más bien una dinámica compleja y recíproca de interrelación. En los años 1970-73, por lo general Chile fue un mito/recurso simbólico funcional a políticas propias —abordado con distintos niveles de conocimiento y objetividad— que, sin embargo, en algunos casos sirvió para comparar, refrendar, diferenciar y, finalmente, definir aspectos relevantes de esas políticas, relativas a las alianzas y a los límites de acción que era preciso atenerse. Y estas reflexiones, cabe agregar, contribuyeron a su vez a la dinámica de interrelación mencionada, constituyéndose en elementos de reflexión para el proceso de renovación de la izquierda chilena posterior al golpe.

53.- Samuel Moyn, *The last utopia: Human rights in history*, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 2012.

La «relación civil-militar». Un balance provisional

The «military-civil relationship». A provisional balance

Pablo Seguel Gutiérrez

Universidad de Santiago de Chile / ANID

Resumen

Este artículo examina la evolución de la «relación civil-militar» en Chile a lo largo de cinco décadas desde el golpe de Estado de 1973. El análisis se enfoca en la compleja dinámica entre el poder civil y militar en la vida política y social del país, considerando los cambios significativos en el contexto histórico y las transformaciones en las instituciones militares y civiles. Se ofrece un balance provisional de este proceso, destacando los hitos clave, desafíos y logros en la consolidación de una democracia estable en Chile, identificando en la falta de rendición de cuentas en derechos humanos y transparencia los principales desafíos.

Palabras clave: Fuerzas Armadas, golpe de Estado, Derechos Humanos, relación civil-militar.

Abstract

This article examines the evolution of the «civil-military relationship» in Chile over the five decades since the 1973 coup d'état. The analysis focuses on the complex dynamics between civilian and military power in the country's political and social life, considering significant changes in the historical context and transformations in military and civilian institutions. A provisional balance of this process is offered, highlighting the key milestones, challenges and achievements in the consolidation of a stable democracy in Chile, identifying the lack of accountability in human rights and transparency as the main challenges.

Keywords: Armed Forces, coup d'état, Human Rights, civil-military relationship.

Introducción

«El Ejército constituye una verdadera síntesis de la Nación y, en consecuencia, le corresponde, por ley moral, impedir la destrucción del ser nacional [...] La nueva institucionalidad requiere de Fuerzas Armadas conscientes de sus responsabilidades políticas, las que deben ir orientadas a la gran política, entendida esta como la natural preocupación por alcanzar el bien común, dentro de los valores propios de la chilenidad».

Augusto Pinochet^[1]

El estudio de la «relación civil militar» constituye uno de los elementos principales de los Estados y democracias contemporáneas. Se trata, como indicó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 2012 en su informe *Gobernabilidad democrática de la defensa en Chile*, de un elemento central para poder evaluar la calidad de la democracia chilena en consideración a las profundas transformaciones, institucionales, políticas, económicas y culturales llevadas adelante en el país durante el periodo que gobernó la dictadura militar (1973-1990)^[2]. Desde una primera impresión, los militares tienen una incidencia gravitante en los dos procesos que marcan la entrada y término del régimen: el golpe de Estado y la transición democrática. A pesar de aquello, retrospectivamente en los balances de las ciencias sociales y la historiografía, a excepción de la ciencia política, constituyen un factor puesto en segundo plano al momento de evaluar las causas y factores del quiebre de la democracia y del proceso de la transición y consolidación de-

1.- Discurso dado el 23 de agosto de 1988.

2.- Ángel Flisfisch y Marcos Robledo, *Gobernabilidad Democrática de la Defensa en Chile. Un índice para el periodo 1990-201*, Santiago de Chile, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2012.

mocrática, siendo abordados muchas veces como dos acontecimientos específicos y no como un ámbito de la realidad social estratégico para comprender las transformaciones institucionales del Estado, la sociedad y la política en los últimos cincuenta años^[3].

La manera en cómo se ha abordado clásicamente la relación del uso legítimo de la violencia y la formación de los consensos en el Estado se ha efectuado diferenciándolas funcionalmente en instituciones y actores específicos. La formación de los consensos sobre la dominación legítima sería obra de las instituciones de los sistemas políticos y sus actores (los civiles) y el uso de la violencia de las burocracias de la defensa (los militares). De lo anterior se ha construido por la ciencia política un modelo que escruta este vínculo a partir de la categoría de la «relación civil militar», que busca identificar las claves de la relación entre los militares y los civiles en los Estados contemporáneos y su gobernabilidad en contextos democráticos^[4].

En el caso chileno, desde la década de 1980 una serie de trabajos han venido colocando la atención sobre este aspecto, generando investigaciones sistemáticas sobre la relación de los militares con la política a través de la utilización de la categoría de observación «relación civil-militar». Desde los primeros trabajos de Augusto Varas, Felipe Agüero y Genaro Arriagada, el foco de la investigación se colocó en los procesos de integración de los militares a través de la profesionalización militar, su desarrollo doctrinario y la definición de la política nacional de defensa^[5].

3.- Este diagnóstico fue identificado hace unos años por la historiadora Verónica Valdívía, «Gritos, susurros y silencios dictatoriales. La historiografía chilena y la dictadura pinochetista», *Tempo & Argumento*, vol. 10, 23 (2018), pp. 167-203.

4.- Martin Dempsey, «Civil-Military Relations: What Does It Mean?», *Strategic Studies Quarterly*, 15, 2 (2017), pp. 6-11.

5.- Augusto Varas y Felipe Agüero, *El proyecto político militar*, Santiago de Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 1984; Augusto Varas, *Los militares*



José Tohá, Augusto Pinochet y Salvador Allende en un acto público en 1971 (Fuente: Biblioteca Virtual Salvador Allende).

Un trabajo pionero de Augusto Varas escrito en 1979, titulado «Ideología y doctrina de las Fuerzas Armadas chilenas: un ensayo de interpretación»^[6], enfatizó esta relación a través del concepto «modelos de relación cívico-militares», identificando para el siglo XX tres modelos de integración de los militares en la sociedad y la política: el integracionista (de comienzos del siglo XX hasta 1931), uno de segregación política (1931-1973) y un modelo de «poder seguridad» de segregación técnico profesional (de

1973 en adelante): «la escasa capacidad hegemónica, el necesario énfasis en funciones profesionales y la sobreidentificación entre las orientaciones institucionales y gubernamentales, lleva a las instituciones de la defensa nacional a una nueva forma de segregación cívico-militar»^[7]. En otras palabras, ya hacia finales de la década de 1970, Augusto Varas señaló que bajo la influencia doctrinaria de la seguridad nacional, la integración y el desplazamiento de los civiles por los militares en las labores de la definición de los objetivos políticos nacionales, el desarrollo de su estrategia de desarrollo y en la gestión gubernamental generaría en la práctica una tendencia en la que los militares se autoperibirían como lo actores claves del desarrollo de la políti-

6.- A. Varas y F. Agüero. *El proyecto político militar*, pp. I- XLVII. en el poder. Régimen y gobierno militar en Chile, 1973-1986, Santiago de Chile, FLACSO, 1987, pp. I-XLVII; Genaro Arriagada, *La política militar de Pinochet, 1973-1985*, Santiago de Chile, Salesianos Impresores, 1985 y *El pensamiento político de los militares*, Santiago de Chile, Centro de Investigaciones de la Compañía de Jesús en Chile (CISEC), 1981.

7.- A. Varas y F. Agüero. *El proyecto político militar*, p. XLV.

ca estatal y que ese mismo proceso generaría distancias con la sociedad civil.

Hacia el término de la dictadura militar, el mayor general Hugo Salas Wenzel, jefe del Estado Mayor General del Ejército, difundía un libro restringido al personal de la institución y escrito por el coronel Carlos Molina Johnson. El motivo fue mostrar a los miembros de la institución un trabajo que presentaba «una acertada descripción de la presencia militar en el desarrollo histórico de la vida pública chilena, y [que] abarca desde su génesis política como nación hasta la gesta heroica que significó la participación de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para asumir la conducción del país ante la situación de caos generalizado que se vivía en 1973»^[8]. Los militares a la salida de la dictadura tenían plena conciencia que su rol durante la dictadura fue efectuar una «revolución eminentemente fundacional» tomando como base el «protagonismo político de los cuerpos armados»^[9]. Cincuenta años después del golpe de Estado, el entonces comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez Menentau difundió un documento institucional del Ejército en el que efectuó un balance en un sentido totalmente contrario a lo esbozado por la misma institución al término de la dictadura. En este pronunciamiento institucional, reconoció que la institución durante el contexto de la Guerra Fría, en tanto parte de la sociedad, fue influida por este contexto, involucrándose en actuaciones políticas de las más diversas índoles, volviéndose protagonistas de hechos que generaron gran impacto en la sociedad^[10]. Al respecto,

8.- Carlos Molina, *Chile: los militares y la política*, Santiago de Chile, Estado Mayor General del Ejército [Edición especial restringida para personal del Ejército de Chile], 1989, p. 13.

9.- C. Molina, *Chile: los militares y la política*, p. 26.

10.- Ricardo Martínez Menentau, *Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50*

señaló explícitamente que en «el desarrollo histórico de Chile, las Fuerzas Armadas y el Ejército principalmente y sus autoridades, mantuvieron un involucramiento político derivado de vacíos de poder, caudillismos y los roles latentes que le otorgó la propia sociedad, como una manera de superar eventos críticos»^[11].

Cincuenta años transcurrieron entre ambos hitos y diversos aspectos de la «relación civil-militar» se modificaron, pasando desde un protagonismo refundación, a un tutelaje supra institucional consagrado constitucionalmente, hasta llegar a una redefinición socioprofesional en ámbitos de la defensa nacional. Pese a lo anterior, las ciencias sociales y las humanidades —a excepción de la ciencia política y la sociología— no ha tenido una atención especial sobre esta problemática, salvo algunas excepciones^[12]. En el siguiente trabajo, a partir de una reflexión teórica del concepto «relación civil-militar» efectuó una revisión de la principal producción que ha abordado este vínculo, apuntando a algunas causas que han dificultado la necesidad de la integración de lo militar en lo político desde el retorno a la democracia a la actualidad, identificando en la rendición de cuentas en materia de derechos humanos uno de los principales puntos que, desde un enfoque agencial y estructural, ha dificultado la integración de una «relación civil-militar» por resistencias, precisa-

años y sus efectos en el ethos militar. Informe final, Santiago de Chile, Ejército de Chile, marzo de 2022, p. 5.

11.- R. Martínez, *Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército*, p. 18.

12.- V. Valdivia, «Gritos, susurros y silencios dictatoriales», pp. 167-203; Cristian Gutiérrez, *La contrasubversión como política: La doctrina de guerra revolucionaria francesa y su impacto en las FF.AA. de Chile y Argentina*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2013 y Pablo Seguel, *Soldados de la Represión. Anticomunismo, contrasubversión y seguridad nacional en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2022.

mente, políticas. Transcurridos cincuenta años del golpe de Estado, el trabajo de recomposición del vínculo civil-militar para el desarrollo de una gobernabilidad democrática con legitimidad ciudadana tiene en materia de deuda de derechos humanos un elemento central.

Revisitar teóricamente la noción de «relación civil-militar» desde una aproximación agencial y estructural

«The best indicator of the state of civilian control is who prevails when civilian and military preference diverge».

Michael Desch^[13]

El concepto de «relación civil-militar» constituye un elemento de análisis que pasó desde la formulación académica de la ciencia política con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, a integrarse como parte de la grilla de análisis de la realidad por los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas y constituirse en uno de los indicadores de observación de la calidad de la gobernabilidad de la defensa por parte de los sistemas democráticos contemporáneos. Teóricamente la «relación civil-militar» se funda en un problema pragmático de todos los Estados: «Como tenemos miedo de los otros creamos instituciones que monopolizan el uso de la violencia legítima para protegernos, pero estas se constituyen a su vez en una amenaza para nosotros»^[14]. Esto fundará una paradoja y desafíos del control civil sobre la defensa «el crear una institución con suficiente poder para contener

amenazas externas pero lo suficientemente obediente para no constituirse en una amenaza interna»^[15].

Este debate surgió a nivel teórico con los trabajos de Laswell, Janowitz y Huntington. Al inicio de la II Guerra Mundial, Laswell hipotetizó con la formación de un «Estado de guarnición» producto del desarrollo del «complejo industrial-militar» y el surgimiento de Estados autoritarios gobernados por sistemas de partidos únicos^[16]. La centralidad política y económica dada a la guerra, así como la creciente tecnificación de los medios tecnológicos de su conducción y desarrollo mostrarían una tendencia hacia el posicionamiento de los militares como una nueva elite gobernante. En las claves de este análisis, serían la dirección y el ejercicio profesional de la guerra la variable que redefiniría la relación de lo militar con lo civil.

Esta doble relación entre lo civil y lo militar será teorizada con mayor desarrollo por Huntington en base a una división funcional del trabajo entre líderes políticos civiles y un profesionalismo militar apolítico^[17]. Esto permitiría la formación de un sistema de relaciones civiles-militares que se maximiza bajo la consecución de objetivos de seguridad nacional. De esta forma, el control de los civiles sobre los militares se estructura en una doble dimensión: a nivel subjetivo, intenta desdibujar los límites entre los roles civiles y militares, haciendo de los militares una extensión política de los líderes civiles. Objetivamente, el control se basa en la distinción y autonomía de ambas instituciones, garantizándole a los milita-

13.- Michael Desch, *Civilian Control of the Military. The Changing Security Environment*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, p. 4.

14.- Peter Feaver, «The Civil-Military Problematique: Huntington, Janowitz, and the Question of Civilian Control», *Armed Forces & Society*, 23 (1996), p. 154.

15.- Jeffrey Dannithoner, *Air Force Culture and Civil-Military Relations*, Alabama, Air University Press, 2013, p. 11.

16.- Harold Laswell, «The Garrison State», *American Chicago Journal of Sociology*, vol. 46, 4 (1941), pp. 455-468.

17.- Samuel Huntington, *The soldier and the State*, Cambridge, Massachusetts, London, England, The Berknap Press of Harvard University Press, 2000 [1957].

res el desarrollo autónomo de los objetivos que se les encomiende. Es decir, para Huntington el control objetivo maximiza la ética profesional de los militares y delimita sus respectivos dominios de acción. En la clave interpretativa de Huntington la profesionalización es una variable autónoma, que en su desarrollo propende a generar subordinación militar en la medida que permite la institucionalización de una doctrina, una ética y una institucionalidad que prescriba la diferenciación. No obstante, como muestra el trabajo de Janowitz el desarrollo del profesionalismo militar no necesariamente conlleva una subordinación ni asegura un control civil sobre estos, por cuanto la profesionalización al constituirse en un completo modo de ocupación tiende a construir un ámbito de socialización y reproducción social que tiende a autonomizarse^[18]. A pesar de aquello, la visión de la «relación civil-militar» en Janowitz se funda en una doble concepción ideal de los civiles y los militares: «Los oficiales desempeñan su labor profesional y están dispuestos al control civil porque los civiles aprecian y comprenden las tareas y responsabilidades de los militares»^[19].

En crítica con esta concepción normativa, Desch en la década de 1990 introdujo una aproximación interaccional tomando en consideración variables y escenarios internos y externos de seguridad. Así, para este la «relación civil-militar» estará sobre todo estructurada a partir de las mutuas percepciones de amenazas al interior de la relación, pero también en el escenario nacional e internacional. Como indica el autor, la mayoría de las aproximaciones a la discusión sobre la relación civil-militar colocan el foco en las influencias domésticas,

así como los atributos de los líderes civiles y militares, la estructura de normas que rigen a la defensa, las instituciones de los gobiernos civiles y la naturaleza de la sociedad; pero ponen, en un segundo lugar las amenazas de los entornos nacionales y la manera en cómo los individuos y las instituciones las encuadran simbólicamente^[20].

Sobre esta concepción, Feaver desarrollará un modelo agencial basado en la teoría de la acción racional, que introduce una aproximación dinámica a la consideración de la «relación civil-militar» en base a una consideración de jerarquía estratégica entre los agentes principales, tanto civiles como militares^[21]. La primera decisión corresponde a los civiles, respecto a quiénes y cómo monitorear a los militares. La segunda es si los militares deciden colaborar activamente o no con el trabajo de la elaboración política. La tercera, si es que los militares consideran convergentes o divergentes la percepción de control, es la rendición de cuentas a colaborar activamente o no. Si es que los militares deciden colaborar o no, los civiles adoptan o no medidas de rendición de cuentas hacia la actitud de los militares. Esta aproximación, además es dinámica, por cuanto considera —en palabra de Dannithorne— cómo los contextos externos se enmarcan con las decisiones de los civiles para monitorear las militares y cómo estos perciben los costos de estas decisiones^[22].

Desde la perspectiva que se plantea este artículo, la incorporación de un enfoque agencial debe incorporarse en un marco

18.- Morris Janowitz, *The professional Soldier. A social and Political Portrait*, New York, The Free Press, 1964 [1960].

19.- M. Janowitz, *The Professional Soldier*, p. 440.

20.- Michael Desch, *Civilian Control of the Military. The Changing Security Environment*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1990.

21.- Peter Feaver, *Armed Servants. Agency, Oversight, and Civil-Military Relations*, Cambridge, Massachusetts, and London, Harvard University Press, 2005.

22.- J. Dannithorne, *Air Force Culture and Civil-Military Relations*.

institucional y organizacional, por cuanto la relación coyuntural que a nivel temporal capta la interacción a nivel de los agentes, debe «incrustarse» (embeddedness) en las instituciones que configuran una relación social a nivel cultural. Este factor es importante de destacar, porque las revisiones que los principales estudios que se han realizado durante el siglo XXI sobre las «relación civil-militar» en las Fuerzas Armadas en Chile, o se centran puramente en lo agencial colocando el énfasis sobre un determinado actor militar^[23] o civil^[24], o de plano atienden a dimensiones institucionales en desmedro de la consideración de aspectos claves de lo coyuntural.

En su informe del PNUD del 2012, Flisfisch y Robledo abordaron este debate proponiendo la estructuración de un índice que toma sobre todo aspectos institucionales, organizacionales y normativos para la observación de la gobernabilidad de la defensa proponiendo una matriz que toma cada una de estas dimensiones^[25]. Dicha matriz es de utilidad para la observación de una tendencia general, no obstante, coloca en segundo lugar el foco de la observación en los aspectos agenciales. Para una lectura panorámica del periodo, basándome en dicho enfoque, propongo la integración de una variable agencia que permita entender que las acciones de los actores de la «relación civil-militar» están estructuradas por la rendición de cuentas, la colaboración y/o el conflicto de acuerdo con la propuesta de Desch (ver Tabla 1).

23.– José Miguel Piuze, *Fuerzas Armadas y Sociedad. Efectos de los cambios socioculturales y de los nuevos escenarios en la singularidad de lo militar*, Santiago de Chile, Historia Chilena, 2021.

24.– José Rodríguez. *Historia de la relación civil-militar en Chile*, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2018.

25.– A. Flisfisch y M. Robledo, *Gobernabilidad Democrática de la Defensa en Chile*.

Es decir, más que solo el hecho de registrar la existencia o no de cada uno de estos indicadores se torna necesario contar el cómo y el por qué se llega a estructurar un modelo de «relación civil-militar» acorde a los desafíos democráticos del país. Es decir, las dimensiones C, G, y M interaccionan entre sí, motivo por el que ni el profesionalismo militar ni la mera existencia de instituciones de control civil son variables independientes de la gobernabilidad democrática de la relación civil-militar, sino que es una configuración histórica y políticamente influencia. Los actores militares son actores políticos y comprenderlos como tal es una condición de entrada del análisis político del Estado y la democracia.

El debate de la «relación civil-militar» en Chile

La propuesta interaccional constituye una aproximación clave para poder evaluar el desarrollo histórico de la «relación civil-militar» en nuestro país, sobre todo tomando en consideración el hecho de que la mayoría de los trabajos sobre esta temática no incorporan una aproximación dinámica a la forma en cómo se estructura este vínculo. Lo anterior no deja de ser un elemento importante para tener en consideración, ya que transcurridos cincuenta años del golpe de Estado en Chile, la participación militar en política a través del golpe de Estado y la dictadura militar constituyen una problemática transversal que proyecta su legado en diversos ámbitos de nuestra sociedad^[26].

En las décadas de 1960-70, el problema de los militares en el sistema político chileno no se constituyó en un tema que acaparara la atención de la investigación académica salvo algunas excepciones que

26.– Julio Pinto (Ed.), *Las largas sombras de la dictadura: a 30 años del plebiscito*, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2019.

Tabla 1: Modelo de gobernabilidad democrática de la «relación civil-militar»

Dimensión	Variable	Indicador observable
Instituciones de control civil / ausencia o presencia de prerrogativas militares —C—	Instituciones de control	1. Constitucionales
		2. Legales
		3. Judiciales
		4. Legislativas
		5. Auditorías independientes
		6. Normas de transparencia
		7. Ministerio de defensa
		8. Instituciones de formación profesional
Eficacia gestión institucional y políticas de Gobierno —G—	Instituciones de Ejecución / cadena de mando	9. Documentos programáticos de estrategia nacional
		10. Políticas de DDHH
		11. Política de defensa
		12. Política militar
	Existencia de estrategias militares nacionales definidas democráticamente y consistentes con las políticas públicas.	13. Planificación estratégica conjunta
		14. Existencia de estrategias de desarrollo institucionales de las ff. aa. Consistentes con políticas públicas y planificación conjunta
Eficiencia: Gestión institucional y políticas de Gobierno —E—	Asignación presupuestaria coherente con políticas y planes.	16. Asignación presupuestaria coherente con políticas y planes.
	Modernización de la gestión de recursos.	17. Modernización de la gestión de recursos
	Transparencia y accountability sobre la gestión de los recursos	18. Transparencia y accountability sobre la gestión de los recursos
Conducta militar —M—	Subordinación	19. Actos de subordinación
	Insubordinación	20. Actos de insubordinación
	Ética	21. Ética militar
	Cultura	22. Cultura organizacional

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de Flisfisch y Robledo.

lo efectuaron de manera comparativa en el contexto latinoamericano^[27]. Tanto el tra-

bajo de Liuwen, como el de Johnson y North toman como referencia central de su estudio la doble distinción de Huntington sobre variables objetivas y subjetivas, proponiendo a partir de aquello una lectura que centra en el éxito e institucionalización la variable fuerte para explicar la tendencia a la politización de las Fuerzas Armadas. Uno

27.- Edwin Lieuwen, *Arms and Politics in Latin America*, New York, Council of Foreign Relation, 1960; John J. Johnson, *Military and Society in Latin America*, Stanford, California, Stanford University Press, 1964 y Lisa North, *Civil military relations in Argentina, Chile*, California, Institute of International Studies, University of California, 1966.

de los primeros trabajos monográficos sobre el Ejército chileno fue realizado por Roy Hanson, efectuando un diagnóstico organizacional y cultural de sus oficiales^[28]. En crítica con esos trabajos, el ensayo de José Nun introdujo a partir de la identificación de cuatro momentos de transformaciones de la «relación civil-militar» —organizacional, institucional, tecnológica y estratégica— las variables socioeconómicas. Así destacó que la «aparente neutralidad política» de las Fuerzas Armadas chilenas en la participación política a través de golpes de Estado se debía a la alta incidencia de las clases medias en su cuerpo de oficiales, la debilidad de las fuerzas oligárquicas y la incorporación social de diversos grupos por el Estado y el sistema político^[29].

Con posterioridad, fue la investigación de Alain Joxe la que profundizó en las variables determinantes de la participación política de las Fuerzas Armadas chilenas, a partir de lo que podemos denominar un interaccionismo intuitivo de la relación civil-militar. El principal aporte de Joxe fue que introdujo la consideración de las variables internas y externas al estudio de la relación civil-militar. Así afirmó que «la ayuda militar externa debe, evidentemente, ser examinada *al mismo tiempo* que el conjunto del sistema político *interno* del que forma parte, así como forman parte de la vida económica local las empresas extranjeras o aquellas que utilizan patentes extranjeras o funcionan bajo licencia»^[30].

Uno de los principales aportes del trabajo de Joxe fue que cuestionó desde la

investigación social, uno de los lugares comunes en boga de la época por parte de los líderes civiles y militares: el supuesto apoliticismo y subordinación civil de las Fuerzas armadas chilenas. Señalando en relación al Ejército, planteó: «Lejos de no haber intervenido nunca en los asuntos públicos, ha sido, por el contrario, el agente principal de la corporación del Estado que hoy subsiste, así como del régimen presidencial en provecho de las clases medias» [...], señalando, categóricamente que «la no intervención actual del Ejército como una participación latente y permanente en el juego político, y no como una simple abstención»^[31].

Tras el golpe de Estado de 1973, el foco sobre la participación política de las Fuerzas Armadas chilenas, atendiendo al vínculo de la «relación civil-militar» se constituyó en un elemento de contingencia. No obstante, al tomar a las FF.AA. chilenas como un actor apolítico, constitucionalista y subordinado al poder civil, las explicaciones de la intervención militar en el sistema político a través del golpe de Estado tendieron a identificar variables externas como determinantes de su acción. Por ello, la interpretación del golpe como un epifenómeno de la influencia extranjera en el contexto de la Guerra Fría, permitió leer la intervención militar como el resultado de la difusión de la influencia norteamericana, tanto para el caso de la explicación de ésta en términos de (neo)fascismo como del desarrollo y recepción de la doctrina de seguridad nacional^[32].

28.– Roy Hanson, *Military Culture and Organizational Decline: A Study of the Chilean Army*, Berkeley, 1967.

29.– José Nun, «América Latina: La crisis hegemónica y el Golpe Militar», *Desarrollo Económico*, vol. 5, 22-23 (1966), pp. 400-403.

30.– Alain Joxe, *Las Fuerzas Armadas en el sistema político de Chile*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1970, p. 33.

31.– A. Joxe. *Las Fuerzas Armadas*, p. 41.

32.– Atilio A. Borón, «El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras en América Latina». *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 39, 2, (1977), pp. 481-528; Andrés Nina, «La doctrina de seguridad nacional y la integración latinoamericana», *Nueva Sociedad*, 27 (1979), pp. 33-50 y Schafik Handal, «El fascismo en América Latina», *Revista América Latina*, 4 (1976), pp. 121-146.

Dos trabajos desde la tradición marxista chilena marcaron un énfasis distinto a la manera en cómo se abordó la «relación civil-militar» en la época. El primero de ellos fue la tesis de Jaime Llabrás sobre el golpe de Estado,^[33] ya que aborda la problemática identificando la politización y el golpe como resultante de una relación de fuerzas coyunturales (correlación de fuerzas) al interior de una relación orgánica (estructuras de clases), con incidencia en las instituciones del Estado en un contexto internacional determinado (la Guerra Fría). En ese marco, Llabrás señala que el escenario de crisis hegemónica en el que se encontraba Chile generó sobre la institución militar una tensión interna entre un «constitucionalismo» no institucionalizado y un «autoritarismo tecnocrático» provenientes de las extracciones socioeconómicas y culturales de su cuerpo de oficiales. La tesis si bien se formula dentro de un marco teórico marxista, que incorpora la noción de hegemonía de Gramsci, tiene desde mi perspectiva dos méritos que no tienen el resto de los trabajos de la época. El primero, es que aborda la «relación civil-militar» desde una concepción interaccional en la coyuntura política. Lo segundo, que incorpora variables exógenas a la relación civil-militar, que permiten entender la profesionalización militar en un contexto de pugnas internas a la sociedad. No obstante, al aplicar un enfoque que sobredetermina la variable externa sobre los actores locales, reduce el rol de la agencia de los actores en la coyuntura. El resultado de ello es que pudiendo realizar un abordaje mucho más matizado de la «relación cívico-militar» termina cayendo en un irreductible organicista del rol de las Fuerzas Armadas en el Estado: «Un hecho coyuntural (la exis-

33.- Jaime Llabrás, *Chilean Armed Forces and the Coup d'Etat in 1973*, Montreal, Mc Gill University, 1977.

tencia de militares constitucionalistas o progresistas) no podía explicar otro hecho estructural, el rol de las Fuerzas Armadas en el estado burgués (tanto en el contenido de clase como la formación del hombre-militar)».

El segundo de los trabajos relevantes de esta corriente fue el ensayo de Hernán Ramírez Necochea que tiene una aproximación similar a la de Llabrás, pero de larga data, partiendo en el siglo XIX. Tiene el mérito que permite poner la visión desde una perspectiva de larga duración, pero tiene el problema que al ser una mirada panorámica, hay aspectos cruciales que no logra desarrollar para poder identificar la manera en que la «relación civil-militar» se expresa en las transformaciones específicas de la profesionalización militar, el desarrollo institucional y cultural^[34]. Cabe mencionar, que el trabajo de Riesman y Rivas efectuó un ejercicio similar, pero de menor envergadura^[35].

En la década de 1980 una serie de trabajos profundizaron «la relación civil-militar» desde los aportes de Janowitz y Huntington. Dentro de los trabajos destacables de investigación destacan los de Genaro Arriagada, que a partir de las claves de la profesionalización militar buscó dar cuenta de la manera en cómo «la relación civil-militar» cristalizó en una determinada doctrina y orientación política. Sus primeros trabajos se abocaron a efectuar una genealogía de la contrasubversión en el discurso de seguridad nacional^[36], para posteriormente

34.- Hernán Ramírez Necochea, *Fuerzas Armadas y Políticas en Chile. 1810-1970: Antecedentes para una historia*, Ciudad de la Habana, Casa de las Américas, 1985.

35.- Fernando Reismann y Elizabeth Rivas, *Las Fuerzas Armadas de Chile: un caso de penetración imperialista*, La Habana, Editora de Ciencias Sociales, 1976.

36.- Genaro Arriagada, «Seguridad Nacional y Política», *Seguridad Nacional y bien común*, Santiago de Chile, CISEC, 1976 y «La izquierda y un nuevo militarismo». *Subversión y contrasubversión*, Santiago de Chile, CISEC, 1978.

decantar en una investigación sobre la manera en que el profesionalismo militar en el Ejército derivó durante la dictadura militar en el desarrollo de una política específica, redefiniendo con ello la relación civil-militar desde el Estado a través del control personalista y corporativo de las instituciones por parte de las Fuerzas Armadas. Esta visión doctrinaria, será un punto de la llegada de transformaciones institucionales, organizacionales y culturales sobre la base de la recepción de la doctrina de seguridad nacional, en boga en la época, y el desarrollo de un anticomunismo institucionalizado: «El anticomunismo en el Ejército no era una consecuencia de la campaña propagandística de la derecha en la década de 1960 e inicios de 1970, sino una tradición largamente asentada»^[37].

En contrapunto con esta visión, a mediados de la década de 1970 en un trabajo de poca difusión y circulación en el debate académica nacional, Frederick Nunn publicó un ensayo de la relaciones civiles-militares en Chile desde 1810 hasta el golpe de Estado. En el trabajo, afirmó una tesis crítica en relación con el carácter externo de la influencia del golpe, que remarcó sobre todo los factores internos tales como el profesionalismo, su desarrollo institucional y su vinculación con el sistema político, de manera acertada. No obstante, desatendió las transformaciones doctrinarias, el anticomunismo y el desarrollo dentro de las propias instituciones llegando a una concepción *militarista* del golpe de Estado que no consideraba las variables políticas externas e internas: «Un golpe militar es un golpe militar y el régimen resultante es un régimen militar, especialmente si uniformados son los que crean y ejecutan las políticas». Agregando que, «el golpe del 11 de septiembre de 1973 fue más el resultado

de presiones internas que de fuerzas externas ejercidas a través de intrigas»^[38].

En contrapunto con esta mirada, los trabajos de Chateau y Tapia^[39] contribuyeron en la época a relevar los aspectos vinculados con el desarrollo doctrinario e institucional de la seguridad nacional. Trabajos posteriores, entre ellos los de Felipe Agüero, Augusto Varas y Carlos Maldonado, enfatizaron la tesis del constitucionalismo formal de las FF. AA. chilenas como resultado de su alejamiento del sistema político en la década de 1930, señalado como un elemento de estabilización del mismo, condición de posibilidad para el desarrollo de un proceso de profesionalización militar que en la década de 1960-1970 las llevará a una recepción sui géneris de la doctrina de seguridad nacional, producto de la influencia norteamericana en materia de seguridad y defensa^[40]. Posteriormente esta tesis fue complementada, apuntando a las pervivencias de una matriz sociopolítica intervencionista en lo estatal al interior de las FF.AA., dada la prevalencia de las influencias de la corriente «ibañista», que concebían el rol de los institutos militares como agentes desarrollistas, con capacidad de implementar reformas políticas y sociales en desmedro de una línea represiva de matriz contrasubversiva^[41].

38.- Frederick Nunn, *The Military in Chilean History, Essay on Civil-Military Relation, 1810-1973*, Alburqueque, University of New Mexico Press, 1976, pp. 396-397.

39.- Jorge Tapia, *El Terrorismo de Estado: la Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur*, México D.F., Nueva Imagen-Nueva Sociedad, 1980 y Jorge Chateau, *Seguridad nacional y guerra antisubversiva*, Santiago de Chile, Documento de Trabajo, Programa FLACSO-Santiago, 185, 1985.

40.- Carlos Maldonado, *Entre la Reacción Civilista y Constitucionalismo Formal: Las Fuerzas Armadas chilenas en el periodo 1931-1938*, Santiago de Chile, FLACSO, 1988 y A. Varas, *Los militares en el poder*, 1987.

41.- Verónica Valdivia, *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile, 1960-1980*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2003.

37.- Genaro Arriagada, *La política militar de Pinochet*, Santiago de Chile, Salesianos, 1985, p. 47.

Todo estos factores se destacan en desmedro de una serie de consideraciones sobre la participación permanente y activa de los militares en labores de represión política y seguridad nacional, a la que fueron progresivamente incorporándose en las diversas coyunturas políticas de la segunda mitad del siglo XX, posibilitada por una serie de reformas institucionales introducidas por los actores civiles y políticos, como una manera de contener el movimiento popular y criminalizar la emergencia de partidos marxistas, cuyos principales actores fueron el Partido Comunista de Chile (PCCH) y el Partido Socialista de Chile (PS). Visto desde la mediana duración, la imagen de la excepcionalidad y la estabilidad del régimen democrático chileno y de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, tiende a opacar el proceso de construcción de una serie de dispositivos jurídicos y burocráticos que posibilitan el desarrollo de una práctica estatal de represión que dotó a las instituciones militares de una relevancia preponderante en materia de contrasubversión y seguridad nacional y que construyó a lo largo del siglo XX una relación civil-militar con una presencia permanente de las Fuerzas Armadas.

Si bien una serie de trabajos han explorado sobre la óptica contrasubversiva en las Fuerzas Armadas chilenas para el período 1938-1973, destacando la recepción de la doctrina de la guerra contrasubversiva y de la doctrina de seguridad nacional^[42], no se ha resaltado el proceso de implementación efectivo de dispositivos y mecanismos estatales de represión que —sin enmarcarse en estas consideraciones teóricas sobre la contrasubversión— venían relevando y posicionando a las Fuerzas Armadas como actores fundamentales

42.- C. Gutiérrez., *La contrasubversión como política*.

en materia de represión, seguridad y contrasubversión^[43]. La asimilación de las labores y mecanismos contrasubversivos a la recepción de la influencia doctrinaria del Ejército norteamericano tiende a dificultar la identificación de los dispositivos construidos por el Estado para tales efectos, previo a la Guerra Fría interamericana y esta agencia a los actores nacionales en materia de seguridad nacional y contrasubversión^[44].

De manera indirecta, la narrativa explicativa que destaca la retirada institucional de las Fuerzas Armadas del sistema político, bajo una subordinación formal al poder civil, sumada a la narrativa de la estabilidad institucional, tiende a dejar en un segundo lugar y restarles protagonismo explicativo a las irrupciones del Ejército en materia de represión política por motivos de orden interno policial en la segunda mitad del siglo XX, así como la utilización de estas, por parte de diversos Gobiernos de coaliciones que contaron con el apoyo de los partidos comunista y socialista: los Gobiernos de los presidentes del Partido Radical, Pedro Aguirre Cerda, 1938-1941; Juan Antonio Ríos, 1941-1946; Gabriel González Videla, 1946-1952 y el Gobierno de Salvador Allende de la Unidad Popular (UP), entre 1970-1973. Esta herramienta explicativa lleva a considerar los hechos represivos en los que participaron las Fuerzas Armadas como una situación anó-

43.- Pablo Seguel, «Las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI): el dispositivo de seguridad nacional estratégico para el involucramiento de las FF.AA. en la represión estatal en Chile, 1938-1974», *Sudamericana: Revista de Ciencias Sociales*, 16 (2023), pp. 36-75.

44.- Verónica Valdivia, *Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile*, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2021 y Pablo Seguel, *Soldados de la represión. Anticomunismo, contrasubversión y seguridad nacional en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2022.

mala en la historia republicana construida sobre los pilares institucionales de la Constitución de 1925. Por otra parte, revisada en perspectiva de mediana duración, la herramienta explicativa de la influencia externa tiende a distorsionar los mecanismos y las pulsiones contrasubversivas del Ejército y de los actores civiles que, desde comienzos del siglo XX, en el período de inestabilidad político previo y posterior a la Constitución de 1925, concebían la represión bajo un prisma anticomunista, contrasubversivo y como el complemento necesario para la implementación de reformas políticas y sociales. Como indica el investigador norteamericano John Bawden:

«Los soldados chilenos tenían su propio punto de vista arraigado en sus tradiciones, historia y consideración de su lugar en el mundo como un Estado en desarrollo. La influencia militar norteamericana nunca abrumó las tradiciones nacionales o las preocupaciones locales de soldados profesionales que contaban con instalaciones de formación avanzada, sentimientos anticomunistas, y largas tradiciones intelectuales nativas antes de la era de la hegemonía norteamericana»^[45].

El otro conjunto de trabajos influyentes sobre la dictadura militar enfatiza el aspecto preponderante de la personalidad de los militares que condujeron el golpe de Estado. Esto les permite enfatizar los aspectos propiamente políticos del régimen, como interpretar los momentos represivos de la dictadura de acuerdo con los atributos de los líderes de las instituciones militares. Así por ejemplo el trabajo de Constable y Valenzuela, si bien inscribe el personalismo

45.- John Bawden, *The Pinochet Generation. The Chilean military in the twenty century*, Tuscaloosa, The University of Alabama Press, 2016, p. 4.

del régimen en el marco de la trayectoria institucional, el factor individual es una clave interpretativa fuerte del acentuamiento del anticomunismo y la contrasubversión en las Fuerzas Armadas^[46].

En esa misma sintonía, los trabajos de Arriagada^[47] y Huneus ponderan en el factor individual un elemento preponderante. El más influyente es la obra de Huneus, quien señala que la peculiaridad de la dictadura militar chilena en relación con las dictaduras de América Latina se origina en tres «dimensiones estructurales que, siendo analíticamente distintas, se relacionan entre sí»^[48]. La primera de ellas es el empleo de la violencia y la coerción para la construcción de un Estado policial, del cual la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) fue su elemento central. El segundo, es la dimensión económica y el carácter de las reformas llevadas adelante que desmantelaron el Estado de bienestar construido durante el siglo XX. Finalmente, «la figura del general Pinochet, que integró estos componentes». Todo lo anterior «estableció un régimen político con un bajo nivel de institucionalización, que favoreció la decisión de Pinochet de convertirse en su principal figura y que llevó a identificar su persona con el orden político, concentrando un enorme poder; pero recibiendo el rechazo de la opinión pública internacional y de la oposición en Chile»^[49]. Todo lo cual permitió construir la democracia protegida y autoritaria legada como herencia en la transición.

46.- Patricia Constable y Arturo Valenzuela, *Una nación de enemigos. Chile bajo Pinochet*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Diego Portales, 2013 [1991].

47.- Genaro Arriagada, *Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet*, Santiago de Chile, Editorial Sudamericana, 1998.

48.- Carlos Huneus, *El régimen de Pinochet*, Santiago de Chile, Taurus, 2016, p. 60.

49.- C. Huneus, *El régimen de Pinochet*, p. 61.

La detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 marcó una inflexión en los estudios sobre la «relación civil-militar», los que con motivos de la conmemoración de los treinta años del golpe de Estado abordaron el rol de los militares en el sistema político y en el golpe de Estado. Uno de los ensayos de revisionismo más lúcido fue escrito por Felipe Agüero, el que parte de la constatación de la desconsideración de las ciencias sociales respecto al rol de las Fuerzas Armadas en el proceso político reciente. Según Agüero:

«A partir del vínculo y poder de los militares con los civiles —claves para comprender el curso del proceso de transición y profundización democrática— ha sido central el papel de las Fuerzas Armadas en las instituciones del nuevo régimen. La fuerte posición de los militares en ellas, junto a la continuación de turbulencias emanadas de actos de rebeldía y abierto desafío a las nuevas autoridades por parte de jefes castrenses, pusieron en el tapete los temas del control civil o poder democrático sobre dicha institución y sus dificultades»^[50].

En 2004, David Álvarez publicó un trabajo que, siguiendo la ruta investigativa de Agüero, profundizó en los tres momentos identificados por este en el retorno democrático, por la trayectoria de Pinochet en el poder del Ejército, luego como senador vitalicio, hasta su procesamiento en Londres en 1998 y su posterior desafuero en el 2000: un periodo de confrontación política contra el poder ejecutivo bajo la administración de Patricio Aylwin (1990-1994). Esto fue seguido por un periodo de apaciguamiento de las relaciones, apalancado por el desincentivo del ejecutivo a avanzar en la agenda de

50.- Felipe Agüero, «30 años después: La ciencia política y las relaciones Fuerzas Armadas, Estado y Sociedad», *Revista de Ciencia Política*, 2, (2003), p. 259.

derechos humanos y rendición de cuentas por corrupción. Finalmente, vino un periodo de catarsis, que abarcó desde la detención de Pinochet hasta el «nunca más» del general Juan Emilio Cheyre, que permitió al Ejército y las FF.AA. desmarcarse de la figura de Pinochet, el reconocimiento a las violaciones a los derechos humanos y el intento por reconstruir una relación civil-militar transversal, basada en la colaboración profesional^[51].

En 2008, Marcos Robledo profundizó esta línea interpretativa, en un trabajo que llegó hasta las reformas constitucionales efectuadas por el presidente Ricardo Lagos, que restituyeron las facultades presidenciales sobre las FF.AA. y a generar el Informe Nacional Sobre Prisión Política y Tortura^[52]. Con posterioridad Robledo profundizó este análisis para el periodo completo de la concertación^[53], hasta llegar al trabajo de Flisfisch y Robledo para el PNUD, que efectúa la revisión más sistemática sobre la «relación civil-militar» en la postransición^[54].

Otro trabajo que aborda esta problemática es el ensayo de Jesús Rodríguez, quien aborda el desarrollo de la «relación civil-militar» desde el Gobierno de Eduardo Frei Montalva hasta el segundo mandato de la

51.- David Álvarez, «Fuerzas Armadas en Chile: entre la configuración de nuevos roles y la normalización de las relaciones cívico-militares», *Informe final del concurso: El papel de las Fuerzas armadas en América Latina y el Caribe*, Programa Regional de Becas, CLACSO, 2004.

52.- Marcos Robledo, «Democratic Consolidation in Chilean Civil-Military Relation: 1990-2005», en Bruneau, Thomas C., y Trinkunas, Harold (Eds.), *Global Politics of Defense Reform*, New York, Palgrave Macmillan, 2008, pp. 95-126.

53.- Florina Matei y Marcos Robledo, «Democratic civilian control and military effectiveness: Chile», en Thomas Bruneau y Florina Matei (ed.), *The Routledge Handbook of Civil-Military Relations*, London and New York Routledge, 2012, pp. 283-295.

54.- A. Flisfisch y M. Robledo, *Gobernabilidad Democrática de la Defensa en Chile*.



General Juan Emilio Cheyre recibiendo condecoración por parte del presidente Ricardo Lagos a comienzos del año 2000 (Fuente: diarioeldia.cl).

presidenta Michele Bachelet. Sostiene que el vínculo entre civiles y militares avanzó de una profundización a una «inadvertida regresión», gatillada, sobre todo —a juicio del autor— por errores de gestión política^[55]. Finalmente, el trabajo de José Miguel Piuzzi pone el énfasis de las transformaciones socioculturales y del escenario político internacional en las Fuerzas Armadas, más que en sus vínculos con el poder civil y cómo esa relación confluye en la gobernabilidad democrática^[56].

En síntesis, a cincuenta años del golpe de Estado el debate académico ha transitado desde una desatención de la «relación civil-militar» como una variable explicati-

va relevante para analizar el quiebre de la democracia y el proceso de transición democrática, hacia una comprensión de esta como una clave interpretativa de las tensiones y dificultades de la transición y consolidación democrática. Como se propone en este trabajo, la «relación civil-militar» constituye un aspecto crucial para analizar la democracia chilena, siendo la deuda de colaboración y rendición de cuentas en materia de derechos humanos uno de los principales desafíos pendientes para una recomposición democrática, con legitimidad social, de la gobernabilidad democrática de la defensa y el desarrollo del país, que permita romper con el legado institucional de la dictadura y la percepción de que las Fuerzas Armadas representan a un sector político específico de la sociedad en vez de que constituyen un patrimonio de todos los chilenos.

55.- Jesús Rodríguez, *Historia de la relación civil-militar en Chile. Desde Eduardo Frei Montalva hasta Michelle Bachelet Jeria*, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2018.

56.- José Miguel Piuzzi, *Fuerzas Armadas y Sociedad. Efectos de los cambios socioculturales y de los nuevos escenarios de la singularidad de lo militar*, Santiago de Chile, Historia Chilena, 2021.

La relación civil militar en Chile a 50 años del golpe de Estado

«El Ejército estuvo, por decisión propia o forzado por política partidista, inmerso en la contingencia social y política del país [...] El Ejército está llamado a dar soluciones militares a problemas militares. Cuando las situaciones son estrictamente políticas o sociales, recurrir a él no las resolverá. Hacer uso de la institución armada, incluso con mandato legal, en tareas internas que no sean aquellas relacionadas con las operaciones de apoyo a la comunidad, hace que una parte de la población las perciba como una maniobra partidista del gobierno de turno».

General Ricardo Martínez Menentau^[57]

La «relación civil-militar» en la actualidad está cruzada por las circunstancias del golpe de Estado y el proceso de transición democrática, sobre todo desde el punto de vista de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar y el control efectivo que tienen las autoridades civiles sobre una institución fundamental para el Estado y la nación. Retomando el planteamiento que sostiene este trabajo, la reconstrucción del vínculo de la «relación civil-militar» ha sido una tarea complicada desde el punto de vista político, institucional, organizacional y cultural a lo largo de las décadas posteriores al golpe, por cuanto su participación activa en la dictadura militar generó un proceso de identificación con el legado institucional del régimen, un compromiso colectivo con militares procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos y una afinidad política con el mundo conservador.

57.- Ricardo Martínez Menentau, *Un Ejército de todos*, Santiago de Chile, JC Sáez Editor, 2023, p. 123.

Este, al menos durante los primeros años de la transición democrática, cerró filas con la defensa corporativa de los institutos armados ante las presiones del poder ejecutivo y la sociedad civil por rendición de cuentas en materia de derechos humanos y probidad.

La primera de las claves está vinculada con la institucionalización de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar a partir de la utilización de estas en labores directivas gubernamentales, en colaboración con civiles, represivas y de inteligencia. Ese compromiso político también generó un compromiso de sangre con la impunidad, que está en la base de los llamados «pactos de silencio» y con la resistencia que manifestó durante décadas el sector para aceptar sus responsabilidades en el quiebre de la democracia y las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura. La segunda relación está relacionada con el poder de control supra institucional otorgado a las mismas a través de la Constitución de 1980, que se extendió hasta las reformas constitucionales de 2005 y la reforma definitiva a la gobernanza de la defensa en la primera década del siglo XXI. La tercera se vincula con la progresiva apertura a civiles en las labores de definición de las políticas de la defensa nacional. Finalmente, el último aspecto se relaciona con el control y la rendición de cuentas efectivas del Ejército en situaciones que las involucran en delitos de corrupción y mal uso de recursos públicos.

La «relación cívico-militar» durante la dictadura

Tras el golpe de Estado se instaló una cruenta dictadura militar apoyada por civiles que durante 17 años gobernó el país a través de la concentración de los poderes del Estado, la supresión de las libertades y derechos políticos, la disolución de Tribunal Constitucional, la subordinación y omisión

de jurisdiccionalidad del poder judicial y del organismo de control de legalidad (Contraloría General de la República de Chile). En ese contexto, «la Corte Suprema cedió el terreno para la acción discrecional del aparato represivo, abdicó de sus funciones jurisdiccionales y de control sobre los tribunales militares en tiempo de guerra, hizo caso omiso de los abusos que a diario se cometían desde el Estado en contra de personas que fueron dejadas en absoluto desamparo al interior de centros de detención ilegales, y al rechazó de cada uno de los recursos presentados»^[58] en lo que en una sentencia posterior la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó como una «corte adicta al régimen autoritario militar»^[59].

Las consecuencias desde el punto de vista de los derechos humanos, como han expresado las Comisiones de Verdad y Reconciliación son un total de 3.227 personas ejecutadas y/o desaparecidas, 38.254 víctimas de prisión política y tortura y 250.000 chilenos y chilenas exiliados^[60]. Para la vulneración de los derechos fundamentales de 41.730 personas la dictadura utilizó al menos 1.132 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, extendiéndose la represión y violencia dictatorial por todos los rincones del país. La intensidad de la represión fue variando en el tiempo, arribando a una caracterización que distingue entre (1) el periodo de represión masivo de la dictadura militar, que va desde septiembre a

diciembre de 1973; (2) un periodo de represión selectivo que va desde enero de 1973 hasta 1978; (3) y un periodo de una llamada «represión institucionalizada» que va desde ese año hasta marzo de 1990 (ver Tabla 2).

Pero como toda dictadura, la violación de los derechos fundamentales de la población fue la culminación de una serie de restricciones de derechos civiles y políticos. Esto tuvo como condición la concentración de los poderes del Estado, la subordinación y/u omisión del poder judicial y la omisión del control de legalidad estatal llevado adelante por la Contraloría General de la República. Bajo la ficción de la existencia de una «guerra interna», la dictadura procedió a declarar los estados de excepción constitucional de sitio y de emergencia y a partir de la excepcionalidad jurídica a gobernar bajo decretos y bandos militares. Así, disolvió el Parlamento, proscribió los partidos políticos, prohibió el derecho de asociación (sindical y política), prohibió la libertad de información, de opinión y reunió los poderes legislativo y ejecutivo en una Junta Militar de Gobierno conformada por los comandantes en jefe de la Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros. La concentración de poderes, la prohibición de derechos civiles y políticos y la colaboración de amplios sectores civiles, tanto empresariales como políticos, permitieron que la dictadura se instalara, se justificara a sí misma y se institucionalizara a lo largo de 17 años.

Para la vulneración de los derechos fundamentales, la dictadura utilizó a las Fuerzas Armadas, policías (Investigaciones y Carabineros de Chile), Gendarmería (el organismo público a cargo de las prisiones), la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) y la creación de dos policías políticas: la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) desde octubre de 1973, y formalmente desde 1974 hasta 1977, y la Cen-

58.- Karina Fernández, «Breve análisis de la jurisprudencia chilena, en relación a las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar», *Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca*, vol. 8, 1 (2010), pp. 467-488.

59.- Dictamen de Humberto Nogueira Alcalá, en el caso «Almonacid Arellano y otros Vs. Chile», Sentencia del 26 de septiembre de 2006, Serie C nº 154, p. 23.

60.- El Estado chileno no posee una cifra oficial de personas exiliadas. La estimación de las 250.000 personas fue efectuada a partir de balances generados por la Oficina Nacional de Retorno a comienzo de la década de 1990.

Tabla 2. Cifras oficiales de víctimas de violaciones a los DDHH reconocidos por el Estado Chileno

Comisión de Verdad y Reconciliación	Ejecutados	D.D.	P. P. y Tortura
Informe Comisión Nacional Sobre Verdad y Reconciliación (1991)	1.216	1.082	
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996)	776	123	
Informe Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (2004)			28.459
Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (2011)	25	5	9.795
Totales desagregados	2.017	1210	38.254
Totales	3.227		38.254
Total de víctimas de violaciones a los derechos humanos	41.481		

Fuente: Elaboración propia.

tral Nacional de Informaciones (CNI) desde 1977 hasta su disolución en 1990. Pero la violación de los derechos humanos no solo necesita agentes uniformados en las calles, deteniendo, torturando y ejecutando personas identificadas como «enemigos del Estado». Se necesitan también agentes civiles destinados a la restricción y control de los derechos civiles y políticos, contribuyendo a la construcción del proyecto cultural de la dictadura, preparando las campañas de guerra psicológicas desde las agencias del Estado, manipulando la opinión pública, difamando a los opositores, produciendo decretos que se transformaran por el peso de la fuerza en leyes y reformas institucionales. Agencias como la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS), la Dirección de Relaciones Humanas -ambas de la Secretaría General de Gobierno-, el Comité Creativo de la Junta Militar, la Oficina de Censura Previa, el Consejo de Calificación Cinematográfica y el control de la producción editorial a través de la censura de libros y revistas cumplieron este papel. Producir y reproducir una dictadura es un

desafío colectivo que excede con creces a una tropa de obedientes oficiales conflagrados contra el poder constituido. Adentrarnos en la zona gris de la corresponsabilidad civil es una de las agendas que a 50 años del golpe de Estado sigue siendo una deuda pendiente de la sociedad chilena y de la investigación académica: es decir, el rol de las personas comunes y corrientes en la vida cotidiana del régimen.

Las violaciones a los derechos humanos no sólo se practicaron dentro de las fronteras nacionales. Coherente con la visión de la dictadura que se atribuía una misión civilizatoria a escala planetaria de defensa de las sociedades cristianas occidentales, herederas de la tradición hispanoamericana y grecorromana, su lucha contra el «comunismo internacional» se desarrolló en los más diversos lugares. Para ello convocó en 1974 a diversos servicios y organismos de seguridad e inteligencia del Cono Sur a conformar la Red Cóndor para el desarrollo de misiones extraterritoriales contra los enemigos de los Estados y la civilización occidental.

Ante este escenario de control social y represión generalizada, desde la sociedad civil y desde el ámbito internacional, la solidaridad con las personas que estaban siendo perseguidas y fueron víctimas de la represión estatal fue central. Como han reconocido diversas investigaciones académicas, ante la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas institucionales por parte de una dictadura, sólo es la presión de la sociedad civil que, rompiendo el cerco del miedo y la represión, a través del registro y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos puede contener la represión dictatorial. El movimiento de derechos humanos surgió de tres fuentes: los organismos eclesiásticos y ecuménicos, la institución familiar y los partidos políticos. El rol de las iglesias y organismos ecuménicos fue importante desde la temprana creación del Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI o Comité Pro Paz) el 4 de octubre de 1973 por el Arzobispado de Santiago, reuniendo la acción de la iglesia católica y judía, y el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR).

A través de la acción de denuncia judicial mediante la presentación de recursos de amparos y mediante la solidaridad y asistencia para el exilio, el Comité Pro Paz tuvo un rol importante hasta su disolución por presiones de la dictadura en diciembre de 1975. No obstante, la iglesia católica no cejó en su esfuerzo y pese a las presiones del régimen, creó en enero de 1976 con un mayor rango eclesiástico a la institución que se constituirá en el principal organismo de defensa de los derechos humanos en Chile: la Vicaría de la Solidaridad. Por su parte, el CONA, disuelto a comienzos de abril de 1975, fue continuado a través de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), inspirado en una perspectiva cristiana de liberación y de dignidad de las personas. De modo paralelo y en

coordinación con ambos, surgió en 1977 el Servicio de Paz y Justicia para promover la articulación de jóvenes, la no violencia y la defensa de los derechos humanos. Al amparo de las acciones de estas instituciones, desde mediados de la década de 1970 los sobrevivientes y familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos comenzaron a conformar sus organizaciones partiendo con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en 1974, la Agrupación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) en 1976 y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) en 1978, entre otros. Finalmente, desde el amparo de las redes de las organizaciones políticas surgieron hacia finales de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, entre un total de al menos veinticuatro organizaciones de derechos humanos (ver Tabla 3).

En el ámbito del sistema internacional e interamericano de DDHH, la presión contra la dictadura militar implicó un mayor protagonismo exterior al prescindir en el escenario nacional del resguardo de los derechos humanos por parte del poder judicial. El Estado chileno bajo la dictadura quedó aislado diplomáticamente, teniendo un bajo reconocimiento internacional. De hecho, Pinochet solo fue invitado a una visita protocolar a Paraguay en 1974 bajo el Gobierno del dictador Alfredo Stroessner y a España con motivo del funeral del dictador Francisco Franco en 1975. Su último intento diplomático fue en 1980 en el frustrado viaje a Filipinas para encontrarse con el dictador Ferdinand Marcos, quien horas antes de recibirlo canceló el encuentro.

A nivel de los organismos multilaterales, tanto desde la Organización de las Nacio-

Tabla 3. Organizaciones de derechos humanos conformadas durante la dictadura militar

Año	Organismo
1973	Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Comité Pro Paz)
	Comité Nacional de Ayuda de los Refugiados (CONAR)
1974	Agrupación de Familiares de Detenidos de Desaparecidos (AFDD)
1975	Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)
1976	Vicaría de la Solidaridad
	Agrupación de Familiares de Presos Políticos (AFPP)
1977	Servicio Paz y Justicia, SERPAJ
1978	Comité Pro Retorno de Exiliados, CPRE
	Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
	Comisión Chilena de Derechos Humanos
	Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles (CODEJU)
	Amnistía Internacional -Sección Chilena
1979	Programa de Derechos Humanos de la Academia de Humanismo Cristiano
	Fundación Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE)
1980	<i>Coordinadora de Agrupaciones de Familiares de Víctimas de la Represión</i>
	Agrupación de Familiares de Víctimas de la Represión
	Agrupación de Familiares de Relegados y Ex Relegados (AFAREL)
	Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)
1983	Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo
	Comisión Nacional Contra la Tortura
1984	Comisión Coordinadora Problema Exilio Retorno
	Plenario de Organismo de Derechos Humanos
1985	Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS)
1988	Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS)

Fuente: Elaboración propia, a partir de: Patricio Orellana y Elizabeth Quay, El movimiento de derechos humanos en Chile, 1973-1990, Santiago de Chile, Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar, 1991 y Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, Santiago de Chile, La Nación S.A., 2005.

nes Unidas (ONU), como de la Organización de Estados Americanos (OEA) por intermedio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se desarrollaron constantes pronunciamientos, informes y mecanismos de supervisión y protección de los derechos fundamentales. En el marco del sistema internacional, desde 1973 hasta 1990 se emitieron pronunciamientos condenatorios contra Chile por violaciones a los DDHH a través de diversas instancias:

la propia Asamblea General de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos dependiente del Consejo Económico y Social y la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de Minorías. Chile en ese sentido, como reconoce el Informe Valech (2004) «se transformaría en un caso paradigmático con relación al perfeccionamiento de los mecanismos de control del sistema universal en materia de derechos humanos» (p.196).

De hecho, los desafíos que supuso el caso chileno para la ONU implicó la generación de nuevos mecanismos de recolección de información y de rendiciones de cuentas, como lo fue la creación en 1975 del Grupo de Trabajo *Ad Hoc* para reportar la situación del país y la creación del relator especial sobre Chile para informar a la propia Comisión de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU. Por su parte, al alero de la OEA y de la CIDH desde los primeros días de la dictadura se requirió información a las autoridades, se efectuaron visitas *in loco* (en julio y agosto de 1974), se elaboraron una serie de informes especiales sobre Chile (1974, 1976, 1977 y 1985), además de incorporarse capítulos especiales sobre Chile en los informes anuales.

Por todas las presiones que se fueron generando a nivel internacional y nacional, y la crisis que generó el asesinato de Orlando Letelier en 1976 —ex canciller del presidente Salvador Allende—, la dictadura procedió a dar un giro en su política de represión y control social tras la disolución de la DINA y su reemplazo por la CNI en 1977. También permitió la apertura de algunos medios de comunicación de oposición. A finales de ese año fue presentado el informe especial sobre Chile elaborado por el relator especial de la ONU, Ghulam Alli Allana y aprobado en la Asamblea General por una amplia mayoría. Por todas estas presiones a comienzos de 1978 la dictadura organizó un plebiscito que consultaba al país

«Frente a la agresión internacional desatada en contra del gobierno de nuestra patria, respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile, y reafirmo la legitimidad del gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país».

Para reforzar la inmunidad ante las críticas internacionales y nacionales, la dictadura emitió en 1978 el Decreto Ley de Amnistía para los delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1978 a todas aquellas personas implicadas en actos delictivos en calidad de autores, cómplices y encubridores. Paralelamente a esto, la dictadura caducó el estado de sitio «en tiempos de guerra» vigente de 1973, dejando en vigencia el estado de emergencia. Pese a estos esfuerzos, el 30 de noviembre de 1978 la Vicaría de la Solidaridad dio a conocer los hallazgos de quince cuerpos de campesinos desaparecidos en la localidad de Isla de Maipo, en la región metropolitana. Meses más tarde y a comienzos de 1979, se volvieron a conocer nuevos casos de hallazgos de cuerpos inhumados ilegalmente por la dictadura en uno de los patios (el número 29) del cementerio general de Chile, ubicado en la región metropolitana y en el cementerio parroquial de la localidad de Yumbel, en la región del Ñuble. Por estos casos, hacia finales de 1978, Pinochet dio la instrucción de llevar adelante el denominado «Operativo Retiro de Televisores» en todas las guarniciones militares, que consistía en desenterrar los restos de ejecutados, borrar la evidencia material de estos crímenes y lanzar los restos al mar.

Tras la aprobación de la Constitución Política de la República de 1980 el régimen logró institucionalizar un modelo de sistema político de «democracia restringida» que consagró un Estado centralista y autoritario, que proscribió los partidos de orientación marxista, otorgando atribución de control supraestatal a las Fuerzas Armadas. Primero, consagró una jurisdicción propia a través de los tribunales militares (numeral 3, artículo 19°), un sistema de ascensos y promociones institucionales e inamovilidad de los comandantes en jefe



Presidente Patricio Aylwin y Augusto Pinochet a comienzos de la década de 1990 (Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile).

(artículo 93) y un carácter de garantes legales a través de su integración al Consejo Superior de Seguridad Nacional (artículos 95 y 96)^[61].

Paralelo a ello, desde finales de la década de 1970 y comienzos de 1980 se pusieron en marcha las reformas estructurales de la dictadura conocidas como las «siete modernizaciones», las que en su conjunto construyeron el marco institucional y de desarrollo económico del país, que hasta la fecha constituyen el legado político, económico e institucional del régimen.

A comienzos de 1982 estalló una profunda crisis económica que al año siguiente posibilitó la apertura de las primeras muestras masivas de descontento de la sociedad civil y de la oposición política, que se conocieron como las «jornadas de pro-

testa contra la dictadura» que se extendieron hasta el año 1986. Estas posibilitaron la entrada y conformación de los bloques políticos de la oposición entre la «Alianza Democrática» (1983-1988) —integrada por los partidos socialcristianos, socialdemócratas y de la renovación socialista— y el Movimiento Democrático Popular —formado por el Partido Comunista de Chile y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria—. Estas movilizaciones fueron acompañadas por la resistencia a la dictadura, fundamentalmente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) —el brazo armado del PCCH— y el MIR, todos los que contribuyeron a presionar y desestabilizar a la dictadura. Esto propició la generación de un escenario de presión política, recrudeciendo casos de graves violaciones a los derechos humanos como lo fueron el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez (1983), el caso de «Los Degollados»

61.- *Constitución Política de la República de Chile de 1980*, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1981.

(1985), la Operación Alfa Carbón (1984) y la Operación Albania (1987), entre otras.

Pese a todas las presiones sociales y políticas, el itinerario institucional trazado por la Constitución de 1980 siguió su curso y en 1988 se realizó el plebiscito nacional, imponiéndose la opción del no por un 54,99%, a la permanencia del dictador por otros ocho años, a partir de 1989, frente a la opción del sí que obtuvo el 44.01%. La oposición política a la dictadura quedó escindida entre un grupo mayoritario de partidos de oposición que conformaron la Concertación de Partidos por la Democracia que en las elecciones de 1989 presentó como su candidato al exsenador Patricio Aylwin Azocar, el cual terminó asumiendo la presidencia de la República para el periodo 1990-1994.

Este escenario político y social es importante para entender el sistema político chileno y la agenda de derechos humanos que se impulsará en las décadas siguientes, tanto desde el punto de vista de los temas y énfasis institucionales, sus actores y sus instituciones, como sus omisiones. Todo lo cual repercutirá en la manera en cómo decantó la «relación civil-militar», por los siguientes motivos.

Primero, el proceso de transición institucional siguió el itinerario establecido por la Constitución de 1980, lo que permitió generar una institucionalidad y un sistema político que otorgó una gran presencia y poder a los actores civiles, políticos y militares que condujeron la dictadura. La existencia de un organismo supra institucional de control, como el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), la permanencia como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los integrantes salientes de la Junta Militar, la mantención de magistrados pro dictadura en la Corte Suprema y de Apelaciones en el poder judicial, la existencia de senadores designa-

dos y vitalicios y la formación de un sistema de partidos binominal, generó una dinámica de poder de dos grandes bloques, que replicaron el clivaje del plebiscito de 1988 en lo político.

Por ello, el legado político e institucional de la dictadura se constituyó en un elemento político e identitario fuerte de la oposición de derecha, que dificultó que avanzara en algunos ámbitos la agenda de justicia y derechos humanos al retorno democrático, así como la reconfiguración de la relación civil-militar, al menos hasta la detención en 1998 de Augusto Pinochet en Londres, que marcaría los ritmos.

En segundo lugar, esto permite entender también por qué los principales énfasis de la política de derechos humanos se colocaron en medidas de verdad y en la institucionalización del sistema nacional e internacional de derechos humanos, mediante la suscripción de los principales tratados, en la introducción de reformas políticas a la Constitución de 1980 y el desarrollo de la institucionalidad del país que permitiesen desarrollar una democracia plena con base en los principios rectores del sistema de derechos humanos y en la creación de instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.

En tercer lugar, por este mismo marco político e institucional, en materia de justicia se efectuaron algunas reformas (las Leyes Cumplido), pero en general la estrategia que se adoptó entregó a los tribunales de justicia la competencia jurisdiccional descartándose la creación de tribunales especiales. Esto repercutió en que los ritmos y vaivenes de las condenas sobre los casos de derechos humanos recayera en las víctimas y familiares, contribuyendo a una revictimización y una «estigmatización» de la agenda de justicia y deuda pendiente.

La «relación cívico-militar» en la postransición

Al comienzo del Gobierno del presidente Patricio Aylwin, los derechos humanos se constituyeron a nivel programático de Gobierno en un componente central de las reformas políticas institucionales para la obtención de una plena democratización de las instituciones políticas, económicas y sociales: «Los derechos humanos constituyen uno de los fundamentos de la construcción de una sociedad democrática. Esto implica protegerlos y promoverlos en todos los ámbitos de la vida nacional».

Para ello, las principales medidas que se propuso el Gobierno fueron la adecuación de la institucionalidad al sistema internacional e interamericano de DDHH, la promoción de una política exterior de defensa y promoción de los derechos humanos, la derogación de las normas procesales que establece y el juzgamiento de los responsables.

En ese sentido, durante los primeros dos Gobiernos democráticos postdictadura (1990-2000) destacaron en materia de verdad la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990), el conocimiento público de su informe (1991) y la Ley 19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992-1997).

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación creada mediante Decreto Supremo n° 355 del 25 de abril de 1990 fue presidida por el jurista y político Raúl Rettig, ex embajador del presidente Salvador Allende, que tras diez meses de arduo trabajo entregó su informe el 8 de abril de 1991. El presidente Patricio Aylwin, al dar a conocer las principales pidió disculpas y señaló: «Al asumir el gobierno, dije que ésta es una herida abierta en el alma nacional, que sólo podríamos cicatrizar si procu-

rábamos reconciliarnos sobre las bases de la verdad y de la justicia».

Cabe destacar que las conclusiones del «Informe Rettig» no fueron reconocidas por todos los actores. El poder judicial negó las imputaciones que efectuó el informe, las FF.AA. —a excepción de la Fuerza Aérea de Chile (FACH)— tampoco reconocieron las responsabilidades que se le atribuyeron en las violaciones a los derechos humanos cometidas y algunos partidos de la derecha (la Unión Demócrata Independiente) tampoco lo hicieron. En el caso del Ejército, su oposición fue difundida a través de un documento público y fue de categórico rechazo al informe^[62].

Dado a que muchos casos no pudieron ser revisados por la Comisión Rettig, el 9 de febrero de 1992 se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación mediante la Ley 19.223. Esta extendió sus labores hasta febrero de 1994 y al finalizar publicó su informe, mundialmente conocido como «Informe Rettig» que reunió información de violaciones a los derechos humanos (ejecutados y desaparecidos).

No obstante, en materia de justicia se generaron contradicciones. A nivel de programa de Gobierno, se estableció que «el conocimiento de estos casos será radicado en los tribunales ordinarios de justicia, los que deberán conocer y juzgar conforme a las reglas del debido proceso de derecho, con pleno respeto a las garantías procesales de víctimas y victimarios». No obstante, al estar vigente el Decreto Ley de Amnistía de 1978 en la práctica solo pudo avanzar casos ocurridos con posterioridad a esa fecha. Esto configuró un escenario de tensiones en materia de justicia con los poderes fácticos, aún más cuando el Ejército efectuó el «Boinazo» el 28 de mayo de 1993, presionando

62.- Ejército de Chile, *Presentación del Ejército de Chile a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, Santiago de Chile, 1990.

por el avance de la investigación por el caso de corrupción del exdictador (los llamados «pinocheques») y de los casos de derechos humanos, en específico el de mayor repercusión internacional y que afectaba directamente a la plana de la disuelta DINA, la policía política de la dictadura.

Por las diversas presiones generadas en 1995, cuando asumió el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se buscó generar tranquilidad en las Fuerzas Armadas. Por una parte, a través del Decreto 580 del 14 de junio de 1995 se creó el penal Punta Peuco — una cárcel especial para militares condenados por casos de violaciones a los derechos humanos— y, por otra parte, ese mismo año el presidente Frei ordenó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que no procediera en la investigación por corrupción de los «pinocheques».

Este manejo de los casos fue fuertemente criticado por los partidos fuera de la coalición y por las diversas agrupaciones de DDHH, que comenzaron a entablar una tensa relación de colaboración y crítica con el poder ejecutivo en materia de derechos humanos. Por su parte, a las diversas causas que se comenzaron a presentar desde el retorno de la democracia hasta 1998, los tribunales aplicaron el decreto Ley de Amnistía. A pesar de aquello, el Gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle tuvo el mérito de crear el primer *Libro de la Defensa Nacional de Chile*, impulsado por el ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma. Este instaló una política basada en la mutua necesidad de los civiles y los militares: «Ni la paz elimina la necesidad de las Fuerzas Armadas, ni la defensa es un asunto exclusivo de los militares»^[63].

Un punto de inflexión se generó en el año 1998. A comienzos de año, el 12 de enero el

abogado Eduardo Contreras y Gladys Marín —presidenta del Partido Comunista de Chile— interpusieron la primera querrela contra Augusto Pinochet (causa 2.182-98) en torno a la cual comenzarán a acumularse una gran cantidad de diligencias. Tras la detención de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998, comenzó a generarse una ventana de transformaciones que permitió que en la siguiente década el Ejército se desmarcara del férreo respaldo dado al ex dictador Augusto Pinochet y se propiciaran las reformas a la Constitución de 1980 que otorgaban el rol garante a las Fuerzas Armadas.

Durante el Gobierno del presidente Lagos, los énfasis se colocaron en la consolidación del sistema internacional de derechos humanos y la construcción de un sistema nacional de protección y promoción de derechos humanos. En la modificación de las normas jurídicas que dificultaban los procesos de investigación y que estipulaban penas y agravantes por delitos de orden político, la profundización de la búsqueda de la verdad respecto de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y el abordaje de la situación de la presión política y las torturas y la construcción de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos. Estos dos últimos puntos marcaron una diferencia respecto de las administraciones lideradas por Aylwin y Frei. A nivel de políticas públicas destacó la *Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura* (2004) y la generación del programa «Programa No hay mañana sin ayer».

Desde el punto de vista de la política hacia el Ejército, el Gobierno de Lagos enfatizó las medidas para la generación de una relación civil-militar con mayor control. Al inicio de su administración Lagos señaló a la prensa que «me encargaré de demostrar al mundo que en Chile manda la autoridad elegida por el pueblo y que las Fuerzas Ar-

63.- José Rodríguez, *Historia de la relación civil-militar en Chile*, p. 90.

madras y de orden son entidades disciplinadas, obedientes y no deliberantes»^[64].

Al comienzo del 2002 la ministra de Defensa Michele Bachelet emitió un pronunciamiento favorable respecto al primer *Libro de la Defensa Nacional de Chile* al señalar que «por primera vez en nuestra historia... los civiles hemos asumido plenamente la dirección de la política de la defensa»^[65]. Hacia finales de año, el ejecutivo dio publicidad al segundo *Libro de la Defensa Nacional de Chile*.

En ese contexto, se generó uno de los episodios mediáticos más relevantes para la «relación civil-militar», por cuanto el nuevo comandante en jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre, pronunció en junio de 2003 un histórico discurso que marcó una inflexión con el legado dictatorial previo: «Me refiero al nunca más de una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973. Nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida»^[66]. Otro de los hitos relevantes a tener en consideración en un alejamiento público del Ejército con la figura de Pinochet y el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos fue la declaración pública de ocho ex oficiales de alto rango que señalaron: «Estimamos que cualesquiera sean las condiciones bajo las cuales se efectuaron las exhumaciones, éstas constituyen acciones que no se condicen con el recto proceder que deben orientar la conducta militar [...] Lamentamos el dolor que

estos hechos han producido. Reconocemos la existencia de problemas en materia de derechos humanos, los que no pueden volver a repetirse»^[67].

Finalmente, las reformas constitucionales tramitadas por el presidente Lagos permitieron quitar el rango supraconstitucional como garantes del Estado que ostentaba el Ejército a través del Consejo Superior de Seguridad Nacional y la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas (D.S. n°100 de 17 de septiembre de 2005).

Durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet (2006-2010), el énfasis se colocó en consolidar la institucionalidad internacional de derechos humanos a través del impulso a la ratificación del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, del Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y del Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además se promovió la idea del expresidente Ricardo Lagos de crear el Defensor del Pueblo y se sentaron las bases para la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, se buscó dar continuidad al proceso de acreditación de ejecutados, de la búsqueda de detenidos y de la acreditación de víctimas de prisión política y tortura. En el ámbito de la defensa, se buscó consolidar el proceso de redefinición de la relación civil-militar, con la elaboración del tercer *Libro de la Defensa Nacional* publicado en 2010 donde la participación en el ámbito interno quedó definida para situaciones de catástrofe natural y en el internacional, se redefinió su rol de observador a actor. Ello implicó una definición de la política de defensa como «com-

64.- *Revista Qué Pasa*, 21 de marzo de 2000.

65.- J. Rodríguez, *Historia de la relación civil-militar en Chile*, p. 96.

66.- Discurso dado en la ciudad de Calama, el 13 de junio de 2003.

67.- «Ex generales ligados al régimen de Pinochet asumen responsabilidad en violaciones a los derechos humanos», *La Tercera*, 3 de julio de 2003.

prensiva, es decir, se funda en el principio de cooperación en el marco internacional, especialmente de las Naciones Unidas, haciendo suyos principios de nuestra política exterior»^[68].

Durante su mandato, el general Óscar Izurieta Ferrer asumió el cargo de tercer comandante en jefe del Ejército con posterioridad a Pinochet, quien le correspondió afrontar el funeral del dictador Augusto Pinochet, quien pese a sus intenciones iniciales, no tuvo una ceremonia de Estado; terminó siendo cremado y sus restos resguardados en una cripta en el predio Los Boldos, de propiedad de la familia del ex dictador. En el ámbito simbólico, en el año 2009 el Ejército renombró la Escuela de Infantería en homenaje al general Calos Prats asesinado por la dictadura chilena en Argentina en 1974.

Al comienzo de la década del 2010 los principales desafíos de la «relación civil-militar» estuvieron dados por la participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a situaciones de riesgo y catástrofe (terremoto de febrero de 2010 y el mega incendio de 2014 en Valparaíso) y los casos de corrupción y malversación de fondos públicos a través de la utilización discrecional de la Ley Reservada del Cobre en 2014 conocido como «milicogate». No obstante, los hechos más complejos por sus reminiscencias políticas fue el manejo de la crisis política de octubre de 2019, utilizando el estado de excepción para el control del orden público y los casos de violaciones a los derechos humanos que se registraron en ese contexto. Al año siguiente, nuevamente se recurrió al Ejército esta vez bajo la figura del estado de catástrofe para contener la situación de orden y control interno originado por la pandemia.

68.- Ministerio de Defensa Nacional, *Libro de la Defensa Nacional*, Santiago de Chile, 2010, p. 134.

A comienzos de la década de 2020, nuevos escenarios de crisis política presionan para que las Fuerzas Armadas se reincorporen en labores internas en un escenario de polarización política y de incertidumbre constitucional. La extensión de los estados de excepción constitucional en la zona fronteriza, para contener la crisis migratoria en el norte y la prolongación del estado de excepción en la Araucanía cerca de dos años más para abordar el conflicto con el pueblo mapuche, presionan a las instituciones armadas en una reconfiguración de la relación civil-militar que muestra indicios de un uso instrumental para resolver problemas que son de competencias del poder ejecutivo y de las instituciones civiles y de orden público.

Un balance provisional

El estudio de la «relación civil-militar» es un elemento estratégico del estudio del Estado, la política y la sociedad. Las Fuerzas Armadas constituyen unas de las claves de la modernización de los Estados contemporáneos al constituirse en las instituciones que monopolizan el uso legítimo de la fuerza física y que funcionalmente administran los medios de coerción estatal. La consideración de la «relación civil-militar» posibilita entender la doble dimensión de la coerción y el consenso en las dinámicas del poder político, permitiendo con ello comprender la manera en cómo las sociedades en distintos contextos procesan sus desacuerdos políticos, mediante los canales institucionales de resolución de las diferencias o utilizando los medios coercitivos para llevar adelante objetivos políticos contra la institucionalidad. En el caso de Chile, el estudio de la «relación civil-militar» muestra cómo desde los comienzos del Estado nacional, los militares han tenido un rol preponderante en diversos momen-

tos de transformación política e institucional, conduciendo, interrumpiendo y/o reorientando los procesos de modernización.

En las ciencias sociales y en las humanidades chilenas existe un consenso respecto al proceso de politización e involucramiento político de las Fuerzas Armadas en el despunte del siglo XX, tomando como foco el proceso constitucional de 1925 y la posterior dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo. Con posterioridad, salvo algunos trabajos, el rol de los militares fue dejado en un segundo plano, desplazando su relevancia en parte de la historia reciente del país. Esto nos lleva a reconsiderar el rol de los militares chilenos en la segunda mitad del siglo XX, tanto en el golpe de Estado y la instalación de la dictadura militar, como en la transición y en la consolidación democrática.

La recomposición de la «relación civil-militar» en el proceso de consolidación democrática, requirió del alejamiento de las sombras del exdictador, para poder generar una gobernabilidad democrática sobre la defensa del país. No obstante, las crisis de confianza que arrastraron a las Fuerzas Armadas con el mega fraude por el uso de la Ley Reservada del Cobre en 2014, su utilización en labores de control de orden público en las protestas de 2019 y su utili-

zación como contingente para operaciones policiales ante al crisis migratoria y la profundización del conflicto en la Araucanía en los últimos años, presionan a la institución en un contexto de incertidumbre constitucional y polarización política que pone en riesgo la relación que se logró construir en el retorno a la democracia.

El estudio de la «relación civil-militar» nos permite mostrar algunas luces sobre este proceso, que a cincuenta años del golpe de Estado sigue constituyéndose en una clave de análisis realista de la política en el país. Así como uno de los principales desafíos de la gobernabilidad democrática de la defensa, de la generación de garantías efectivas de no repetición de las violaciones a los derechos humanos y del desarrollo de una democracia plena para el conjunto de los ciudadanos.

Como balance final, si tomamos como referencia la matriz de gobernabilidad democrática de la defensa, los principales desafíos pasan en aspectos judiciales, normas de transparencia, procesos de formación, modernización de la gestión de recursos, rendición de cuentas en materia derechos humanos y de generación de espacios de colaboración civil para procesos de modernización doctrinaria acorde a las realidad sociocultural del país.

La refundación capitalista de la dictadura cívico–militar, 1973–1983: Todo lo sólido se desvanece en el aire*

The capitalist refounding of the civic-military dictatorship, 1973-1983: All that is solid melts into air

Eduardo López Bravo

Universidad de Santiago de Chile

Resumen

En un contexto de aislamiento internacional y de grandes desafíos internos (1973–1981), el gobierno militar debía tomar decisiones sobre un proyecto de rearticulación económica dentro de un menú reducido de alternativas. Las opciones fueron: seguir una postura equidistante de las posiciones estatistas y de mercado que señalaba la «Declaración de Principios» de la Junta Militar (1974); o elegir la refundación neoliberal que proponía un grupo de asesores económicos formados en la Universidad de Chicago, que con indiferencia a las violaciones de Derechos Humanos, aspiraban a combinar autoritarismo político y liberalismo económico.

Palabras: Chile, modelo económico, neoliberalismo, Guerra Fría.

Abstract

In a context of international isolation and great domestic challenges (1973-1981), the military government had to make decisions on an economic project within a reduced list of alternatives. The options were: to follow a stance halfway between the statist and market positions set out in the «Declaration of Principles» of the Military Junta (1974); or to choose the neoliberal refoundation recommended by a group of economic advisors trained at the University of Chicago, who, indifferent to human rights violations, aimed to merge political authoritarianism with economic liberalism.

Keywords: Chile, economic model, neoliberalism, Cold War

*Este artículo contó con el financiamiento del Proyecto Fondecyt Postdoctorado N°3220287, «Chile 1973–1979: La Dictadura en la encrucijada y Corea del Sur como modelo posible».

Introducción

Hace ya más de medio siglo numerosos autores han destacado que no puede existir una buena historia económica sin una buena historia social^[1]. De esta manera, cualquier estudio de la economía chilena, particularmente del último cuarto del siglo XX, no solo debe considerar las profundas transformaciones del nuevo modelo económico que impuso el gobierno cívico-militar chileno^[2], sino que también debe considerar el desenvolvimiento en la esfera de la sociedad y el escenario internacional de la Guerra Fría Global (GFG)^[3].

Desde el punto de vista de la literatura asociada a la construcción del proyecto económico y social del régimen militar chileno, existen dos maneras de abordar el tema. La primera, y tal vez más extendida, ha centrado el análisis en las reformas implementadas por los economistas graduados principalmente en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, quienes tempranamente se habrían hecho

cargo de la conducción económica del gobierno militar. De acuerdo con este enfoque, la revolución capitalista chilena o, como la sabiduría convencional ha denominado, el modelo neoliberal chileno, sería desde un punto cronológico un fenómeno propio de la dictadura^[4]. Es la visión de los científicos sociales y economistas. La segunda es una tarea más ardua, pues demanda considerar las condiciones sociales, políticas, económicas e internacionales que, en el corto, mediano y largo plazo hicieron posible que esta revolución ocurriera. Ese es el camino de los historiadores, que han demostrado que los procesos que el país vivió durante los años 1970 son de larga data y que la instauración del modelo económico de corte liberal no respondió a un plan trazado anteriormente por los militares^[5].

Los militares arribaron al poder el 11 de septiembre de 1973 conscientes del agotamiento del modelo de desarrollo económico y, tan importante como lo anterior, de la agudización de los conflictos sociales y políticos, los cuales ya no solo se restringían al ámbito laboral, sino también a los que comenzaron a protagonizar nuevos actores. En efecto, las huelgas legales y sobre todo las ilegales aumentaron marcadamente desde 1953^[6]; también las ocupaciones

1.- Norman S. Buchanan y Howard S. Ellis, *Approaches to Economic Development*, New York, Torch Books, 1955, p. 406; Enrique Florescano, *La historia económica en América Latina*, 2 vols., México: FCE, Vol., I, 1972, p. 201; Luis Ortega, «La crisis 1914-1924 y el sector fabril en Chile», *Historia* 45, Vol., II, 2012, pp. 433-454.

2.- Adoptamos el concepto cívico-militar de Carlos Huneeus, *El régimen de Pinochet*, Santiago, Taurus, 2016, quien constata la decisiva participación de civiles durante los 17 años de la Dictadura de Pinochet. Desde esta perspectiva interpretativa fueron los civiles quienes diseñaron e implementaron las principales reformas económicas e institucionales del régimen militar. Pese a esta adscripción conceptual y para eludir reiteraciones, usaremos indistintamente, dictadura, régimen militar, para referirnos a un gobierno y a un período en que el poder estuvo centrado en Augusto Pinochet, en compañía de otros militares y de un número significativo de civiles.

3.- Concepto acuñado por Odd Arne Westad, *The Global Cold War*, London, Cambridge University Press, 2012, que contribuye a denotar que este fenómeno también tuvo su correlato en países o Estados no centrales, donde la polarización política se desarrolló activamente.

4.- Si bien el concepto de «Revolución Capitalista» fue acuñado por Manuel Gárte, previamente otros autores ya habían esbozado esta idea en los trabajos de Tomás Moulán, Pilar Vergara, Mario Góngora, Juan Andrés Valdés, Verónica Valdivia y Julio Pinto.

5.- Los siguientes textos y autores comparten la opinión de que la «revolución» neoliberal se concreta en desde 1975: Verónica Valdivia, *El golpe después del Golpe. Leigh vs Pinochet, 1960-1980*, Santiago, LOM Ediciones, 2003; Cecilia Montero, *La revolución empresarial chilena*, Santiago, Dolmen, 1997; Gabriel Salazar y Julio Pinto, *Historia Contemporánea de Chile, La economía: mercados, empresarios y trabajadores*, Santiago, LOM Ediciones, 2002; Manuel Gárte, *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012.

6.- Tomás Moulán, *Fracturas: De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende. (1938-1973)*, Santiago, LOM Ediciones, 2006.

de industrias^[7], y el fenómeno en las ciudades de los sin casa con la práctica de tomas de terreno^[8]. Todos estos antecedentes dejaron de manifiesto problemas de gobernabilidad que los proyectos sociopolíticos de transformaciones estructurales entre 1964 y 1973 no lograron resolver^[9].

En cuanto al escenario internacional, el régimen cívico militar chileno^[10] enfrentó una fase de transformación en la Guerra Fría, que se hizo más global^[11], en la medida que las regiones no centrales respecto del conflicto entre Washington y Moscú, iban protagonizando sus propias historias de Guerra Fría, en el contexto del fenómeno mayor, con características propias y con la capacidad de afectar, aunque fuese marginalmente, la tensión entre las potencias hegemónicas^[12]. Esta nueva Guerra Fría (global), se desarrolló de manera mucho más compleja de lo que pensaron los líderes de entonces, porque conflictos de la misma naturaleza que el protagonizado en la cúspide se desarrollaban por doquier y en cada lugar, el llamado juego de doble o triple nivel se expresaba a plenitud, delatando los inesperados grados de autonomía de los

actores de la GFG, que en cada nuevo hito (Cuba, 1959; Chile, 1970; Nicaragua, 1979; y El Salvador, 1981), revelaba que Washington perdía crecientemente el control de lo que ocurría^[13].

El objetivo de este artículo es ofrecer una mirada más compleja sobre la construcción del proyecto económico del gobierno cívico-militar. Se propone, entonces, explorar los antecedentes de esta opción y comprender más cabalmente la construcción del proyecto neoliberal del régimen de Pinochet. Como hipótesis principal se plantea que, durante los años 1973 y 1981, en un contexto de aislamiento internacional y con la urgencia de sobrevivir, el gobierno militar debía tomar definiciones sobre un proyecto/modelo económico dentro de un menú reducido de alternativas. En este escenario, las opciones eran seguir el camino señalado en La Declaración de Principios de 1974^[14], que planteaba una postura gradualista y equidistante de las opciones estatistas y de mercado; o elegir la opción neoliberal que le proponía un grupo de asesores económicos formados en la Universidad de Chicago; que combinaba autoritarismo político y un liberalismo económico que daba libertad de acción y apoyo a los empresarios privados.

Para elaborar este trabajo hemos revisado fuentes de archivo y prensa. En relación con las primeras, están constituidas por las Memorias Anuales y los documentos del Archivo General Histórico (AGHMRREE), ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (MINREL). También constituyeron

7.- Guillermo Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983: comportamiento sociopolítico y orientaciones ideológicas*, Santiago, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 1984.

8.- Mario Garcés, *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1979*, Santiago, LOM Ediciones, 2002.

9.- Mario Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*, Santiago, Editores La Ciudad, 1981.

10.- Heraldo Muñoz, «La política exterior chilena: La crisis continúa», *Revista Foro Internacional*, XXVI, 2 (102), 1985, 229-266.

11.- Odd Arne Westad, *The Global Cold War*, 2012.

12.- Tania Harmer, «Fractious Allies: Chile, the United States, and the Cold War, 1973-76», *Diplomatic History*, Vol. 37, 2013, pp. 109-143; Tania Harmer, *El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana*, Santiago: Ediciones UDP, 2013; Alfredo Riquelme y Tania Harmer, *Chile y la Guerra Fría Interamericana*, Santiago, Ril Editores, 2014.

13.- Robert D. Putnam, «Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games», *International Organization*. The MIT Press, Vol 42, 3, 1998, pp. 427-460; Martín Hollis, *Explaining and Understanding International Relations*. London, Oxford, 1991.

14.- Junta de Gobierno, *Declaración de Principios del Gobierno de Chile*, Santiago, División de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno, 1974.

un insumo las Actas de la Junta de Gobierno Militar (1973-1990) y medios como *La Tercera*, *Noticias de Última Hora* y *El Mercurio*. De esta manera, hemos podido reunir el material suficiente para reconstruir el proceso histórico que nos proponemos relatar.

Aparte de esta introducción, este artículo se organiza en cuatro apartados, la conclusión y la sección de fuentes y bibliografía. El primero de ellos presenta el contexto de aislamiento internacional del régimen de Pinochet; el segundo se refiere a la ausencia de proyecto económico del gobierno de las nuevas autoridades post 1973; el tercero examina la adopción del neoliberalismo como modelo/proyecto económico social durante el período 1975 y 1981; el cuarto evalúa el impacto que provocó la crisis económica de 1982-1983 en el proyecto refundacional. Finalmente, se presentan las conclusiones.

El desafío externo: el aislamiento internacional y la lucha por la supervivencia

La década de 1970 fue particularmente compleja para el régimen cívico-militar en el ámbito internacional^[15]. El repudio al gobierno chileno fue alimentado por una masiva campaña de solidaridad con las víctimas de la represión y los partidos políti-

15.- Durante esta fase debió enfrentar el aislamiento político de diversos gobiernos que habían mantenido una buena relación con el gobierno de Allende (como Francia, Italia y la URSS, entre otros), de partidos políticos internacionales de centro izquierda (PC, DC, PS, Social Democracia, etc.), de ONGs. de DD.HH., de redes de intelectuales y de artistas organizados en torno a *Human Rights Watch*, de múltiples organizaciones opuestas a las dictaduras del mundo, de parte del Congreso de EE. UU., y, en algún momento, de los propios gobiernos de EE.UU., e Inglaterra. Ver: Morris Morley and Chris McGillion, *Reagan and Pinochet. The Struggle over U.S. Policy toward Chile*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015; Martín Spring, *Los países parias: realidad y potencial del quinto mundo*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1980.

cos proscritos por el régimen en distintos países y en ambos lados de la cortina de hierro. Esta condena internacional alcanzó su máxima expresión el 16 de diciembre de 1977, cuando la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su 105° sesión plenaria, aprobó una resolución que condenó la sistemática violación de los Derechos Humanos cometidos por la dictadura encabezada por Augusto Pinochet^[16].

Una doble dimensión se expresó en las relaciones internacionales chilenas en los años setenta. En primer término, el régimen militar tuvo que enfrentar el rechazo y condena de muchos países pertenecientes al bloque occidental, a los que consideraba sus aliados naturales en la lucha contra el totalitarismo marxista^[17]. En la autopercepción de los militares, el movimiento del 11 de septiembre representaba la primera gran derrota de la ideología marxista en los últimos treinta años. En segundo lugar, en el marco de la GFG la política chilena adquirió un significado universal de anti-utopía no solo por su naturaleza, sino que por la recepción negativa del carácter autoritario y represivo del régimen y, especialmente, por la figura de Pinochet^[18].

16.- La resolución señaló: «profunda indignación por el hecho de que el pueblo chileno continúe sometido a violaciones constantes y patentes de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, siga careciendo de salvaguardias institucionales y judiciales adecuadas de sus derechos y libertades y sufriendo atentados contra la libertad e integridad personales, en particular por métodos de intimidación sistemática, inclusive la tortura, la desaparición de personas por motivos políticos, las detenciones, los encarcelamientos y los destierros arbitrarios y los casos de privación de la nacionalidad chilena» (MINREL, 1977, p. 618)

17.- Santoni, Alessandro y Sebastián Sánchez, S, «Los amigos de Chile: el régimen de Pinochet y la Gran Bretaña de Thatcher (1979-1988)», *Concepción, Revista de Historia*, 29 (1), 2020, pp. 401-428. <https://revistas.udec.cl/index.php/historia/article/view/7763/6943>. (Consultado: 29 de junio de 2023).

18.- Joaquín Fernandois, *La democracia en Chile. Trayectoria de Sísifo*, Santiago, Ediciones Universidad Católica de

Los militares chilenos estaban convencidos que serían aprobados por el mundo occidental y los gobiernos antimarxistas de América Latina; sin embargo, la reacción mundial fue muy distinta. La preocupación constante de la Cancillería chilena fue sobre lo que se dijo, reprodujo e imprimió en la prensa internacional sobre el régimen militar chileno. Las nuevas autoridades militares denunciaron constantemente que el gobierno debía contrarrestar la «campaña que contra Chile había iniciado el comunismo internacional». La Dirección de Difusión Cultural e Información Exterior (DINEX) del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE), distribuyó en las distintas Misiones en el exterior una serie de materiales impresos y actividades para «dar a conocer una imagen real y objetiva de lo que es Chile»^[19].

En la Ceremonia de Graduación de 48 egresados de la Academia Diplomática el 2 de diciembre de 1974, realizado en la sede del gobierno, el ministro de RR.EE, Vicealmirante Patricio Carvajal, manifestó que «a fin de superar la desinformación de los gobiernos y de la opinión pública mundial, el Servicio Exterior deberá hacer un esfuerzo significativo tendiente a difundir las causas reales del fenómeno que vivió la República y la situación actual de la nación»^[20]. En sesión secreta de la Junta de gobierno militar con los ministros del Interior y RR.EE., el Comandante de la Fuerza Aérea Jaime Lavín Fariña (a cargo de la Junta de Planeamiento del ministerio de RR.EE) sugería

como estrategia para revertir la mala imagen internacional del régimen «mejorar, por todos los medios a nuestro alcance, las relaciones con la prensa internacional, tanto en cuanto a los corresponsales extranjeros en Chile, como los periodistas de los medios de información de otros países»^[21]. Con todo, el gobierno militar terminó asumiendo rápidamente que gran parte de la comunidad internacional jamás aceptaría el régimen de Pinochet.

Transformado en un país paria a nivel global, «el Estado chileno pudo probarse en una situación de extremo aislamiento y amenaza, en donde la política exterior [fue] una combinación de acierto y azar»^[22]. Obligada a sobrevivir, la dictadura desarrolló una política exterior bastante más sofisticada al llamado estilo diplomático pretoriano ideológico que proyectó la Declaración de Principios de la Junta Militar, que en lo central proponía «combatir frontalmente contra el comunismo internacional y de la ideología marxista que éste sustenta»^[23].

Si bien la hostilidad del régimen militar hacia sus detractores fue abierta y directa, no fue todo el comportamiento internacional del gobierno. La política exterior de Chile también buscó la mayor colaboración posible con países en que la situación política chilena no sumaba negativamente en el contexto de repudio que el régimen de Pinochet recibió. El acercamiento bilateral en estos casos combinó el pragmatismo y las relaciones comerciales como estrategia para superar el aislamiento político y económico^[24].

Chile, 2020.

19.- *Memoria Anual de 1974*, Santiago, Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), 1974, pp. 547-556. Los oficiales de la Marina a cargo de las relaciones exteriores chilenas comprendieron la inutilidad de la confrontación en política exterior y terminaron asumiendo rápidamente que gran parte de la comunidad internacional jamás aceptaría el régimen de Pinochet.

20.- *Memoria Anual de 1974*, MINREL, p. 556.

21.- Junta de Gobierno, Acta Núm. 226-A, 18 de agosto de 1975.

22.- Joaquín Fernandois, «De una inserción a otra: Política Exterior de Chile, 1966-1991», *Revista de Estudios Internacionales*, 24 (96), pp. 445-446.

23.- Junta de Gobierno, *Declaración de Principios del Gobierno de Chile*, p. 1.

24.- A este respecto existe una no tan extensa bibliografía

En los términos anteriores, tempranamente los asesores civiles del régimen militar identificaron a España y Alemania como dos países europeos del mayor interés para Chile. La España de Franco actuó como aliado político más cercano^[25]. Junto con la proximidad sistémica anti-marxista de ambos regímenes, Pinochet y los militares miraron al franquismo como fuente de inspiración ideológica^[26]. Con Estados Unidos mantuvo una posición positiva hacia el gobierno militar hasta la llegada de Jimmy Carter a la Casa Blanca. Las consecuencias del asesinato del excanciller de Salvador Allende, el socialista Orlando Letelier, a manos de agentes de Pinochet, no solo enfriaron las relaciones entre la Junta y Washington, sino que Chile se transformó en un ejemplo de la conducta amoral de la política exterior norteamericana en su lucha anticomunista en América Latina y el Tercer Mundo^[27].

La clave del comportamiento diplomático hacia los gobiernos militares de América Latina también fue el componente ideológico antimarxista. Brasil se transformó en el apoyo más activo para el régimen de Pinochet en la región y un colaborador fundamental en el escenario internacional^[28]. Pa-

fía con los trabajos de autores como Joaquín Fernandois, «De una inserción a otra: Política Exterior de Chile, 1966-1991»; Heraldo Muñoz, «La política exterior chilena: La crisis continúa»; César Ross, *Chile y Japón, 1973-1989: De la incertidumbre a la alianza estratégica*, Santiago, Editorial LOM-USACH, 2007; César Ross, «Chile y Corea del Sur, 1973-1989: Las claves de un vínculo estratégico improbable», *Revista Aldea Mundo*, 49 (25), 2020, pp. 33-44; quienes han hecho una contribución importante.

25.- El reconocimiento español de la Junta Militar se verificó el 15 de septiembre de 1973. Memoria Anual de 1973, Santiago: Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), 1973, p. 58.

26.- Joaquín Fernandois, *Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004*, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004.

27.- *Ibid.*, pp. 437-438.

28.- Roberto Simón, *El Brasil de Pinochet. La dictadura bra-*

raguay también se presentó como aliado en la región. La relación diplomática de ambos regímenes fue funcional en su lucha anticomunista y de apoyo mutuo en la región. Con Argentina las relaciones diplomáticas durante la década de 1970 pasaron desde la alta complementariedad política y diplomática hasta derivar en reconocerse como enemigos ideológicos comunes. Ambos países fueron vistos como Estados ideológicos de carácter antimarxistas; sin embargo, las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países entraron en un camino de confrontación los últimos días de abril de 1977, cuando se conoció el Laudo Arbitral del Beagle que entregó la soberanía de las islas de Nueva, Picton y Lennox a Chile.

Los vínculos diplomáticos con los países del Este asiático, especialmente durante los años de la Guerra Fría, están dentro de lo que Peter Smith habría catalogado como de *alianza improbable*^[29]. A nuestro juicio dicha aseveración es a lo menos incompleta. Entre estas dos orillas del Océano Pacífico si hubo alianzas estratégicas robustas. El caso de Corea del Sur resultó paradigmático para el gobierno militar. Ambos países enfatizaron un modelo de relaciones internacionales pragmáticas, disociado de consideraciones políticas e ideológicas, que en la contingencia colaboró a contrarrestar los efectos del aislamiento internacional de ambos países y, en largo plazo, a reforzar un enfoque neorrealista y neoliberal de la política exterior de Chile. En este contexto, intuitiva o deliberadamente, Chile y Corea del Sur terminaron entablando una relación centrada crecientemente en lo económico y con una proximidad sistémica (anti-marxismo, autoritarismo político y

sileña, el golpe en Chile y la Guerra Fría en América del Sur, Santiago, LOM Ediciones, 2023.

29.- Peter H. Smith, *East Asia and Latin America. The Unlikely Alliance*, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, 2003.

liberalismo económico)^[30]. En este sentido, por excelencia, Corea del Sur se volvió el gemelo de Chile en el Este de Asia^[31].

El desafío interno: La ausencia de un proyecto económico y social, 1973-1975

Desde la década de 1950 se había puesto en evidencia en Chile la crisis integral^[32] de la estrategia de crecimiento vigente desde los años de 1930. Se trató no tan solo del desarrollo frustrado^[33] de una opción de modernización capitalista, sino que, además, implicó el cuestionamiento a los supuestos teóricos sobre los que se construyó dicho modelo. Desde los distintos sectores del espectro sociopolítico se levantaron alternativas que fueron presentadas en las elecciones presidenciales de 1970. Desde la derecha se gestó una respuesta que tenía como eje la liberalización de la actividad económica con la consiguiente reducción de la participación del Estado en la economía y el potenciamiento de los agentes privados del mercado en la asignación de recursos y el resguardo del derecho de propiedad^[34]. Por el centro emergió la pro-

puesta socialcristiana que incluía reformas estructurales, un reforzamiento del rol del Estado y la construcción de un orden social alternativo al liberalismo y al colectivismo socialista, denominado sociedad comunitaria^[35]. Por la izquierda la propuesta era el tránsito al socialismo, en su definición colectivista, lo cual demandaba la socialización de los medios de producción, es decir, su estatización^[36].

Las nuevas autoridades cívico-militares instaladas en el poder después del golpe de Estado de septiembre de 1973, junto con expresar un profundo rechazo al estatismo de la Unidad Popular (1970-1973), manifestaron en sus primeros años el interés de encontrar un nuevo modelo económico para recuperar la economía. La Declaración de Principios de la Junta Militar (1974) fue una expresión de esta preocupación en el marco internacional de la GFG. De acuerdo con su diagnóstico, el país debía buscar un camino propio que armonizara la libertad con el desarrollo económico, la justicia social y el desarrollo espiritual, distanciándose de las economías centradas en Estado y de las centradas en el Mercado.

Si bien los militares se erigieron como una fuerza de orden que monopolizó el po-

30.- César Ross, «Chile y Corea del Sur, 1973-1989: Las claves de un vínculo estratégico improbable».

31.- César Ross y Rodrigo Álvarez, *Corea del Sur y América del Sur: Lecciones de dos trayectorias*, Santiago, CHKSCP-USACH, 2018.

32.- Jorge Ahumada, *La crisis integral de Chile*, Santiago, Universitaria, 1966.

33.- Anibal Pinto Santa Cruz, *Chile un caso de desarrollo frustrado*, Santiago, Universitaria, 1959.

34.- Sergio de Castro, *El ladrillo. Bases de la política económica del gobierno militar chileno*, Santiago, Alfabetá, 1992; Arturo Fontaine Aldunate, *Los economistas y el Presidente Pinochet*, Santiago, Editorial Zig-Zag, 1988; Juan Gabriel Valdés, *Los economistas de Pinochet: la Escuela de Chicago en Chile*, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2020; Sofía Correa, *Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX*, Santiago, Editorial Sudamericana, 2005; Juan Pablo Couyoumdjian (ed.), *Reformas económicas e instituciones políticas: la experiencia de la misión Klein-Saks en Chile*, Santiago, Universidad del Desarrollo, 2011; Ricardo

Nazer, «Renovación de las élites empresariales en Chile», en José Ossandón, & Eugenio Tironi, *Adaptación. La empresa chilena después de Friedman*, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2012.

35.- Brian Loveman, *Chile, the Legacy of hispanic Capitalism* (3ª ed.), New York, Oxford University Press, 2001; Gabriel Salazar y Julio Pinto, *Historia Contemporánea de Chile, La economía: mercados, empresarios y trabajadores*, Santiago: LOM Ediciones, 2002; Ricardo A. Yocelvezky, *Chile: partidos políticos, democracia y dictadura, 1970-1990*, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2002.

36.- Ricardo Lagos, *La concentración del poder económico: su teoría, realidad chilena*, Santiago, Editorial Universitaria, 1961; Eduardo López, «El programa económico y social de la UP: su aplicación y la respuesta de los gremios empresariales», en V. A., y E. de Campos, *En Os 50 anos da Unidade Popular no Chile: um balanço historiográfico*, Minas Gerais, Editora Fino Traço, 2020.

der, lo cierto es que no tenían gran experiencia política ni conocimiento del Estado, como tampoco una hoja de ruta con el que pudiesen gobernar. El hecho es que al momento del golpe de septiembre de 1973 los militares no contaban con una propuesta consensuada sobre un proyecto/modelo económico a seguir. Varios factores contribuyeron en esta indefinición del régimen de Pinochet.

En primer lugar, el bloque sociopolítico que apoyó tempranamente a la dictadura era muy heterogéneo y se encontraba conformado por empresarios industriales, financieros y terratenientes expropiados, pequeños y medianos comerciantes, clases medias profesionales y dirigentes políticos de centro-derecha que respondía al sistema democrático que desapareció el 11 de septiembre de 1973^[37]. En segundo término, las Fuerzas Armadas fueron receptivas a los distintos discursos políticos y económicos de los grupos que las habían presionado para derrocar al gobierno de la Unidad Popular.

Como han señalado Verónica Valdivia, Manuel Gárate y Carlos Huneeus el Gobierno Militar durante la fase 1973-1975 se hallaban más cercanos al estatismo desarrollista que respecto a una transformación de corte neoliberal. En efecto, el objetivo de las Fuerzas Armadas fue romper con el estatismo de la experiencia de Allende, pero no necesariamente con el capitalismo industrial bajo supervisión del Estado que conocían desde la década de 1940^[38]. Durante

37.- En rigor, se trató de una base de apoyo funcional para la lucha política contra el gobierno de Allende y la posterior toma del poder, pero en ningún caso de un sector portador de un proyecto político y económico de futuro. Ver: José Miguel Ahumada y Andrés Solimano, «Modelo económico y democracia subordinada en Chile», en Karina Fernández, Juan Pablo Bohoslavsky y Sebastián Smart, *Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza*, Santiago, LOM Ediciones, 2019.

38.- Tomás Undurraga, *Divergencias. Trayectorias del neoli-*

la década de 1960, los oficiales de las Fuerzas Armadas no solo prestaron atención al tema del desarrollo económico, sino que también participaron de los debates en centros académicos. Al igual que otros actores sociales, un sector de los militares reflexionó respecto del estancamiento productivo, los índices económicos y los problemas sociales, siendo atraídos por las propuestas de cambio estructural de la década de 1960. Por tanto, los militares al momento del golpe tenían elementos de juicio para definir un plan de acción, pero en ningún caso un proyecto económico y social como fueron la Revolución en Libertad y la Vía chilena al Socialismo^[39].

Sin la posibilidad de profundizar en las fórmulas de solución ensayadas por los proyectos estructurales de los años previos a su mandato (la reforma agraria, la nacionalización de los recursos minerales y el traspaso de la propiedad productiva privada a la social), el régimen de Pinochet se encontraba en una encrucijada: ¿Cómo elaborar un proyecto/modelo económico que no implicara los conflictos patrimoniales y de orden público que se destararon durante la Unidad Popular?

El neoliberalismo como proyecto/ modelo de modernización económica del régimen de Pinochet, 1973-1981

¿Qué circunstancias permitieron que el régimen cívico-militar de Pinochet adoptara como proyecto económico la respuesta neoliberal? ¿Por qué apoyar un proyecto económico y social de corte neoliberal inédito en el concierto internacional? La respuesta debe encontrarse en la compleja coyuntura económica y política nacional y,

beralismo en Argentina y Chile, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2014, p. 26.

39.- Verónica Valdivia, *El golpe después del Golpe*, pp. 108-110.

particularmente, la dimensión internacional que debió enfrentar el régimen cívico militar de Pinochet durante la década de 1970. En el plano interno, el entramado económico y social que se había desarrollado desde mediados de la década de 1950 evidenciaba claros signos de agotamiento, los cuales quedaron plasmados en los círculos de opinión pública que demandaban la búsqueda de nuevas alternativas o fórmulas de desarrollo para el país^[40]. Por otra parte, la eficiencia del terror impuesto para neutralizar las acciones colectivas de la oposición comenzó a mostrar serias fisuras. Tal como lo demostró el caso de los 119, también conocida como «Operación Colombo», dejaba en evidencia que el régimen de Pinochet debía recurrir a acciones de montaje para encubrir la desaparición y muerte de militantes de izquierda a manos de los servicios de inteligencia^[41].

El escenario de las relaciones económicas internacionales también mostraba un contexto complejo. La década de 1970 transitó entre dos crisis económicas globales (1973-1979) que afectaron gravemente la estabilidad política y económica mundial, teniendo como telón de fondo un escenario internacional de prolongada inestabilidad en la fase final de la Guerra Fría Global. La economía mundial, sujeta a la arquitectura financiera diseñada en Bretton Woods, comenzó a tambalearse durante esta década, en la medida que los fundamentos de dicho modelo comenzaban a mostrar signos de desfase, fatiga y caducidad^[42].

40.- Una síntesis interesante sobre las alternativas de desarrollo discutidas durante la década de 1960 se encuentra en Osvaldo Sunkel, «Política nacional de desarrollo y dependencia externa», *Estudios Internacionales*, Vol. 1, 1, abril de 1967, pp. 43-75.

41.- Javiera Velásquez Meza, *Operación Colombo*, Santiago, Editorial Escaparate, 2023; Ver: <https://www.londres38.cl/1937/w3-article-105977.html>, (Consulta: 14 de julio de 2023).

42.- César Ross y Eduardo López, «El Comité de Coopera-

En ese contexto, el gobierno de Pinochet aprendió que la manera de combatir el aislamiento internacional y resolver los conflictos internos, al menos durante la fase 1975-1981, era explorando alternativas de modernización económica que en su fórmula incluyera autoritarismo político con colaboración económica público-privada. Se encontraron, entonces, las aspiraciones de un gobierno militar necesitado de éxitos económicos y un equipo de tecnócratas neoliberales con deseos de poner en práctica un saber económico que consideraban infalible. En otras palabras, Pinochet requería de un proyecto de modernización económica que salvara la situación económica interna y legitimara su gestión a nivel internacional; mientras los Chicago Boys necesitaban del respaldo político e institucional para implementar un drástico plan de contracción del gasto público y liberalización de controles de precios con el fin de desplegar las fuerzas del mercado y reducir la intervención del Estado en la conducción económica.

1973-1975: la estrategia de liberalización gradualista

Con cuotas de ensayo y error en materia de decisiones económicas, durante los primeros 19 meses del nuevo régimen militar no hubo cambio de modelo, solo una leve liberalización de importaciones anunciada como gradual y una restricción monetaria^[43]. De esta manera, la reducción de la inflación, la estabilización de la economía, eliminación de controles de precios, restitución de campos y fábricas ocupadas por

ción Económica Chile-Corea del Sur: Contra la incertidumbre, la alianza pública-privada», *Encrucijada Americana*, 12 (2), 2021, pp. 20-39.

43.- Ricardo Ffrench-Davis, *La pandemia neoliberal. Hacia una economía al servicios de la gente*, Santiago, Taurus, 2022, p. 17.

trabajadores fueron los ejes restauradores y funcionales con el poder perdido por los grupos propietarios en el marco de un proyecto económico ausente. La prioridad de los militares al asumir el control del país fue como señaló el Bando N° 5 de la Junta Militar: «restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdida»^[44].

En este marco, el Comité Asesor de la Junta (COAJ), creado oficialmente el 18 de mayo de 1974 con el Decreto Ley N° 460^[45], reflejó la heterogeneidad del bloque insurreccional en el poder y de las tendencias tanto estatistas como aquellas proclives a liberalizar la economía dentro del gobierno. Controlado por Pinochet, funcionó como un organismo asesor en la toma de decisiones de planes o proyectos relacionados con la seguridad, la política interior y exterior en materia económica y social, integrando en sus filas a altos mandos militares de las Fuerzas Armas y de Orden, asesores civiles y personal de la administración pública. Entre las tareas desarrolladas por este organismo destacó la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA) y las Líneas de Acción de la Junta de Gobierno de

Chile^[46]. Este último documento, publicado en marzo de 1974, definía los objetivos nacionales del gobierno en materia social y económico del gobierno militar y se encontraba en línea con La Declaración de Principios de la Junta Militar (1974).

Los primeros tres meses de 1975 resultaron particularmente complejos en términos económicos para las nuevas autoridades militares. En el marco de una coyuntura internacional adversa (alza explosiva del valor del petróleo desde la crisis de suministro y la caída del precio del cobre), los magros resultados en el control de la inflación y la creciente imposibilidad para renegociar la deuda externa dejaron en evidencia para el mes de febrero que el país se encontraba, en palabras del ministro de Hacienda Jorge Cauas, en una «emergencia económica»^[47]. En efecto, en el primer trimestre de 1975 el IPC alcanzó el 60.9%, acumulando en los últimos 12 meses (abril 1974-marzo 1975) un total de 371,9%. Adicionalmente, la producción industrial cayó un 28%, el PIB decreció un 17% y el desempleo se empinó al 20% de la fuerza de trabajo^[48]. Al mismo tiempo los salarios habían perdido poder adquisitivo a causa de la drástica represión y persecución de la actividad sindical y los reajustes legales basados en un Índice de Precios al Consumidor (IPC) adulterado por los conductores de la política económica del régimen militar^[49].

44.- Bando N° 5, *El Mercurio*, 26 de septiembre de 1973, p. 23

45.- De acuerdo con Ladislao D'Hainaut Fuenzalida, integrante del COAJ y Capitán de Navío de la Armada de Chile, el Comité se originó poco después del 11 de septiembre, cuando la Junta de Gobierno consideró la necesidad de contar con una asesoría directa y permanente en diversos temas. Contrario a lo señalado por Manuel Gárate y Verónica Valdivia, el Comité no fue una instancia puramente militar y tampoco funcionó como una suerte de Estado Mayor. El primer trabajo significativo del COAJ fueron las Líneas de Acción de la Junta de Gobierno de Chile. Ver Ladislao D'Hainaut Fuenzalida, «El Comité Asesor de la Honorable Junta de Gobierno», *Revista de Marina*, Año XCII, Vol. 95, 712, pp. 246-247. ver: Manuel Gárate, *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, pp. 187-188; Verónica Valdivia, *El golpe después del Golpe*, pp. 124-125; Julio Canessa Robert, *Quiebre y recuperación del orden institucional en Chile. El factor militar, 1924-1973*, Santiago, Emérida Ediciones, 1995, p. 197.

46.- El texto «Líneas de Acción de la Junta de Gobierno de Chile» fue publicado el 10 de marzo de 1974 y presentado en Ceremonia Oficial en el Edificio Diego Portales por la Junta de Gobierno. Ver: «Mensaje de Junta de Gobierno a 6 meses de asumir el poder», *El Mercurio*, 11 de marzo de 1974, pp. 1-8; «Líneas Generales de Acción de la Junta de Gobierno», *La Tercera de la Hora*, 10 de marzo de 1974, pp. 17-19.

47.- «Descarnado cuadro de la economía chilena presentó el ministro Jorge Cauas en Consejo del CIES», *La Tercera de la Hora*, 22 de febrero de 1975. p. 15.

48.- Ricardo Ffrench-Davis, *La pandemia neoliberal*, p. 18.

49.- René Cortázar y Jorge Marshall, «Índice de precios al

Se hizo cada vez más evidente que las medidas económicas gradualistas impulsadas por un equipo de asesores que incluía especialistas «tradicionales» (como Raúl Sáez y Jorge Marshall), y los neoliberales (como Pablo Barahona y Sergio de Castro), funcionaba con fórmulas de parche, de respuestas del día a día, y con resultados que conducían al abismo económico.

1975: los *Chicago Boys* en la conducción económica del gobierno militar

El control de los economistas neoliberales en la conducción económica del gobierno militar se había iniciado con el cambio de gabinete de julio de 1974, cuando fue nombrado ministro de Hacienda el ingeniero civil demócratacristiano Jorge Cauas, quien fue el primer civil en ocupar la dirección de una cartera ministerial bajo el régimen militar^[50]. Junto con la llegada de Cauas, un grupo de jóvenes tecnócratas fueron llamados a ocupar cargos en las subsecretarías ministeriales, agencias de gobierno e instituciones públicas, quienes vinieron a sumarse a Sergio de Castro (asesor del ministerio de Economía) y Roberto Kelly, director de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN)^[51].

¿Quiénes fueron los economistas de Pinochet, también conocidos como los *Chicago Boys*? Se trataba de un grupo de economistas con estudios de posgrado en la Universidad de Chicago, quienes fueron

becados en el marco del convenio de cooperación académica firmado entre el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, dirigido por Theodore Schultz, y el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Chile. Entre los años 1955 y 1963, cerca de treinta jóvenes economistas fueron beneficiados por el acuerdo, lo cual dio lugar a la formación de un grupo de economistas que fueron popularmente conocidos como los *Chicago Boys*^[52].

Destacaron entre sus integrantes Sergio de Castro, Florentino Fellay, Víctor Oxenius, Carlos Massad y Luis Arturo Fuenzalida, Ernesto Fontaine y Pedro Jestanovic. En este grupo de tecnócratas no todos provenían de Chicago, como fue el caso de José Piñera, Hernán Büchi y Jorge Cauas; sin embargo, todos estuvieron influidos doctrinariamente por Milton Friedman y, en algunos casos por Friedrich Hayek, compartiendo la idea de una economía basada en el libre mercado y en la limitación del papel interventor que tenía el Estado, exclusivo camino para resolver los problemas que Chile enfrentaba en términos de desarrollo^[53].

La consolidación de los *Chicago Boys* en la conducción económica del régimen militar estuvo acompañada de dos importantes movimientos estratégicos. En primer lugar, el cambio de gabinete ministerial de abril de 1975, que confirmó en el equipo econó-

consumidor en Chile: 1970-1973», Santiago, *Estudios CIEPLAN*, 4, Noviembre 1980, pp. 159-201; *Revista Mensaje*, 296, enero-febrero 1981, pp. 41-45.

50.- *La Tercera de la Hora*, 12 de julio de 1974, pp. 1-5. «Ahora comienza la segunda fase».

51.- Con el cambio de gabinete de 11 de julio de 1974, cuatro nuevos subsecretarios asumieron cargos de responsabilidad: Pedro Larrondo Jara en Hacienda; Humberto Pizarro Birrón en Previsión Bancaria; Gastón Etcheverry Orthus en Vivienda y Renato Gazmuri en Agricultura. *La Tercera de la Hora*, 11 de julio de 1974, p. 12.

52.- Arturo Fontaine Aldunate, *Los economistas y el presidente Pinochet*, 1988; Juan Gabriel Valdés, *Los economistas de Pinochet: la Escuela de Chicago en Chile*, 2020; Manuel Gárate, *La revolución capitalista de Chile*, 2012; Sebastián Rumié Rojo, «Chicago Boys en Chile: Neoliberalismo, saber experto y auge de una nueva tecnocracia», *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Época, Año LXIV, 235, enero-abril de 2019, pp. 139-164.

53.- Joaquín Fermandois, *Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004*, p. 458; Juan Gabriel Valdés, *Los economistas de Pinochet*, 2022; Sebastián Edwards, *The Chile Project. The story of the Chicago Boys and the downfall of neoliberalism*, Princeton, Princeton University Press, 2023.



Primer equipo de Chicago Boys en gobierno de Augusto Pinochet. De izquierda a derecha: Alvaro Bardón (presidente Banco Central 1977-1981), Pablo Baraona (ministro de Economía 1976-1978), Sergio de la Cuadra (vicepresidente Banco central 1978-1981) y Sergio de Castro (ministro de Economía 1974-1976; ministro de Hacienda 1977-1982) (Fuente: *La Tercera de la Hora*, circa 1978).

mico a Jorge Cauas como titular de Hacienda, agregando en el ministerio de Economía a Sergio de Castro y en la dirección del Banco Central a Pablo Baraona. En segundo lugar, la promulgación del Decreto Ley N° 966, mediante el cual Jorge Cauas fue investido de poderes extraordinarios para mantener bajo su control 10 ministerios, los organismos estatales dependientes de estos ministerios, ODEPLAN y la Corporación de Fomento (CORFO). Adicionalmente, quedó facultado para proponer la remoción y designación de funcionarios en los Ministerios y organismos referidos que no estuvieran alineados con la nueva política económica^[54].

54.- Decreto Ley N° 966: Modifica Estructura de Conducción Económica. Ver: «Jorge Cauas: Las facultades del superministro», *El Mercurio*, 12 de abril de 1975, pp. 1-8.

En tercer lugar, y para posicionar el ideario neoliberal frente a las autoridades militares, los economistas de Chicago debieron desarrollar una intensa «batalla ideológica» (o lucha de ideas) contra los distintos grupos políticos y sectores económicos que habían participado de la oposición al gobierno de la Unidad Popular. En esta tarea, contaron con la colaboración de la totalidad de los medios de prensa escrita y, especialmente, de la asesoría en calidad de expertos que proporcionaron Arnold Harberger^[55] y Milton Friedman.

55.- Arnold Harberger formó parte de los académicos norteamericanos que visitaron Chile en el marco del Convenio entre el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Chile, celebrado el 29 y 30 de marzo de 1956. En opinión de Arturo Fontaine, Harberger ejerció una influencia decisiva en la primera generación de graduados de Chicago. Ver: Arturo Fontaine Aldunate, *Los economistas y el Presidente Pinochet*, pp.

Arnold Harberger constituyó un guía espiritual para los graduados chilenos de Chicago, con quienes estableció estrechos contactos de amistad. Visitó en cuatro ocasiones el país durante los años 1974-1976, coincidiendo en dos de ellas con los cambios ministeriales de julio de 1974 y marzo de 1975. Las conferencias que realizó en círculos empresariales y las asesorías que realizó al equipo económico del gobierno militar confirman su particular interés por los cambios económicos que siguieron al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973^[56].

El viaje que Milton Friedman realizó al país constituye un capítulo especial en la trayectoria de la implantación del proyecto neoliberal. Las repercusiones internacionales de su estadía en Chile acompañaron a Friedman el resto de su vida, al punto de colocar en riesgo la obtención del premio Nobel de Economía de 1976. Aterrizó en Santiago el jueves 20 de marzo de 1975 acompañado de su esposa Rose Friedman y los asesores económicos Arnold Harberger y el brasileño Geraldo Langoni^[57]. Invitado por la Fundación de Estudios Económicos, centro de estudios privado que dependía del Banco Hipotecario de Chile (BHC), controlado por Javier Vial. En Viña del Mar, habló en la Escuela de Negocios de Valparaíso; a su regreso en Santiago participó

en varios encuentros con diversas autoridades y representantes del mundo privado, dio dos charlas abiertas en la Universidad de Chile y la Universidad Católica^[58]. Cabe destacar que, en los primeros años de la década de 1970, Friedman venía desarrollando con otros colegas monetaristas una intensa campaña ideológica conservadora de descalificación del nekeynesianismo en las altas esferas del poder en Washington y, además, en muchos departamentos de economía de las universidades norteamericanas^[59]. De ahí la importancia estratégica que tuvo para Friedman la visita a Chile. Se trataba de contribuir en la consolidación de las bases del libre juego de las fuerzas del mercado que promocionaba precisamente en un país que durante la administración de Salvador Allende alcanzó una reputación internacional con la «Vía chilena al socialismo».

Las recomendaciones que Friedman realizó sobre la marcha económica del país y, especialmente, las evaluaciones que emitió sobre las medidas que adoptaba el equipo económico del régimen militar fueron ampliamente difundidas por los medios de prensa. De acuerdo con su análisis, las dificultades económicas del país no se encon-

24-25.

56.- Arnold Harberger, *Cuatro momentos de la economía chilena*, Santiago: Fundación de Estudios Económicos (BHC), 1976, pp. 7-11; Ángel Soto y Francisco Sánchez (comp.), *El «Padre» de los Chicago Boys. Arnold Harberger*, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2013.

57.- Carlos Langoni obtuvo el doctorado en Economía en Chicago en 1970 y en 1975 se desempeñaba como subdirector de la Escuela de Posgrados en Economía de la Fundación Getulio Vargas. Citado por Manuel Gárate, «1975: La Refundación Capitalista», en Alessandro Guida, Rafael Nocera, Claudio Rolle (Comps.), *De la utopía al estallido. Los últimos cincuenta años en la historia de Chile*, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2022, p. 59.

58.- El detalle de la visita de Milton Friedman en Chile y de las conferencias que dictó en Ángel Soto (comp.), *Un legado de libertad Milton Friedman en Chile*, Santiago, Instituto Democracia y Mercado/Atlas Economic Research Foundation / Fundación para el Progreso, 2012; Rolf Lüders y Francisco Rosende, *Milton Friedman. La vigencia de sus contribuciones. Metodología, teoría y política económica*, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2014; Jorge Yaitul, «Los años del capitalismo renovado: la influencia de Milton Friedman en Chile. La instauración del modelo económico. Primera parte, 1974-1984», *Espacio Regional*, vol. 2, 8, Osorno, 2011, pp. 57-76; Leónidas Montes, «El viaje que Milton Friedman no pudo olvidar», 12 de mayo 2020, <https://revistasantiago.cl/historia/el-viaje-que-milton-friedman-no-pudo-olvidar/> (consulta: 10 de julio de 2023)

59.- Carlos Marichal, *Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 1873-2008*, Barcelona, Random House Mondadori S. A., 2012, p. 183.



Milton Friedman en conferencia de prensa en la ciudad de Viña del Mar en noviembre de 1981, en el marco de la «Conferencia Regional de la Montt Pélerin en Chile» (Fuente: *La Tercera de la Hora*).

traban en los efectos de la crisis internacional del petróleo o del cobre, «los problemas de Chile son de manufactura chilena» y radicaban fundamentalmente «en (su) propia organización y estructura»^[60]. En opinión de Friedman, «la única manera de que se pueda terminar la inflación es poniendo fin en forma drástica al déficit fiscal, preferentemente reduciendo el gasto público»^[61]. De las actividades que desarrolló Friedman en Santiago se ha destacado la entrevista con el dictador Augusto Pinochet. El encuentro se realizó el 21 de marzo por espacio de casi una hora. En esa ocasión, y según reconoció posteriormente el propio Friedman, volvió a insistir en adoptar medidas radicales mediante un plan de shock para frenar la inflación y promover la libertad económica. El 21 de abril, el economista refrendó sus recomendaciones en Carta dirigida a Pino-

60.- «Economía social de mercado: única vía», *El Mercurio*, 23 de marzo de 1975, pp. 1-8.

61.- «Friedman sugirió reducción del 20% de gastos fiscales», *El Mercurio*, 27 de marzo de 1975, p. 19.

chet. En la misiva proponía 8 medidas ineludibles para enfrentar los problemas de la economía chilena, se trataba de un programa de shock que:

«... podría eliminar la inflación en cuestión de meses. También fundaría las bases necesarias para lograr la solución de su segundo problema: la promoción de una efectiva economía social de mercado. Este no es un problema de reciente origen, sino que surge de tendencias al socialismo que comenzaron hace 40 años y que alcanzaron su lógico, y terrible clímax, durante el régimen de Allende. Ustedes han sido extremadamente sabios en la aplicación de las muchas medidas que ya han tomado para revertir esta tendencia»^[62].

En opinión del economista liberal Sebastián Edwards, la visita de Friedman marcó

62.- Carta de Friedman a Pinochet, 21 de abril de 1975, <https://www.economiaysociedad.cl/la-carta-de-friedman-al-presidente-pinochet> (consulta: 13 de julio de 2023)

un punto de inflexión en la historia económica del Chile de fines de siglo XX. En sus palabras, «existiría un antes y un después de Friedman». Aunque el programa de austeridad económica que proponían los economistas graduados en Chicago muy probablemente venía discutiéndose en el equipo económico del gobierno militar, la visita del economista monetarista y su vehemente defensa sobre las virtudes de la libre empresa terminó por convencer a un dubitativo Pinochet que la mejor estrategia para resolver la acuciante situación económica era apoyar un plan de «shock» fiscal junto con reformas orientadas al mercado. Con todo, el apoyo del dictador a los Chicago Boys fue condicional, pues seguía desconfiando de los civiles en general y de los economistas en particular. Correspondió, al COAJ asumir la función de contrapeso económico a las medidas adoptadas o sugeridas por los Chicago Boys, generándose intensos debates en temas relacionados con las privatizaciones, la reforma laboral y de pensiones, el papel de los sindicatos y la política cambiaria^[63].

El «programa de recuperación económica»

La estadía de Friedman, Harberger y Langoni se produjo tres semanas antes del cambio de gabinete de abril de 1975 y la posterior difusión del programa de recuperación económica (Tratamiento de Shock) elaborado por Jorge Cauas como superministro el 24 de abril del mismo año^[64]. Las medidas de shock contemplaron no sólo recortes drásticos de gastos público, sino que incluyó la devolución del sector expropiado o intervenido durante la Unidad Popular, la liberalización de precios, el pago de IVA a

bienes de consumo de primera necesidad y el recargo de contribuciones en las propiedades urbanas y agrícolas. Como parte de la estrategia o, quizás como consecuencia de la acuciante situación económica, se redujo drásticamente el aparato del Estado y la burocracia dependiente del fisco. Se instalaba entonces una nueva orientación de la economía política del país.

Los análisis económicos acerca del desempeño de la economía chilena posteriores al mes de abril de 1975 y de la aplicación de las reformas económicas de corte neoliberal, en particular, han llegado a un balance casi definitivo acerca de sus resultados en el crecimiento económico durante el período a que se refiere este estudio. De acuerdo con Bárbara Stallings las transformaciones impulsadas se concentraron en lo fundamental en cuatro áreas: comercial, financiera, de capitales y privatizaciones^[65].

En el ámbito comercial, los economistas de Chicago sostenían que se debía poner término a la etapa de la sustitución de importaciones y abrir progresivamente la economía al principio de las ventajas comparativas del país, respondiendo a las demandas que ofrecía el mercado mundial. Entre 1975 y 1979 fueron progresivamente desmontando los aranceles de tasas cercanas al 35% hasta llegar al 10% (excluyendo automóviles), lo cual contribuyó a la entrada masiva de bienes importados, afectando la sobrevivencia de muchas industrias nacionales^[66]. En cuanto a las medidas financieras, las decisiones no fueron menos radicales. A fines de 1975 se liberaron las tasas de interés, permitiendo a la banca establecer sus

63.- Sebastián Edwards, *The Chile Project. The story of the Chicago Boys and the downfall of neoliberalism*, p. 97.

64.- «Así son las medidas», *Las Últimas Noticias*, 25 de abril de 1975, p. 23.

65.- Bárbara Stallings, «Las reformas estructurales y el desempeño socioeconómico», en Ricardo Ffrench-Davis y Bárbara Stallings (eds.), *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973*, Santiago de Chile, LOM Ediciones/CEPAL, 2001.

66.- Patricio Meller, «El modelo económico de la dictadura militar», p. 266.

propias tasas para préstamos y depósitos. Asimismo, se permitió la creación de financieras, que entregaron créditos sin ningún control y que dieron origen a los primeros casos de operaciones fraudulentas en el verano de 1976^[67]. La banca fue privatizada completamente, entrando en escena los grupos económicos, que, con inversiones en muchos casos irregulares, a través de préstamos de dinero relacionados entre sus propias empresas, produjeron una enorme expansión del crédito, aumento sostenidos de las tasa y la posterior morosidad, con la consecuencia final de la insolvencia de la mayoría de los bancos privados durante la crisis económica de 1982.

Desde 1975 se abrió la cuenta de capitales para extranjeros y agentes nacionales no bancarios. Utilizando el Decreto ley 600 del año 1974, se modificó la legislación sobre inversión extranjera, sacrificando la permanencia en el «Pacto Andino». En adelante, los bancos nacionales fueron autorizados a gestionar créditos externos y desde 1980 a prestar dinero en el exterior, estrategia que también colapsaron con la crisis de la deuda en 1982. Respecto a las privatizaciones, estas operaron en dos momentos. Entre 1973 y 1975 se restituyeron 257 empresas y alrededor de 3.700 parcelas y fundos transferidos ilegalmente al Estado durante la Unidad Popular, lo cual no implicó transacciones monetarias. Desde 1975, comenzó el desmantelamiento del área de Propiedad Social (APS)^[68], privatizando

67.- En el verano de 1976 se produjo la quiebra de la financiera Cooperativa de Ahorro y Créditos la Familia, involucrando a integrantes del gremialismo y el Frente Juvenil de Unidad Nacional creado por Jaime Guzmán en 1975. Manuel Gárate, «1975: La Refundación Capitalista», p. 57; María Olivia Monckeberg, «La familia informal de los gremialistas en dictadura», *The Clinic*, 20 de noviembre de 2017, <https://www.theclinic.cl/2017/11/20/la-familia-la-financiera-informal-los-gremialistas-dictadura/> (Consulta: 8 de julio de 2023)

68.- En el Programa de la Unidad Popular se definió como

empresas creadas por el Estado a precios muy inferiores a su valor real a través de préstamos otorgados por el Banco Estado y la CORFO. Según estimaciones de Patricio Meller, la mayoría de estas empresas fue adquirida con un pago equivalente del 10% y 20% del monto total^[69].

El proceso de privatizaciones –cual destrucción creativa– originó la recomposición y rearticulación del mapa de los grupos económicos y el surgimiento de nuevos actores empresariales que se beneficiaron del proceso privatizador de las empresas del Estado^[70]. En efecto, en una primera etapa de privatizaciones cinco grupos económicos llegaron a controlar el 53% de los activos de las 250 empresas privadas más grandes del país y el 82% de los activos del sistema bancario: Grupo Cruzat-Larraín, Grupo BHC, Grupo Matte, Grupo Angelini y Grupo Edwards. Los Chicago Boys estimularon la formación de grupos económicos a partir de las privatizaciones, porque estaban convencidos de que era esencial contar con conglomerados empresariales poderosos que en economías de escala como la chilena permitieran modernizar las empresas y llevarlas a competir en los mercados internacionales^[71].

Las dirigencias gremiales en general y

parte del proceso de transformación de la economía constituir un área estatal dominante (Área de Propiedad Social), formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Ver: <http://www.abacq.net/imagineria/frame5b.htm>, (Consulta: 14 de julio de 2023).

69.- Patricio Meller, «El modelo económico de la dictadura militar», p. 264.

70.- Ricardo Nazer, «Renovación de las élites empresariales en Chile», pp. 85–108; Tomás Undurraga, *Divergencias. Trayectorias del neoliberalismo en Argentina y Chile*, 2004.

71.- Arturo Fontaine Aldunate, *Los economistas y el Presidente Pinochet*; Juan Gabriel Valdés, *Los economistas de Pinochet*, 2022.

los sectores empresariales, en particular, reaccionaron con cautela e incertidumbre frente a las decisiones sobre las orientaciones económicas. El apoyo al modelo se movió entre la adaptabilidad y una adecuación corporativa a las nuevas condiciones. Este fenómeno de adecuación hizo evidente la brecha entre aquellos que se insertaron rápidamente en el modelo económico neoliberal y aquellos que se vieron golpeados por las nuevas reglas del juego^[72]. Al revisar el perfil industrial en 1978, algunos rubros que habían logrado condiciones de competencia en los mercados abiertos fueron los *commodities* (principalmente madera, celulosa, pescado, cobre, y en menor medida, frutas y pescados). Por el contrario, la totalidad de la industria manufacturera sustitutiva (textil y metalúrgico) se había deprimido^[73].

Según las autoridades del gobierno militar las medidas adoptadas habían generado un milagro económico. Los medios de prensa hablaban en 1977 del «espiral ascendente» de la economía; para 1979, derechamente se planteaba del boom económico. Para tales objetivos propagandísticos, los Chicago Boys seleccionaron un conjunto de indicadores que dejaban en evidencia este milagro. Si bien los datos oficiales para el período 1976-1981 destacaron el casi 8% del Producto Interno Bruto (PIB), en opinión de Ffrench-Davis, las bases de comparación que establecieron fueron en referencia al año 1975, que correspondía a la gran contracción del 17% del PIB. La mayor parte del aumento del PIB desde 1975 hasta 1981 no fue crecimiento de la capa-

tividad productiva, sino que recuperación de su utilización. En términos estrictos, el PIB efectivo entre 1975 y 1981 fue sólo de 3% anual^[74].

Otro de los logros que más exhibieron las autoridades fue la fuerte disminución en la tasa de inflación anual, la cual descendió desde el 600% durante 1973 hasta menos del 10% en 1981^[75]. Adicionalmente, la producción de exportaciones creció a un promedio anual del 13,6% entre 1974 y 1981; sin embargo, su peso relativo en el PIB era limitado. El déficit público (excluyendo al APS) que había alcanzado un 21% del PIB en 1973, registró un superávit de 5,5% en 1980 y un 2,9% el año 1981. Los salarios reales aumentaron un 9% por año entre 1977 y 1981. No obstante, los salarios reales disminuyeron drásticamente en un 30% entre 1973 y 1975^[76]. La producción de exportaciones creció a un promedio anual del 13,6% entre 1974-1981; sin embargo, su peso relativo en el PIB era limitado. Todos estos indicadores llevaron a instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial a celebrar el despegue económico.

El resto del PIB sufrió una contracción sustancial, especialmente las manufacturas, que debió convivir con embates sucesivos de recesión desde 1975 como resultado de la intensa liberalización comercial. Otro de los principales problemas de las políticas neoliberales se registró en el ámbito del desequilibrio en el comercio exterior, con un déficit de cuenta corriente del 21% del PIB, el cual se financió con masivos crédi-

72.- César Ross y Eduardo López, «El Comité de Cooperación Económica Chile-Corea del Sur: contra la incertidumbre, la alianza pública-privada», *Encrucijada Americana*, Vol. 12, 2, 2020, p. 25.

73.- Guillermo Campero, *Los gremios empresariales*; Patricio Meller, *Un siglo de economía política chilena (1890-1990)*, Santiago, Uqbar Editores, 2016.

74.- Ricardo Ffrench-Davis, *La pandemia neoliberal*, p. 19.

75.- Patricio Meller, «El modelo económico de la dictadura militar», p. 270.

76.- Para un análisis crítico de los indicadores económicos del «milagro» véase René Cortázar y Patricio Meller, *Los dos chiles. O la importancia de revisar las estadísticas oficiales*, Santiago, Colección Estudios CIEPLAN 21, 1980, pp. 5-22.

tos externos de bancos comerciales internacionales^[77].

El proyecto neoliberal no se restringió tan sólo a la mejora de los indicadores económicos comentados. Como destacó Eduardo Silva, también introdujo una serie de modernizaciones sociales destinadas a hacer extensivos los principios del libre mercado a la organización de los servicios sociales y la administración de los servicios públicos^[78]. Se trataba, además, de desmontar los principales elementos de seguridad social bajo resguardo del Estado. Las medidas más destacadas fueron a) la reforma a la legislación laboral; b) la privatización del sistema de pensiones; c) la salud y, d) la educación. El principal objetivo de los economistas de Chicago fue introducir un cambio socio-cultural profundo, mediante el cual se reemplazó la noción de derecho social por el concepto de servicio, al cual se le asigna un precio de mercado y puede ser provisto por agentes públicos como privados^[79].

En definitiva, y en cuanto a los resultados, las reformas económicas iniciadas en 1975 dejaron en evidencia un crecimiento productivo artificial. El economista Patricio Meller lo calificó como un «Boom especulativo»^[80]. En el período 1974–1980, la tasa de inversión promedio fue del 11,1% en comparación con el 15,3% para el decenio

1960–1970. Asimismo, la tasa promedio de empleo en los años 1960–1970 y 1974–1980 fueron: 2,1% y 1,6%, respectivamente. En el caso de desempleo también aumentaron al 13,3% para 1974–1980, en comparación con el 6,5% de la década de 1960. En términos estadísticos la desigualdad entre los chilenos durante los dos quinquenios que van desde 1969 hasta 1978 que los quintiles de ingresos más bajos redujeron su participación en el consumo desde un 19,8% a un 14,5%, en cambio el quintil de mayores ingresos subió de un 43,2% a un 51%^[81]. De esta manera, los resultados del eufórico quinquenio 1977–1981 se encontraba cruzado por contradicciones que generaron deterioro en simultáneo del empleo, los salarios reales, el consumo per cápita y otros indicadores sociales que miden el acceso de la población a la vivienda, la salud y la educación^[82].

Contrariamente a los indicadores que comentamos, la propaganda oficial del régimen militar contribuyó a enfatizar cotidianamente tres ámbitos de la realidad económica entre 1976 y 1981: el nivel de consumo, el descenso de la inflación y el milagro económico del crecimiento. Eran los resultados rápidos que ofrecían los economistas de Chicago, quienes además se apoyaron en el elemento visual de las transformaciones: productos importados que llenaban las vitrinas y las calles, la construcción de centros comerciales y departamentos de lujo, todos con bienes suntuarios importados que ofrecían las evidencias empíricas del éxito económico que los medios de prensa escrita y

77.– Ver: Ricardo Ffrench–Davis, *Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Cuarenta años de políticas económicas y sus lecciones para el futuro*. Quinta edición. Santiago: JC Sáez Editor SpA, 2014, pp. 46–49.

78.– Eduardo Silva, «La política económica del régimen militar chileno durante la transición: del neoliberalismo radical al neoliberalismo pragmático», en Paul W. Drake & Iván Jaksic (Editores), *El difícil camino a la democracia en Chile, 1982–1990*, Santiago: FLACSO, 1993, p. 203.

79.– Para una revisión sobre las reformas sociales del régimen de Pinochet, ver: Manuel Gárate, *La revolución capitalista de Chile (1973–2003)*, pp. 262–283; Bárbara Stallings, «Las reformas estructurales y el desempeño socioeconómico», pp. 38–44.

80.– Patricio Meller, «El modelo económico de la dictadura militar», p. 271.

81.– Gabriel Salazar y Julio Pinto, *Historia Contemporánea de Chile, La economía: mercados, empresarios y trabajadores*, p. 56; Sebastián Edwards y Alejandra Cox Edwards, *Monetarism and liberalization. The Chile experiment*, Chicago, University of Chicago Press, 1991, pp. 167–1968.

82.– Véase los datos proporcionados por Alejandro Foxley, «Experimentos neoliberales en América Latina», Santiago, Estudios CIEPLAN, 7 (1984), p. 41.



Augusto Pinochet en reunión con *Chicago Boys* y representantes empresariales (Fuente: *La Tercera de la Hora*, circa 1984).

de televisión se encargaron de difundir. Las reformas económicas cumplían el objetivo de desmontar socioculturalmente la etapa de sustitución de importaciones. Para los economistas liberales había que abandonar la pretensión (errónea, por cierto) de generar las condiciones del desarrollo autónomo de la economía chilena fruto de los diseños políticos, sociales y económicos gestados con la restauración de la década de 1930. Había que asumir una nueva estrategia con énfasis en la modernización económica en vínculo estricto a la liberalización de la economía, las fuentes del capital externo y de la tecnología^[83]. En palabras de Sergio de Castro, «el modelo 'sustitucionista' había asignado mal los recursos productivos del país. Ese mismo modelo ya estaba integralmente agotado y no podía generar más desarrollo, sino al revés, estagnación»^[84].

83.- Joaquín Fernando, *Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004*, pp. 460-461.

84.- «De Castro enfrenta las críticas», *Qué Pasa*, 214, 10 de diciembre de 1975, pp. 10 - 12.

1982-1983: crisis económica y fin de la fase de neoliberalismo radical

Cuando las autoridades económicas del gobierno militar celebraban los éxitos que traía la apertura de la economía nacional, al mismo tiempo –sin dimensionar su magnitud– se estaban generando las condiciones estructurales para la extrema vulnerabilidad del país frente a las fluctuaciones de la economía mundial al comenzar la década de 1980^[85]. Durante el decenio 1970-1980 la flexibilización creciente de los mercados financieros alentó importantes flujos de capitales internacionales que multiplicó el número de bancos privados y arrastró a gobiernos latinoamericanos, del Medio Oriente y el Este de Asia, junto con la empresa privada de esos países, a un espiral

85.- Un examen de las fluctuaciones económicas del decenio 1980 y la «Década pérdida» en Latinoamérica en Víctor Bulmer-Thomas, *La historia económica de América Latina desde la independencia*, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 424-472; Rosemary Thorp, *Progreso, pobreza y exclusión. Una historia económica de América Latina en el siglo XX*, New York, Banco Interamericano de Desarrollo, pp. 215-255.

de endeudamiento sin precedentes^[86]. Algunos países latinoamericanos contrataron préstamos con tasas de interés relativamente bajas con los bancos globales para cubrir los déficits públicos y promover las empresas estatales; en el caso de las dictaduras militares de la región, buscaron la estabilización financiera y mostrar rápidos éxitos económicos^[87]. Ese fue el caso de Chile. Paradójicamente, el apoyo de los banqueros estadounidenses al régimen de Pinochet, con el aval del FMI y el Banco Mundial, generó un renovado endeudamiento externo que determinó los desequilibrios en las cuentas externas del país y la posterior debacle económica en la década de 1980.

El milagro económico chileno concluía con el peor ciclo recesivo entre los años 1981 y 1983, solo comparable con el período 1930 y 1932, y del cual no comenzaría a recuperarse sino hasta 1985–1986. El desenlace tuvo antecedentes claros en los desequilibrios acumulados desde 1975: un dólar barato sostenido por abundantes créditos bancarios externos, acompañado del retroceso generalizado de las exportaciones y el aumento del déficit de la balanza de pagos. La crisis de la deuda externa de América Latina que explotó en agosto de 1982 fue el corolario final al boom especulativo de las propuestas económica de los Chicago Boys^[88].

86.– Hasta hoy se debate si el fenómeno del endeudamiento de América Latina fue resultado de la oferta de préstamos por los bancos internacionales o la fuerte demanda de fondos de los gobiernos de los países latinoamericanos. Ver: Carlos Marichal, *Nueva historia de las grandes crisis financieras*, pp. 195–196.

87.– Véase Eric Toussaint, *Banco Mundial, el golpe de Estado permanente*, Barcelona, El Viejo Topo, 2007, pp. 83–96.

88.– Un estudio sobre los factores que desataron la crisis bancaria en Chile entre 1982 y 1986 se encuentra en Edgardo Barandiarán y Leonardo Hernández, «Origins and resolution of a banking crisis: Chile 1982–1986», *Documento de Trabajo*, 57, Santiago, Banco Central, diciembre

Chile en el concierto latinoamericano fue la nación con mayor déficit de cuenta corriente y la mayor deuda externa como proporción del PIB, siendo responsable el sector privado del 83,9% del total. Como consecuencia del shock internacional, el primer semestre de 1982 se produjeron 810 quiebras de empresas, el Producto Geográfico Bruto (PGB) cayó al 14,1% y la desocupación efectiva (que incluyó los planes de empleo mínimo) se empujó por encima del 30% de la fuerza de trabajo. La tasa de crecimiento económico también fue negativa en 1983; la industria y la construcción registraron tasas de crecimiento negativo de 21,1% en 1982 y del 23% durante 1983. El Banco Central registró una pérdida de sus reservas internacionales que al finalizar el año 1983 equivalía al 53,6% del nivel que tenía en 1981. La deuda externa alcanzó la suma de US\$ 17.100 millones en 1982 y el año siguiente el monto era aproximadamente un 13% superior al PIB. En cuanto al presupuesto fiscal registró un déficit de 2,3% del PIB durante 1982 y del 3,0% en 1983^[89]. La tasa de interés anual de corto plazo que alcanzó al 12% en 1980, se disparó al 39% en 1981 y se mantuvo en 35% en 1982. Por último, la tasa de inflación anual aumentó a más del 20% durante esos los años 1982–1983^[90].

El sesgo ideológico pro-neoliberal condujo a las autoridades económicas del régimen a la expectativa que el mercado resolvería por sí sólo los alarmantes indicadores económicos (los ajustes macroeconómicos automáticos) y que los problemas de deuda eran de carácter privado y no comprometían al sector público. Se originó así la

de 1999.

89.– Patricio Meller, «El modelo económico de la dictadura militar», pp. 272–273.

90.– Eduardo Silva, «La política económica del régimen militar chileno», p. 210; Patricio Meller, «El modelo económico de la dictadura militar», pp. 271–272.

preocupación del sector privado nacional e internacional respecto a la pasividad de las autoridades del gobierno militar para gestionar la crisis y expresaron sus reparos sobre el excesivo endeudamiento y la insistencia de la paridad cambiaria. El ministro de Hacienda, Sergio de Castro, insistía en no devaluar en base a la creencia que el retraso en el ajuste se explicaba en la indexación automática de los salarios según el IPC. De acuerdo con su análisis «... lo que teníamos que hacer era reducir las remuneraciones en un 12 o 13%, (así) subiría el tipo de cambio real sin devaluación, con lo que podíamos capear el temporal»^[91].

El 22 de abril de 1982 Sergio de Castro abandonó el ministerio de Hacienda y casi dos meses después (el 14 de junio) se aplicó una devaluación que puso fin al tipo de cambio fijo. Uno de los pilares básicos de la ortodoxia del equipo económico de Chicago había sucumbido. Entre junio y septiembre de 1982 la economía chilena se rigió por cuatro políticas cambiarias distintas: a) cambio nominal fijo de \$ 39/US\$ hasta el 14 de junio; b) devaluación abrupta del 18%; c) un ajuste gradual (0,8% de devaluación mensual) hasta el 5 de agosto; y desde el 29 de septiembre otra devaluación abrupta del 40%. Las consecuencias dramáticas de la tardía medida se encuentran aún presentes en la memoria colectiva de la época. Como destacó Patricio Meller, todo el mundo quería comprar dólares y los bancos comerciales no querían venderlos, además, nadie sabía cuál era el precio de la moneda norteamericana^[92].

Lo que sobrevino fue el colapso de los grupos económicos a comienzos de 1983, aumentó el nivel de deuda de las perso-

nas que contrajeron créditos en moneda extranjera (que alcanzaba a casi el 50% del crédito otorgado en mayo de 1982) y los bancos comerciales se vieron indirectamente afectados por la dificultad de sus clientes para pagar sus incrementadas deudas^[93]. El Estado debió intervenir casi la totalidad del sistema financiero a través de la liquidez que ofreció el Banco Central y asumir la deuda que obligaba sólo a los deudores en moneda extranjera y reprogramaciones especiales a los grandes grupos económicos. Con estas medidas el Estado se convirtió en el propietario de aproximadamente el 80% del sistema financiero privado y se hizo cargo de una gran cantidad de empresas cuyos bienes habían pasado a los bancos. Irónicamente, el Estado recuperaba por la fuerza de las circunstancias el papel económico preponderante que los Chicago Boys tanto habían luchado por anular. Se produjo la paradoja que, bajo la dirección neoliberal, la economía chilena alcanzó el grado de socialización que hubiese deseado el proyecto de la Unidad Popular.

La crisis de los ochenta condujo a una recomposición del mapa de grupos económicos. Los otrora poderosos grupos Cruzat-Larraín, BHC y Edwards fueron reemplazados por los grupos Angelini, Matte y Luksic^[94]. En cuanto a los gremios empresariales, el primer semestre de 1982 fue un momento de reflexión y debate frente a la agudización de los problemas económicos y laborales. El sector metalúrgico, textil y del comercio detallista hicieron pública sus críticas sobre el manejo de la política arancelaria y cuestionaron la versión oficial de que la crisis tenía un origen puramente externo^[95]. A pesar del clima de beligerancia,

91.- Patricia Arancibia Clavel y Francisco Balart Páez, *Sergio de Castro. El arquitecto del modelo económico chileno*, Santiago, Editorial Biblioteca Americana, 2007, p. 380.

92.- Patricio Meller, «El modelo económico de la dictadura militar», pp. 280.

93.- *Ibid.*,

94.- Ricardo Nazer, «Renovación de las élites empresariales en Chile», p. 102.

95.- *Revista Hoy* N.º 247, abril de 1982.

las asociaciones empresariales tradicionales, Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) lograron de manera pragmática adaptarse a las nuevas condiciones. En este escenario comprendieron que la solución a los problemas económicos no consistía en el retorno a una economía bajo supervisión estatal^[96]. Al asumir la presidencia de la CPC en julio de 1982, Jorge Fontaine, señaló «O nos ponemos de acuerdo todos o nos hundimos todos»^[97].

El colapso de la economía detonó un activo movimiento de protesta sumergido por la eficacia del terrorismo de Estado y que hizo tambalear al régimen militar. Durante tres años la oposición organizó todos los meses un «día de protesta nacional». Estas protestas fueron inicialmente promovidas por el movimiento laboral, pero pronto la clase media, los estudiantes universitarios y los partidos políticos luego de 10 años receso se integraron y asumieron el control. Fue en los sectores poblacionales periféricos de Santiago donde las protestas populares alcanzaron su forma más potente. Al menos un tercio de la población de la capital vivía en dichas áreas y padecía un nivel de desocupación cercano al 80%, además, muchos jóvenes que ahí habitaban nunca conocieron un empleo estable^[98].

En retrospectiva, la crisis de 1982–1983 no se tradujo en una vuelta atrás de las políticas de transformaciones neoliberales aplicadas por la dictadura militar, pero si obligó a un cambio de rumbo sobre la

ortodoxia económica y su relación con el contexto político y social del país. El liberalismo dogmático debió ceder espacio a un tipo de liberalismo de corte más pragmático. De acuerdo con el economista Orlando Caputo, Chile fue el país más afectado en América Latina durante la crisis de 1980. El PIB cayó al 14%, la producción industrial en un 23% y la desocupación alcanzó a nivel nacional el 30%^[99].

A diez años de la caída de la Unidad Popular, Chile había dejado de ser ejemplo internacional para economistas monetaristas como Friedman y el eufórico milagro económico del quinquenio 1977–1981 se había desvanecido. Sólo a finales de la década de 1980 la economía se había recuperado, reactivándose el PIB a los niveles alcanzados en los años setenta. Sin embargo, es importante constatar que, en los 17 años de dictadura, Chile se distanció de las economías desarrolladas y el promedio de crecimiento de la segunda mitad del régimen de Pinochet (1985–1989) fue tan sólo del 2,9% anual, cifra muy similar a la registrada en la primera mitad (1975–1981)^[100].

Es notable cómo los resultados económicos y sociales del gobierno cívico militar de Pinochet han sido ignorados o matizados por algunos economistas partidarios o cercanos a la ortodoxia neoclásica. Ciertamente, la explicación para estas omisiones u olvidos tienen origen en un sesgo ideológico pro-neoliberal. Si bien los economistas de Chicago no pueden exhibir éxitos económicos durante la gestión del gobierno militar, si lograron imponer en el debate público el

96.– Eduardo Silva, «La política económica del régimen militar chileno», pp. 219 – 221; Guillermo Campero, *Los gremios empresariales*, pp. 252–260; César Ross y Eduardo López, «El Comité de Cooperación Económica Chile-Corea del Sur», pp. 25–26.

97.– *Revista Hoy*, N° 260, julio de 1982, p. 7

98.– Alan Angell, «Chile, desde 1958», en Leslie Bethell (Editor), *Chile desde la Independencia*, Santiago, Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez, 2009, pp. 242–243.

99.– Citado por Manuel Gárate, *La revolución capitalista de Chile (1973 – 2003)*, p. 297. Ver: «Chile, de nuevo uno de los países más afectados por la crisis», *Rebelión*, 14 de noviembre de 2008, <https://rebelion.org/chile-de-nuevo-uno-de-los-paises-mas-afectado-por-las-crisis/> (Consulta: 21 de julio de 2023).

100.– Ricardo Ffrench–Davis, *La pandemia neoliberal*, pp. 21–22.

Cuadro 1: Indicadores Económicos y Sociales, 1958 – 1989 (Promedio anual periodos presidenciales en porcentajes)

Indicadores	Gob. Jorge Alessandri (1958-1964)	Gob. Eduardo Frei (1964-1970)	Gob. Salvador Allende (1970-1973)	Gob. Augusto Pinochet (1973-1989)
Crecimiento Económico (PGB)	3,7	3,9	1,1	3,5
Crecimiento Exportaciones	6,2	2,3	-4,2	10,6
Tasa de Inversión (% PGB)	20,7	19,3	15,9	18,7
Inflación (IPC)	25,8	26,2	218,1	57,3
Desempleo	7,5	5,5	3,9	17,3
Crecimiento Salarios Reales	1,8	9	-8,5	2,3
Crecimiento Consumo por Habitantes	0,9	2	2,9	-0,2
Familias Nuevas que No Obtuvieron Vivienda	20,1	8,9	1,8	43,8

Fuente: elaboración propia.

peso de un lenguaje técnico cuyo enfoque analítico remitió a la invención de la tradición; es decir, la construcción de relatos o, más apropiadamente, de mitos sobre la historia económica del país durante el siglo XX. Este relato sobre el desarrollo económico reciente fue la que sintetizó el graduado de Chicago Pablo Baraona en 1994, cuando afirmó que «tal vez la historia completa nos permita decir que Chile comenzó el siglo XX y lo terminó de buena forma. En medio, 1925-1975, desde el punto de vista económico, perdió el tiempo»^[101].

Reflexiones finales

¿Por qué el gobierno militar terminó adoptando una estrategia de modernización económica –hasta ese momento tan inédita como exótica– que le proponía un

grupo de jóvenes economistas graduados en Chicago? La respuesta se encuentra en la compleja coyuntura nacional e internacional que el régimen cívico militar de Pinochet debió enfrentar durante la década de 1970. El escenario de las relaciones económicas internacionales mostraba el agotamiento de las reglas de Bretton Woods: la supremacía de los Estados empresarios tendía a retroceder y las empresas privadas a sustituirlos en muchos de sus roles^[102]. En el contexto interno, el gobierno de Pinochet comprendió que la idea y/o aspiración de un modelo de Estado desarrollista en base a la Industrialización Orientada a las Exportaciones (IOE), que proponían los países del Este de Asia, especialmente, el coreano, requería de cuotas importantes

101.- Pablo Baraona, «Desarrollo y estabilidad. Una interpretación histórica». *Estudios Públicos* N° 53, 1994, p. 53.

102.- Susan Strange, *La retirada del Estado, la difusión del poder en la economía mundial*. Barcelona, Icaria Editorial, 1994; Robert Gilpin, *Global Political Economy. Understanding the International Economic Order*. New Jersey, Princeton University Press, 2001.



Trabajadores del Programa de Empleo Mínimo (PEM) y Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH) aplicados desde 1982 y que tuvieron como fin absorber la cesantía provocada por la Crisis Económica del mismo año (Fuente: Archivo Fortín Mapocho, año 1986).

de gradualismo y rearticulación del sector industrial, que en su diseño implicaban la creación de cierta capacidad estatal y políticas públicas incompatibles con los objetivos de liberalización económica dentro del país y el resto del mundo.

Adicionalmente, se debe considerar una dimensión no menos relevante en todo este proceso: el factor tiempo. El régimen de Pinochet después de una fase inicial orientada a eliminar los desajustes macroeconómicos de la Unidad Popular, requería mostrar resultados positivos en un plazo muy breve, lo que implicaba cuestiones tan urgentes como controlar la hiperinflación que se agudizó en 1975. En ese escenario, los Chicago Boys fueron hábiles para conectar sus enfoques económicos con la obtención de resultados rápidos e instalar una narrativa de la eficacia y el éxito económico.

Por todo lo anterior o, quizás a pesar de ello, el camino más pragmático fue optimizar la condición de país primario-ex-

portador, abandonando el clásico modelo de desarrollo hacia adentro, retornando al patrón histórico de modelo de desarrollo hacia afuera pre Primera Guerra Mundial, pero esta vez con sesgo exportador de productos no tradicionales y con reglas de mercado, razón porque se agregó la noción de neoliberal.

El gobierno cívico militar chileno fue consciente que la manera de combatir el aislamiento internacional y resolver los conflictos políticos internos requería la solución urgente de los problemas económicos. Cuando la tensión sobre el modelo de desarrollo neoliberal que provocó la crisis económica de 1982 se resolvió al finalizar aquella década y la presión externa e interna por la apertura democrática se hizo insostenible para el régimen, el país inició la recuperación democrática y el diseño de nuevas políticas de reinserción internacional y económica en los años noventa. Pero esa es otra historia.

Arte, cultura y dictadura: balance historiográfico

Art, culture and dictatorship: a historiographic balance

Karen Esther Donoso Fritz

Universidad de Santiago de Chile

Resumen

Este ensayo tiene por objetivo llevar a cabo una revisión de los estudios históricos que se han realizado en Chile sobre el arte, la cultura y su relación con la política antes y durante la dictadura civil-militar. Observamos que desde comienzos del siglo XXI este tipo de investigaciones ha aumentado exponencialmente y su foco ha estado puesto en la década de 1960, el periodo de la Unidad Popular y las formas de resistencia artístico-cultural en contexto dictatorial. Sólo recientemente se ha historizado la institucionalidad cultural del régimen iniciado en 1973 y discutido en torno a la configuración de una nueva hegemonía bajo el paradigma autoritario-neoliberal.

Palabras: historia cultural, arte comprometido, historiografía, políticas culturales.

Abstract

The aim of this essay is to review the historical studies that have been carried out in Chile on art, culture and their relationship with politics before and during the civil-military dictatorship. We note that since the beginning of the 21st century this type of research has increased exponentially and has been focused on the 1960s, the period of the Popular Unity and the forms of artistic-cultural resistance in a dictatorial context. The cultural institutionalization of the regime initiated in 1973 has only recently been historicized and discussed in terms of the configuration of a new hegemony under the authoritarian-neoliberal paradigm.

Keywords: cultural history, committed art, historiography, cultural policies.

Introducción

En septiembre de 1973 la sociedad chilena se enfrentaba también en una batalla cultural. Como han recogido una gran cantidad de investigaciones realizadas recientemente, durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) se puso especial énfasis en incidir en el campo artístico y cultural. La creación de un «hombre nuevo» a partir de la promoción de ciertos valores era fundamental para la creación del futuro socialista. La solidaridad, el compromiso, la lealtad entre otros principios eran promovidos desde las altas esferas gubernamentales así como desde las dirigencias sindicales, estudiantiles, poblacionales que se movilizaron tras el proyecto encabezado por Salvador Allende. Asimismo, se fortaleció la labor desempeñada por importantes agentes culturales que se gestaron en las décadas previas. Dentro del cine, del teatro, la música, las artes visuales, la danza entre otras artes, surgieron activistas comprometidos con la transformación socio-cultural que pusieron a disposición su arte, tiempo y labor para conseguir la anhelada transformación. A ellos se sumaron intelectuales y académicos que desde diversos espacios universitarios también se adhirieron al debate por el proyecto cultural de la Unidad Popular.

El golpe de Estado de septiembre de 1973 representó el fin de este proyecto y abrió una época de intensa represión política y transformación estructural de la sociedad. La importancia que había adquirido la revolución cultural hizo que las fuerzas armadas y civiles golpistas pusieran especial énfasis en reprimir a los artistas e intelectuales involucrados en el gobierno popular y restringir el campo cultural. Posteriormente, la instalación del neoliberalismo como principio económico también implicó un cambio en los patrones de consumo y formas de so-

ciabilidad. Así, el golpe representa un acontecimiento en todo su esplendor, que dejó atrás un proyecto político que, aunque recordado no ha logrado ser reconstruido.

Hoy en día podemos acceder a la información levantada por historiadores, periodistas, sociólogos e investigadores de diversas áreas que han ido reconstruyendo la madeja de la cultura durante este periodo. Pero es necesario precisar que hace veinte años, estas materias apenas eran investigadas en el interior del país, siendo la principal —y casi única— fuente de información las memorias escritas y transmitidas por sus protagonistas. Un dato clave es que el año 2003, en el seminario organizado por las universidades metropolitanas para conmemorar el golpe de Estado, no había ninguna mesa sobre la cultura, ni en la Unidad Popular ni en dictadura^[1]. A diferencia de la conmemoración actual, las mesas con ponencias sobre cultura en el 2023 se han multiplicado tanto en las instancias académicas-universitarias como en otras gestadas por municipios y sitios de memoria en Chile y el extranjero.

Este dato nos habla de lo que ha sucedido en el siglo XXI con respecto a la labor historiográfica y sus múltiples transformaciones. Las metodologías de la historia reciente así como el auge de la historia cultural han permitido contribuir a los estudios sobre el arte y la cultura desde una perspectiva propia como disciplina. Asimismo, el desarrollo político de los últimos años y la relación Estado-memoria oficial han puesto nuevos elementos en el cuestionamiento público que, de alguna manera, han sido recogidos por algunas y algunos historiadores.

1.- Ese mismo año, el tema de la cultura fue objeto de análisis en el seminario organizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile por Bernardo Subercaseaux, Grínor Rojo, Francisco Brugnoli y María Berríos. Rodrigo Baño (ed.), *La Unidad Popular 30 años después*, FACSU, Universidad de Chile, 2004.

En este ensayo realizaremos una revisión de las perspectivas con que se ha estudiado la cultura en la historia reciente, utilizando la fecha del 11 de septiembre de 1973 no como un principio, sino como una bisagra histórica que nos permite abordar el antes (1970-1973) y durante la dictadura de Pinochet (1973-1989). Para ello, nos concentraremos en aquellos estudios que han problematizado el arte y la cultura a partir de su vínculo con lo político e intentaremos agruparlos, a pesar que éstos no necesariamente responden a programas de investigación comunes. Partimos de la premisa que el estudio de lo político-cultural ha puesto sus ojos, en primera instancia, sobre el gobierno de la Unidad Popular debido a la preocupación que esta administración puso en este tema. Durante el siglo XX fueron los partidos y proyectos políticos de izquierda los que incluyeron la idea de «política cultural» dentro de sus programas. Esto se realizó de múltiples maneras, ya sea asociada a la propaganda, la educación popular, el uso del tiempo libre y a la democratización cultural. Recordemos que en 1932, la República Socialista fue pionera en proponer un programa de acción cultural que además, tenía aspectos democratizantes^[2]. Posteriormente el Frente Popular (1936-1941), coalición con presencia de los partidos Comunista y Socialista, también promovió un plan que consideraba una concepción amplia de la cultura, considerando no sólo las artes sino el desarrollo personal y físico, pero sin perder la labor educativa del Estado^[3]. Ambos partidos —

así como los surgidos en la década de 1960 como izquierda revolucionaria— observaron en lo artístico cultural una herramienta de agitación y propaganda necesaria para transmitir el ideario político, pero también desarrollaron una crítica con respecto al papel del Estado en el plano cultural. Consideraron que éste había tenido un carácter paternalista y no se había logrado concretar un programa que considerara la capacidad creativa de los sectores populares. Con esa convicción, el accionar de la política en la cultura fue incluido en el programa de la Unidad Popular y su triunfo en 1970 implicó que se transformara en una discusión a nivel estatal. Así el carácter revolucionario del proyecto y un programa de acción cultural explícito implicó cambios en la planta funcionaria y en los objetivos culturales hegemónicos del Estado. Con esto se consolidó y legitimó la relación entre política y cultura, es decir, que la organización de la cultura dejó de ser un área autónoma de lo político. Por ello, cuando la Unidad Popular llegó al gobierno, lo hizo con una larga tradición de vínculo entre lo político y lo cultural que permitió poner ambas esferas en el centro de la discusión política.

Por otro lado, la dictadura tuvo especial dedicación en separar lo cultural de lo político, redefiniendo este concepto a partir de un paradigma conservador, retrayendo todo el debate político e intelectual desarrollado en la última década. Así, mientras se eliminaba de lenguaje público el uso del concepto «política», demonizando su utilización, también asoció lo cultural a lo civilizado, es decir, como un corpus separado de lo social y asociado estrechamente al deber ser de una comunidad. Como complemento, se asoció la cultura nacional a un esquema que obligaba a los ciudadanos a adecuarse para cumplir con el «deber ser», relacionado con la historia militar, los símbolos patrios y una visión cristiana, anticomunista

2.- Karen Donoso, «La política cultural de la República Socialista. Chile, 1932. Un punto de llegada y un punto de partida» (manuscrito inédito, 2023).

3.- Karen Donoso, «Elevar culturalmente al pueblo. Chile: nación y cultura popular desde el estado (1938-1958)» en Verónica Valdivia (et. al.), *Populismo en Chile. De Ibáñez a Ibáñez. Tomo 3: Populismo y políticas culturales*, Santiago, Ed. Lom, 2023.

y despolitizada^[4]. De esta forma, el quehacer cultural de la dictadura fue despojado de lo político y esa idea quedó impresa en el imaginario social.

El curso de las investigaciones históricas sobre arte, cultura y política permiten dar cuenta de este proceso, toda vez que los primeros estudios pusieron su foco en la década de 1960 y el periodo de la Unidad Popular y en las formas de resistencia artístico-cultural en la dictadura. Sólo recientemente se ha trabajado la construcción cultural del régimen, y discutido en torno a la configuración de una nueva hegemonía bajo el paradigma autoritario-neoliberal. Finalmente, dejamos constancia que este ensayo en ningún caso es exhaustivo, toda vez que la propia coyuntura de conmemoración de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular (2020) y del golpe de Estado (2023) ha dinamizado la publicación de libros y dossiers en revistas académicas que no alcanzaron a ser incluidos en esta sistematización. En definitiva, este ensayo pretende constituirse en una ruta de navegación para identificar y reconocer estos estudios más que ser un análisis definitivo sobre un tema que, enhorabuena, está lejos de cerrarse.

Arte, cultura y compromiso político: los años sesenta y la Unidad Popular

Es un hecho que el golpe de Estado de 1973 provocó un quiebre profundo en el campo artístico e intelectual desarrollado en la década de 1960. En las ciencias sociales, este periodo ha sido caracterizado como el momento de incorporación de nuevas metodologías y propuestas teóricas que provocaron una transformación en el quehacer disciplinar. A este proceso se le conoce como el momento de profe-

4.- Karen Donoso, *Cultura y dictadura. Censuras, proyectos e institucionalidad cultural en Chile, 1973-1989*, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2019, capítulo 2.

sionalización e institucionalización de las ciencias sociales, y estuvo inmerso en la modernización de las universidades, interesadas en convertirse en espacios de investigación y formación de investigadores. Cuando se piensa en ese periodo, inmediatamente surge como característica la ebullición del debate intelectual provocado por la incorporación de nuevas corrientes y planteamientos teóricos provenientes de la teoría de la dependencia, del marxismo estructuralista de Althusser representado en Chile por Marta Harnecker; e incluso de un marxismo más crítico a partir de las ideas de Antonio Gramsci. Así mismo, el espacio otorgado a esos debates dentro de las universidades, principales núcleos de la investigación social en el país^[5]. Una socióloga argentina ha señalado que este fue un fenómeno continental toda vez que se habría producido «una expansión de la autonomía académica en la mayoría de los países de América Latina y una regionalización de la circulación del conocimiento a través de las revistas latinoamericanas, asociaciones profesionales, congresos y foros», que habrían dado forma a un circuito regional donde transitaban «académicos militantes», con centralidad del espacio chileno, dado el cierre o intervención de los espacios universitarios en Brasil y Argentina por los golpes de estados de 1964 y 1966 respectivamente^[6].

5.- Laura Briceño, «Producción y circulación de pensamiento crítico en Chile. Los casos del Centro de Estudios Socioeconómicos y Centro de Estudios de la Realidad Nacional en el contexto de la reforma universitaria (1965-1973)», V Jornadas de Investigación Nuevas Aproximaciones a la historia intelectual. Universidad de la República, Montevideo, 2018 (inérita); Marcos González, «Intelectuales, académicos y ciencias sociales y su función en la discusión política, Siglo XX» en S. Gazmuri e I. Jakšić (eds.), *Historia política de Chile, 1810-2010, Tomo IV: Historia de los intelectuales y del pensamiento político*, Santiago, Fondo de Cultura Económica, pp. 303-331.

6.- Fernanda Beigel, «Centros y periferias en la circulación internacional del conocimiento», *Nueva Sociedad*,

Uno de los elementos que caracterizaron a la Unidad Popular fue el apoyo manifestado por sectores artísticos e intelectuales quienes no sólo colaboraron en la campaña de Salvador Allende, sino que también se hicieron parte del proyecto socialista a través de su participación en las nuevas entidades culturales creadas por el Estado, por los partidos políticos y por los organismos autogestionados generados desde las bases sociales. En ese mismo proceso se produjeron los primeros análisis y registros del quehacer cultural, los que tuvieron por objeto el autorreconocimiento, el debate y la proyección futura. De esta forma, el movimiento artístico-cultural en torno a la Unidad Popular fue consciente de su trascendencia histórica y, por ello, se dedicaron especialmente a dejar huellas posibles de reconstruir hasta el día de hoy.

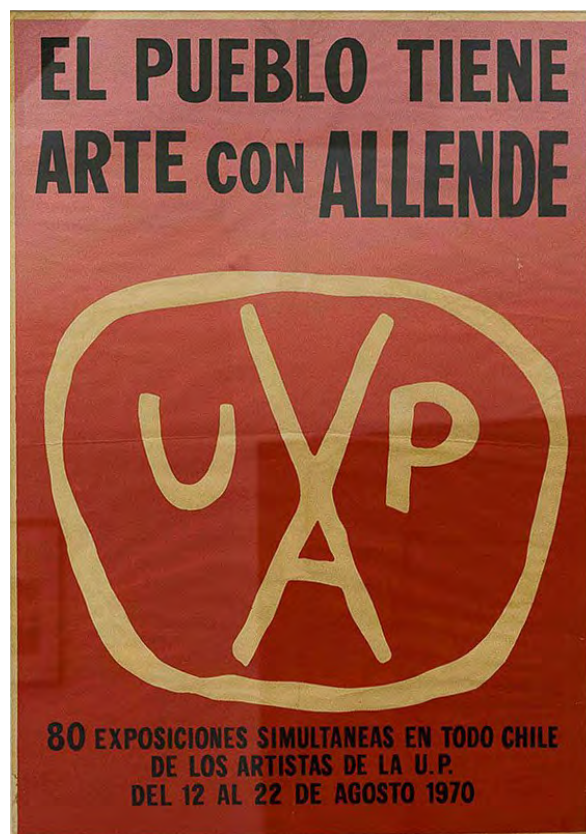
Esto se da cuenta a través de publicaciones realizadas, por ejemplo, por la Editorial Quimantú que refieren a la música, al teatro comprometido y la pintura^[7]. Asimismo, organizaciones de artistas e intelectuales dejaron por escrito sus manifiestos, apoyos al gobierno y también la comprensión de su propia historia. Casos emblemáticos fueron el Manifiesto de Cineastas de la Unidad Popular^[8] o la Asamblea de Trabajadores de la Cultura^[9]. Tras el golpe de Estado, se mantuvo la convicción por reconocer y difundir el legado de este movimiento artístico-cultural.

245 (2013), p. 113, https://static.nuso.org/media/articles/downloads/3944_1.pdf.

7.- Fernando Barraza, *La nueva canción chilena*, Colección Nosotros Los Chilenos, Santiago: Ed. Quimantú 1972; Ernesto Saul, *Pintura social en Chile*, Colección Nosotros Los Chilenos, Santiago, Ed. Quimantú, 1972; Orlando Rodríguez, *Teatro chileno (su dimensión social)*, Colección Nosotros Los Chilenos, Santiago: Ed. Quimantú, 1973.

8.- Jacqueline Mouesca, *Plano secuencia de la memoria de Chile. Veinticinco años de cine chileno (1960-1985)*, Santiago, Ed. Tamarco, p. 70-72.

9.- Carlos Maldonado, *La revolución chilena y los problemas de la cultura*, Santiago, Imprenta Horizonte, 1971.



Cartel de 1970 (Fuente: Museo de la Solidaridad Salvador Allende).

En primera instancia desde el exilio y luego al interior del país, se publicaron una serie de crónicas y memorias de sus propios protagonistas interesados en impedir que el silencio dictatorial llevara al olvido el trabajo realizado por esta generación de artistas. Ejemplos notables de esta labor fue la realizada por René Largo Farías y Osvaldo «Gitano» Rodríguez, ambos protagonistas de la Nueva Canción Chilena desde distintos lugares^[10]. El primero, como productor y gestor cultural y el segundo como uno de los compositores fundamentales del movimiento, publicaron entre 1977 y 1984 sus memorias donde situaron históricamente

10.- René Largo Farías, *La nueva canción chilena*, México, Casa de Chile, 1977; Osvaldo Rodríguez, *Cantores que reflexionan: notas para una historia personal de la nueva canción chilena*, Madrid, LAR, 1984. Rodríguez publicó, posteriormente, su tesis *La nueva canción chilena: continuidad y reflejo*, La Habana, Casa de las Américas, 1988.

el quehacer de los músicos. Asimismo el músico y productor Nano Acevedo emprendió la gesta de realizar varios escritos con el fin de reivindicar los nombres olvidados del folclor militante^[11].

Este grueso caudal de memorias se transformó en la fuente obligada de consulta de las investigaciones históricas que comenzaron a desarrollarse en el siglo XXI. Como hemos mencionado en la introducción, hacia fines de la década de 1990 la producción historiográfica sobre estas materias era casi nula. Otras disciplinas como la musicología, la psicología, el periodismo e incluso la sociología eran pioneras en levantar una interpretación sobre el arte comprometido, su papel en la Unidad Popular, la represión y el exilio^[12].

Salvo unas tesis universitarias^[13] y unos escritos preliminares del historiador Claudio Rolle sobre la música en la campaña de Allende^[14], la disciplina histórica no había dedicado estudios ni investigaciones disciplinares a esta materia. El poco espacio que tenía la historia cultural en las escue-

las universitarias así como los estudios sobre el periodo reciente, provocaba que la Unidad Popular no fuera una preocupación historiográfica. Esto ha cambiado notablemente en los últimos veinte años.

Una de las primeras publicaciones la realizó Marco Fernández quien, en el marco de la conmemoración de los treinta años del golpe de Estado, colaboró en el proyecto editorial 1973. *Vida cotidiana de un año crucial*. En un capítulo retomó la polémica entre los intelectuales que, en el seno de la Unidad Popular, debatieron en torno al camino que debía tomar la transformación cultural y la creación del hombre nuevo^[15]. Dos años después, Cesar Albornoz participó en el libro *Cuando hicimos historia* con un capítulo donde logró reunir en un solo texto una serie de actividades y manifestaciones artístico-culturales desplegadas durante la Unidad Popular y que si bien pertenecían a un tronco común, hasta ese entonces habían sido reconstruidas de manera aislada^[16]. De esta forma, este autor consiguió entroncar las actividades musicales, editoriales, de prensa, cinematográficas —entre otras— detrás del proyecto de construir el hombre nuevo, destacando que la propuesta cultural de la Unidad Popular era «militante, combativa, severa»^[17].

Ambas publicaciones dieron pie a una nueva era de estudios relativo a la producción cultural durante 1970 y 1973, que se desplegaron en dos áreas. La primera, relativa al análisis de la política cultural de la

11.- Nano Acevedo ha publicado las obras: *Manuscritos Clandestinos*, Santiago, Cantoral Ediciones, 1987; *Los ojos de la memoria*, Santiago, Cantoral Ediciones, 1995; *Folkloristas chilenos: retratos verídicos 1900-1950*, Santiago, Cantoral Ediciones, 2004.

12.- Rodrigo Torres, *Perfil de la creación musical en la nueva canción chilena desde sus orígenes hasta 1973*, Santiago, CENECA, 1980 y «Músicas Populares, memoria y nación» en VV. AA., *Memorias para un nuevo siglo. Chile, mirada a la segunda mitad del siglo XX*, Santiago, Editorial LOM, 2000.

13.- German González, «Arte y cultura en la vía chilena al socialismo. El discurso cultural y la producción artística en el gobierno de la Unidad Popular», Tesis Licenciatura en Estética, Valparaíso, Pontificia Universidad Católica, 1989; Rodrigo Sandoval, «Música chilena de raíz folklórica (1964-1973). Neofolklore y Nueva Canción Chilena», Tesis Licenciatura en Historia, Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998.

14.- Claudio Rolle, «La Nueva Canción Chilena, el proyecto cultural popular y la campaña presidencial y gobierno de Salvador Allende» en *Actas III Congreso IASPM-LA*, 2000, <https://iaspmal.com/index.php/2016/03/02/actas-iii-congreso-bogota-colombia-2000/>.

15.- Marco Fernández, «Nuestra forma de alienación es simultáneamente nuestra única forma de expresión. Debate intelectual, política cultural y compromiso político en la intelectualidad de izquierda en Chile, 1970-1973» en Cesar Albornoz (et. al.) 1973. *Vida cotidiana de un año crucial*, Santiago, Ed. Planeta, 2003.

16.- César Albornoz, «Porque esta vez no se trata, de cambiar un presidente», en Julio Pinto (ed.) *Cuando hicimos historia: La experiencia de la Unidad Popular*, Santiago, Ed. Lom, 2005, pp. 147-176.

17.- C. Albornoz, «Porque esta vez», p. 149.



Actuación de Quilapayún durante el Primero de Mayo de 1971 en la Plaza Constitución de Santiago de Chile (Foto de Armindo Cardoso, fuente: Biblioteca Nacional Digital de Chile).

Unidad Popular y con ello, del debate político en torno al papel de la cultura en el proceso revolucionario. Se ha dado cuenta de dos posiciones que tensionaron la conducción revolucionaria del gobierno. La primera línea emanaba de una interpretación ortodoxa del marxismo, se vinculaba estrechamente con la propuesta del Partido Comunista, y tenía entre sus representantes a Carlos Maldonado, quien a su vez era autor y firmante de un documento frecuentemente citado y que fue emanado con motivo de la Asamblea de Trabajadores de la Cultura. La segunda línea refiere a una interpretación menos ortodoxa del marxismo y que tenía apreciaciones críticas del proceso soviético, y estaba representada por algunos escritores agrupados en la editorial Cormorán y en el Taller de Escritores de la Universidad Católica. Una serie de artículos publicados en los últimos años han dado

cuenta de las distintas facetas de esta división y han señalado que el núcleo del debate estaba dado por la fuente promotora de los contenidos y el accionar cultural^[18].

De esta forma, un debate de carácter intelectual e ideológico se transformó en una discusión en torno al trasfondo de una política pública que —como es sabido— no tuvo su proceso de decantamiento y síntesis, quedando el periodo de la Unidad Popular

18.- Martín Bowen, «El proyecto sociocultural de la izquierda chilena durante la Unidad Popular. Crítica, verdad e inmunología política», *Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Débats*, 21 (2008), <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.13732>; Nadinne Canto, «El lugar de la cultura en la vía chilena al socialismo. Notas sobre el proyecto estético de la Unidad Popular», *Revista Pléyade*, 9 (2012), pp. 153-78, <https://www.revistapleyade.cl/index.php/OJS/article/view/219>; Natalia Ayo Schmiededecke, «Los intelectuales y la cuestión de la cultura popular: interpretaciones e iniciativas durante la Unidad Popular», *Revista Kamchatka*, 17 (2021), pp. 14-51, <https://ojs.uv.es/index.php/kamchatka/article/view/17558/18899>

como un experimento reconocido a nivel mundial, y con una enorme diáspora debido al exilio. Pero el legado nacional estuvo en el estrecho vínculo entre política y cultura planteado por sus protagonistas.

La segunda área de investigaciones se ha desarrollado en torno a disciplinas artísticas específicas: el teatro^[19], el cine^[20], la industria editorial^[21]. A estas publicaciones se deben incorporar las tesis universitarias que se han escrito sobre estos temas y las producciones financiadas por los proyectos Fondart, cuyo registro y análisis excede con creces los objetivos de este ensayo. Las dimensiones de este nivel de producción las sopesaron Stefano Gavanini, Laura Jordán y Javier Rodríguez para el área de la música. En un estudio reciente observaron que hasta la fecha se han publicado más de cien escritos sobre Nueva Canción Chilena en distintas partes del mundo, publicaciones que fueron sistematizadas y organizadas considerando el carácter transnacional tanto del fenómeno musical como de su estudio^[22]. A estos se suman las publicaciones académicas y libros sobre el rock nacional.

19.- Daniela Walffiguer, *El teatro comprometido. Su contribución al movimiento popular chileno, 1963-1973*, Concepción, Ediciones Escaparate, 2021.

20.- Claudia Bossay, «El Protagonismo de lo Visual en el Trauma Histórico: Dicotomías en las Lecturas de lo Visual Durante la Unidad Popular, la Dictadura y la Transición a la Democracia» *Comunicación y medios*, 29 (2014), pp.106-118, <https://doi.org/10.5354/rcm.v0i29.30176>; Tomás Cornejo, «Cine de compilación y escritura histórica: el caso de La Spirale», *Revista Literatura y Lingüística*, 31 (2015), <http://dx.doi.org/10.4067/S0716-58112015000100008>. Del mismo autor «Filmar a contrapelo: el cine de Helvio Soto durante la Unidad Popular», *Atenea*, 508 (2013), pp.13-29, <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622013000200002>

21.- Flavia Córdova, Almendra García-Huidobro y Vicente Montecinos, *Quimantú y la colección Nosotros los chilenos*, Santiago, Ed. Tiempo Robado, 2023.

22.- Stefano Gavanini, Laura Jordán y Javier Rodríguez, «Fronteras porosas, sonidos conectados: transnacionalidad de la Nueva Canción Chilena a través de sus escritos», *Cuadernos de Música Iberoamericana*, 35 (2022), pp. 39-71, <https://doi.org/10.5209/cmib.80040>.

Un tercer corpus de investigaciones sobre la cultura en la Unidad Popular ha sido erigido desde la historia intelectual, la que ha contribuido a revelar y destacar las voces y actividades desarrolladas por académicos, centros de estudios y revistas culturales^[23]. En ellos se ha repensado el papel de las y los intelectuales como agentes políticos cruzando el análisis diacrónico y sincrónico^[24]. Aquí también mencionamos el trabajo realizado desde los estudios de la comunicación que han mostrado no sólo el accionar de la prensa y el gremio de periodistas sino también la reflexión teórica realizada por intelectuales como Armand Mattelart y Ariel Dorfmann sobre el papel de los medios y la cultura de masas en un contexto revolucionario^[25].

23.- José Del Pozo, Danny Monsálvez y Mario Valdés, «Los estudios sobre la Unidad Popular en Chile en el nuevo milenio. ¿Están en deuda los historiadores?», *Radical Americas*, 6/1 (2021), pp. 19-20, [10.14324/111.444.ra.2021.v6.1.008.es](https://doi.org/10.14324/111.444.ra.2021.v6.1.008.es)

24.- Ivette Lozoya, «Debates y tensiones en el Chile de la Unidad Popular. ¿La traición de los intelectuales?», *Pacarina del Sur*, 17, (2013), [En línea].

Cesar Zamorano, «La revista Cormorán y su contribución al debate en torno a la cultura en la Unidad Popular», *Revista Izquierdas*, 30 (2016), pp. 215-235, <https://www.scielo.cl/pdf/izquierdas/n30/art08.pdf>; Laura Briceño, «Escritores intelectuales y la política cultural en el gobierno de Salvador Allende», *Revista Izquierdas*, 49 (2020), pp. 292-311, <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492020000100217>; Danny Monsálvez y Maira Máximo, «El intelectual durante la Unidad Popular, un análisis de las revistas Chile Hoy, La Quinta Rueda y Punto Final», *Cuadernos de Historia*, 56 (2022), <https://www.scielo.cl/pdf/cuadhist/n56/0719-1243-cuadhist-56-00039.pdf>

25.- Mariano Zarowsky, «Políticas culturales y comunicación popular en el gobierno de Salvador Allende. La intervención política intelectual de Armand Mattelart», *V Jornada de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani*, Buenos Aires, 2009, <https://www.aacademica.org/000-089/116.pdf>; Carla Rivera, «Diálogos y reflexiones sobre las comunicaciones en la Unidad Popular. Chile, 1970-1973», *Historia y comunicación social*, 20/2 (2015), <https://core.ac.uk/download/pdf/38816981.pdf>; Antoine Faure, «Salir de las trincheras, periodismo y radicalización política durante los mil días», *Anales de la*

Como se aprecia, la labor historiográfica se ha nutrido del trabajo realizado por otras disciplinas que, en un afán por autodefinirse e historizarse, han alimentado un gran caudal de escritos sobre la Unidad Popular. Y si bien el tema sigue abierto y con muchas preguntas por explorar aún, es notable como en los últimos veinte años se ha ido saldando la deuda existente con esta materia, levantando nuevas preguntas y contribuyendo a contextualizar estas expresiones en relación con otros aspectos como lo político y lo social, así como la vinculación de este proceso tan breve con una perspectiva de largo plazo. Situar el proyecto de la Unidad Popular en un proceso de transformación político-social de larga duración ha sido una tarea abordada desde la historia social a comienzos del siglo XX y todavía sigue en pie. Con respecto a las preguntas aún inexploradas, destacamos el problema de la institucionalidad cultural erigida por la Unidad Popular así como la constitución de organizaciones autogestionadas con ocasión del gobierno socialista. La actividad de sindicatos, colegios, poblaciones que es reiterada en las memorias populares requiere un análisis sistematizado y profundo al que la perspectiva histórica puede contribuir.

La dictadura y la resistencia artístico-cultural

Tras el golpe de Estado, militares y civiles en el poder se empeñaron en perseguir y silenciar a las y los artistas, intelectuales y activistas vinculados a la revolución socialista. Esto se materializó en medidas transversales de intervención en las universidades, espacios privilegiados del debate cultural en las décadas anteriores, así como

de los organismos públicos, instituciones creadas por la Unidad Popular y otras precedentes. Acciones como el bombardeo al Palacio de Bellas Artes o el ataque a las antenas de transmisión radial representaron la prepotencia del accionar militar que en paralelo realizaba detenciones masivas. El destino de los apresados en espacios como la Universidad Técnica del Estado fue diverso: tortura, ejecución, exilio y largas listas de exonerados. Siguiendo a Tomás Moulián, el carácter masivo y disruptivo de esta represión hizo que el nuevo régimen adquiriera el perfil de una dictadura terrorista, levantando un amplio margen de acción para la represión, excediendo los límites de la racionalidad jurídica y deslindando la crueldad^[26].

Se puede apreciar que la centralidad de los proyectos artísticos culturales durante el gobierno de la Unidad Popular, así como el compromiso de los artistas e intelectuales con el proyecto socialista, los puso en el blanco de las políticas represivas. Es imposible completar en un párrafo el alcance de la represión a la cultura y las artes a fines de 1973, menos la cantidad de víctimas que completan todo el arco de la tipificación de violaciones a los derechos humanos. Pero el asesinato del director teatral y cantautor Víctor Jara —mundialmente conocido— permite representar el carácter de la represión: detenido junto a sus colegas de la Universidad Técnica del Estado, fue recluido en el Estadio Chile (ex recinto deportivo transformado en campo de detenidos, como también lo fueron otros espacios), torturado, asesinado con 44 balazos y luego su cuerpo abandonado en la vía pública junto al militante comunista y alto funcionario del gobierno de Allende Littré Quiroga^[27].

26.- Tomás Moulián, *Chile Actual. Anatomía de un mito*, Santiago, Ed. Lom, 1997.

27.- La vida y muerte del director teatral y cantautor fue relatada en detalle, por primera vez, por su esposa Joan

Universidad de Chile, 18 (2020), pp. 227-249, <https://doi.org/10.5354/0717-8883.2020.60827>.

El destino de otros artistas e intelectuales detenidos fue la clandestinidad y el exilio. La propia vida artística nacional se detuvo debido a medidas implantadas como el toque de queda.

Pero junto a lo anterior, otro de los objetivos de civiles y militares golpista fue acabar con la forma cotidiana de relacionarse con la política, apartándola del debate del ciudadano común, dejándola como un campo excluyente de toma de decisiones sólo de aquellos más capaces. Y el mecanismo utilizado para ello fue el golpe cultural y la guerra psicológica, pues si bien la represión física se orientó a un sector específico, la implantación del terror y del clima de silenciamiento político abarcó a toda la población a lo que se sumó, posteriormente, el sometimiento del país a nuevos patrones culturales y de consumo^[28].

En ese contexto de shock psicosocial, desde el campo artístico-cultural se levantaron múltiples formas de resistencia y con ellas, aparecieron los primeros intentos por dejar sus registros. Muchos de éstos se publicaron en el exterior, destacándose el artículo «Luces nuevas en la cultura chilena» y la sección «Chile. 1982 algunos aspectos sobre su vida cultural»^[29] publi-

cados en la *Revista Araucaria de Chile* y el documento «Chile: del camino de la luz al de las tinieblas» editado por Nanda Leonardini en México en 1982. En ambos se realizó una síntesis de la labor desplegada por organizaciones de «cultura alternativa» a la oficial, destacando el trabajo de las peñas folclóricas, talleres artísticos y asociaciones como la Unión Nacional por la Cultura (1979) y la Agrupación Cultural ACU (1978). A estos se puede sumar el número especial de los *Cuadernos Hispanoamericanos* titulado «La cultura chilena durante la dictadura» publicado en 1990 en Madrid, que recopiló una serie de artículos breves sobre las distintas expresiones artísticas (cine, artes visuales, video-arte, cómic, poesía, teatro, fotografía), otras propias del campo cultural como la historia, la filosofía, así como el papel de algunos agentes culturales como la iglesia y los medios de comunicación.

Mientras tanto, al interior del país, surgieron nuevos espacios de discusión en el campo intelectual alojado en ONGs, centros de estudios y otras instituciones en formación. Estos espacios financiados por organismos internacionales como la OEA y la ONU (entre otros), permitieron que las nuevas tesis de las ciencias sociales no desaparecieran^[30]. Así, la producción de revistas, seminarios, conferencias, investigaciones activas, publicación de documentos de trabajo e incluso libros, permitió conservar viva la discusión crítica más allá de los espacios universitarios, recuperados en algunos casos en la segunda mitad de la década de 1980. De esta forma, los primeros

Jara en el libro titulado *Víctor Jara: un canto truncado*, publicado inicialmente en Gran Bretaña y luego en Barcelona (Ed. Argos Vergar, 1983). Con posterioridad, se le han dedicado varios escritos entre los que destacamos Leonar Kósichev, *La guitarra y el poncho de Víctor Jara*, Editorial Progreso, Moscú, 1990; Jorge Coulón, *La sonrisa de Víctor Jara*, Santiago, Editorial Usach, 2011; Gabriel Sepúlveda, *Víctor Jara, hombre de teatro*, Santiago, Ed. Sudamericana, 2019; Mario Amorós, *La vida es eterna: biografía de Víctor Jara*, Santiago, Ediciones B, 2023 y Freddy Stock, *5 minutos. La vida eterna de Víctor Jara*, Santiago, Ed. Vía X, 2023.

28.- Jorge Rojas y Gonzalo Rojas, «Auditores, lectores, televidentes y espectadores. Chile mediatizado, 1973-1990» en Cristian Gazmuri y Rafael Sagredo, *Historia de la vida privada en Chile. El Chile contemporáneo, de 1925 a nuestros días*, Santiago, Ed. Taurus, 2007.

29.- Nos referimos a los artículos «La política cultural oficialista y el movimiento artístico» de Soledad Bianchi, «El

teatro chileno en los últimos años» por Irma González; «El retorno de Balmes», «Mi verdadero país» de Nisim Sharim y «Recurso de Amparo» sobre la situación de la música y del grupo Illapu, publicados todos en el número 17 de la *Revista Araucaria de Chile*, 1982.

30.- Sobre la labor de estas entidades ver: Cristina Moyano y Mario Garcés (ed.), *ONG en dictadura. Conocimiento social, intelectuales y oposición política en el Chile de los ochenta*, Santiago, Ed. Universidad Alberto Hurtado, 2020.

registros sobre arte en dictadura fueron escritos por investigadores como Jacqueline Mouesca y Alicia Vega (cine), Milan Ivelic y Nelly Richard (artes visuales), María de la Luz Hurtado y Carlos Ochsenius (teatro), Anny Rivera (música), Bernardo Subercaseaux (libro e industria editorial), Anny Rivera (agrupaciones culturales), Giselle Muñizaga (comunicación alternativa).

Un lugar privilegiado de esta discusión fue la ONG CENECA (1977-1990) que, tal como resaltan Tomás Peters y Sebastián Valenzuela, tuvo un rol fundamental no sólo en el análisis del quehacer del movimiento artístico-cultural en dictadura, sino también en la supervivencia de este^[31]. Sus integrantes, en su mayor parte sociólogos, instalaron la comprensión de la cultura como un campo en disputa y con esa convicción, se vincularon a las organizaciones culturales y artísticas en formación para colaborar en su consolidación y desarrollo a través de seminarios, mesas redondas y ciclos de trabajo participativos. De esta forma, las publicaciones de CENECA realizadas en formato documentos de trabajo y libros, son una referencia obligada para estudiar el movimiento, constituyéndose tanto en fuente como en bibliografía.

A este corpus de publicaciones se suman las memorias y escritos levantados de manera casi inmediata al fin de la dictadura. La historia, como hemos indicado, se pronunció sobre estas materias recién en el siglo XXI, con publicaciones orientadas hacia sectores artísticos e intelectuales específicos, siendo la música la que más publicaciones ha acumulado hasta el momento^[32].

31.- Sebastián Valenzuela (coord.), *CENECA. Estudios para una transformación cultural*, Santiago, Ed. Metales Pesados, 2020.

32.- El estudio de la música en dictadura desde una perspectiva histórica tuvo una explosión tras la publicación realizada por el historiador Claudio Rolle junto al musicólogo Juan Pablo González, titulada *Historia Social de la*



Portadas publicaciones de CENECA, 1985-1987.

Asimismo, cabe destacar que en la última década los estudios históricos se han abierto a nuevas perspectivas, abordando temas como el estudio de la cultura mapuche y su resistencia cultural, así como el papel de las mujeres y el arte como mecanismo de resistencia en la prisión política^[33].

Música Popular, Vol. 1 y 2, Santiago, Editorial Universidad Católica de Chile, 2005 y 2009. Con posterioridad, se destacan sobre esta materia de César Albornoz, Javier Osorio, Ignacio Ramos Rodillo, Araucaria Rojas, Javier Rodríguez, Matías Hermosilla y la autora de este ensayo. Desde el exterior, las historiadoras Tania da Costa García, Natalia Ayo Schmiedecke y Patrice Mac Sherry han contribuido notablemente a estas investigaciones; y desde la musicología histórica se destaca el trabajo realizado por el propio Juan Pablo González, Laura Jordan, Eileen Karmy, Daniel Party, Christian Spencer y Martín Farías.

33.- Carolina Pizarro y José Santos-Herceg (ed.) *Revisitar la catástrofe. Prisión política en el Chile dictatorial*, Santiago, Ed. Pehuén, 2016. Katia Chornik, «Memories of Music in Political Detention in Chile under Pinochet», *Journal of Latin American Cultural Studies*, 27/2 (2018), pp. 157-73,

Dictadura y políticas culturales

Las primeras investigaciones relativas a las políticas culturales implantadas por la dictadura se realizaron a fines de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980, por investigadores que fueron partes del movimiento intelectual recién descrito. El sociólogo José Joaquín Brunner abrió esta línea de estudios con la publicación de una serie de ensayos en los que interpretó el cambio que marcó 1973: desde una «cultura de compromiso» gestada desde la década de 1930 al calor del pacto social tras el desarrollismo y la modernización, hacia una «cultura disciplinaria» donde la conducción político-social la asumió por la fuerza la clase dominante, imponiendo la exclusión política, el autoritarismo y la desmovilización social. Esto vino a ser complementado con el «conformismo pasivo» dado por la promesa del consumo neoliberal^[34]. Recogiendo esta interpretación, los sociólogos agrupados en CENECA reconstruyeron el accionar político del régimen en el campo cultural en paralelo a su trabajo de colaboración y registro del accionar de la resistencia artística. De ellos, se destacan las publicaciones de Anny Rivera, quien planteó que entre 1973 y 1983 tres corrientes ideológicas habían definido el diseño y proyección

<https://doi.org/10.1080/13569325.2018.1450742>.

34.- José Joaquín Brunner, *La cultura autoritaria*, Santiago, Flacso, 1981. En este libro Brunner reunió las ideas publicadas previamente en una serie de documentos de trabajo creados también para Flacso. En la década siguiente, Brunner continuó reflexionando sobre la industria cultural, el consumo cultural, el papel de los intelectuales de la cultura, apropiando para el caso chileno las definiciones de cultura producidas por intelectuales como Antonio Gramsci y Max Weber. Algunos libros y documentos de trabajo destacados son: *Los intelectuales y las instituciones de la cultura*, Santiago, Flacso, 1983, *Cultura e identidad nacional: Chile 1973-1983*, Santiago, Flacso, 1983, *La cultura como objeto de políticas*, Santiago, Flacso, 1985 y *Espejo trizado: ensayos sobre cultura y políticas culturales*, Santiago, Flacso, 1988.

de la actividad estatal en cultura: el nacionalismo, la Doctrina de Seguridad Nacional y el discurso burgués que oscilaba entre la alta cultura y la industria cultural. También señaló que los puntos de consenso ideológico entre esas tendencias articularon tres tipos de acciones específicas en el campo artístico cultural: la implementación de la lógica del mercado en el desarrollo de la cultura incentivando el «autofinanciamiento», la exclusión de expresiones artísticas de oposición a través de la censura y represión y la descentralización del accionar del Estado en el ámbito de la cultura dado por la municipalización^[35].

En concordancia con esta propuesta, Carlos Catalán y Giselle Munizaga publicaron el primer estudio que aludía directamente a las políticas culturales del Estado entre 1973 y 1986, coincidiendo con Rivera en la identificación de los puntos en común de los tres discursos ideológicos que permitirían articular políticas coherentes. Propusieron una división cronológica de la actuación estatal en cultura, distinguiendo tres fases: la primera de predominio del discurso nacionalista (1973-1976); la segunda de debilitamiento del discurso anterior y surgimiento del neoliberalismo como matriz regidora del campo cultural (1976-1982); y la tercera, en que se manifestó la crisis del proyecto y donde el régimen se preocuparía sólo de mantenerse (1982-1986)^[36].

Estas investigaciones plantearon tempranamente que el gran problema de la política cultural dictatorial fue la tensión entre el proyecto nacionalista y el neoliberal. Ambas vertientes tenían aspectos en común, pero disentían en aspectos estruc-

35.- Anny Rivera, *Transformaciones culturales y movimiento artístico en el orden autoritario. Chile 1973-1982*, Santiago, CENECA, Santiago, 1983, pp. 74-84.

36.- Carlos Catalán y Giselle Munizaga, *Políticas culturales estatales bajo el autoritarismo en Chile*. CENECA, Santiago, 1986, pp. 5-6.

turales como el papel del Estado, la autonomía del campo cultural y el contenido de las artes. Según Catalán y Munizaga, tras el golpe de Estado se articuló un proyecto nacionalista con importantes posiciones de poder que fracasó debido a la combinación ideológica que concilió el neoliberalismo con la doctrina de seguridad nacional, permitiendo liberalizar tareas asignadas anteriormente al Estado, pero manteniendo el control social. También habría influido la tendencia anti-estadista de la élite chilena que no permitió el aumento de atribuciones del Estado. A lo señalado, se suma el contexto histórico de expansión de la cultura de masas y de diversificación de los agentes culturales que funcionaban en el circuito creado por el mercado^[37].

Esta interpretación de las políticas culturales de la dictadura no ha sido discutida y, por el contrario, fue tomada como referencia para quienes desde la investigación histórica abordaron este tema. Así, pasaron casi veinte años entre las publicaciones de CENECA y los primeros escritos historiográficos que apuntaron a desentrañar el quehacer cultural de la dictadura, yendo más allá de la represión y la censura. El año 2006 Isabel Jara publicó el libro *De Franco a Pinochet: el proyecto cultural franquista en Chile, 1926-1980*, donde abordó en varios capítulos la cuestión de la política cultural y la presencia del hispanismo como un pensamiento que permitió formular una idea de nación que soslayó las diferencias étnicas, sociales y de clase, reforzando la cohesión social. Esta historiadora del arte ha ido definiendo un programa de investigación centrado en las formas que adoptó el nacionalismo en términos ideológicos, discursivos, estéticos e institucionales en la dictadura, estudiando las entidades es-

37.- C. Catalán y G. Munizaga, *Políticas culturales*, pp. 41-42.

tatales como la Editora Nacional Gabriela Mistral, la Secretaría de Relaciones Culturales y las políticas en torno a las artes visuales^[38]. En paralelo, el esteta Luis Errázuriz, junto al filósofo e historiador Gonzalo Leiva, reconstruyeron las representaciones estética y simbólica de la dictadura, analizando aquellas transformaciones radicales realizadas por el régimen tanto en la iconografía, los edificios, entre otros, enfocando la atención en aquellos aspectos de la memoria visual que resaltarán el militarismo, el nacionalismo y la censura^[39].

Tomando como referencia el marco conceptual propuesto por los investigadores de CENECA y dialogando con los planteamientos de Jara, desde el año 2008 he realizado publicaciones sobre el accionar cultural de la dictadura, observando el quehacer de sus instituciones culturales, así como el discurso gubernamental. Una de las convicciones detrás de ese trabajo era responder a una idea arraigada en el discurso histórico: que la dictadura no había tenido políticas

38.- Isabel Jara, *De Franco a Pinochet. El proyecto cultural franquista en Chile, 1936-1980 - Universidad de Chile*, Santiago, Ediciones Departamento Teoría de las Artes, 2007; «La ideología franquista en la legitimación de la dictadura militar chilena», *Revista Complutense de Historia de América*, 34 (2008), pp. 233-253; «Politizar el paisaje, ilustrar la patria: nacionalismo, dictadura chilena y proyecto editorial», *Revista Aisthesis*, 50 (2011), pp. 230-252, <https://doi.org/10.4067/S0718-71812011000200013>; «Nacionalismo y política artístico-cultural de la dictadura chilena: la Secretaría de Relaciones Culturales», *Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Questions du temps présent* (2016), <http://journals.openedition.org/nuevomundo/68967>; «¿Cómo Pensar La Acción Artístico-Cultural de La Dictadura Chilena? Siete Cuestiones Para Su Interpretación», *Latin American Research Review*, 55/2 (2020), pp. 338-51, <https://doi.org/10.25222/larr.436>; «Ambivalencia de la política artístico-cultural de la dictadura pinochetista. Revisitando el 'apagón cultural' y la 'catástrofe'» en: Dappiano K, Fabrizio ML, Patiño L, Verzero L, (ed.), *Sombras, suspiros y memorias: prácticas culturales y dictaduras en el cono sur*, Lanús, Ediciones de la UNLa, 2020, p. 133-158.

39.- Luis Errázuriz y Gonzalo Leiva, *El golpe estético. Dictadura militar en Chile. 1973-1989*, Santiago, Ed. Ocho Libros, 2013.

culturales, sino que se había restringido a censurar y prohibir las manifestaciones artísticas. Esto a pesar del cúmulo de publicaciones existentes hasta ese entonces. Al parecer, la idea madurada en la década de 1990 de entender la dictadura como una época de «apagón cultural» —calificación surgida en pleno régimen y consolidada en el libro *La historia oculta del régimen militar*—, estaba instalada sin mucho cuestionamiento, y el ejercicio de estudiar la cultura dictatorial pasaría exclusivamente por la reconstrucción de los actos de censura que se desarrollaron de manera constante durante los diecisiete años de gobierno civil-militar^[40].

Sin negar la represión cultural (e incluso, reconstruyéndola en parte), me propuse dar cuenta de las transformaciones aplicadas por la dictadura para consolidarse en el poder^[41]. Así, bajo la influencia de las tesis de Verónica Valdivia sobre la búsqueda del consenso social en las dictaduras^[42], emprendí la tarea de reconstruir la institu-

cionalidad cultural y el accionar de éstas, bajo la noción de políticas culturales. Las dificultades para acceder a los archivos de los organismos estudiados, obligó a poner el foco en los funcionarios como Enrique Campos Menéndez, Roque Esteban Scarpa, Germán Domínguez, Benjamín Mackenna, entre otros.^[43] Siguiendo la huella de estos burócratas en la prensa y publicaciones oficiales fue posible identificar un proyecto cultural de carácter nacionalista en el interior del régimen que naufragó a fines de los años 70; y la presencia de un proyecto de gestión artística con tintes neoliberales que no se consolidó con la dictadura, pero sembró el camino continuado en el periodo post-dictatorial por las políticas en cultura^[44].

En paralelo, otros historiadores dieron curso a investigaciones sobre la institucionalidad cultural, poniendo énfasis en las transformaciones de la gestión en el patrimonio cultural, el papel de algunos funcionarios e incluso de los artistas que apoyaron al régimen en el plebiscito de 1988^[45]. El impacto del neoliberalismo en la vida cotidiana de la población y sus prácticas culturales ha recibido algo de atención, sobre todo a través del estudio de algunos

40.- Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda, *La historia oculta del régimen militar. 1973-1981*, Santiago, Ed. Grijalbo, 5ª. Edición, 1999, Cap. 17 «Cómo se hizo el apagón». A comienzos de los años 90 surgieron una serie de estudios realizados por funcionarios e intelectuales adeptos al nuevo gobierno democrático. El objetivo fue realizar un diagnóstico para proyectar el nuevo aparato cultural que se construiría en democracia, por lo tanto, la tendencia predominante fue relevar el aspecto represivo y restrictivo del campo cultural durante la dictadura, con reflexiones en torno a la necesidad de liberalizar los circuitos y crear políticas de integración de quienes habían quedado excluido, ya fuera por razones políticas o económicas. Ver: Manuel Antonio Garretón, *Estado y política cultural. Fundamentos de una nueva institucionalidad*, Santiago, Flacso, 1992; Ministerio de Educación, *Seminario Políticas Culturales en Chile*, 31 de julio-1 de agosto 1992, Santiago, División de Cultura, p. 86.

41.- Sobre la represión al mundo de la cultura, K. Donoso, *Cultura y dictadura*, cap. 1

42.- Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, «'Estamos en guerra, señores' El régimen militar de Pinochet y el 'Pueblo' 1973-1980», *Revista Historia*, 43/1 (2010), pp. 163-201, <https://doi.org/10.4067/S0717-71942010000100005>.

43.- Los documentos de las oficinas del Ministerio Secretaría General de Gobierno y Secretaría de la Presidencia, donde estaban alojados estos organismos no estaban ni están aún disponibles en el Archivo Nacional de Chile.

44.- K. Donoso, *Cultura y dictadura*, cap. 3 y 4.

45.- Luis Alegría y Romané Landaeta, «En los límites del patrimonio. Políticas de patrimonialización en dictadura militar: Los casos de Chile y Uruguay 1973-1989», *Sophia Austral*, 23 (2019), <http://dx.doi.org/10.4067/S0719-56052019000100033>; Matías Alvarado, «El Asesor Cultural de la Junta de Gobierno. Alba y ocaso del primer hombre de la cultura bajo la dictadura cívico-militar chilena», *Nuevos Mundos, Mundos Nuevos. Cuestiones del Tiempo Presente* (2019), <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.78774>. Del mismo autor: «La cultura por el Sí. La Agrupación Nacional de Artistas e Intelectuales (1988-1990)», *Nuevos Mundos, Mundos Nuevos. Imágenes, memorias e sons* (2022), <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.90890>



Militares realizando la quema de libros, 21 de septiembre 1973 (Foto: Koen Wessing, fuente: Carlos Rama, *Chile: mil días entre la revolución y el fascismo*, Planeta, 1974).

mecanismos de instalación de los nuevos patrones de consumo como la televisión^[46]. En cuanto a la gestión del arte, se ha definido brevemente el papel del mecenazgo empresarial a partir de la creación de agrupaciones como Amigos del Arte y el interés de empresas como el Banco Hipotecario y la Minera Escondida en destinar recursos a la realización de concursos, becas, exposiciones, etc.^[47].

Por otro lado, se han abordado nuevas investigaciones sobre la censura dictatorial, debiendo utilizarse como fuentes los libros y artículos testimoniales, documentos

dispersos almacenados en archivos no gubernamentales, así como la historia oral^[48]. Una obra notable en esta reconstrucción es la realizada por María Angélica Rojas y José Fernández sobre la represión en las bibliotecas de la Universidad de Chile^[49], asimismo el libro escrito por Manuel Sepúlveda, Jorge Montealegre y Rafael Chavarría sobre la producción cultural en el país^[50]. Reiteramos el problema de los archivos porque esta dificultad ha imposibilitado reconstruir cabalmente los mecanismos y la racionalidad de la censura, la que se ejecutó

46.- Jorge Rojas y Gonzalo Rojas, «Auditores, lectores, televidentes y espectadores. Chile mediatizado, 1973-1990», en *Historia de la vida privada en Chile. El Chile contemporáneo, de 1925 a nuestros días* Vol. 3, Santiago, Ed. Taurus, 2007, pp. 381-424. Sergio Durán, *Ríe cuando todos estén tristes. El entretenimiento televisivo bajo la dictadura de Pinochet*, Santiago, Ed. Lom, 2012.

47.- Cristian Faúndez, *Mecenazgo y patrocinio cultural*, Santiago, Universidad Santo Tomás, 2005.

48.- Hernán Millas, *Los señores censores*, Santiago, Ediciones Caperucita Feroz, 1985; Emilio Filippi, *Libertad de pensar. Libertad de decir*, Santiago, CISEC, 1979.

49.- María Angélica Rojas y José Fernández, *El golpe al libro y a las bibliotecas de la Universidad de Chile. Limpieza y censura en el corazón de la universidad*, Santiago, Ed. UTEM, 2019.

50.- Manuel Sepúlveda, Jorge Montealegre y Rafael Chavarría, *¿Apagón cultural? El libro bajo dictadura*, Santiago, Asterión, 2017.

en diálogo con la represión física. Por ejemplo, el historiador Jorge Iturriaga desde el año 2017 ha realizado proyectos en torno a la censura cinematográfica basados en las fichas de calificación obtenidas directamente en el Ministerio de Educación^[51]. La documentación complementaria es de muy difícil hallazgo en el Archivo Nacional. Por lo tanto, se propuso reconstruir los criterios de los censores en base al visionado de las películas prohibidas. Si bien esta dificultad ha obligado a crear nuevas metodologías —que sin duda contribuyen a ampliar las perspectivas historiográficas—, de todas formas han sido vitales los procesos de desclasificación de archivos y difusión de documentos inéditos realizados por periodistas. Entre ellos, se destaca la labor realizada por Mauricio Weibel en Ciper Chile y Juan Cristóbal Peña con la Revista Anfibia^[52]. De igual forma, es valioso el trabajo realizado por Peter Kornbluh^[53] desde Estados Unidos para dar a conocer los documentos de la CIA y su intervención en Chile desde mediados de la década de 1960. La labor de hallazgos, desclasificación y difusión de los archivos no ha sido asumida por las y los historiadores chilenos, a pesar de la

conciencia que existe sobre la necesidad de investigar y visibilizar estos temas. Sin lugar a dudas, la conformación de la cultura dictatorial así como los caminos de la censura son materias que recién están siendo exploradas y que se han beneficiado de la historia cultural, intelectual y política.

Consideraciones finales

Una de las actividades que más ha llamado la atención en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado ha sido la exhibición de filmes producidos y difundidos por los aparatos de propaganda de la dictadura^[54]. Luis Horta —investigador y encargado de la Cineteca de la Universidad de Chile—, señaló que llama la atención que los gobiernos postdictatoriales no hayan considerado este material como parte del archivo histórico del país, lo que los expuso a daños por la falta de condiciones en su conservación y además, al desconocimiento de su existencia hasta hace una década. Asimismo, dio cuenta de que existe un muy bajo porcentaje de películas que haya sido conservado hasta la actualidad^[55]. Un testimonio similar lo expuso Michell Ribaut, encargada del área audiovisual del Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile, al explicar el proceso de restauración y digitaliza-

51.— Algunos artículos publicados en ese proyecto son Jorge Iturriaga, «Censura de filmes durante a ditadura militar no Chile: Um estudo quantitativo do Conselho de Calificação Cinematográfica», *Estudos Ibero-Americanos*, 48/1 (2022), <https://doi.org/10.15448/1980-864X.2022.1.41777>; Jorge Iturriaga y Karen Donoso, «La censura cinematográfica en el primer año de la dictadura. Chile, 1974. Restauración, refundación y legitimación», *Revista Universum*, 36/2 (2021), <https://universum.otalca.cl/index.php/universum/article/view/200/109>; de los mismos autores «El Epílogo de la censura cinematográfica en Chile, 1988-2001», *Significação: Revista de Cultura Audiovisual*, 50 (2023), pp. 1-18, <https://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/196584>.

52.— Ver los depósitos digitales: <https://www.ciperchile.cl/papeles-de-la-dictadura/> y <https://www.revistaanfibia.cl/especial/archivos-puga/>

53.— *Pinochet desclasificado. Los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile*, Santiago, Editorial Catalonia, 2023.

54.— Un ejemplo es la actividad realizada en mayo de 2023 en la Cineteca Nacional titulada «La mirada de la dictadura» donde se exhibieron los cortometrajes *65 años de vida independiente* (Jorge Morgado, 1975); *Chile 75: Su paisaje y su gente* (Moisés Aracena B, 1975); *La respuesta de Chile* (Jorge Morgado, 1975); *Por siempre libre* (Jorge Morgado, 1975); *Chile es así* (autor desconocido, 1974). Los filmes de Morgado fueron compartidos en el marco del proyecto de difusión de los archivos de Álvaro Puga, ver: <https://www.revistaanfibia.cl/el-cine-segun-pinochet/>

55.— Coloquio «Imaginario estético en las películas de la dictadura chilena», realizado el 9 de agosto de 2023 en el Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, transmisión on line: https://www.youtube.com/watch?v=Xfn_FNyTFoE

ción de una serie de películas grabadas por el Departamento de Cine y TV UTE, que fue creado en 1970 pero se mantuvo activo tras el golpe de Estado^[56]. Estas cintas fueron recuperadas el año 2009 y muchas de ellas ni siquiera se han podido visionar aún debido a la falta de presupuesto. Ambos investigadores coinciden en señalar que la despreocupación estatal por el tema de los archivos fue una norma.

Compartimos este diagnóstico y además, lo proyectamos hacia otras áreas. Si bien es cierto que la propia dictadura tuvo una política de destruir archivos y documentación institucional, también es cierto que los gobiernos post-dictatoriales no desarrollaron una política al respecto. Asimismo no hubo un interés por esclarecer las políticas culturales y de censura implementadas, más allá de la enumeración de denuncias y el discurso de defensa de la libertad de expresión. La falta de archivos ha dificultado el estudio de la institucionalidad de la censura y sus prácticas, y esta ha sido la primera barrera a superar por los estudios históricos.

Otra barrera ha sido de aspecto disciplinar. Historiadores e historiadoras que han tomado como objeto de estudio la relación arte y política o cultura y política, han debido dialogar y vincularse a investigaciones y profesionales de otras disciplinas, como la sociología, la antropología, la musicología, la gestión cultural, la comunicación y la literatura, e incluso, con los estudios levantados por los propios artistas. El objeto de estudio ha obligado a compartir espacios de discusión, incluso metodologías y marcos

conceptuales de investigación, debiendo situarse en un espacio interdisciplinar. Este proceso, sin lugar a dudas, ha enriquecido el conocimiento sobre el pasado reciente ya que ha permitido retroalimentar los estudios históricos. Sólo por mencionar un ejemplo, el estudio de la memoria desde la danza y la producción audiovisual ya son campos de acción e investigación en sí mismos y han interpelado a la investigación histórica en varias ocasiones.

Pero hay un área donde la investigación histórica aún no ha podido pronunciarse. El gran cúmulo de estudios publicados — de los cuales sólo hemos mencionado una selección— no ha logrado aún tener una obra que sitúe las expresiones artísticas y manifestaciones culturales en el escenario político, más allá de la polaridad oficialismo/resistencia. O incluso, dar cuenta de las múltiples formas de adhesión y resistencia cultural y artística desencadenadas durante la dictadura. A diferencia del periodo de la Unidad Popular, donde sí se puede establecer un campo de debate, para el periodo dictatorial esta tarea se ha dificultado. Tampoco se han escrito trabajos que realicen una mirada integral de las expresiones artísticas y culturales desplegadas en dictadura, vinculándolas al debate ideológico, intelectual y cultural, así como a los mecanismos de promoción y control. Una dificultad que se presenta para abordar este tipo de tareas viene dada por la condición de clandestinidad de algunas actividades y manifestaciones culturales. Asimismo, los artistas e intelectuales que apoyaron y colaboraron con la dictadura no se han pronunciado públicamente y pareciera ser que prefieren silenciar su compromiso político. A lo anterior se suma la dificultad que ya hemos mencionado para acceder a los archivos. Pero, también creemos que el devenir de los estudios históricos en los últimos años aleja a las y los historiadores de este

56.- «Producción filmica universitaria, un quiebre en 16 y 35mm: Documentales de Cine y TV UTE, antes y después del golpe», realizado el 17 de agosto 2023 en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Se exhibieron las películas «Compromiso con Chile» (1972), «Pulpomomios a la chilena» (1972), «Vamos viendo» (1972-1973), «Un puente invisible» (1974) y «Visita presidencial» (1975).

tipo de reflexiones más globales. El mecanismo de evaluación académica y las mallas curriculares de las escuelas de historia en Chile han provocado que las investigaciones sean cada vez más acotadas, incluso en algunos casos, restringidas sólo a un corpus de fuentes, lo que genera una pér-

didada de la noción de proceso histórico. Es de esperar que la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado nos permita hallar los puntos de encuentro entre los nuevos y antiguos saberes, dando paso a nuevas interpretaciones que iluminen aquellas áreas que aún permanecen en la oscuridad.

Movimiento social y político de mujeres durante la dictadura militar 1973-1989

Social and political movement of women during the military dictatorship 1973-1989

Cristina Moyano Barahona
Universidad de Santiago de Chile

Valentina Pacheco Parra
Universidad de Santiago de Chile

Resumen

En este artículo se analiza el itinerario y los debates del movimiento social y político de mujeres durante la dictadura militar, en perspectiva de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. El principal objetivo es reconstruir la densidad de un movimiento social que fue clave en las discusiones sobre la dictadura y también sobre la transición a la democracia, conformado por activistas sociales, militantes políticas e intelectuales, en una época donde la interacción entre el mundo popular y la producción de saberes se hizo de la mano de un encuentro dialógico entre las actoras, posibilitando la unidad de diversidad de posiciones ante la prefiguración del autoritarismo como principal enemigo a combatir.

Palabras clave: movimiento social y político de mujeres, feminismo, dictadura, militancias, transición a la democracia.

Abstract

This article analyzes the itinerary and debates of the social and political movement of women during the military dictatorship, in the context of the commemoration of the 50th anniversary of the Coup d'état. The main objective is to reconstruct the significance of a social movement that was key in the discussions about the dictatorship and also about the transition to democracy. It was made up of social activists, political militants and intellectuals, at a time when the interaction between the popular world and the production of knowledge was done through a dialogical encounter between the actors, making possible the unity of positions in the face of the prefiguration of authoritarianism as the main enemy to be fought.

Keywords: social and political movement of women, feminism, dictatorship, militancy, transition to democracy

Introducción

El presente artículo ofrece una panorámica histórica del movimiento social y político de mujeres durante la dictadura cívico militar (1973-1989), compuesto por un amplio y diverso conjunto de organizaciones que hicieron frente, de forma temprana, a las políticas represivas del régimen de facto, particularmente en defensa de la vida y denunciando las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, al mismo tiempo que levantaron discusiones y demandas en torno a la condición de la mujer, politizando -desde el género- las demandas por democracia y democratización. «Democracia en el país y en la casa» fue la consigna que agrupó un ideario sociopolítico, nacido desde el seno de las organizaciones de mujeres que, reunidas en talleres, ONG, colectivos y partidos políticos, se dieron a la labor de discutir las formas de hacer política en Chile.

A 50 años del Golpe de Estado en Chile, los movimientos feministas han jugado un papel muy relevante en la historia reciente. En los años 90, mujeres ubicadas en Centros Académicos, Universidades, ONG y Corporaciones, formaron una activa red en la que produjeron saberes y un léxico político cultural para repensar la denominada «posdictadura neoliberal» y la situación de la mujer en una época donde se debatieron los límites de la transición a la democracia. A través de publicaciones, seminarios, congresos nacionales e internacionales, programas radiales, consultorías y redes editoriales, difundieron esos saberes y pusieron en la palestra pública temáticas vinculadas a las diferencias sexo-genéricas, criticaron la despolitización del género que se realizaba desde el Servicio Nacional de la Mujer, conceptualizado como un obturador de las demandas, al fomentar políticas focalizadas para abordar las problemáticas

de la mujer, sin poner en cuestionamiento la episteme neoliberal y los dilemas de un capitalismo patriarcal. En ese plano, los debates feministas se vincularon con las epistemologías del sur, los nuevos movimientos sociales, instalaron las microluchas sobre lo cotidiano, abrazaron ideas sobre la deconstrucción para repensar el género y las disidencias sexuales, las identidades y las violencias epistémicas del colonialismo interno, en un vertebrado espacio transnacional donde se conectaron con feministas latinoamericanas a través de redes académicas y de activismo político-social^[1].

Entre 2018 y 2019 los movimientos feministas ocuparon un lugar central en la agenda política. Desde el denominado mayo feminista, donde mujeres se tomaron los espacios universitarios y escolares para denunciar la violencia de género, el acoso sexual y el sexismo presente en las instituciones educativas, hasta su participación activa en la revuelta del 2019, donde resignificaron la temporalidad de los años de la posdictadura. Este proceso fue posibilitado por una interacción generacional y un quehacer activo en movilizaciones precedentes como las asociadas a la Red contra la Violencia hacia las mujeres y su campaña el «machismo mata», o su articulación con el movimiento transnacional de «ni una menos», que en Chile resonó con fuerza en 2016, donde se fueron construyendo narrativas y experiencias cruzadas por relatos entre generaciones de mujeres feministas de los años 80, 90 y los 2000.

Así, en 2019 en el marco de la revuelta social, se produjeron diálogos fructíferos entre distintas generaciones. Tal como resalta Camila Rojas, en el movimiento actual hay poco de novedad y mucho de herencia,

1.- Cristina Moyano y Valentina Pacheco, «De márgenes e institucionalizaciones: Huellas del feminismo intelectual en la Revista de Crítica Cultural, Chile 1990-2007», *Revista Divergencia*, 18 (2022), pp. 56-79.

pues cuando nos movilizamos desde el feminismo, «no podemos sino hacerlo como herederas de porfías y rebeldías de larga data»^[2]. En el mismo sentido Karelía Cerda resalta que:

«En el escenario del Estallido Social, son las experiencias de mujeres de múltiples generaciones las que se cruzan y dialogan, compartiendo una memoria colectiva en relación con las problemáticas devenidas de la construcción social del género y lo que involucra para cada una de dichas generaciones el *ser* mujer, considerando además otros múltiples factores de discriminación que atraviesan el género. Ello es significativo por cuanto complejiza el contenido de lo que constituye el pasado»^[3].

Sobre estos cruces generacionales, nos parece significativa la intervención organizada por la Coordinadora Feminista 8M, en la que se entonó la «canción de la rebeldía», portando un prendedor con un papel que decía «SOMOS+» y realizando un recorrido desde la plazoleta de Carlos Antúnez con Providencia, hasta el monumento del general Baquedano en Plaza «de la dignidad». Dicha intervención realizada el 10 de diciembre del 2019, Día Internacional de los Derechos Humanos, fue un gesto simbólico de reconocimiento a la antigua manifestación organizada por Mujeres por la Vida en 1985, la cual tuvo como objetivo pedir la libertad de dirigentes sindicales y poblacionales que se encontraban detenidos. En dicha oportunidad Mujeres por la Vida junto a otros colectivos que se congregaron

para la actividad, entonaron la «canción de la alegría» y portaron un lienzo en el que se imprimió la consigna «SOMOS+» creada por Lotty Rosenfeld. La intención de la coordinadora 8M al re-actualizar las acciones de la antigua agrupación, fue «visibilizar la centralidad histórica que ha tenido la defensa de los derechos humanos para el movimiento feminista»^[4]. Anudando así, en un mismo entramado, la denuncia por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y durante la revuelta social del 2019.

Por su parte, cabe resaltar que, en la versión del 2019 de esta manifestación, participaron antiguas integrantes de la agrupación Mujeres por la Vida, como Fanny Pollarolo, ampliamente reconocida por las nuevas generaciones feministas. De este modo, «la gestión política de la memoria en sentido activo y reflexivo nos permite reelaborar nuestro propio pasado, de manera que podamos actualizarlo para enriquecer nuestra perspectiva de los hechos presentes, que están conectados a los pretéritos»^[5].

Hoy, en este contexto conmemorativo, recuperar la historia del movimiento social y político de mujeres, cobra esa relevancia teórica, política y comprensiva. Por ello, en este artículo pondremos especial énfasis en el surgimiento y características de las organizaciones de mujeres de oposición a la dictadura, resaltando las dinámicas de sociabilidad y las redes en las que circularon

2.- Camila Rojas, «La rebelión feminista. Poco de novedad y mucho de herencia», en Faride Zerán (ed.), *Mayo feminista. La rebelión contra el patriarcado*, Santiago, LOM Ediciones, 2018, p. 127.

3.- Karelía Cerda, «Estallido social e historia de las mujeres: construcción de genealogía política feminista en Chile», *Aletheia*, 20 (2020), p. 8.

4.- El Mostrador Braga, «Canción de la rebeldía: a 35 años de 'Mujeres por la Vida' se convoca a una intervención de conmemoración», *El Mostrador*, 10 de diciembre de 2019, <https://www.elmostrador.cl/braga/2019/12/10/cancion-de-la-rebeldia-a-35-anos-de-mujeres-por-la-vida-se-convoca-a-una-intervencion-de-conmemoracion/> (consulta: 04 de agosto de 2023).

5.- Carla Rivera, «La memoria colectiva como ejercicio político: la experiencia del movimiento social», en Olga Grau, Luna Follegati y Silvia Aguilera (coord.), *Escrituras feministas en la revuelta*, Santiago, LOM Ediciones, 2020, pp. 203-204.



Mujeres de la Agrupación de Familiares Desaparecidos se manifiestan frente al Palacio de Gobierno durante la dictadura militar de Pinochet (Foto: Kena Lorenzini, fuente: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos).

los principales debates que atravesaron las discusiones respecto de las formas organizativas, las prácticas políticas, la democracia y democratización, la autonomía feminista y la participación político partidaria. Así, más allá de una evaluación de los logros realizados por el movimiento social de mujeres, queremos resaltar los contenidos de propuestas que tensionaron las construcciones políticas patriarcales, denunciando la violencia y politizando lo cotidiano, desafiando las nociones de normalidad y cuestionando las bases sobre las que se estructuraba el quehacer de la oposición política a la dictadura.

Organizaciones sociales de mujeres y sus características

Entre 1973 y 1989, es posible distinguir cuatro grandes etapas en las que se desplegó el movimiento social de mujeres,

coincidentes con ciclos de fuerte represión y violaciones a los derechos humanos, así como con las distintas posiciones políticas e itinerarios de la oposición política. La primera etapa se extendió entre 1973 y 1977^[6], marcada por el surgimiento de las primeras organizaciones de mujeres (Agrupación de Mujeres Democráticas, 1973) y la participación de éstas en otras orientadas a la defensa de los derechos humanos, como lo fueron: Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFFD), Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC), Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Corporación de Derechos Humanos (CINTRAS), Asamblea Nacional de Derechos Huma-

6.- Sandra Palestro, «Mujeres en movimiento 1973-1989», *Documento de trabajo*, 14 (1991), Santiago, FLACSO, p.7.

nos^[7], el Comité para la Paz en Chile y Vicaría de la Solidaridad, entre otras.

Varias de las organizaciones mencionadas se crearon al alero de la Iglesia Católica, que además patrocinó programas destinados a combatir la cesantía y el hambre, producto de las nuevas políticas económicas que instalaban, en base a políticas de shock, la racionalidad neoliberal. Bolsas de Cesantes, Talleres Laborales y Comedores Populares^[8], se convirtieron en espacios y experiencias de reconocimiento y sociabilidad popular que politizaron lo cotidiano^[9].

En 1976 se crea el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), cuyo principal objetivo fue construir un espacio para la búsqueda de respuestas colectivas a los problemas comunes e inmediatos derivados del hambre, la cesantía, la carestía, las deficiencias en la salud y educación, para desde allí promover una mayor articulación y agrupación de demandas políticas, sociales y económicas^[10]. Esta primera etapa culminó con la expresa necesidad de potenciar la búsqueda de la unidad, la generación de espacios de concertación social que permitieran aunar las distintas demandas emanadas de las diversas experiencias del mundo popular y de los sectores políticos de oposición.

Entre 1977 y 1981 es posible identificar un segundo momento caracterizado por la expansión de la reflexión sobre la «condición de la mujer», es decir, por la urgente

necesidad de visibilizar las problemáticas desde las experiencias femeninas en dictadura. Son los años en que comenzaron a surgir los primeros grupos de profesionales e intelectuales organizados en torno a las ONG y los centros académicos independientes, que promovieron debates sociales, económicos, culturales y políticos desde el género. La Asociación para la Unidad de las Mujeres (ASUMA), que asumió tempranamente una identidad feminista, el Círculo de Estudios de la Mujer (1978) y más adelante, el Centro de Estudios de la Mujer (CEM, 1983)^[11], fueron los primeros espacios de este tipo. Edda Gaviola, Eliana Largo y Sandra Palestro resaltan que, durante estos años:

«El sentido de la vida comenzaba a ampliarse: ya no sería sólo el mecanismo de respirar y de no morir por una bala, así como el término exilio no sería únicamente habitar de nuevo el propio país, sino la posibilidad de trabajar, transitar y desarrollarse libremente en él; y la alimentación no solo consistiría en ‘poder matar el hambre’ de cada día»^[12].

Pensar y reflexionar desde lo femenino, considerando las distintas experiencias que introducían las diferentes condiciones de clase, permitió reunir en espacios comunes a intelectuales y profesionales, mujeres de sectores medios ilustrados, con aquellas que desde el mundo popular experimentaban la triple condición de subordinación,

7.- María Angélica Illanes, «El túnel o la dictadura (oscura transición al siglo XXI). Las historias de Lucrecia y Valentina y el movimiento feminista de los 80», en *Nuestra historia violeta. Feminismo social y vidas de mujeres en el siglo XX: una revolución permanente*, Santiago, LOM Ediciones, 2012, pp. 105-109.

8.- S. Palestro, «Mujeres en movimiento 1973-1989».

9.- Edda Gaviola, Eliana Largo y Sandra Palestro, *Una historia necesaria. Mujeres en Chile: 1973-1990*. Santiago, Akí & Aora, 1994.

10.- S. Palestro, «Mujeres en movimiento 1973-1989», pp. 15-16.

11.- La derivación del Círculo de Estudios de la Mujer a la formación del CEM y de la Casa de la Mujer La Morada, se debió a la pérdida del patrocinio que la Academia de Humanismo Cristiano le prestaba al Círculo. La desvinculación tuvo como fundamento que en el boletín del Círculo se trataban temas que atentaban contra la moral cristiana, como lo era el divorcio y el aborto.

12.- Edda Gaviola, Eliana Largo y Sandra Palestro, «Si la mujer no está, la democracia no va», *Proposiciones*, 21 (1992), pp. 111-112.

Cuadro 1: Muestra de organizaciones y grupos de mujeres según sus objetivos estratégicos

OBJETIVOS	ORGANIZACIONES
Defensa de los Derechos Humanos y subsistencia.	Agrupación de Mujeres Democráticas (1973); Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD, 1975); Frente de Liberación Femenina (1980); Comisión de Derechos de las Mujeres de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (1980).
De pobladoras, campesinas, sindicales, activistas o étnicas.	Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical (1976); Movimiento de Mujeres Pobladoras (MOMUPO, 1980); Grupo Las Domitilas (1980); Acción Femenina (1985); Departamento Femenino de la Comisión Nacional Campesina; Comité Pro Unidad de la Mujer (1985); Grupo Semilla; Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular (ANECAP); Grupo de Mujeres Poblacionales TADEM; Grupo de Mujeres Cristianas; Sindicato Intempresas de Trabajadoras de Casas Particulares (SINTRACAP); Agrupación de Mujeres Pobladoras de la Zona Oriente; Organización de Mujeres por el Desarme, la Integración y el Desarrollo Latinoamericano (OMIDES); Colectivo de Lesbianas Ayuquélén; Colectivo Centro-Mujer; Unión de Mujeres de Valparaíso (1977); Colectivo No Más Violencia Contra la Mujer; Frente de Mujeres de Conchalí; Unión de Mujeres de Atacama (UDEMA, 1986); Movimiento Feminista (1983); Frente de Mujeres de Valdivia (FREDEMUVAL, 1986); Colectivo Mujer y Educación (1987); Comando de Mujeres por el NO (1987); Movimiento por los Derechos de la Mujer (MODEMU, 1983); Mujeres por la Democracia (1984); Colectivo Peulla (1986); Agrupación de Mujeres de San Antonio (AMSA); Killén (1986).
Coordinadoras de mujeres y organizaciones	Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH, 1983); Mujeres por la Vida (1983); Coordinación de Organizaciones Sociales de Mujeres (1988); Concertación de Mujeres por la Democracia (1988); Coordinador Político de Mujeres de Oposición (CPMO, 1984); Coordinadora de Organizaciones Sociales de Mujeres (1988); Coordinador de Mujeres de Arica (1985); Coordinador de Mujeres Jóvenes de la Universidad de Chile (1987); Coordinación de Mujeres de Concepción (1983); Coordinación de Mujeres de Talcahuano (1986).
Productoras de conocimiento y análisis	Asociación para la Unidad de las Mujeres (ASUMA, 1977); Círculo de Estudios de la Mujer (1978); Centro de Estudios de la Mujer (CEM, 1983); Centro de Formación y Servicios de la Mujer DOMOS; Taller de la Mujer del Instituto Nuevo Chile; Talleres Tamarugo; Subcomisión de Legislación de la Mujer del Grupo de Estudios Constitucionales (1986); Centro de Estudios y Reflexión de la Mujer (CEREM); Centro de Estudios y Atención del Niño y la Mujer; Red de Información y Difusión de la Mujer (RIDEM, 1988); Instituto de la Mujer (1985).
Lugares de encuentro para la reflexión sobre la condición de la Mujer	Colectivo de Mujeres de Peñalolén (1985); Casa de la Mujer La Morada (1983); Casa de la Mujer de Valparaíso (1986); Casa de la Mujer Mapuche (1985); Corporación de Desarrollo, Servicio y Asesoría Técnica de las Mujeres Mapuche «A ukiñko zomo» (1989); Casa Sofía.
Relacionadas a partidos políticos	Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM, 1980) relacionadas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); Mujeres de Chile (MUDECHI, 1981) formado por mujeres del Partido Comunista; Liga Pro Paz (1980) vinculado a un sector del Partido Socialista; Unión Chilena de Mujeres (UChM, 1980) formada por militantes del Partido Socialista; Frente de Mujeres Juanita Aguirre (1984), formado por militantes del Partido Radical; Unión Popular de Mujeres Rosario Ortíz (1985), por mujeres vinculadas al sector Socialista Salvador Allende; Departamento Técnico Femenino, creado e integrado por la Democracia Cristiana; Federación de Mujeres Socialistas, creado e integrado por militantes del Partido Socialista; Coordinadora de Mujeres Humanistas, formada por el Partido Humanista; Movimiento de Mujeres por el Socialismo (1984), autónomo pero integrado por partidos del área socialista e independientes.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del Proyecto Fondecyt N° 1150049.

exclusión y explotación. La mujer popular se fue constituyendo sujeto de investigación-acción, en conjunto con el desarrollo de una nueva forma de militancia social que hizo de estas experiencias una posibilidad para crear conciencia de clase y, desde allí, politizar la demanda por transformaciones democráticas de la sociedad^[13].

Entre 1982 y 1986, se extiende un tercer período caracterizado por la proliferación de organizaciones y de nuevos espacios de encuentros (ver Cuadro 1), en un contexto de mayor apertura política del régimen, la emergencia de las primeras alianzas político formales de la oposición y un ciclo de tres años de importantes, masivas y violentas protestas populares.

En el marco de la sociabilidad que estuvo a la base de las movilizaciones y protestas, crecieron los espacios comunitarios y de encuentro de mujeres, posibilitando la emergencia de una nueva «ciudadanía femenina»^[14], caracterizada por un debate feminizado de la pobreza^[15], de las resistencias a las violencias domésticas^[16] y por la reivindicación de la idea de que «lo privado es político». Para «1982 los comedores populares se convirtieron en *ollas comunes*, espacios de participación mixta, que permitieron entender el hambre como un problema político y el cocinar como una práctica de resistencia»^[17].

La politización de la vida cotidiana corrió en paralelo con la expansión de las reflexiones en torno a la violencia y sus expresiones en múltiples ámbitos de la vida, incorporando dicha experiencia a los conceptos de democracia y democratización y, por ende, a los horizontes de expectativas que se abrían como futuros posibles. Así, uno de esos horizontes asociaba la democracia no solo a la conquista institucional, sino a que transformaciones de las prácticas patriarcales que generaban subordinación, exclusión, violencia y explotación^[18].

Un cuarto período del movimiento social de mujeres se extendió entre 1987 y 1990, caracterizado por la elaboración de propuestas políticas concretas para la democracia de mano de los grupos de centro izquierda, promotores de una salida pactada con la dictadura, ante el inminente fracaso de la vía insurreccional promovida principalmente por el Partido Comunista. Este fue el tiempo en que las controversias y los debates en el seno del movimiento de mujeres pusieron énfasis en cómo lograr articular el doble desafío: contribuir por una parte a la eventual transición a la democracia (admitiendo los límites de un proceso) y por otra, enfatizar sus proyectos sectoriales (reforzando sus identidades y autonomía), como manera de evitar convertirse en simple fuerza de apoyo subsidiaria en proyectos de partidos políticos tradicionales y profundamente patriarcales, lo que implicaba postergar las demandas y aspiraciones feministas. Ejemplo de ello fueron los documentos: «Manifiesto Feminista» (1983); «Principios y reivindicaciones que configuran la plataforma de la mujer chilena» (1985) del MEMCh83; la «Demanda de la mujer rural», del Departamento Femenino

13.- Cristina Moyano, «Escrituras de mujeres, las huellas del feminismo en las revistas de los Centros Académicos Independientes, 1980-1990», *Revista Catedral Tomada*, 11 (2018), pp. 294-312.

14.-Vanessa Tessada, «Democracia en el país y en la casa. Reflexión y activismo feminista durante la dictadura de Pinochet (1973-1989)», *Cuadernos Kóre*, 8 (2013), p. 98.

15.-Teresa Valdés y Marisa Weinstein, *Mujeres que sueñan. Las organizaciones de pobladoras en Chile: 1973-1989*, Santiago, FLACSO, 1993, p. 21.

16.-Ana María Arteaga, «Politización de lo privado y subversión del cotidiano», en Eugenia Hola (coord.), *Mundo de mujer. Continuidad y cambio*, Santiago, CEM, 1988, p. 576.

17.- V. Tessada, «Democracia en el país y en la casa», p. 106.

18.- Loreto Rebolledo, «Movimiento de mujeres- Movimiento feminista en dictadura», *Revista Al sur de todo. Revista multidisciplinaria de estudios de género*, 7 (2013), p. 27.

Cuadro 2: boletines catastrados y organización/grupo que lo elaboró

ÓRGANO DE DIFUSIÓN	GRUPO U ORGANIZACIÓN QUE LO ELABORÓ
<i>Y nosotras qué</i>	Taller de Mujeres Reflexión de la parroquia Santa Cristina.
<i>Mujeres en la lucha</i>	Elaborado por Presas Políticas de Nueva Imperial
<i>Oye vecina</i>	Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Maipú.
<i>Presencia de mujer</i>	Departamento Femenino del Movimiento Sindical Unitario (MSU)
<i>Hojita</i>	Comisión de Derechos de la Mujer
<i>Guacolda</i>	Acción Femenina
<i>Mujer, voz y pueblo</i>	De mujeres pobladoras de la población Herminia
<i>Nuestro despertar</i>	De los Talleres Solidarios José María Caro
<i>Ormiga</i>	
<i>Palabra de mujer</i>	Unión de Mujeres de Atacama (UDEMA)
<i>Palomita</i>	Grupo Las Domitilas
<i>Remolino</i>	Agrupación de Mujeres Democráticas
<i>La Boletina</i>	Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH-83)
<i>Testimonio</i>	Frente de Liberación Femenina de Chile
<i>Nos/otras</i>	Ediciones feministas Centro Mujer
<i>Boletín Sintracap</i>	Sindicato Interempresas de Trabajadoras de Casa Particular (SIN-TRACAP)
<i>Vamos mujer</i>	Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM)
<i>Furia</i>	Federación de Mujeres Socialistas
<i>Boletín del Círculo</i>	Círculo de Estudios de la Mujer
<i>Boletín Bimestral La Morada</i>	Corporación Casa de la Mujer La Morada
<i>Tu voz Mujer</i>	Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Concepción.
<i>La Cigarra</i>	Comité Pro Unidad de la Mujer
<i>Boletín Ridem</i>	Red de Información y Difusión de la Mujer (RIDEM)

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del Proyecto Fondecyt N°1150049

de la Comisión Nacional Campesina (1986); «Resoluciones» realizada por el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical (1985); el «Pliego de las mujeres» (1986); y «Demandas de las mujeres a la democracia» del Movimiento Feminista (1988)^[19]. En ese mismo contexto, se avanzó en la creación de organizaciones específicas que daban cuenta de la necesidad urgente de reunir las demandas de las mujeres en un solo gran petitorio que ganara

espacios dentro de la oposición. Ejemplo de ello fueron la conformación del Comando de Mujeres por el NO y la Concertación de Mujeres por la democracia.

Así, durante toda la temporalidad extendida y previamente descrita, las mujeres organizadas fueron fortaleciendo la conciencia de su condición de subordinación, cuestión que las llevó a politizar la cotidianidad ocupando el espacio de lo público a través de numerosos artefactos de comunicación popular y redes de sociabilidad. Fundamentales para ello, fueron las ONG que -de forma independiente o al alero de

19.- E. Gaviola, E. Largo y S. Palestro, «Si la mujer no está, la democracia no va», p. 114.

la Iglesia Católica-, practicaron la investigación-acción para visibilizar y subvertir el orden patriarcal subyacente a la dictadura y al modelo de acumulación capitalista^[20] (ver Cuadro 2). Sin embargo, hacia el final del período, los debates respecto de la autonomía feminista y subordinación a la militancia partidaria, resquebrajó la unidad incipiente que alcanzó a tener dicho movimiento social de mujeres.

El «retorno de la política tradicional» hacia 1988, tensionó de distintas formas al movimiento social y político de mujeres. Las experiencias comunes se resquebrajaron en el itinerario transicional inmediato y la virtuosa comunicación entre el mundo popular e intelectual, entre la militancia y no militancia, se fue erosionando aceleradamente.

Sociabilidades y redes del movimiento social y político de mujeres

Los principales espacios de sociabilidad política de las mujeres fueron casas de la mujer, centros, coordinadoras, agrupaciones, talleres, comedores, acompañadas del florecimiento de una importante red de ONG, que hizo del tema femenino uno de sus ejes de reflexión, investigación y acción social^[21].

La característica central de este movimiento social fundamentado en el asociacionismo de género, fue repensar la sociedad desde la cotidianeidad para transformar las relaciones sociales, cuyos principales objetivos eran intentar disolver la división

binaria entre lo público y privado y la creciente necesidad de crear nuevas estructuras que superaran las dicotomías tradicionales de la política: «Íbamos y veníamos intentando resolver la supuesta dicotomía participación-eficiencia ¿Colectivo sin estructura? ¿Necesidad de delegar, de liderazgos, de responsabilidades asignadas, de rendimiento, de metas a cumplir?»^[22]. No reproducir organizaciones autoritarias se constituyó en un horizonte de expectativas de las mujeres, esfuerzo que chocaba con las experiencias de las militantes políticas que obligadamente comenzaron a cuestionar las estructuras político-partidarias tradicionales.

La necesidad de colectivizar las discusiones y experiencias permitió la implementación de coordinaciones sectoriales y territoriales, a partir de las cuales las organizaciones se fueron desplegando en distintas partes del país. La mayoría de ellas buscó desarrollar formas horizontales de liderazgo, que permitieran la expresión de la heterogeneidad de sus miembros y la autonomía en torno a intereses específicos emergentes en la cotidianeidad^[23].

La proliferación de organizaciones de mujeres generó la necesidad de acciones y propuestas unitarias. En ese contexto puede comprenderse la re-emergencia del Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCh 83), colectivo que a través de la recuperación del nombre (y con ello, parte de la identidad) de la organización nacida en la década de los treinta en Chile, intentó generar convergencias de las distintas formas de asociatividad, para arti-

20.- Teresa Valdés, «El movimiento social de mujeres y la producción de conocimiento sobre la condición de la mujer». *Documento de Trabajo*, 43 (1993), Santiago, FLACSO.

21.- Cristina Moyano y Marcelo Mella, «La revista Proposiciones: espacio de sociabilidad intelectual y producción de saberes en el campo intelectual de la izquierda chilena durante los años 80», *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 32 (2017), pp. 77-98.

22.- Rosa Bravo, María Isabel Cruzat, Elena Serrano y Rosalba Todaro, «Y así va creciendo... el feminismo en Chile», *Ediciones de las mujeres*, 5 (1986), p. 27.

23.- Natacha Molina, «Propuestas políticas y orientaciones de cambio en la situación de la mujer», en Manuel Antonio Garretón (comp.), *Propuestas políticas y demandas sociales. Vol. III*, Santiago, FLACSO, 1989, pp. 31-172.

cular «una comunidad política ampliada en la que se proyectó la urgencia por impulsar la participación femenina e incorporar los problemas de la mujer a la lucha contra el autoritarismo»^[24].

En el mismo año 1983 nació también el colectivo Mujeres por la Vida, que tuvo como objetivos centrales «actuar unitariamente en la búsqueda de consensos políticos en el más amplio espectro opositor y colaborar activamente en la movilización social, convocando a las mujeres chilenas a manifestar públicamente, en las calles, en todas partes, sus deseos de democracia»^[25]. Estos hitos organizacionales fueron muestra de cómo la demanda de las mujeres se vinculaba a repensar la democracia en el marco de un espacio feminista que cruzaba las fronteras del país. La realización de foros, debates, charlas, talleres, actos, intervenciones en el espacio público, así como la publicación de boletines con fines educativos-populares y artículos académicos, fueron las formas materiales en que esta red se fue construyendo. La disputa por la palabra, por incorporar nuevos conceptos para ejecutar la realidad patriarcal y dictatorial, fue parte sustantiva de los objetivos que tuvieron quienes participaron de estas organizaciones.

Las acciones de coordinación y capacitación se entrecruzaron y nutrieron de las redes nacionales de prensa popular, que permitieron unir a las distintas organizaciones para que se reconocieran entre sí. La importancia de la comunicación popular, desarrollada en estos años, fue un factor clave en la posibilidad de configuración de

un «nosotras». A través de la prensa popular, compuesta por variados tipos de boletines, se divulgaban los espacios de encuentro de mujeres, se informaba de los talleres que ofrecían distintas organizaciones y de los encuentros nacionales e internacionales de mujeres. Algunos de estos eventos son narrados en el Cuadro 3, expresión de la rica y heterogénea red de organizaciones de mujeres durante la dictadura.

Quienes participaron de esta red, han enfatizado que:

«La Prensa Popular ha tenido un desarrollo muy importante tanto en calidad como en cantidad, los boletines populares han sido la voz de muchas organizaciones que han nacido al calor de los anhelos de libertad, de trabajo, de justicia, de igualdad... cumplieron un papel importante en la creación de espacios. Los boletines han sido una valiosa herramienta en la lucha por reconquistar la Democracia»^[26].

En conjunto con lo anterior, la red tenía también un carácter transnacional, en la que colaboraron organizaciones tan relevantes como lo fueron la revista Isis Internacional, Fempress/Ilet, y los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe, de los que varias mujeres participaron activamente.

Las experiencias individuales y comparadas fueron las que modelaron una identidad colectiva dentro del movimiento de mujeres. La formación de mundos comunes y, con ello, la conformación de comunidades interconectadas dentro del mismo. En este sentido, también fueron muy relevantes las investigaciones sobre la historia y participación de las mujeres en relación a tiempos pasados. Conocer su historia y comprenderse dentro de la construcción de

24.- Elisabet Prudent, *Y entonces estaban ellas: Memoria(s) de las Mujeres Democráticas durante la dictadura*, Santiago, CEIBO Ediciones, 2013, p. 46.

25.- Teresa Valdés, *Las mujeres y la dictadura militar en Chile*, Santiago, FLACSO, 1987, p. 16.

26.- Boletín *Palomita*, junio-julio 1988, p. 3.

Cuadro 3. Muestra representativa de los principales Encuentros Nacionales e Internacionales organizados por mujeres

AÑO/ DESCRIPCIÓN	ENCUENTROS INTERNACIONALES	ENCUENTROS NACIONALES
1975	- Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, en México. En el marco de esta Conferencia se establece el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 1975-1985.	
1978		- Primer Encuentro Nacional de la Mujer, organizado por el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical.
1979		- Segundo Encuentro Nacional de la Mujer, organizado por el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical. - Primer Encuentro del Círculo de Estudios de la Mujer.
1980	- Segunda Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la mujer, en Copenhague (Dinamarca). Tuvo por fin analizar los avances realizados en la mitad del Decenio para la Mujer.	- Tercer Encuentro Nacional de la Mujer, organizado por el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical.
1981	- Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá (Colombia).	- Cuarto Encuentro de la Mujer Trabajadora, organizado por el Departamento Femenino de la Coordinadora Nacional Sindical.
1983	Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Lima (Perú).	- Acto en el Teatro Caupolicán, Santiago. En él se congregaron más de once mil mujeres de diversas organizaciones.
1985	- Conferencia Mundial en Nairobi (Kenya), en donde se evaluaron los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. - Tercer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bertioja (Brasil).	- Encuentro de diversas organizaciones en la «Jornada por la Vida». - Segundo Encuentro de Prensa Popular, en donde participa el MEMCH-83.
1986	- Primer Encuentro de Mujeres del Cono Sur en Mendoza (Argentina).	- Primer Encuentro de la Mujer Rural, organizado por el Departamento Femenino de la Comisión Nacional Campesina. - Tercer Encuentro de Prensa Popular, en donde participa el MEMCH-83.
1987	- Cuarto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Taxco (México).	
1989	- Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo (Argentina)	- Acto Multitudinario en el Estadio Santa Laura (Santiago), en el marco de la conmemoración del 8 de marzo.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del proyecto Fondecyt N° 1150049.

un movimiento con antecedentes y con posibles proyecciones, se volvió un objetivo primordial, promovido a través de las prác-

ticas de educación popular e historia oral. Para las mujeres de los distintos talleres: «construir identidad individual y colectiva

significa[ba] necesariamente abordar aquellos núcleos básicos que configuran 'el ser mujer'; reconocerse a sí misma y reconocer a otros como parte de un grupo social que tiene una realidad específica; diferenciarse de los otros sujetos sociales explicitando y valorando lo propio»^[27].

Con todo, un hito cultural, colaboró permanentemente a la reunión de esta red en espacios públicos. Nos referimos a las conmemoraciones que se realizaban los 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, momento en el que se renovaba «el compromiso de la lucha antidictatorial de las mujeres y ampliaban los márgenes del discurso democrático en consideración a sus proyecciones igualitarias y pluralistas, apuntando al proyecto mayor por la conquista de una democracia real»^[28].

La última gran congregación de las mujeres de los distintos sectores políticos de la oposición y las convocadas por el movimiento social de mujeres, se realizó en el marco de las conmemoraciones del 8 de marzo de 1989, en donde participaron más de veinticinco mil mujeres esperanzadas en que sería el último Día Internacional de la Mujer en dictadura, por lo que se «cerraba así un ciclo para el movimiento, simbolizado en el nacimiento de la mujer nueva y su compromiso con la democracia»^[29]. Numerosas agrupaciones se hicieron presente ese día, y si bien permiten reconocer la intrincada y extendida red del movimiento social de mujeres, también fue expresión de diversos debates o tensiones no resueltas, que estaban en la base de las experiencias societales de muchos años de resistencia, militancias sociales y político partidarias.

27.- Andrea Rodó y Paulina Saball, «Educación popular, autonomía relativa y constitución de un movimiento de mujeres», *Proposiciones*, 15 (1987), p. 199.

28.- E. Prudent, «Y entonces estaban ellas», p. 48.

29.- E. Gaviola, E. Largo y S. Palestro, «Si la mujer no está, la democracia no va», p. 115.

Debates políticos en el movimiento social de mujeres

Junto con la ampliación de este campo poblado de mujeres organizadas, también se extendieron debates y disputas políticas respecto de los horizontes de expectativas, las tensiones de clases y la vinculación con los partidos políticos de la oposición, por lo que sería un espejismo suponer que en estos años hubo una unidad epistémica y política.

Uno de los debates más relevantes fue el de los contenidos de la democracia. De la sobrevivencia y la resistencia que caracterizaron los primeros años de la dictadura, el movimiento social de mujeres fue transitando hacia una politización de las demandas femeninas, emanadas de las especificidades de su experiencia en una sociedad patriarcal, autoritaria y capitalista. La lucha contra el autoritarismo dotó de nuevos sentidos a la categoría de democracia. Los nuevos horizontes de expectativas nacían del auto-reconocimiento, de la disputa por romper el binarismo entre lo público y lo privado y por ampliar la denuncia respecto de las violencias de la que eran objeto. Como lo planteaba Teresa Valdés a comienzos de los años 90, se trató de un «proceso gradual y sostenido de validación de espacios en la sociedad en los cuales se busca reafirmar una identidad y diseñar estrategias para lograr equidad y participación para las mujeres en todas las áreas de la estructura social y política»^[30].

La experiencia autoritaria se amplió, ya que no sólo estaba contenida en la esfera política institucional, sino que también en un conjunto de estructuras sociales, culturales y económicas, que excluían y subordinaban a la mujer. De lo anterior se

30.- T. Valdés, «El movimiento social de mujeres y la producción de conocimiento sobre la condición de la mujer», p. 22.

deducía, que la expectativa respecto de la democracia implicaba desmontar dichas estructuras, para eliminar cualquier tipo de desigualdad, derivada en opresión, basada en los roles de género.

Este proceso de visibilización fue uno de los principales objetivos de las intelectuales feministas de oposición. Para una de las más reconocidas, Julieta Kirkwood:

«La recuperación de la historia propia de opresión y contestación de todo un colectivo de mujeres, permitirá satisfacer la necesidad de que las generaciones presentes conozcan su propio pasado real. Con vistas a que su inserción futura no tienda, nuevamente, a la negación de sí mismas y a la reafirmación de su no identidad»^[31].

El lema que encarnó este imaginario, y con el que marcharon muchas veces las mujeres en dictadura, fue el de «Democracia en el país y en la casa», intentando conjugar una demanda colectiva de toda la oposición política, con las particularidades del sueño democrático de las mujeres, que experimentaban un autoritarismo de más larga data, en las relaciones cotidianas de la vida social. En la memoria de una de sus activistas: «Queríamos la democracia, pero ésta ya tenía una connotación distinta, había ido más allá de ser considerada una forma de administración del Estado; se había introducido en todas las dimensiones de la vida. Luchábamos contra la opresión en tanto ciudadanas y en tanto mujeres»^[32].

Así, mientras el concepto de democracia adquiría nuevos estratos semánticos organizando las expectativas, también mostraba que lo que se prefiguraba a nivel de los partidos políticos de oposición distaría bas-

tante de lo anhelado. Para algunos hombres intelectuales de la oposición, un proceso de ampliación de la democracia sólo podía construirse en un momento distinto de la transición político institucional, por lo que llamaban a un proceso más gradual y con menos expectativas, argumentando la necesidad de un realismo político para guiar cualquier proceso de unidad programática de la oposición^[33].

Gran parte de los nuevos contenidos de la democracia nacieron de disputas al interior del campo de las mujeres de oposición. Los diferentes intereses específicos que habían posibilitado su organización inicial, también mostraban la diversidad de contenidos de la demanda democrática. Política, laboral, educacional, legal, entre otros, constituían los principales tópicos. Ninguna precedía al otro, porque todas constituían parte del engranaje del autoritarismo vigente.

Sin embargo, un grupo importante de las mujeres del movimiento social, diagnosticaron tempranamente que estas demandas debían hacerse al interior de las colectividades políticas. Varias de ellas militantes comunistas, socialistas, mapucistas y miristas, experimentaron la exclusión de sus demandas, denostadas como secundarias por sus compañeros de partidos, para quienes la dictadura no tenía género.

Paralelo a lo anterior, las mujeres de izquierda también debieron enfrentar una segunda complejidad, nacida de reflexiones teóricas que suponían al género como una opresión inferior a la clase, o que entendían el feminismo como una ideología propia de la burguesía desarrollada de los países del primer mundo. La demanda por democra-

31.- Julieta Kirkwood, *Ser política en Chile. Las feministas y los partidos*, Santiago, LOM Ediciones, 2010, p. 23.

32.- S. Palestro, «Mujeres en movimiento 1973-1989», p. 62.

33.- Cristina Moyano e Ivette Lozoya, «Intelectuales de izquierda en Chile. ¿De la politización a la tecnocracia? Debates sobre la función política y el ser intelectual entre 1960 y 1990», *Revista Signos Históricas*, 41 (2019), pp. 192-229.



Manifestante detenida por carabineros en 1984 (Foto: Kena Lorenzini, fuente: Museo Histórico Nacional de Chile).

cia, por tanto, no sólo era amplia y diversa, sino que también tensionó los lenguajes de su enunciación, irrumpiendo en un mundo ideológico en el que el género era una novedad, bastante lejana de las prioridades que implicaba pensar la igualdad entre hombres y mujeres, además de postergable en el tiempo, a momentos muy posteriores a la salida del gobierno dictatorial.

Un segundo debate tuvo relación con la compleja recepción del feminismo. Por un lado, existía en los grupos sociales de mujeres organizadas una valoración positiva de su incorporación en tanto «concepción radical del mundo que permite analizar todos los problemas y no solamente una lista reducida de temas específicos tradicionalmente llamados asuntos femeninos»^[34], haciendo:

34.- Roxana Carrillo, «Centros de mujeres, espacios de mujeres», *Ediciones de las Mujeres*, 5 (1986), p. 35.

«Visible el sistema de desigualdad entre los sexos, lo que implica[ba] replantear el concepto de las relaciones de poder dentro y fuera de la familia; es decir, analizar el mundo privado como un espacio donde no sólo se dan sentimientos y emociones, sino también relaciones de dominio de un sexo sobre otro y de una generación sobre otra»^[35].

Así, mientras unas pugnaban por ampliar el concepto «lo político»^[36]. De otro lado, un grupo de mujeres, mayoritariamente pobladoras vinculadas a organizaciones de izquierda (como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Chile (PCCh), veían en el feminismo una ideología burguesa, que

35.- Virginia Vargas, «Patriarcado, feminismo y autonomía», en *Boletín Nos/otras*, 1 (1984), sección separata.

36.- *Íbidem*.

invisibilizaba los conflictos anteriores derivados de las desigualdades de clases. En el boletín *Nuestro Despertar*, enfatizaron por ejemplo que:

«La lucha por la liberación de la mujer no tiene nada que ver con feminismo, no se trata de ninguna manera de la lucha del sexo femenino en contra del masculino, la lucha por la liberación de la mujer es una política revolucionaria y por ser una lucha en contra del sistema capitalista que mantiene y necesita de la opresión de la mujer está inserta en el contexto de la lucha de clases y de todo el conjunto del pueblo»^[37].

La tensión entre ambas visiones impidió que el uso del feminismo se extendiera como identidad ideológica en los años 80, aún cuando recuerdos posteriores tiendan a esa revalorización. Lo cierto es que, en la oposición, la categoría feminismo requería permanentes aclaraciones, ya que, a decir de las mujeres de la época, por un lado «espanta a las grandes mayorías de mujeres de clase media que son muy poco concientizadas políticamente»^[38] y por el otro, era menester explicitar a los «hombres» que «las mujeres no queremos una sociedad que excluya o someta a los hombres. No buscamos revanchismo: invitamos a hombres cuestionar los privilegios que la cultura les asigna y que empobrece su potencialidad de vivir una vida afectiva gratificante y plena»^[39]. Para Kirkwood:

«El feminismo contemporáneo reaparece en momentos en que impera una tremenda dislocación ideológica, una inquietante

pérdida de perspectiva; donde ya no todo puede ser explicado por la razón y se sospecha la necesidad de explicaciones más subjetivas desde grandes cantidades de masas humanas. Es, claramente, el rechazo a un mundo donde todo lo que no se explica en términos de relaciones de clase, de trabajo, de producción y mercado, tiende a *no existir*, a no ser que se le reduzca, como sea, a un último objetivismo material»^[40].

Sin embargo, pese a la relevancia que las mujeres políticas de izquierda intentaban darle al feminismo, no ignoraban que «paradojalmente esos partidos, que debieran recoger los planteamientos de las reivindicaciones específicas de las mujeres por las mismas razones ya señaladas, han sido los más renuentes, los más duros»^[41].

Así, el feminismo como categoría teórica y política contaba con múltiples detractores y adherentes. Cruzaba a la izquierda en su conjunto, tanto como a las experiencias de clase de las heterogéneas militantes del movimiento social de mujeres.

Historiadores sociales como Julio Pinto y Gabriel Salazar, han enfatizado la diferencia entre un feminismo ilustrado, de clase media y de militantes de izquierda, respecto de uno popular, que habría generado distintas experiencias de asociatividad en las poblaciones de Santiago. Según estos historiadores, este feminismo puede ser definido a partir de un conjunto de características, tales como que: 1) el feminismo popular comprende la liberación personal como un *proceso o proyecto común*, en donde toman relevancia las redes de solidaridad; 2) la noción de feminidad se centró en el *despliegue*

37.- Boletín *Nuestro despertar*, octubre de 1985, p.5.

38.- Isis Internacional, «Feminismo Latinoamericano: Los retos frente al poder. Conversación con Adriana Santa Cruz», *Ediciones de las Mujeres*, 5 (1986), p. 89.

39.- Movimiento Feminista, «Declaración del Movimiento Feminista de Chile», *Fempres*, 32 (1984), p. 9.

40.- J. Kirkwood, «Ser política en Chile. Las feministas y los partidos», p. 57.

41.- Isis Internacional, «Feminismo Latinoamericano», pp. 89-90.

programático de una capacidad autogestionaria múltiple más que atenerse a los roles tradicionales que invocaba una imagen ideal de matrimonio y familia; 3) primó la construcción de una participación social de carácter social y comunitaria a modo de ejercicio político; 4) buscaron proponer un modelo de democracia que incluyera a todos los ciudadanos y no delimitar el espacio de soberanía a la comprensión de esta según la estructura binaria de los sexos; 5) el feminismo popular tiene la fuerza de una historia propia que introdujo formas alternativas al sistema imperante desarrollando micro-poderes sociales; 6) la lucha de las pobladoras al nacer desde una condición de explotación, extrapola la lucha netamente femenina a una que es también de clase, por lo que reúne en sí tres expresiones socio-culturales: la de las clases explotadas, la de un modo democrático-vecinal de hacer política, y la de las mujeres^[42].

Con todo y pese a sus diferencias, las tensiones en su uso y contenido, el feminismo fue parte de un amplio movimiento social que, hacia inicio de los años 80, «encontró estímulos importantes en la emergente propuesta de impulsar el desarrollo de los movimientos sociales, de reconocer la heterogeneidad del mundo popular, y en la valoración de las transformaciones en el ámbito de la vida cotidiana, la cultura y las relaciones sociales»^[43]. Sin embargo, también se tensionó respecto del lugar de las mujeres feministas, el rol de los partidos y la definición de su propia identidad militante.

Un tercer debate versó sobre la autonomía del movimiento de mujeres respecto a los partidos políticos y la experiencia de

la doble militancia, política y social. Dicho debate circuló en diálogos cruzados entre las organizaciones a nivel nacional y en los distintos encuentros internacionales. En ambos espacios, se problematizaron los desafíos que presentaba la incorporación de las mujeres en el escenario político, emergiendo una compleja reflexión sobre la dificultosa relación con los partidos que entendían la cuestión femenina como algo secundario o postergable.

Según actoras de la época, algunos sectores «han vivido culpabilizando al feminismo de ser ‘burgués’, ‘individualista’ y de preocuparse del patriarcado, en circunstancias que la ‘única raíz de todos los males es el capitalismo’»^[44]. De acuerdo a dicha comprensión del problema, es que mujeres feministas planteaban que:

«En esa tensión vivimos, obligadas a criticar a esos partidos por su autoritarismo e intentando hacerlos entender que el patriarcado está más allá y más acá del capitalismo, de las dictaduras o del marxismo... y requiere de soluciones impostergables. Sin embargo, hemos sido tímidas en esas críticas para no hacerle el juego a las fuerzas conservadoras dentro de nuestros países, y a la vez ahuyentamos a grandes masas de mujeres de clase media que deben identificarse con el movimiento para hacerlo masivo, fuerte, poderoso y capaz de exigir los cambios que buscamos para todas las mujeres»^[45].

Para ellas, el reto del feminismo radicaba en mostrar con nitidez, particularmente a los partidos de izquierda, «el enlace existente entre discriminación económica y opresión machista, entre explotación ca-

42.- Gabriel Salazar y Julio Pinto, *Historia Contemporánea de Chile IV. Hombría y Feminidad*, Santiago, LOM Ediciones, 2002, pp. 208-209.

43.- A. Rodó y P. Saball, «Educación popular, autonomía relativa y constitución de un movimiento de mujeres», p. 196.

44.- Isis Internacional, «Feminismo latinoamericano», p. 90.

45.- *Íbidem*.



Mujeres feministas se manifiestan un 8 de marzo en Santiago de Chile, pidiendo democracia durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (Foto: Kena Lorenzini, fuente: Museo Histórico Nacional de Chile).

pitalista y explotación patriarcal»^[46]. Julietta Kirkwood, enfatizaba en ese sentido que, bajo estas condiciones:

«La responsabilidad de la opresión le corresponde al opresor, en tanto la responsabilidad de la rebeldía compete al oprimido. De allí la fuerza y la voluntad intrínsecas en la pretensión de autonomía de los movimientos políticos feministas –como sujetos de su propia rebeldía–, lo que no destruye ni invalida su planteo de la globalidad del cambio político social»^[47].

En concordancia a ello, Roxana Carrillo señalaba que:

«Estos problemas son similares a la presión

46.- Ana María Portugal, «¿Qué es ser feminista en América Latina?», *Ediciones de las Mujeres*, 5 (1986), p. 12.

47.- J. Kirkwood, «Ser política en Chile. Las feministas y los partidos», p. 57.

que ejerce la izquierda masculina sobre las visiones políticas feministas y que se condensan en el agotador estribillo ‘la lucha de las mujeres debe estar supeditada a la lucha de clases’. O en las acusaciones permanentes que se nos hace de dividir a la clase trabajadora, por ejemplo, cuando los programas de organizaciones en sectores populares incluyen aspectos que la izquierda masculina persiste en calificar de personales y por lo tanto no relevantes para la lucha política. En este sentido, tanto los centros como el movimiento feminista deben mantener una permanente actitud de alerta frente a los intentos –abiertos o encubiertos, de adentro o de afuera- de cooptación o transgresión de su autonomía»^[48].

Así, las mujeres del movimiento social

48.- Roxana Carrillo, «Centros de mujeres, espacios de mujeres», pp. 39-40.

organizado, reconocían la tensión que generaba la necesidad de autonomía, la que «hace alusión a la necesidad de un movimiento independiente, tanto a nivel organizativo como de las reivindicaciones específicas de la mujer, garantizando que éstas no se diluyan en las múltiples contradicciones sociales y políticas ni en los intereses de determinados grupos, clases o instituciones»^[49]. Lo anterior interpelaba en primer lugar, a la convicción de que la liberación de las mujeres sería netamente obra de las mujeres mismas, por lo que las organizaciones autónomas potenciarían la acción individual y darían fuerza colectiva a las demandas. De ello derivaba la necesidad de construir espacios autónomos para confrontarse e identificarse entre mujeres, para desarrollar una conciencia colectiva, para conectarse con el mundo desde sus perspectivas e intereses, y para unificar su pensar y actuar. Así, al orientar la lucha femenina contra el capitalismo patriarcal, ambos sistemas tan independientes como coexistentes, implicaría reconocer que la lucha por la eliminación de la opresión hacia las mujeres significara estar luchando contra el sistema como un todo^[50].

En un segundo lugar, no era posible desconocer la relevancia que tenían los conglomerados políticos para dichas militantes del movimiento social de mujeres. Por ello, las discusiones en torno a la autonomía, principalmente en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (1981, Colombia), mostraron matices en torno a la disputa previa. Entre las conclusiones de dicho encuentro se proponía: 1) mantener una autonomía orgánica, considerando que los objetivos no son autónomos, ya que están interrelacionados con los

intereses de la clase obrera en su conjunto para la derrota del imperialismo; 2) aceptar la diferencia entre autonomía organizativa y autonomía política, reconociendo que se pueden generar alianzas para un proyecto político global^[51].

Con todo, la disputa no era sólo ideológica, sino que también tocaba las bases de las identidades políticas, que muchas de las mujeres de organizaciones sociales mantenían como experiencia de politización inicial. Hacia fines del ciclo de protesta social en 1986, las mujeres experimentaron esa tensión de forma más aguda, pues la propuesta de vía pactada y concertada ganaba las disputas al interior de los conglomerados políticos tradicionales. Así, mujeres de la Izquierda Cristiana (IC), de los Partidos Socialistas, del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), pero también las comunistas y miristas, estuvieron conminadas a tomar posiciones más claras. ¿El movimiento o el partido? En el recuerdo de Adriana Santa Cruz, por ejemplo, se recupera esa compleja experiencia de doble militancia, indicando que:

«Son experiencias no sólo válidas sino necesarias. La vinculación entre el movimiento social y los partidos debe darse con algunas personas que están en ambas cosas. Eso sí, me parece que encauzar todo el esfuerzo del feminismo, a través de una determinada colectividad o corriente política, es un gran error. Siento que debemos levantar las consignas feministas en distintos espacios del espectro político, penetrar a todo el aparataje político. [...] Es imprescindible apoyar a las mujeres que están dentro de las instituciones en todos los países donde hay un proceso de democratización en marcha»^[52].

49.- V. Vargas, «Patriarcado, feminismo y autonomía», sección separata.

50.- *Ibidem*.

51.- Isis Internacional, «Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe», en *Boletín Internacional de las Mujeres*, 9 (1982), pp. 33-34.

52.- Isis Internacional, «Feminismo Latinoamericano», p.



Protesta del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (Fondo Martín Mapocho, Archivo Nacional de la Administración de Chile).

Desde el Movimiento Feminista, en cambio, les plantearon que «no se trata de insertarse en el mundo que ya tiene los límites impuestos y los roles repartidos. Se trata de transformar el mundo. No es con las herramientas del amo que se desmantela la casa del amo. A nosotras nos compete ser sujetos de nuestra propia rebeldía»^[53].

Esta tensión, eclosionó por la fuerza de los hechos. La conformación de alianzas políticas hacia 1987, reagrupó a los partidos de la oposición y aunque el movimiento social de mujeres siguió existiendo con fuerza hasta 1989, muchas mujeres habían tomado la opción de hacer política al interior de los partidos, varios de los cuales serían prontamente gobierno, para erosionar el patriarcado desde el Estado.

Los balances de los gobiernos de la Concertación, hechos por las feministas con-

trahegemónicas de los 90 y en el 2000, han sido mayoritariamente negativos y permitieron dotar de sentido a una nueva narrativa articuladora de la experiencia de lo que significaba ser feminista en un período de transición. ¿Transición a qué? Se plantearon muchas feministas críticas del proceso de reconstrucción democrática y desde allí han disputado, hasta hoy, la temporalidad del presente y han reorganizado su propia relación con el pasado dictatorial.

Conclusiones

A 50 años del Golpe de Estado en Chile, «las mujeres no olvidamos ni perdonamos ningún golpe», declaró la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres. Consigna que entrelaza la politicidad de la vida cotidiana con la acumulación histórica de distintos tipos de opresión, represión, violencia y disciplinamiento hacia las mujeres. Pensar hoy a las mujeres que combatieron la dictadura desde distintos frentes, feministas o no, organizadas o autoconvocadas,

91

53.- Movimiento Feminista, «Todas juntas», *Fempres*, 68 (1987), p. 12.

militantes sociales y políticas, intelectuales y pobladoras, entre otras, no solo apunta a visitar el pasado para rescatar la agencia de un conjunto amplio de mujeres que desafiaron al orden patriarcal en tiempos de dictadura, sino también para poner en perspectiva histórica sus complejidades, profundidades y potencialidades. No es solo hablar del pasado, sino también de proyectos de futuro que aún siguen latentes y en constante actualización, mediante las renovaciones que permite la interacción con las nuevas generaciones.

En el recorrido realizado por este artículo, probablemente quedan fuera un sin-

número de actrices, organizaciones y encuentros que aún faltan por ser estudiados, nombrados y situados en el lugar histórico que merecen. Sin embargo, hemos apostado por un reconocimiento amplio de la diversidad de acciones emprendidas y las formas en las que se organizó un diverso movimiento social de mujeres y feministas que, sin estar exento de tensiones, se nos abre hoy como un legado vivo de nuestra historicidad en tanto mujeres que nos reconocemos dentro de una cultura de izquierda, de oposición a todo tipo de violencia, críticas del neoliberalismo y con horizontes de emancipación.

Nuestros pasados que no pasan. Tensiones entre la historia, las memorias y la justicia*

*Our ever present past. Tensions between history,
memories and justice*

María Olga Ruiz

Universidad de La Frontera (Temuco, Chile)

Consuelo Telechea

Universidad de la Frontera (Temuco, Chile)

Franco Carreño

Universidad de la Frontera (Temuco, Chile)

Resumen

El presente artículo analiza el pasado-presente en el Chile post-dictatorial reflexionando en torno a los siguientes aspectos: el lugar central de los testigos en la construcción de relatos que discuten o interpelan políticas de memorias oficiales orientadas a los consensos y la reconciliación nacional; la presencia cada vez más relevante de actores de segunda y tercera generación de víctimas; la centralidad de la justicia como vector de memoria y como «actor en la escritura de la historia» y, por último, la instalación en el debate público de la memoria como deber ciudadano y político.

Palabras clave: memoria, historia, justicia, pasado.

Abstract

This article analyzes the past-present in post-dictatorial Chile, focusing on the following aspects: the central place of witnesses in the construction of narratives that deal with or challenge official memory policies aimed at consensus and national reconciliation; the increasingly relevant presence of actors from the second and third generation of victims; the significance of justice as a vector of memory and as an «actor in the writing of history»; and, finally, the installation of memory as a civic and political duty in the public debate

Keywords: memory, history, justice, the past.

*Este artículo fue realizado en el marco del proyecto D123-0036 «Emociones para y desde la revolución. Una aproximación cultural a las militancias de izquierda en el cono sur latinoamericano en los largos sesenta del siglo XX».

El historiador francés Henry Rousso señaló hace casi dos décadas que los procesos de transición hacia la democracia desplegados en distintas latitudes y los escenarios postautoritarios a los que dieron origen tenían rasgos compartidos. Entre ellos, identifica los siguientes: el lugar central de los testigos en la construcción de relatos que discuten o interpelan políticas de memorias oficiales orientadas a los consensos y la reconciliación nacional; la presencia cada vez más relevante de actores de segunda y tercera generación de víctimas, es decir hijos y nietos; la centralidad de la justicia como vector de memoria y como «actor en la escritura de la historia»^[1]; y, por último, la instalación en el debate público de la memoria como deber ciudadano y político.

A lo largo de este escrito, y siguiendo los elementos identificados por Rousso, observaremos el caso chileno en diálogo con algunos debates que, desde la investigación histórica y los estudios de la memoria social, se han desarrollado en las últimas décadas en América Latina.

La voz de los testigos

La palabra de los testigos es indispensable para la transmisión de las experiencias y fundamental en las distintas fases o etapas de la elaboración de una memoria pública sobre el pasado reciente. Tal como señala la socióloga argentina Elizabeth Jelin, la era del testimonio se inaugura a partir del juicio a Eichman en Jerusalén (1961) y se extiende hasta la actualidad^[2]. Fue en

1.-Henry Rousso, «La memoria de Vichy o la ilusión de la excepción francesa (1980-2000)», en Julio Aróstegui y Francois Godicheau (eds), *Guerra Civil. Mito y Memoria*, Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 327.

2.- Elizabeth Jelin, «La narrativa personal de lo 'invivable'», en Vera Carnovale, Federico Lorenz y Roberto Pittaluga (comp.), *Historia, memoria y fuentes orales*, Buenos Aires, Memoria Abierta y CEDINCI editores, 2006.

los largos sesenta latinoamericanos el momento en que la producción testimonial logró un sitio relevante en tanto discurso de resistencia o narración de urgencia de sectores históricamente postergados. Tal como señaló John Beverley^[3]:

«[...] el testimonio surge precisamente en el contexto de una crisis de representatividad de los viejos partidos políticos, incluidos los de la izquierda. (...) Concretamente, tenemos la impresión de que, tanto en las revoluciones centroamericanas como en los movimientos civiles en pro de los derechos humanos y la redemocratización en el Cono Sur, el testimonio ha sido no solo una representación de formas de resistencia y lucha sino también un medio y hasta un modelo para éstas»^[4].

El denominado giro subjetivo ha logrado instalarse exitosamente en el mundo académico en el marco de un boom memorístico que, desde distintas disciplinas, valoriza la reconstrucción del pasado desde la subjetividad de los sujetos, enfoque que desplazó a las estructuras como punto de vista privilegiado para analizar la realidad social.

En Chile y desde hace ya varias décadas, hemos asistido a una intensa producción testimonial que se ha manifestado en una enorme cantidad de libros de carácter biográfico, la construcción de archivos orales, etc. Muchos de esos registros han permitido visibilizar perspectivas que habían estado ausentes del gran relato sobre el pasado reciente. Es el caso de testimonios de mujeres, niños o militantes de izquierda de regiones o zonas rurales. Esas memorias

3.- René Jara y Hernán Vidal (eds.), *Testimonio y literatura*, Editorial Minneapolis, 1986, p. 2.

4.- Ver John Beverley, *Anatomía del testimonio. Del Lazarillo al Sandinismo*, Minneapolis, Minnesota, The Prisma Institute, 1987, pp. 16-17.

habían quedado desplazadas de los relatos hegemónicos sobre la dictadura y gracias a los testimonios —en sus distintos formatos— fue posible visibilizar otras miradas y experiencias.

A modo de ejemplo, solo en los últimos tres años, se han publicado tres libros de integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que militaron en el sur de Chile, específicamente en las regiones del Bío Bío y La Araucanía: *De las luchas estudiantiles a las filas de la revolución. Chiloé y Cautín 1968-1973*, de Alonso Azócar Avendaño; *La primavera del MIR. Luciano, Bauchi y Miguel*, de Julián Bastías Rebolledo y *La suma de los años*, de Víctor Maturana Burgos^[5]. Siguiendo a Alessandro Portelli, estos registros no solo nos permiten aproximarnos a lo que hicieron, lo que creyeron estar haciendo y lo que hoy día creen que hicieron, sino que nos acercan a la historia reciente regional y local^[6], la que no es una muestra en miniatura —para utilizar la metáfora de Sandra Raggio^[7]— de los procesos centrales, sino que considera procesos, actores y temporalidades específicas. En tanto, en el año 2017 se publicaba *Mujeres en el MIR. Des-armando la memoria*^[8], libro que reúne los testimonios de Margarita Fernández, Viviana Uribe, Teresa Valdés y Patricia Flores y que visibiliza no solo la presencia

femenina en organizaciones de izquierda radical, sino también los distintos enfoques, miradas y balances que ellas hacen de su experiencia. Lejos de ofrecer un cuadro homogéneo, el texto ofrece miradas diversas y no pocas veces disonantes acerca de un pasado compartido.

El testigo, como señala el historiador italiano Enzo Traverso, ha desordenado el taller de los historiadores, y nos ha permitido restituir la calidad de la experiencia y acceder a sus texturas cotidianas^[9]. Asimismo, podemos observar cómo los testimonios están habitados por distintas temporalidades poniendo en juego elementos de permanencia y rupturas, desgarros y desplazamientos del yo. Intentan hacer comprensible la experiencia pasada desde un escenario social y político radicalmente distinto desde un presente que está marcado por las experiencias posteriores^[10].

Hablar de sí mismo, narrarse, es construir un yo, pues la identidad se articula narrativamente, en un movimiento que siempre se realiza con y para otros. La construcción de narrativas sobre sí mismo es condición indispensable para el autoentendimiento y desestabiliza la dicotomía entre inestabilidad total e identidad absoluta e inmutable. Desde esta perspectiva, el sujeto no es idéntico a sí mismo ni tampoco existe de antemano, sino que se construye a partir de relatos verídicos y/o ficcionales, de modo que la propia vida no es sino un «tejido de historias narradas»^[11]. Ese tejido posibilita una reflexión sobre sí mismo de

5.- Alonso Azócar, *De las luchas estudiantiles a las filas de la revolución. Chiloé y Cautín 1968-1973*, Santiago, Doble A Editores, 2020. Julián Bastías, *La primavera del MIR. Luciano, Bauchi y Miguel*, Santiago, Colibrí SpA, 2022. Víctor Maturana, *La suma de los años*, Valparaíso, Editorial Bogavantes, 2022.

6.- Alessandro Portelli, «Lo que hace diferente a la historia oral», en Dora Schwarstein (comp.), *La Historia Oral*, Buenos Aires, CEAL, 1991.

7.- Sandra Raggio, «Enseñar los pasados que no pasan», en Patricia Flier (comp.), *Dilemas, apuestas, y reflexiones teórico-metodológicas para los abordajes en la Historia Reciente*, Argentina, Universidad Nacional de La Plata-FaHCE, 2014.

8.- Teresa Lastra y Viviana Uribe, *Mujeres en el MIR: Des-armando la Memoria*, Santiago, Pehuen Editores, 2017.

9.- Enzo Traverso, *El pasado, instrucciones de uso*, Barcelona, Marcial Pons, 2007.

10.- Alejandra Oberti, «Contarse a sí mismas. La dimensión biográfica en los relatos de mujeres que participaron en las organizaciones político-militares de los 70'», en V. Carnovale, F. Lorenz y R. Pittaluga (Comps.), *Historia, memoria y fuentes orales* y A. Portelli, «Lo que hace diferente a la historia oral».

11.- François Dosse, *La apuesta biográfica. Escribir una Vida*, València, PUV, 2007.



Pintada aparecida en Santiago durante el estallido social de octubre-noviembre de 2019 (Foto de Diana Duhalde).

modo que opera como un instrumento de reconstrucción identitaria en personas que han experimentado fracturas, quiebres y heridas del yo^[12]. Ahora bien, sobre la base de esos reconocimientos, es preciso tener en consideración que la producción testimonial no está libre del riesgo de la reificación y la monumentalización, ofreciendo miradas monolíticas y estandarizadas sobre el pasado.

Cuando Traverso señala que el testigo «situado en un pedestal encarna un pasado cuyo recuerdo se prescribe como deber cívico»^[13], está poniendo sobre la mesa un

aspecto problemático y que ha sido objeto de discusión desde hace al menos una década: la fetichización testimonial y su transformación en un ícono de verdad que no puede ser sometida a análisis ni escrutinio^[14]. Al asignarle un estatuto irrefutable, basado en la inmediatez de la experiencia, la palabra testimonial adquiere ya no solo legitimidad sino una posición de superioridad respecto de otros registros. Superioridad epistemológica (por haber vivido en carne propia la violencia terrorista del Estado) que invierte las jerarquías tradicionalmente asociadas a la relación entre entrevistado y entrevistador. Este último, que accede a la historia reciente a través de mediaciones (saber letra-

12.- Michael Pollak, *Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite*, La Plata-Buenos Aires, Ediciones Al Margen, Colección de Antropología y Sociología, 2006.

13.- E. Traverso, *El pasado, instrucciones de uso*.

14.- Beatriz Sarlo, *Tiempo Pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005.

do-académico) no pocas veces se subordina —política e intelectualmente— al testigo-víctima y la verdad de su experiencia.

«Si la legitimidad social para expresar la memoria es socialmente asignada a aquellos que tuvieron una experiencia personal de sufrimiento corporal, esta autoridad simbólica puede fácilmente deslizarse (consciente o inconscientemente) a un reclamo monopólico del sentido y del contenido de la memoria y de la verdad. El nosotros reconocido es, entonces, excluyente e intransferible»^[15].

Esa soberanía epistemológica fue tempranamente discutida por Primo Levi, sobreviviente del campo de concentración de Monowitz y autor de la obra testimonial *Trilogía de Auschwitz*^[16], en la que señala que los prisioneros accedían a una realidad fragmentaria dadas las condiciones en que se encontraban y que, por lo mismo, no eran capaces de tener una visión global o más completa del horror en que se encontraban. Lejos de toda sacralización, la mirada aguda, lúcida y crítica de Primo Levi sobre experiencias límite y el lugar del testigo, nos permite tensionar aquellos enfoques que, en forma explícita o velada, afirman la imposibilidad de interrogar —en un sentido analítico y crítico— la palabra testimonial.

La centralidad del testigo-víctima ha sido ampliamente discutida desde el mundo político y desde el campo intelectual. Desde hace al menos dos décadas se ha señalado que reducir a las personas represaliadas por el terrorismo de Estado a su condición de víctimas es una forma de borrar su identidad política, condenándolos a una

suerte de «segunda desaparición»^[17]. Esta crítica, muy extendida en distintos sectores del mundo vinculado a la defensa de los derechos humanos, iba de la mano de una reivindicación de los ideales políticos de quienes sufrieron el terrorismo de Estado.

Recientemente desde el mundo intelectual, han surgido reflexiones críticas desde un ángulo diferente. Ellas apuntan a tensionar el lugar asignado al testigo-víctima y a la victimización como experiencia fundante de un nuevo tipo de ciudadanía que entrega derechos, prerrogativas y respecto de la cual el conjunto de la sociedad está siempre en deuda. Tal vez una de las críticas más punzantes sean las planteadas por el sociólogo de origen uruguayo Gabriel Gatti:

«La víctima ya no está fuera, está dentro. Sufre, pero es el otro. Es central, masiva, numerosa, aunque se la siga pensando marcada por algo que les pasa a pocos. Así es, en las dos últimas décadas ha pasado al epicentro de la vida mediática y política, ha devenido en algunos campos un agente moral del primer orden. Son un actor central de nuestra épica, un modelo en nuestra manera de entender la acción, la ciudadanía, la movilización y la identidad, un ejemplo moral. Fueron tiempo atrás la contracara dolorosa, sufriente y castigada de la ciudadanía. Hoy no; hasta se fusionan con ella: la una no se comprendería sin la otra, los ciudadanos lo son solo cuando se manifiestan como víctimas»^[18].

La experiencia de victimización como lugar de enunciación del ciudadano fue advertida tempranamente por Tzvetan Todorov en su libro *Los abusos de la Memoria*

15.- Elizabeth Jelin, *Los trabajos de la memoria*, Perú, Instituto de Estudios Peruanos, 2012, p. 9.

16.- La trilogía reúne los siguientes libros: *Si esto es un hombre* (1947); *La tregua* (1963) y *Los hundidos y los salvados* (1986). Primo Levi, *Trilogía de Auschwitz*, Barcelona, Editorial El Aleph, 2005

17.- Antonia García Castro, *La Muerte Lenta de los Desaparecidos en Chile*, Santiago, Editorial Cuarto Propio, 2011.

18.- Gabriel Gatti, *Un mundo de víctimas*, Barcelona, Anthropos, 2017, p. 8.

al visibilizar cómo ese lugar otorgaba prestigio, identidad y reconocimiento^[19]. Los peligros de este giro son muchos y no necesariamente evidentes: el establecimiento de memorias más legítimas que otras; la valoración del sufrimiento y del dolor como fuente de la legitimidad política; la privatización del dolor y, en consecuencia, la imposibilidad de que otros grupos se comprometieran políticamente con la causa de los derechos humanos. Ello va en la dirección contraria a los propósitos centrales de los movimientos sociales que en plena dictadura lucharon por defender esa causa: lograr un consenso transversal amplio en defensa de los derechos elementales de las personas y promover, en definitiva, una cultura de los derechos humanos que operara como un mínimo civilizatorio. Nada más alejado a ello la idea de que la verdad de un grupo se sostiene en su dolor y que, justamente ese dolor, es el que otorga legitimidad a su palabra pública.

La crítica del historiador catalán Vinyes va aún más lejos, al cuestionar la victimización como una identidad fija y de carácter heredable que, además, establece una frontera moral respecto a las no víctimas.

«Una cosa es la víctima y otra erigir el dolor en identidad de larga duración, transmisible de generación en generación —la retórica de la marca, en definitiva— creando el sujeto víctima, que más que una persona (una biografía, una historia, un proyecto) deviene una categoría que establece una fuerte distinción respecto a los que no son víctimas. Distinción, identidad, que con frecuencia es erigida autoridad moral a causa del dolor»^[20].

19.- Tzvetan Todorov, *Los abusos de la memoria*, Barcelona, Editorial Paidós, 2000.

20.- Elizabeth Jelin y Ricard Vinyes, *Cómo será el pasado. Una conversación sobre el giro memorial*, Barcelona, NED ediciones, 2021.

La memoria de los hijos

En Chile, tanto la memoria de la víctima como la memoria del héroe fuertemente difundidas y defendidas en el ámbito de lo público han funcionado sutilmente como obstáculos que dificultaron una comprensión compleja de las identidades de quienes fueron militantes revolucionarios (ya sea más o menos activos) en la época de la dictadura chilena^[21]. Frente a esto tuvieron que emplazarse las memorias de hijos e hijas de aquellas/os militantes, sujetos que conocieron la intimidad y cotidianidad de lo que significó vivir la vida militante, aunque desde la mirada de quienes no tuvieron protagonismo en la toma de decisiones.

Estas memorias, que hasta hace poco permanecían «subterráneas»^[22], recientemente irrumpen trayendo consigo varios conceptos que componen la discusión teórica en torno a su lugar de enunciación. Por un lado, debido a la larga tradición de las memorias de víctima en Chile^[23], cuando se piensa en la militancia revolucionaria, inevitablemente implica entender como trauma psicosocial la violencia de Estado ejercida contra el mundo de la izquierda y desde allí implica reflexionar sobre cómo este trauma se extiende a los hijos e hijas de las/los militantes.

En este sentido, el problema de la transmisión intergeneracional de la memoria de la dictadura ha estado centrado princi-

21.- Tamara Vidaurrazaga, «Victimización y heroísmo. Disputas de las memorias emblemáticas en dos fechas conmemorativas: aniversario del Golpe de Estado y Día del Joven Combatiente», *Fronteras*, 1(2), (2014), pp. 63-80.

22.- M. Pollak, *Memoria, olvido y silencio*.

23.- Ricardo Brodsky, *Trampas de la Memoria*, Santiago de Chile, FLACSO, 2018; Olga Ruiz y Claudia Montero, «Los estudios de la memoria social: preguntas y tensiones a partir de los casos de Argentina y Chile», en Juan Sandoval y Alina Donoso (eds.), *Investigación interdisciplinaria en cultura política, memoria y derechos humanos*, Valparaíso, CEI-CPMDH, 2018, pp. 47-67.

palmente en torno al trauma asociado a la experiencia de violencia cruda y sistemática que ejerció el gobierno dictatorial sobre grupos políticos que fueron catalogados como enemigos internos. En esta línea están los trabajos del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS, 2009), así como también el de Faúndez y Cornejo (2010); el de Faúndez, Brackelaire y Cornejo (2013), y el de Cabrera, Aceituno, Matamala y Fischer (2017)^[24], entre otros.

En relación a esto, Ximena Faúndez y Marcela Cornejo han extraído de la literatura especializada el concepto de «traumatización extrema» para dar cuenta de aquel trauma que deriva de experiencias asociadas con represión política y en tanto extremas, se tornan en experiencias irrepresentables^[25], es decir inenarrables^[26]. A pesar de ello, sin embargo, la literatura da cuenta de que los afectos y emocionalidades nocivas derivadas de esas experiencias son transmitidas a las generaciones subsiguientes^[27].

24.- CINTRAS, «Daño transgeneracional en descendientes de sobrevivientes de tortura», en Beatriz Brinkmann (ed.), *Daño transgeneracional: consecuencias de la represión política en el Cono Sur*, Santiago, Chile, Lom Ediciones, 2009, pp. 253-287; Ximena Faúndez y Marcela Cornejo, «Aproximaciones al estudio de la Transmisión Transgeneracional del Trauma Psicosocial», *Revista de Psicología*, 2 (2010), pp. 31-54; Ximena Faúndez, Brackelaire, Jean Luc y Marcela Cornejo, «Transgeneracionalidad del Trauma Psicosocial: Imágenes de la Detención de Presos Políticos de la Dictadura Militar Chilena Reconstruidas por los Nietos», *Psyche*, 2, 2013; Pablo Cabrera, Roberto Aceituno, Felipe Matamala y Jorge Fischer, «Violencia de Estado y transmisión entre las generaciones», *Política y sociedad*, 1 (2017), pp. 209-228.

25.- X. Faúndez y M. Cornejo, «Aproximaciones al estudio», pp. 31-54.

26.- Esta idea ha sido desarrollada a partir de los primeros planteamientos acerca de la relación entre experiencia y narración que describiera inicialmente Walter Benjamin, *El Narrador*, Santiago, Chile, Ediciones Metales Pesados, 2008; y que ha sido retomado por muchos autores y autoras, entre los cuales destacamos a B. Sarlo, *Tiempo Pasado*, en la tradición académica que hemos seguido.

27.- Regina Bayo-Borrás, «Memoria histórica: duelo, recuerdo y transmisión transgeneracional», *Intercanvis*, 245 (2010), pp. 29-38.

En las investigaciones realizadas por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos de Chile (CINTRAS) se explica que el daño producido por violaciones a los derechos humanos en dictadura fue multigeneracional, puesto que afectó a varias generaciones; intergeneracional, lo que implica que generó conflictos entre las distintas generaciones; y transgeneracional, en tanto el daño se hereda y proyecta sus efectos perjudiciales sobre las generaciones siguientes^[28]. Respecto de la transgeneracionalidad del trauma, se entiende que la vida psíquica de todo ser humano que llega al mundo se construye en interrelación con la vida psíquica de quienes lo preceden, esto es sus padres, sus ascendientes y sus coetáneos^[29]. Por lo tanto, la amplitud del efecto del trauma psicosocial se ha podido estudiar no solo en las víctimas directas y sus familiares, sino que se ha podido dar cuenta de que sus consecuencias permean a varias generaciones de descendientes^[30].

Asimismo, desde la psicología, quienes han trabajado el tema de la transmisión transgeneracional del daño asociado al trauma de víctimas de persecución política, indican que las dinámicas relacionales dentro de estas familias dificultan el proceso de individuación y formación de la identidad de los hijos e hijas. Estos «son permanentemente confrontados con una serie de mandatos, expectativas y legados que impactan en la realización de sus proyectos de vida»^[31], de modo tal que en estas familias la individuación de los hijos resulta difícilmente tolerable.

En un sentido similar, la socióloga chilena Tamara Lagos aborda las dificultades

28.- CINTRAS, «Daño transgeneracional».

29.- X. Faúndez, J.L. Brackelaire y M. Cornejo, «Transgeneracionalidad del Trauma».

30.- *Ibid.*

31.- X. Faúndez y M. Cornejo, «Aproximaciones al estudio», p. 44.

que enfrentan hijos e hijas de militantes revolucionarios en la elaboración de discursos memoriales, proponiendo para ello el concepto de «desindividualización»^[32], que describe el mecanismo que

«trata de restarse a sí mismo en la construcción de la narración, no apelar a los dolores o experiencias propias sino al colectivo, dando cuenta de sus características y atributos, de su constitución política».

El sentido político detrás de este mecanismo es ir a contracorriente de dos tendencias propias de la violencia de Estado, a saber, la privatización del daño y la despolitización de la violencia ejercida a las víctimas^[33]. De este modo, la referida «desindividualización» podría responder a la necesidad de hablar desde el colectivo para favorecer la focalización del problema en lo político y no dejar espacio para justificaciones particulares que disuelvan la responsabilidad del Estado. Este propósito podría devenir en una suerte de presión por elaborar memorias con poco o nada de lugar para la enunciación desde el sí-mismo. El problema de esto, aclara la autora, es que impide el ejercicio de identificación, elemento vital para la práctica de una escucha empática.

Otro concepto central en esta discusión tiene que ver con la categoría de generación, lo que busca establecer el lugar desde donde se enuncian las memorias de los hi-

32.- Tamara Lagos, «Hijos e hijas de la militancia revolucionaria (MIR – PRT, 1965-2017). Características, posibilidades y obstáculos del diálogo transgeneracional en torno al pasado reciente en Chile-Argentina», tesis para optar al grado de magister, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2019, p. 89.

33.- Daniela Sharim, Juana Kovalskys, Germán Morales y Marcela Cornejo, «Trauma psicosocial y memoria: diseño de un dispositivo biográfico para investigar el impacto de la Comisión de Prisión Política y Tortura en Chile», *Revista de Estudios Sociales*, 40 (2011), pp. 81-88.

jos e hijas de exmilitantes revolucionarios. Conceptos que han iluminado esta discusión son por ejemplo el de Postmemoria, fuertemente desarrollado en el análisis de la experiencia de la Shoa y descrito principalmente por la académica estadounidense Marianne Hirsch (2008)^[34]. En Chile, el uso de este concepto ha sido utilizado por la investigadora chilena Alicia Salomone^[35], y por el trabajo de los investigadores belgas Ilse Logie y Bieke Willem sobre la realidad chilena^[36], entre otros. En este sentido, la Postmemoria busca visibilizar la fuerza de la transmisión generacional en tanto permea a generaciones que no tuvieron mayor contacto ni vivencia directa con la experiencia recordada.

Sin embargo, existe más de una crítica al uso de este concepto^[37]. Una de ellas es la que plantea la investigadora chilena Tamara Vidaurrázaga quien advierte que si lo que se quiere abordar son las memorias de los hijos e hijas de exmilitantes revolucionarios, el concepto de postmemoria, memoria heredada o memoria de segunda generación no sería el concepto más adecuado ya que con él no estaríamos reconociendo que la violencia de Estado, la dictadura militar y la experiencia de la militancia fueron algo que de algún modo estos hijos e hijas vivieron directamente^[38]. Más aún, el hecho de que

34.- Marianne Hirsch, *The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust*, Nueva York, Columbia University Press, 2012.

35.- Alicia Salomone, «Ecos antiguos en voces nuevas. Post-memorias poéticas de mujeres en Chile y Argentina», *América sin nombre*, 16 (2011), pp. 121-130.

36.- Ilse Logie y Bieke Willem, «Narrativas de la postmemoria en Argentina y Chile: la casa revisitada», *Alternativas*, 5 (2015), pp. 1-25.

37.- Vale la pena revisar la crítica al término de postmemoria que desarrolla ampliamente la autora B. Sarlo, *Tiempo Pasado*.

38.- Tamara Vidaurrázaga, «Las memorias de los hijos de la militancia revolucionaria en Chile. Reflexiones en clave generacional en torno a los documentales Venían a

la mirada que se reconstruye es la mirada de un niño o una niña no quita relevancia a la perspectiva memorial que se levanta, sino que es la puesta en valor de una mirada distinta sobre lo ocurrido. Por ello, la autora propone la noción de «generación de enlace», para los hijos e hijas de exmilitantes porque, por un lado, son parte de lo que se conoce como «hijos de la dictadura» y porque, por otro lado, su situación es diferente a la de esta generación, puesto que ser hijos/as de ex militantes de la izquierda les dejó en una situación de mayor exposición a la represión y violencia. Fueron un «nosotros» junto con la generación de niños y niñas de la época de la dictadura, y fueron un «nosotros» junto con la generación de sus padres/madres, quienes los hicieron sentir parte del proyecto revolucionario como «pequeños compañeritos» y les hicieron crecer rodeados de patrones conductuales y valóricos que se esperaban del «hombre nuevo», ideal de persona que proponía la izquierda revolucionaria de la época^[39].

En la misma línea argumentativa, Patricia Castillo y Alejandra González han descrito a este grupo particular de sujetos como «hijos de la resistencia» puesto que no solo vivieron la dictadura, como todos los otros niños, niñas y adolescentes de la época, sino que lo vivieron de una forma particular, asociado a la resistencia que decidieron ejercer sus padres^[40]. Lo particular de este grupo es el haber crecido bajo la real amenaza de la represión política dictatorial, fuese sobre sus padres o entornos familiares más cercanos, o fuese incluso directamente sobre ellos y ellas. Por otro lado, es la calidad de hijos e hijas justamente lo que

buscarme y El edificio de los chilenos», *Meridional, Revista Chilena De Estudios Latinoamericanos*, 12 (2019).

39.- *Ibid.*

40.- Patricia Castillo y Alejandra González, «Niñez en dictadura: Lo filiativo como espacio de resistencia», *Revista de Geografía Espacios*, 6 (2013), pp. 117-131.



Montaje aparecido en Santiago durante el estallido social de octubre-noviembre de 2019 (Foto de Diana Duhalde).

recalca el rol secundario de estos sujetos respecto de las decisiones sobre sus vidas y el hecho de que estas decisiones pudiesen revestir o no algún riesgo sobre sus vidas.

Finalmente, existe otra discusión en torno a la idea de transmisión de la memoria que ha atravesado la literatura sobre el caso chileno. En esta discusión, los autores María José Reyes, Marcela Cornejo, María Angélica Cruz, Constanza Carrillo y Patricio Caviedes^[41], han advertido que la mirada más

41.- María José Reyes, Marcela Cornejo, María Angélica Cruz, Constanza Carrillo y Patricio Caviedes, «Dialogía intergeneracional en la construcción de memorias acerca

desarrollada en los estudios de la memoria ha puesto el foco solo en los denominados «emprendedores de la memoria», es decir, suelen centrar su atención en el despliegue que realiza aquel que va a transmitir, indagando en la voluntad, la intención, el modo en que éste realiza la transmisión^[42]. Esto significa sostener una mirada unidireccional del proceso de transmisión, entendiéndolo como un traspaso (como si se tratara de un contenido inalterable) desde un emisor a un receptor, lo que inmediatamente pone en una relación jerárquica a las generaciones que interactúan en este proceso. Incluso, más aún, esta mirada ocluye el rol activo que tiene el sujeto denominado como «heredero» o «sucesor».

En función de esta crítica, los autores se desmarcan del concepto de transmisión para proponer un concepto nuevo, más coherente con la noción que comprende a la memoria como una práctica social, es decir, como un proceso intersubjetivo que es dinámico, contingente y contextual. En definitiva, que entiende las configuraciones de la memoria social desde una perspectiva dialógica, que asume que aquello que uno recuerda es una construcción que permanentemente responde a un otro. El concepto propuesto es el de «dialogía intergeneracional» y busca enfatizar no solo la interacción, el espacio de relación entre generaciones, sino también observar cómo se da esta relación (si es de conflicto, de apoyo, de distancia, de aprendizaje, etc.), «comprendiendo cada recuerdo como una síntesis de las tensiones, conflictos y/o acuerdos entre las posiciones sostenidas por distintas generaciones»^[43].

de la dictadura militar chilena», *Universitas Psychologica*, 1 (2014), pp. 255-270.

42.- E. Jelin, *Los trabajos de la memoria*.

43.- María José Reyes et al., «Dialogía intergeneracional», p. 257.

La judicialización del pasado

En Chile el camino de la justicia de los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado dictatorial ha sido un recorrido largo, complejo, con avances y retrocesos. Existen algunos hitos que son relevantes considerar pues permiten tener una visión general sobre la justicia transicional.

Siguiendo el meticuloso trabajo realizado por el Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales^[44], podemos identificar algunos de estos hitos. El año 1993 se llevó a cabo el primer fallo nacional que descartó la prescripción y la amnistía al calificar al secuestro como un delito de carácter permanente, en el caso José Julio Llaulén y Juan Eleuterio Cheuquepan (ambos detenidos desaparecidos). Un año después, en el caso Uribe/Van Yurick, se declaró que los crímenes eran inamnistiables e imprescriptibles al ser catalogados como crímenes de lesa humanidad. Asimismo, la corte estableció la necesidad de investigar y procesar específicamente el uso de la violencia sexual a una de las víctimas. Dos años más tarde y a propósito del caso Letelier se aplicaron condenas a los altos mandos de los aparatos represivos, específicamente en contra de Pedro Espinoza y Manuel Contreras.

En 1995 en el «Caso degollados», la Corte Suprema estableció altas penas, las que «figuran hasta el día de hoy como algunas de las pocas proporcionales a la gravedad de los delitos de lesa humanidad»^[45].

En 1998 ocurrieron varios hechos signi-

44.- Observatorio de justicia transicional. Centro de derechos humanos UDP. *Principales hitos, jurisprudenciales, judiciales y legislativos en causas de DDHH en Chile 1990-2023. Fallos y otros hechos significativos en causas seguidas por los tribunales chilenos y por el sistema interamericano de DDHH, después de 1990, por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar chilena 1973 a 1990*. Versión junio 2023.

45.- *Ibid.*, p. 4.

ficativos. Se presentaron las primeras querrelas que fueron aceptadas contra Augusto Pinochet, una de ellas por la presidenta del Partido Comunista Gladys Marín. Estas querrelas marcan un antes y un después en la persecución penal de los crímenes de la dictadura, iniciándose un ciclo más activo que el anterior y que se vio favorecido por la posterior detención del dictador en Londres en octubre de ese mismo año. Asimismo, en el caso Pedro Poblete Córdova, se estableció el rango supraconstitucional de los Convenios de Ginebra y, al mismo tiempo, la tesis del delito continuo en caso de desaparición, es decir, se asumió que la víctima de desaparición estaba secuestrada —ya que su suerte no se había podido establecer— y, por lo tanto, quedaba fuera de la ley de Amnistía de 1978 (que era aplicable sólo a crímenes cometidos).

El año 2000 se solicitó y aprobó el desafuero del exdictador Augusto Pinochet y se dictó el primer acto de procesamiento en su contra, el que después fue rechazado por la Corte Suprema. El año 2001 se designaron ministros con dedicación exclusiva a causas de derechos humanos, las que se incrementaron en los años 2002 y 2004. Poco después se dictó una ley (19.810) que permitió la designación de jueces con dedicación exclusiva en materias de derechos humanos.

En el año 2004, en el caso Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, se confirmó que no correspondía aplicar la ley de amnistía a un delito que era permanente (secuestro calificado) y se aplicó por primera vez la condena por secuestro al ex director de la Dina, Manuel Contreras. Un año después, en el caso Ricardo Rioseco y Luis Cotal, la justicia sufrió un revés ya que se desconoció el derecho internacional respecto a la imprescriptibilidad y se declaró prescrita la acción penal.

En 2006, en el marco del caso de Luis Al-

monacid, se dictó la primera condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Chile por crímenes ocurridos durante la dictadura, en una señal cada vez más categórica de condena a las leyes de amnistía. El 2006 se produjo un avance relevante pues por primera vez se calificó como crimen de lesa humanidad a un caso de ejecución política, pues hasta entonces solo se había aplicado en caso de desaparición forzada. Ello ocurrió en el caso de dos militantes del MIR que fueron ejecutados por carabineros en la localidad de Choshuenco pocos meses después del golpe de Estado de 1973.

El año 2007 asistimos a un retroceso en el camino de la justicia ya que la Corte Suprema rebajó las penas finales a los condenados en el caso Juan Luis Rivera Matus aplicando la prescripción gradual. Esto fue el precedente de otros fallos que también aplicarían este tipo de medidas, de modo que en los años siguientes serían muchos los condenados en causas de DDHH que lograron cumplir sus sentencias en libertad. Así ocurrió en el caso «Episodio Parral», en que se concedieron rebajas bajo la figura de la media prescripción o prescripción gradual. Este caso —es preciso recordarlo— investiga la desaparición forzada de 28 personas (26 de ellos campesinos más un menor de edad). La rebaja de condenas hizo posible que ninguno de los responsables cumpliera pena de cárcel.

El 2009 se sufriría un nuevo retroceso en el caso de Jacqueline Binfa, cuando la Corte Suprema revocó la condena del Ministro Solís y aplicó la prescripción total. Esta decisión establecía que la legislación nacional estaba por encima de la ley internacional (CIDH y Convenios de Ginebra) desconoció los avances que se habían logrado en materia de delitos de lesa humanidad desde el caso de Miguel Ángel Sandoval.

El año 2012 y en el marco del caso Rudy

Cárcamo (detenido desaparecido), el fallo rechazó la prescripción gradual por tratarse de un delito de lesa humanidad de carácter permanente y por ello, imprescriptible. Esto es relevante porque desde el 2007 se estaba apelando a este tipo de figura para liberar de cárcel a los culpables.

En el caso Grober Venegas Islas (detenido desaparecido) la Corte desconoció el carácter de delito permanente en un caso de desaparición forzada, marcando un retroceso respecto de la línea que se venía siguiendo desde el año 2004. El 2014 y en el marco del caso de Bárbara Uribe, la Corte de Apelaciones de Santiago reconoció la violencia sexual como tortura y en función de ello ordenó procesar al ex agente de la DINA, Basclay Zapata. El año 2017, la Corte Suprema ratificó el derecho de una víctima sobreviviente de tortura sexual a recibir indemnización, reconociendo su carácter imprescriptible y a la violencia sexual como una práctica sistemática de la dictadura.

El año 2017 se aplicó sentencia a 33 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) —incluyendo a una mujer— por crímenes de lesa humanidad en el caso de 5 jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que fueron secuestrados y hechos desaparecer. Este mismo año se condenó a un civil a pena de cárcel (20 años de presidio) por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Juan Luzoro, quien participó activamente en la ejecución de 70 personas en la comuna de Paine, muchos de ellos campesinos y dirigentes de la Reforma Agraria. El año 2023 se realizó la primera sentencia en contra de médicos que participaron en torturas; ello en el marco del caso Federico Álvarez Santibáñez, profesor asesinado. En este caso, no solo se condenó a cuatro ex agentes de la CNI, sino también a dos médicos no agentes

El año 2020 el ministro en visita Mario

Carroza procesó a ex oficiales del ejército por la destrucción de archivos vinculados a violaciones a los derechos humanos. El crimen fue cometido el año 2000 o 2001, en plena democracia, lo que evidenciaba la existencia de un pacto de silencio orientado a destruir evidencias y a obstaculizar el camino de la justicia. El año 2022 se aplicó condena a 11 perpetradores por el crimen de exhumación ilegal; pese a lo bajo de la condenas (ninguna privativa de libertad) castigaba la remoción de restos humanos y su traslado a otros sitios para enterrarlos en forma clandestina a inicios de 1976.

El año 2023 se condenó a 59 ex agentes de la Dina por el secuestro calificado de 16 militantes del MIR detenidos desaparecidos en el marco de la Operación Colombo.

Es evidente que una parte importante del conocimiento socialmente construido sobre las violaciones a los derechos humanos se ha alimentado de las investigaciones llevadas a cabo por la justicia y por las asociaciones de víctimas y familiares. Esas pesquisas son parte de un acervo común ineludible para quienes se aproximan a la historia reciente de nuestro país. Se ha construido una verdad judicial sobre el pasado reciente, basada en pruebas testimoniales y documentales, verdad que de acuerdo a la historiadora argentina Gabriela Águila, ha producido marcos explicativos y conceptos que han sido adoptados por el campo académico que se ocupa de la historia de la dictadura.

«Los cruces y articulaciones entre los recorridos judiciales y los desarrollos de las ciencias sociales en general o la historia como disciplina, que no habían sido muy frecuentes hasta los últimos años, se han vuelto cada vez más visibles y constantes. Y a la vez que fiscales y jueces recurren a algunas producciones del campo académico para sostener sus argumentaciones, muchos historiadores y científicos sociales han

sumado a su quehacer profesional el trámite de diversas causas por violaciones a los derechos humanos, participando como peritos, testigos, aportando sus textos como fundamento de sentencias, etc.»^[46].

El diálogo entre ambos campos ha sido provechoso y fructífero en múltiples sentidos, pero vale la pena tener en consideración los planteamientos de Águila respecto a las diferencias en los fines últimos de cada uno de ellos. Como fue señalado tempranamente por el fundador de la Escuela de los Annales, Marc Bloch^[47], el objetivo de los historiadores es la comprensión del pasado y no el establecimiento de culpables o inocentes. Ello no significa, en ningún caso, plantear algún tipo de neutralidad o de aproximación aséptica respecto del pasado y los actos criminales. Por el contrario, supone una actitud reflexiva abierta a la comprensión y el análisis de la complejidad de los procesos humanos, incluyendo aquellos aspectos que nos parezcan más abyectos. En una línea similar, el historiador británico Eric J. Hobsbawn señaló en la introducción de su obra *Historia del Siglo XX* que la comprender el pasado no significa, en ningún caso, justificar las acciones criminales de los hombres^[48].

La relación entre historia y justicia fue analizada por Carlo Ginzburg, quien propone que tanto jueces como historiadores comparten el propósito de investigar y comprender la realidad sosteniendo sus conclusiones fundamentadas en el análisis de hechos comprobables^[49]. Al mismo tiempo,



Montaje aparecido en Santiago durante el estallido social de octubre-noviembre de 2019 (Foto de Diana Duhalde).

po, afirma que la verdad jurídica no es equivalente a la verdad histórica, ya que esta última es siempre parcial y reinterpretable de acuerdo a contextos específicos. A estas consideraciones, Águila agrega que en la disciplina histórica (y otras áreas cercanas) establecen verdades siempre sometidas al escrutinio de una comunidad científica, de modo que sus afirmaciones siempre están abiertas a la réplica, el debate y al cuestionamiento. Asimismo, el uso de conceptos o marcos interpretativos analíticos que han

46.- Gabriela Águila, «Estudiar la represión: entre la historia, la memoria y la justicia. Problemas de conceptualización y método», en P. Flier (comp.), «Dilemas», p. 25.

47.- Marc Bloch, *Introducción a la Historia*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1982.

48.- Eric J. Hobsbawn, *Historia del Siglo XX*, Buenos Aires, Critica, 1999.

49.- Carlo Ginzburg, *El juez y el historiador. Consideraciones*

al margen del proceso Sofri, Madrid, Anaya y Mario Muchnik, 1993.

resultado útiles para la investigación judicial (como la noción de genocidio) pueden ser menos productivos para el análisis histórico. Por esta razón, la verdad judicial no debe —desde la perspectiva de la historiadora rosarina— limitar las posibilidades del conocimiento histórico, estableciendo una suerte de corsé interpretativo sobre el pasado reciente.

La memoria como deber y como derecho

En un libro del año 2021, la socióloga argentina Elizabeth Jelin y el historiador catalán Ricard Vinyes dialogaron acerca del trabajo académico e intelectual que ambos han realizado por al menos dos décadas en torno a la memoria social^[50]. Ambos expresan una mirada escéptica respecto a las virtudes democratizantes que se le asignan a la memoria y una crítica a los relatos mitificados sobre el pasado reciente, planteos que retoman las críticas formuladas tempranamente por Tzvetan Todorov en *Los abusos de la memoria*^[51].

Vinyes refiere al caso español para ejemplificar el modo en que se pretende desmontar versiones mitificadas del pasado reciente con nuevos relatos, igualmente simplificadores y alejados de la historia. De este modo, al mito de la transición ejemplar se opuso una nueva lectura basada en lo que él denomina, la memoria de la traición:

«la traición de una clase política, incluso de una generación que dio a luz a un sistema deleznable llamado *régimen del 78*. Quienes sostienen esa posición han convertido la transición en algo igualmente ahistórico [...] Así, recientemente se ha construido una ‘memoria de la traición’, una imagen

tremendamente elitista del pasado, que, de nuevo, solo atiende al protagonismo de las conversaciones palaciegas y de grandes personajes. Lo llamativo es que ese discurso adanista se ampara con un manto de supuesta radicalidad»^[52].

Parece evidente que el boom de la memoria no siempre va acompañado de un diálogo con la labor historiográfica y que, en muchas ocasiones, se distancia completamente de ella. Aunque historia y memoria son reelaboraciones del pasado, a la historia le corresponde establecer causas, estructuras, relaciones y contextos, estudiar la memoria sin someterse a ella, «señalando si fuese necesario, sus contradicciones y sus trampas»^[53].

Para Jelin, la memoria como mandato moral puede ser problemática, aun para las propias víctimas, pues los sobrevivientes tienen derecho al silencio ya que el testimonio puede derivar en una revictimización. Ese deber de memoria intenta congelar el pasado a través de un relato dominante funcional a un futuro deseado y, al mismo tiempo, promueve la idea de que la memoria posee el poder de evitar que se repitan las atrocidades del pasado. La consigna «recordar para no repetir», tan difundida en las últimas décadas, no parece tener un correlato en la realidad. La memoria no previene de futuras violencias ni es garantía de una sociedad mejor. De ahí la pregunta que Jelin formula respecto a aquellas sociedades en que se han desplegado políticas de memoria activas respecto a pasados dictatoriales:

«¿se han construido democracias mejores o sociedades más democráticas que en aquellas donde no las hubo? Pongo un gran sig-

50.- E. Jelin y R. Vinyes, *Cómo será el pasado*.

51.- T. Todorov, *Los abusos de la memoria*.

52.- E. Jelin y R. Vinyes, *Cómo será el pasado*, p.30

53.- E. Traverso, *El pasado, instrucciones de uso*, p. 24.

no de interrogación y me gustaría ver aquí investigación comparativa sistemática, porque creo que esto se puede responder empíricamente»^[54].

Amos autores sospechan que los relatos sobre el pasado que sostengan su hegemonía en cuerpos legales, como en Francia con la Ley Gayssot (1990) o la reciente normativa de Polonia que impide mencionar la complicidad de Polonia con el nazismo. Esas leyes o dictámenes no solo intentan imponer un canon, penalizando otras formas de interpretar el pasado, sino que, además, atentan contra los hallazgos de la investigación histórica. Uno de los libros más conmovedores que abordan la participación polaca en el asesinato de judíos es *Vecinos* de Jan Gross, quien investigó la masacre ocurrida en Jedwabne, un pueblo polaco de alrededor de tres mil habitantes^[55]. En 1941, fueron asesinados los judíos del pueblo (cerca de mil seiscientas personas de todas las edades) por parte de la otra mitad del pueblo, sus vecinos. Esta investigación, así como otras que abordan la activa participación de polacos en este tipo de violencias, han sido perseguidas penalmente por la *Ley para el Enjuiciamiento de Crímenes Contra la Nación Polaca del Instituto de Memoria Nacional* que se propone castigar lo que el gobierno define como falsificaciones históricas y que penaliza el uso de la noción «campos de concentración polacos».

¿Qué relevancia tiene el caso polaco para la experiencia chilena y conosureña? En el marco de las actuales disputas por la memoria, vale la pena reflexionar sobre procesos que ocurren en otras latitudes para discutir acerca de cómo queremos pensar, interrogar y narrar nuestro pasado

reciente.

De ahí la propuesta de Vinyes de pensar la memoria como un derecho —en ningún caso como obligación— que posibilite desplegar políticas en favor de un posicionamiento ético ante los pasados que no pasan. Para ello parece indispensable interrogar y tensionar los marcos conceptuales y analíticos que utilizamos para pensar nuestra historia reciente. Esta aproximación abierta a la reflexión y el debate no es diferente al ejercicio crítico y autocrítico que hicieron las izquierdas (o parte de ellas) después del golpe de estado de 1973 en favor de la valoración de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Ese trabajo intelectual y político es una tarea ineludible en el marco de las actuales disputas por la memoria.

Palabras de cierre

En los últimos años el pasado reciente ha tenido un protagonismo indiscutible en los debates públicos. Si en el marco de la revuelta social (2019) se activó una memoria nostálgica y no pocas veces romántica de los largos sesenta y, en particular, del gobierno de la Unidad Popular, en la actual conmemoración de los cincuenta años del golpe de estado hemos asistido a la emergencia pública de una memoria pinochetista que justifica y/o abiertamente reivindica la dictadura y los crímenes del terrorismo de estado. Ello nos obliga a cuestionar la ilusión de un avance progresivo y lineal en materias de democracia y derechos humanos y nos invita a realizar una reflexión profunda acerca de las condiciones que han hecho posible el retorno de la tentación autoritaria.

Jürgen Habermas denominó *Aufarbeitung* a los procesos de autoentendimiento ético-político que los pueblos deben desarrollar sobre su pasado conflictivo,

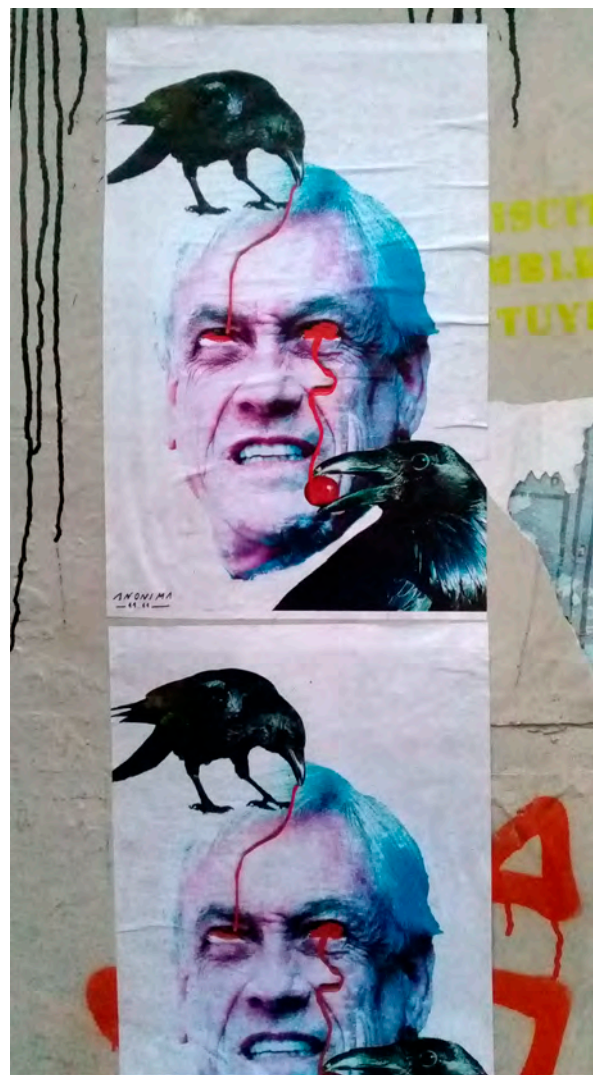
54.- E. Jelin y R. Vinyes, *Cómo será el pasado*, p. 39.

55.- Jan T. Gross, *Vecinos. El exterminio de la comunidad judía de Jedwabne*, Barcelona, Crítica, 2002.

afirmando la necesidad de hacerle frente, aclararlo y asumirlo colectivamente: «El término *Aufarbeitung*, se refiere a hacer frente a una cosa, a darle término aclarándola a conciencia y a fondo, se ha impuesto entre nosotros en relación precisamente con nuestro pasado»^[56]. Siguiendo este razonamiento, los procesos de autoentendimiento deben desplegarse en las comunidades que comparten un pasado violento, favoreciendo un ejercicio de autocuestionamiento respecto a las responsabilidades morales y políticas colectivas.

Ante la reivindicación de la dictadura y la violencia política estatal, la respuesta no debiera ser la trinchera identitaria sino la lucha por recomponer formas, valores y hábitos democráticos en el marco de una suerte de alianza o pacto civilizatorio que promueva una reconstitución ética y política de la sociedad. De ahí la necesidad de retomar la reflexión que Hannah Arendt desarrolla respecto a la promesa, en tanto precepto moral que surge de la voluntad de vivir junto a otros, en y desde la conciencia de la incertidumbre sobre el futuro. Como no podemos asegurar que los crímenes no volverán a repetirse, debemos hacer pactos sociales —promesas— que nos permitan vincularnos como integrantes de una comunidad herida.

Por último, hoy parece urgente la propuesta de Vinyes de pensar la memoria como un derecho —en ningún caso como obligación— que posibilite desplegar políticas en favor de un posicionamiento ético ante los pasados que no pasan. Ello supone interrogar y tensionar los marcos conceptuales y analíticos que utilizamos para pensar nuestra historia reciente. Esta apro-



Carteles aparecidos en Santiago durante el estallido social de octubre-noviembre de 2019 (Foto de Diana Duhalde).

ximación abierta a la reflexión y el debate no es diferente al ejercicio crítico y autocrítico que hicieron las izquierdas (o parte de ellas) después del golpe de estado de 1973 en favor de la valoración de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Ese trabajo intelectual y político es una tarea ineludible en el marco de las actuales disputas por la memoria.

56.- Jürgen Habermas, «Un Doble Pasado: ¿Qué significa 'hacer frente al pasado aclarándolo?'». En Jürgen Habermas, *Más allá del Estado Nacional*, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 52

Introducción

Victoria López Barahona

Universidad Autónoma de Madrid

La autora del artículo que presentamos en esta sección, Martha E. Gimenez, nació y se crio en Argentina. Entre este país y Estados Unidos realizó sus estudios superiores en Derecho, Ciencia Política e Historia, y Sociología. A finales de la década de 1960, cursando un programa de grado en Sociología en la Universidad de California-Los Ángeles, se internó en el estudio del marxismo. Con los aportes teóricos y metodológicos de Louis Althusser, Maurice Godelier, Georg Lukács y algunos autores de la Escuela de Frankfurt, Gimenez se interesó en cómo trascender lo que ella entendía eran los límites de la teoría y la investigación sociológica y feminista entonces predominantes en el panorama académico. En 1973 ingresó como profesora de Sociología en la Universidad de Colorado Boulder, donde ha permanecido hasta su retiro en 2007-2008. Actualmente es profesora emérita.

Durante esta larga trayectoria académica y política, Martha E. Gimenez ha escrito numerosos artículos centrados en la relación entre marxismo y feminismo, la población y el capitalismo, la reproducción y la procreación bajo el capitalismo, la dialéctica entre el trabajo asalariado y no asalariado, el trabajo doméstico, el capitalismo y la opresión de las mujeres e interesantes reflexiones sobre el concepto de «feminización de la pobreza». El objetivo que ha guiado estos estudios ha sido el de instruir acerca de la importancia del materialismo histórico para el estudio

de algunas cuestiones políticas y académicas relevantes, como son la opresión de las mujeres, la reproducción social, la política de las identidades, la relación entre trabajo pagado y no pagado, y la centralidad, a menudo no reconocida, de la clase social para profundizar en el conocimiento de estos y otros aspectos de las formaciones sociales capitalistas.

Estos trabajos, publicados originalmente en inglés, son apenas conocidos entre el público hispanohablante; no sólo porque no se hayan traducido, sino porque tampoco en Estados Unidos han alcanzado, hasta hace relativamente poco tiempo, la resonancia que merecen. La propia Martha Gimenez lo describe así: «Mis trabajos no se publicaron en las principales revistas feministas o se citaron en la literatura feminista de la década de 1980. Aunque resultase decepcionante en aquel entonces, visto en retrospectiva, esta falta de reconocimiento no es sorprendente: mi trabajo era crítico con las visiones predominantes en la teoría feminista y ofrecía una alternativa teórica fuera de ellas»^[1].

En esa década de 1980, el giro posmoderno iba arrinconando los estudios marxistas en las universidades estadounidenses. Se imponían los cambios conceptuales del sexo al género, del hecho a su representación, de la igualdad a la diferencia... La

1.-Martha E. Gimenez, *Marx, Women and Capitalist Social Reproduction*, Chicago, Haymarket Books, 2019, p. 8.

clase social quedaba sepultada en una colorida variedad de identidades. Las ciencias sociales, en general, y el pensamiento feminista, en particular, construyeron un «Marx de paja» al que achacaron muchas carencias (por ejemplo, no haber teorizado sobre el trabajo doméstico) así como determinismos y reduccionismos de clase y económicos.

Mientras el «Marx de paja» recibía golpes y el feminismo liberal, llamado en Estados Unidos *Lean in* o *mainstream feminism*, escalaba a las estructuras estatales conformando un matrimonio bien avenido con el capitalismo, la vitalidad intelectual del Marx real y de la tradición marxista seguía fluyendo, aunque por vías subterráneas. Hoy vuelve a salir a la superficie. Se está produciendo un renovado interés en los enfoques del feminismo marxista, como demuestran las recientes reediciones de trabajos como los de Lise Vogel, *Marxism and the Oppression of Women*^[2], Michèle Barrett, *Women's Oppression Today*^[3], y la edición del libro de Martha E. Gimenez, *Marx, Women and Capitalist Social Reproduction*, arriba citado, que recopila sus artículos escritos entre 1975 y 2009, con una amplia introducción de la autora^[4].

El artículo de Martha E. Gimenez cuya traducción reproducimos fue publicado en 2019 en un monográfico de la revista *Monthly Review* con motivo del 50 aniversario de la publicación del artículo de la científica marxista Margaret Benston, «The Political Economy of Women's Liberation».

2.- Lise Vogel, *Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory*, Chicago, Haymarket Books, 2013, con Introducción de Susan Ferguson y David McNally, (publicado originalmente en 1982).

3.- Michèle Barrett, *Women's Oppression Today. The Marxist/Feminist Encounter*, Londres/Nueva York, Verso Books, 2014, (publicado originalmente en 1980).

4.- Hay una publicación previa de la misma recopilación y con el mismo título, Martha E. Gimenez, *Marx, Women and Capitalist Social Reproductions*, Leiden/Boston, editorial Brill, 2018.

Este fue un artículo seminal que, como indica la propia Gimenez, «articuló algunos de los temas constantes y de las visiones teóricas del feminismo, especialmente las desarrolladas por feministas socialistas y marxistas»^[5].

En su contribución al referido monográfico, Gimenez emprende un diálogo crítico con dos enfoques del feminismo: la teoría de la «interseccionalidad» y la teoría de la «reproducción social». La primera surgió en Estados Unidos en la década de 1970 a partir de la interrelación de sexo, clase y raza, sistemas interconectados de opresión que derivan en «identidades complejas». Hoy se considera una importante teoría feminista a nivel global. La segunda, más reciente, basada en su primer desarrollo en el feminismo marxista, ha desbordado su enfoque original en la opresión femenina y la reproducción de la fuerza de trabajo, para abarcar la reproducción de las formaciones sociales en su conjunto. Es asimismo una importante línea de investigación en los estudios feministas, aunque su repercusión en España es todavía escasa.

El principal argumento que Martha Gimenez expone en este artículo es que el retorno a la clase, en el sentido marxista, es la clave para que el feminismo marxista permanezca como una perspectiva distintiva a nivel teórico y relevante a nivel político. Esto se consigue volviendo a analizar la relación entre clase y opresión, en particular de las mujeres de clase trabajadora, en las formaciones sociales capitalistas.

Esperamos que este artículo contribuya al debate dentro del marxismo y del feminismo, y estimule futuras traducciones de otros trabajos de esta importante teórica, sin duda penetrantes y enriquecedores.

5.- Margaret Benston, «The Political Economy of Women's Liberation», *Monthly Review*, 21, (1969), nº 4 y Martha E. Gimenez, «Women, Class and Identity Politics», *Monthly Review*, 71, (2019), nº 4.

Mujeres, Clase y Políticas de Identidad. Reflexiones sobre el Feminismo y su Futuro*

Martha E. Gimenez
University of Colorado

«Siempre es necesario distinguir entre las condiciones materiales de producción [y, añadido, de reproducción] [...] y las formas ideológicas en las que los hombres toman conciencia de este conflicto y lo combaten».

Karl Marx^[1]

I

En su celebrado artículo de 1969, «La Economía Política de la Liberación de la Mujer», Margaret Benston articulaba varios de los temas permanentes e ideas teóricas de las teorías feministas, especialmente las desarrolladas por feministas marxistas y socialistas. Por ejemplo, situaba la base material del status secundario de la mujer en su responsabilidad en la producción de valores de uso para el consumo doméstico y su consiguiente dependencia económica del hombre como sostén de la familia; los

efectos de las responsabilidades domésticas en las oportunidades de la mujer; y las condiciones materiales para la liberación de la mujer, es decir, la igualdad de acceso al empleo y el fin de la naturaleza privada de las tareas domésticas y la crianza de los hijos^[2].

Como estudiante de postgrado a finales de los años 60, me esforzaba en encontrarle sentido a la idea de que las mujeres estaban oprimidas *porque eran mujeres* y que los hombres y el patriarcado eran la fuente de esa opresión —una idea que, en aquella época, me resultaba extraña—^[3]. Por el contrario, la perspectiva de Benson de que las causas del estatus secundario de la mujer eran estructurales, arraigadas en la economía capitalista y tenían como resultado que

2.- Margaret Benston, «The Political Economy of Women's Liberation», *Monthly Review*, 21 (1969), pp.13-27. En mi libro, *Marx, Women and Capitalist Social Reproduction*, Boston, Leiden Brill, 2018, exploro en profundidad estas cuestiones de mujer, clase e identidad.

3.- En 1957, año en que ingresé en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (Argentina), dedicarme a la abogacía no era una elección inusual. Crecí animada a creer que no había límites para lo que podía lograr, en un entorno en el que daba por sentada la presencia de mujeres en profesiones que en los Estados Unidos de entonces todavía se consideraban prerrogativa de los varones (como la Medicina, la Odontología, la Bioquímica y el Derecho).

1.- Karl Marx, prefacio a *A contribution to the Critique of Political Economy*, New York, International, 1970, p. 21.

* Versión original publicada en inglés con el título «Women, Class and Identity Politics. Reflections on Feminism and Its Future», *Monthly Review*, Vol. 71, (2019), n° 4. Traducido por Antonia Tato Fontaiña y reproducido con permiso de Monthly Review © Todos los derechos reservados. Agradezco a Paul Cammack y Lise Vogel sus útiles comentarios y sugerencias.



Trabajadoras de la industria textil catalana a principios del siglo XX (Fuente: Arxiu Nacional de Catalunya).

la responsabilidad de la crianza de los hijos y la producción de valores de uso para el consumo familiar fuese de la mujer, para mí tenía sentido. Mostraba cómo el funcionamiento de la economía capitalista, dado que la organización de la reproducción social y biológica seguía estando todavía en «fase anterior a la comercialización», situaba a los hombres y mujeres de la clase trabajadora en posiciones estructurales distintas. Esto, deduje, les daba a algunos hombres poder sobre la mujer. Los hombres de la clase trabajadora tenían que ganarse un salario para sobrevivir económicamente, mientras que la mujer de clase trabajadora, estuviese casada o no, en teoría podía trabajar por un salario o trabajar en las tareas de la casa, sin remuneración y dependiendo del cabeza de familia^[4]. En términos abstractos, en

4.- Por supuesto, en las formaciones sociales capitalistas,

el capitalismo el ser una trabajadora doméstica no remunerada es para las mujeres de clase trabajadora una alternativa funcional a ganar un salario^[5]. Retrospectivamente, habiendo vuelto a leer su artículo, puedo decir que mi explicación de la opresión de la mujer y la conceptualización de lo que en

muchas mujeres de clase trabajadora hicieron ambas cosas, en particular las mujeres pertenecientes a minorías raciales o étnicas o a algunas poblaciones inmigrantes. Las características históricamente específicas de las formaciones sociales producen variaciones empíricas en las estrategias de supervivencia que hombres y mujeres de clase trabajadora de diferentes orígenes raciales, étnicos y nacionales desarrollan dentro de las limitaciones capitalistas.

5.- La proporción de trabajadoras domésticas a tiempo completo o «madres que se quedan en casa» fluctúa con los cambios sociales y económicos. En Estados Unidos, disminuyó del 49% en 1967 al 23% en 1999, y aumentó al 29% en 2012. Jacob Galley, «Stay-at Home Mothers Through the Years», *Monthly Labor Review*, Bureau of Labor Statistics, 2014.

los primeros años 70 llamé *modo de reproducción*, debe mucho a los puntos de vista de Benston sobre la «definición estructural de mujer» y el hogar como un lugar de producción y reproducción^[6].

II

Durante los cincuenta años que han pasado desde la publicación de este importante trabajo, el pensamiento feminista evolucionó en diversas direcciones, impulsado por los desafíos desde sus propias filas, así como por los cambios en las condiciones históricas en las que surgieron las luchas e ideas feministas. Desde mediados de los años sesenta y a través de los 70, inspiradas por el movimiento de mujeres, las teorías feministas y las declaraciones programáticas que ofrecían diferentes explicaciones de la opresión de las mujeres florecieron en los Estados Unidos y en todas partes, incluidas teorías sobre el patriarcado (feminismo radical); la interacción entre el patriarcado y el capitalismo (feminismo socialista); y el capitalismo, visto como un sistema de relaciones de producción explotadoras y relaciones de reproducción opresivas (feminismo marxista). Estas primeras teorías fueron y continúan siendo valiosas en lo que respecta a la investigación e implicaciones políticas, así como por sus más amplios efectos ideológicos, al concienciar a las personas sobre las muchas dimensiones de la opresión de la mujer e inspirarlas para organizarse y luchar por el cambio.

Gracias al éxito de las luchas liberales, las oportunidades para la mujer se han ampliado. Hoy hay muchas más mujeres en los negocios, la política, la educación superior y en profesiones y carreras que solían estar reservadas a los hombres. El

6.- Martha E. Gimenez, «Population Structure and Processes in the Capitalist Mode of Production» (Tesis doctoral, Universidad de California, Los Ángeles, 1973).

feminismo marxista y socialista arrojó luz sobre la opresión de la mujer en el hogar y en el trabajo. La concienciación en torno a las opresivas dimensiones de los mercados laborales segregados por sexos y *la doble jornada*, un concepto que capta el persistente conflicto entre el empleo femenino y su prioritaria responsabilidad en el trabajo doméstico y la crianza de los hijos, entraron en la cultura popular. Las guarderías asequibles se han convertido en un objetivo político legítimo. El acoso sexual en el lugar de trabajo se ha reconocido finalmente como una forma de discriminación de género. Y, como demuestra el movimiento Me Too, las mujeres están contraatacando. Sin embargo, aunque cada vez sea menor, persiste la brecha entre los ingresos y la movilidad profesional de hombres y mujeres. La enorme contribución de las mujeres a la economía capitalista a través del trabajo doméstico no remunerado sigue sin reconocerse, mientras que la lucha por los derechos reproductivos continúa sin tregua, ya que los políticos persisten en proponer y, a menudo aprobar, leyes abiertamente destinadas a restringir el acceso de las mujeres a la anticoncepción y al aborto, al tiempo que pretenden, subrepticamente, controlar su sexualidad^[7].

III

La cuestión de la opresión de la mujer, cuya crítica constituyó el feminismo como una búsqueda política y académica, ha sido la permanente fuente de fuerza y atracción del feminismo, dando lugar a numerosas

7.- Marisa Lati and Deanna Paul, «Everything You Need to Know About the Abortion Ban News», *Washington Post*, 17 de mayo de 2019 y Martha E. Giménez, «Reactionary Family Policies in the 21st Century: The Republican War on the Working Class in the United States», *Cultural Logic*, 23 (2019).

perspectivas y teorías críticas^[8]. Esto ha producido constantes cambios conceptuales que definen un feminismo en evolución, como es el cambio de mujer a género y de la desigualdad a la diferencia. También ha supuesto cambios desde la teorización de las condiciones generales de la experiencia de las mujeres -oprimidas en el hogar y en el lugar de trabajo mientras hacen malabarismos para atender las conflictivas demandas de ambos- hasta la teorización de las implicaciones de la afirmación de que, mientras el género puede ser la fuente principal de opresión para mujeres de clase media, blancas y heterosexuales, las mujeres con otras características y experiencias se ven también afectadas por otras formas de opresión^[9]

La más importante de esas críticas fue la formulada por las feministas negras y otras mujeres de color, que dio lugar al marco analítico de *raza, género y clase*, que con el tiempo cristalizó en la *interseccionalidad*. Igualmente, significativa es la perspectiva de la *reproducción social*, que, aunque basada en el feminismo marxista, amplió su objeto más allá del enfoque original sobre la opresión de la mujer.

Mi propósito en este ensayo es ofrecer algunas consideraciones sobre la relación entre estas perspectivas y el feminismo

marxista ¿Refuerzan estas perspectivas la distinción teórica y la relevancia política del feminismo marxista? ¿O, por el contrario, lo colocan en un terreno teórico diferente? Creo que lo segundo, dado que la interseccionalidad se confunde con la estratificación social, y la reproducción social se puede referir a una variedad de fenómenos a nivel macro (reproducción de la fuerza del trabajo, la estructura de clase, relaciones opresivas, relaciones de producción etc.) más allá de la reproducción biológica y de la reproducción de la fuerza de trabajo. Argumentaré que una posible forma de que el feminismo marxista permanezca como una perspectiva teórica distintiva y políticamente relevante podría ser volver a la clase, en el sentido marxista, volviendo a examinar la relación entre clase y opresión, en particular la opresión de las mujeres de la clase trabajadora, dentro de las formaciones sociales del capitalismo. Esto supondría un análisis estructural de la opresión, en el sentido de Benston —es decir, un análisis que busque en el desarrollo y funcionamiento del capitalismo la base material históricamente específica de todas las formas de opresión—.

IV

El movimiento de liberación de la mujer fue parte de la panoplia de los movimientos sociales activos en los años 60 y los 70, cuando la gente se organizaba sobre la base del género (liberación de la mujer), la edad (Grey Panthers), la sexualidad (liberación homosexual), la etnicidad (mexicanos, chicanos, asiático-americanos) y la raza (feministas negras, los Black Panthers). Las formas de concienciación/conciencia, producción intelectual, y política de esos movimientos sociales basados en la identidad estaban fundamentados en las experiencias materiales de los activistas e intelectuales

8.- Judith Lorber, *Gender Inequality*, (Oxford, Oxford University Press, 2009).

9.- Gran parte de la teorización feminista, sobre todo en Estados Unidos, surgió de una crítica equivocada del primer feminismo marxista. No se entendió que el foco del feminismo marxista, como el de Benston, era el lugar estructural de la mujer bajo el capitalismo. En su lugar, como base para la crítica, las teóricas señalaron las diferencias empíricas (raciales, étnicas, de origen nacional, etc.) entre las mujeres de distintas sociedades. Si bien estos hechos son ciertos, la teorización feminista no abordó la diferencia entre los factores históricamente específicos que afectan a la condición de la mujer dentro de las formaciones sociales capitalistas y las estructuras y limitaciones capitalistas que afectan a la mujer y que son comunes a todas las formaciones sociales.

tuales/académicos participantes en esos movimientos. Fueron influenciados por el contexto social, ideológico y político de los Estados Unidos, una formación social donde, especialmente en los medios de comunicación, los datos de los censos y las ciencias sociales sobre los fenómenos sociales generalmente se presentaban y se discutían excluyendo a la clase, fomentando así una tendencia a mezclar y percibir los efectos de la clase con los efectos de género, raza, etnicidad y otros estatus oprimidos^[10]. Desafortunadamente, hoy en día la clase está ausente del vocabulario de la mayoría de la gente y del discurso político dominante, los trabajadores no tienen una organización ni representación política y las lecturas idealistas de Karl Marx predominan en muchos sectores de la izquierda^[11].

Las mujeres de color, perfectamente conscientes de las diferencias existentes entre sus experiencias de opresión y las de las feministas blancas, ofrecieron críticas que prefiguraron el desarrollo de los mencionados marcos analíticos, escribiendo sobre la simultaneidad de «la opresión de clase, heterosexual, sexual y de raza» en el contexto de «sistemas de opresión entrelazados» más tarde conocidos como *inter-*

seccionalidad^[12]. Esta y otras observaciones críticas hicieron algo más que identificar las fuerzas opresivas interrelacionadas que afectan a las mujeres de color: atrajeron la atención hacia la relación entre la estratificación social y la opresión, como queda demostrado por sus efectos en las vidas e identidades de todo el mundo^[13].

Dado que la interseccionalidad se considera una teoría feminista importante, la opresión de la mujer debería estar en su centro. Sin embargo, su amplio alcance - «sistemas de opresión entrelazados» que dan lugar a «identidades complejas»— introduce cierta ambigüedad en su objeto porque atañe, con efectos variables, a todo el mundo: hombre y mujer, blanco y no blanco, ciudadano y no ciudadano, inmigrante y nativo y así sucesivamente. En *Marx, Women and Capitalist Social Reproduction*, sostengo que, si se entiende en su sentido más estricto, el tema de la interseccionalidad es la opresión de las mujeres con identidades complejas, aunque, aparte de a las «mujeres marginadas» también se aplica a los «hombres ocasionalmente marginados»^[14]. El término marginado implica pobreza y casi pobreza, y estar en la parte inferior de la cadena de los sistemas de opresión —excluyendo así a mujeres que ocupen posiciones medias o privilegiadas en esos sistemas— ¿Podría enton-

10.- Por ejemplo, los políticos y los medios de comunicación hacen hincapié en la pobreza desproporcionada de las mujeres, los niños y en las minorías reales y étnicas, como si la pobreza masculina y blanca fuera insignificante, los pobres no tuvieran clase y la pobreza no estuviera relacionada con el funcionamiento normal del capitalismo y las relaciones de clase. En 2017, diecisiete millones de personas blancas eran el 43,8% de la población pobre. «U.S. Poverty Statistics», *U.S. Census Bureau*, <http://federal-safetynet.com>.

11.- Crecí en una familia de clase media en Argentina, en una época (años 50 y 60) en la que —en mi medio— ser mujer era un hecho de significación privada, pero no social o política, como, por ejemplo, la clase o la nacionalidad. Eso influyó en mi trabajo. Adquirí una conciencia intuitiva de la historicidad de las identidades y categorías de análisis personales y sociopolíticas dominantes en todas las formaciones sociales.

12.- Combahee River Collective, «A Black Feminist Statement», *Monthly Review*, 70 (2019), nº 8, p. 29.

13.- El concepto se refiere a la clasificación y distribución de la población de una sociedad en agregados de diferente nivel social y económico en función de características como, por ejemplo, el sexo, la raza, la etnia, la edad, el origen nacional, los ingresos, la educación, la ocupación y el lugar de residencia.

14.- Marta E. Giménez, *Marx, Women and Capitalist Social Reproduction*, 101-2 y Kimberlé Williams Crenshaw, «The Structural and Political Dimensions of Intersectional Oppression», en Patrick R. Grzanka, *Intersectionality: A Foundations and Frontiers Reader*, Nueva York (USA), Boulder, 2014, p. 18.

ces la interseccionalidad pretender ser una teoría feminista al tiempo que excluye a una gran parte de la población femenina? Al mismo tiempo, sin embargo, si la interseccionalidad se aplica a todo el mundo— porque todo el mundo está situado en la estratificación social y en las relaciones de opresión, y una proporción sustancial de la población masculina está al final de la cadena— tiene sentido considerarla como un enfoque para el estudio de la estratificación y sus efectos opresivos, más que como una teoría feminista^[15].

El tema de la teoría de la reproducción social también es ambiguo. Al igual que la interseccionalidad, la reproducción social también se considera una teoría feminista, pero en sus versiones actuales su alcance va más allá de la opresión de la mujer y de la reproducción de la fuerza de trabajo para abarcar la reproducción de las condiciones sociales y naturales para la reproducción del capitalismo.

V

Las primeras feministas marxistas teorizaron sobre el resultado del trabajo doméstico de las mujeres y la producción de valores de uso —la reproducción de la fuerza de trabajo— y debatieron la naturaleza de la relación entre trabajo doméstico, el nivel de los salarios de los hombres y la producción de plusvalía^[16]. Esta es la razón por la que, si se comparan con el pensamiento actual sobre la reproducción social, las primeras teorías feministas marxistas podrían clasificarse como teorías de la reproducción social *stricto sensu*. El ámbito de

la reproducción social, hoy en día, supone mucho más que la reproducción biológica, la reproducción de la fuerza de trabajo y la red de instituciones sociales más allá del hogar que contribuyen a la reproducción de la fuerza de trabajo (tales como el sistema educativo y el sistema sanitario). Incluye, por ejemplo, la reproducción de la población, las clases sociales, las relaciones de producción, la fuerza de trabajo, y los diferentes estratos y relaciones de opresión (el sexo, la edad, la raza, la etnia, el origen nacional, la religión y así sucesivamente) del sistema de estratificación social en que la población de todas las formaciones sociales se distribuye^[17]. Dado que la reproducción de la fuerza de trabajo y los sistemas de estratificación social reflejan y presuponen cambiantes condiciones económicas, políticas, legales e ideológicas a nivel macro, la reproducción social trata también de la reproducción de las formaciones sociales en su conjunto.

Las feministas de la reproducción social hacen hincapié en la integración de la producción de objetos y la producción de vida, argumentando así que la producción de excedentes y la acumulación de capital necesitan la reproducción de la fuerza de trabajo y que, en consecuencia, «la reproducción social está en el corazón de la lucha de clases»^[18]. En principio, estoy de acuerdo. Sin embargo, siguiendo la distinción de Marx entre elementos de organización social transhistóricos e históricos, sostengo que la reproducción social se teoriza mejor en su contexto histórico: «Si la producción es capitalista en la forma, también lo será la

15.- Nira Yuval-Davis, «Beyond the Recognition and Re-Distribution Dichotomy», en Helma Lutz, María Teresa Herrera-Vivar y Linda Supik (ed), *Framing Intersectionality*, Farnham, United Kingdom, Ashgate, 2011, pp. 156-159.

16.- Lise Vogel, *Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory*, Chicago, Haymarket, 2013, p. 177.

17.- Meg Luxton, «Reclaiming Marxist Feminism», *Studies in Political Economy*, 95 (2015), p. 166.

18.- Meg Luxton, «The Production of Life Itself: Gender, Social Reproduction and IPE», en Juanita Elias and Adrienne Roberts, *Handbook on the International Political Economy of Gender*, Cheltenham, United Kingdom, Edward Elgar, 2017, p. 39.



Trabajadoras del Consorcio Nacional Almadrabetario en Barbate (Cádiz), 1968 (Fuente: cometeelmar.com).

reproducción»^[19]. Por eso a mi perspectiva sobre la reproducción la llamo *reproducción social capitalista*, argumentando que:

«En las formaciones sociales donde el capitalismo es el modo de producción dominante, las estructuras, procesos y contradicciones del modo de producción *determinan* la organización social (es decir, establece límites históricos para su variabilidad) y la base material del modo de reproducción factible para las clases sociales y los estratos dentro de las clases»^[20].

La relación entre producción y reproducción en el capitalismo es intrínsecamente contradictoria, porque la reproducción de las clases trabajadoras está sujeta al poder,

19.- Karl Marx, *Capital*, vol. 1, New York, Internacional, 1974, p. 566.

20.- Marta E. Giménez, *Marx, Women and Capitalist Social Reproduction*, pp. 353-357 y cap. 13.

intereses y reproducción de la clase capitalista^[21]. Las contradicciones capitalistas cambian constantemente el acceso a las condiciones de reproducción para diferentes sectores de la clase trabajadora por medio de una variedad de mecanismos destinados a aumentar los beneficios y reducir los costes laborales. Por eso, prefiero decir que la supervivencia social y económica de las clases trabajadoras está en el corazón de la lucha de clases. De hecho, una contribución clave de la teoría de la reproducción social señala que las luchas de clase son luchas de los trabajadores para acceder a las condiciones materiales y sociales necesarias para la supervivencia y el progreso económico y social, y que la clase trabajadora abarca una población más amplia que el sector actualmente empleado de la mano de obra^[22].

21.- Íbidem, p. 299.

22.- Tithi Bhattacharya, «How Not to Skip Class: Social

Como señaló Immanuel Wallerstein:

«Debido a que los ‘pueblos’ contruidos — las razas, las naciones, los grupos étnicos— se corresponden fuertemente, aunque de forma imperfecta, con ‘la clase objetiva’... en el mundo moderno una gran proporción de la actividad política basada en la clase ha adoptado la forma de actividad política basada en la gente [mujeres, minorías, inmigrantes, etc.]»^[23].

VI

El solapamiento entre las primeras teorías feministas marxistas y una formulación estrecha de la teoría de la reproducción social es evidente, pero lo es menos a medida que el alcance de la teoría social de la reproducción se va ampliando. Desde la perspectiva de gran parte del pensamiento actual sobre la reproducción social, sin embargo, las primeras teorías feministas marxistas quedaron en entredicho ya que se desarrollaron dentro de un marco limitado que privilegiaba las categorías de clase y género, investigándolas «separadamente de la raza, la sexualidad, el colonialismo y otras relaciones constitutivas» al tiempo que pasaban por alto la «polifacética complejidad de las relaciones y luchas políticas en el mundo real... [donde] la opresión racial se cruza con formas de dominación y explotación de clase basadas en el género»^[24].

Estoy totalmente en desacuerdo con esa valoración. Las feministas marxistas teorizaban explícitamente la relación entre las

relaciones de clase capitalistas y la base estructural de la opresión de las mujeres. Su trabajo iluminó los efectos del capitalismo en la ubicación económica y social de las mujeres y la importancia del trabajo doméstico, y no excluyó que otras relaciones opresivas pudieran tenerse en cuenta en el contexto de la investigación empírica en el «mundo real», es decir, en las formaciones sociales capitalistas, en las que se inscribían las opresiones coloniales-imperiales y raciales.

En defensa de la teoría feminista marxista, donde los críticos ven debilidad, yo veo fortaleza. Las primeras feministas marxistas examinaron la relación entre el funcionamiento del modo de producción capitalista y la organización capitalista de la reproducción social y biológica, identificando en sus efectos las condiciones materiales que definen el estatus de la mujer en las formaciones sociales capitalistas, es decir en sociedades donde el modo capitalista de producción prevalece^[25]. La percepción de que el feminismo marxista «privilegió» al género excluyendo otras formas de opresión no tiene en cuenta la importancia de diferenciar entre niveles de análisis. Al nivel de análisis de *formaciones sociales capitalistas* (tales como los Estados Unidos, Francia, Uruguay, etc.), las experiencias de opresión de la mujer difieren considerablemente —este es el nivel de análisis donde los científicos sociales marxistas investigan los efectos de las relaciones de clase, la estratificación social y las relaciones sociales opresivas o lo que los defensores de la interseccionalidad identifican como «ejes de opresión» e «identidades complejas»—. El *modo de producción capitalista*, por el contrario, es el nivel de análisis

Reproduction of Labor and the Global Working Class», *Vivewpoint*, 31 de octubre de 2015.

23.- Immanuel Wallerstein: «The Construction of Peoplehood», en Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein (ed), *Race, Nation, Class*, Londo, Verso, 1991, p. 84.

24.- Susan Ferguson, Genevieve LeBaron, Angela Dimitrakaki y Sara R. Farris, «Introduction», *Historical Materialism*, 24 (2016), nº 2, pp. 28-30.

25.- Margaret Benston, «The Political Economy of Women's Liberation», *Monthly Review*; Lise Vogel, *Marxism and the Oppression of Women* y Martha E. Giménez, «The Oppression of Women», en Ino Rossi (ed), *Structural Sociology*, New York, Columbia, University Press, 1982.

en el que las primeras feministas marxistas desarrollaron sus teorías de las condiciones materiales estructurales que subyacen a la condición subordinada de las mujeres, independientemente de las diferencias en sus identidades individuales y sus ubicaciones en la estructura de clases y el sistema de estratificación,

Aunque el feminismo marxista también ha sido criticado por «privilegiar» la clase, sostengo que no la «privilegió» lo suficiente. Las teorías feministas marxistas captan la esencia de las condiciones materiales que afectan a la mayoría *de las mujeres de clase trabajadora*, aunque esto no está siempre explicitado y de ahí la percepción de que generalizan en exceso. La afirmación de Benston de que «excepto para las muy ricas, que pueden contratar a alguien que lo haga, para la mayoría de las mujeres hay un mínimo irreductible de trabajo necesario en cuidados de la casa, el marido y los hijos» señala, en el nivel de análisis de la articulación entre el capitalismo y la reproducción, que este es el destino de la mayoría de las mujeres sin propiedades en el capitalismo^[26]. Dentro de las formaciones sociales capitalistas, sin embargo, las mujeres están divididas no solo en razón de su ubicación de clase (propietarias y no-propietarias de los medios de producción) sino también por su ubicación en el sistema de estratificación social.

Las referencias indirectas a la clase, como la diferenciación entre los muy ricos y la mayoría de los demás, o entre el 1% más rico y el 99%, ocultan la naturaleza de las diferencias de clase y la existencia de diferencias socioeconómicas *dentro* de las clases, contribuyendo involuntariamente a la confusión reinante sobre la clase en Estados Unidos.

26.- Margaret Benston, «The Political Economy of Women's Liberation», p. 24.

VII

Hay una fuerte conexión entre la intensificación de la desigualdad económica, globalmente y dentro de las formaciones sociales capitalistas, y los cambios en la ciencia social y el pensamiento feminista que buscan reconocer las limitaciones de teorizar sobre una o varias opresiones simultáneas en relativo aislamiento de la clase. En teoría, es difícil conceptualizar la relación entre clase y opresión en un contexto donde el evitar el «reduccionismo de clase» a menudo da como resultado que se confunda la clase con los ingresos o con el estatus socioeconómico, reduciéndola a una ideología o «clasismo» o a mezclar clase con opresiones como por ejemplo plantear que la clase es «de género» o «de raza». Y lo que es más importante, rara vez se reconoce que la clase y las opresiones pertenecen a dos niveles de análisis diferentes: la clase es una de las estructuras duraderas del modo de producción capitalista cuyos efectos causales se dejan sentir en todas las formaciones sociales capitalistas, mientras que las identidades opresivas y las relaciones de opresión son más variables históricamente y se construyen ideológica y políticamente para adaptarse a las cambiantes necesidades económicas y políticas^[27].

Políticamente, el problema es cómo fomentar la unidad de clase y la conciencia de clase en una clase trabajadora fragmentada y debilitada por los efectos del cambio económico y tecnológico, y por las políticas de

27.- Los inmigrantes no europeos son automáticamente racializados o etnizados en Estados Unidos e incorporados a los grupos minoritarios oprimidos ya existentes. Marta E. Giménez, «Minorities and the World-System», en Joan Smith, *Racism, Sexism and the World-System*, Nueva York, Greenwood, 1988, pp. 39-56, Immanuel Wallerstein, «The Construction of Peoplehood», *Sociological Forum*, 2 (1987), pp. 373-388 y Barbara Fields, «Slavery, Race and Ideology in the United States of America», *New Left Review*, 181 (1989), pp. 95-118.

identidad y las guerras culturales. Una posible solución podría consistir, *en primer lugar*, en «privilegiar» la clase, explorando las implicaciones teóricas y políticas del hecho de que todos los agregados de población identificables en función del estatus —es decir, categorías de opresión como el sexo, la raza, la etnia, el origen nacional, el estatus de ciudadanía, la edad y la sexualidad— están divididos por la clase^[28]. *En segundo lugar*, hay que tener en cuenta que las clases trabajadoras están fragmentadas no sólo en términos de sexo, raza, etnia, etcétera, sino también en términos de educación, ocupación, ingresos, lugar de residencia, religión, afiliación política..., es decir, en términos de estratificación social y económica.

En el nivel de análisis del modo de producción, la mayoría de las personas, sean cuales sean su sexo, raza, etnia y otras características individuales, son de clase trabajadora, sean conscientes o no de este hecho. No son propietarios de los medios de producción, dependen de la venta de su fuerza de trabajo para sobrevivir, y su supervivencia económica es siempre precaria y está sujeta a los cambios de la economía capitalista nacional y mundial, que, a su vez, refleja las decisiones siempre a la búsqueda de beneficios de las clases capitalistas.

En el nivel de análisis de las formaciones sociales, la ubicación de clase común y la comunidad objetiva de intereses se ven oscurecidas y atenuadas por los efectos de las divisiones raciales, étnicas, socioeconómicas y de otro tipo.

Debido a las divisiones de clase y de estatus socioeconómico, *la pertenencia a grupos oprimidos no implica la coincidencia*

de intereses políticos y económicos. Aunque la proporción de mujeres y miembros de minorías raciales y étnicas en la clase capitalista y en las capas superiores del sistema social, económico y político es muy pequeña, las contradicciones de clase y los conflictos de intereses no desaparecen bajo el manto de las identidades comunes. Por ejemplo, el éxito de las luchas por los derechos civiles de todos los miembros de un grupo oprimido no borra las contradicciones de clase y la desigualdad socioeconómica dentro del grupo. En el mejor de los casos, fomenta la movilidad ascendente de algunos individuos al tiempo que el capitalismo y todas las formas de desigualdad económica y social no sufren cambios/permanecen como estaban.

Es necesario, en consecuencia, trascender la cosificación de los conceptos de *clase* y de *clase obrera* como cosas separadas de las relaciones de opresión en general y de las luchas de las mujeres y otras luchas identitarias en particular. La teoría feminista marxista ha arrojado luz sobre las condiciones materiales de la opresión de las mujeres de la clase obrera y necesita decirlo con fuerza, superando el control ideológico subyacente a los habituales reparos sobre el determinismo económico y el reduccionismo de clase que contribuyeron al alejamiento de la clase y al auge de las políticas identitarias. En este contexto, «privilegiar» la clase significa hacer explícito que la opresión siempre se experimenta dentro de los espacios políticos y sociales de clase y estratificación social, lo que, a su vez, puede mejorar o intensificar sus efectos. Los resultados de las relaciones y los conflictos de clase recaen *de forma diferenciada* sobre las mujeres en función de su situación de clase, de su estatus socioeconómico y de su ubicación en las estructuras de opresión, independientemente de su autoidentificación con una o varias identidades oprimidas.

28.- En términos de Sociología weberiana, las categorías de opresión son categorías de estatus que conllevan «una estimación social específica, positiva o negativa, del honor... conectada con cualquier cualidad compartida por una pluralidad». Max Weber, *From Max Weber: Essays in Sociology*, Nueva York, Oxford University Press, 1973, p.181.

Sin embargo, la realidad material de la clase, siempre presente, rara vez es reconocida por el ciudadano medio. Pero se reconozca o no (es decir, independientemente del grado de conciencia de clase), el efecto de la ubicación de clase es real, aunque sus «heridas ocultas» puedan experimentarse y comprenderse a través de la lente de la identidad. Por ejemplo, si se consideran desde un punto de vista exclusivamente feminista, los actuales esfuerzos del Partido Republicano estadounidense por socavar el acceso legal y necesario de las mujeres a la anticoncepción y al aborto se han denominado la «guerra de los republicanos contra las mujeres». Tal interpretación pasa por alto importantes diferencias de clase y estatus socioeconómico en el impacto de las políticas restrictivas sobre la reproducción biológica. *Independientemente de la raza, la etnia y otras diferencias*, las mujeres capitalistas y las que se encuentran en las capas superiores del sistema de estratificación social no se ven afectadas por dichas políticas, porque pueden permitirse pagar la anticoncepción y el aborto si su seguro médico no los cubre o si están prohibidos o no están disponibles en su lugar de residencia^[29]. Dado que la mayoría de las mujeres viven con hijos, maridos, parejas u otros miembros de la familia, sus decisiones reproductivas afectan no sólo a su propio bienestar, sino también al de otras personas. En el contexto de salarios insuficientes, empleo precario, vivienda inadecuada, falta de seguro médico y otros males que

afectan a la clase trabajadora, las políticas familiares reaccionarias pueden entenderse mejor como una guerra contra la clase trabajadora^[30].

VIII

A medida que se intensifican la riqueza y la desigualdad de ingresos, resulta cada vez más difícil ignorar la realidad material y sus efectos en la vida de las personas. Ha llegado el momento de reconocer los límites de las teorías y políticas basadas en la identidad. Los éxitos económicos, sociales y políticos de muchas mujeres a título individual no han alterado el destino de la mayoría. Quizás ésta sea una de las fuentes del renovado interés por el marxismo y el feminismo que vemos hoy en día, especialmente en Europa, donde se han celebrado recientemente tres conferencias internacionales^[31].

Para convertirse en algo más que un ejercicio académico, el feminismo marxista necesita volver a sus raíces histórico-materialistas y a la clase, como base material clave de los problemas a los que se enfrentan las mujeres de la clase trabajadora, con empleo o sin él. En el actual entorno económico y político, es importante articular un feminismo que reconozca que la mayoría de las mujeres están situadas en la clase trabajadora y que la opresión y los problemas a los que se enfrentan las mujeres trabajadoras (sea cual sea su identidad o

29.- Las mujeres capitalistas son mujeres que poseen capital por derecho propio, ya sea heredado y/o ganado, o están casadas con un capitalista y disfrutan de los privilegios de la riqueza. Es importante señalar que hay seis estados en Estados Unidos con una sola clínica abortista. *Planned Parenthood* podrían verse obligados a dejar de practicar abortos en Missouri y, si esto sucede, se convertirá en el primer estado sin una sola clínica abortista. «A Dark Milestone for Women's Rights», *New York Times*, 28 de mayo de 2019.

30.- Marta E. Giménez, «Reactionary Family Policies in the 21st Century».

31.- *The Strength of Critique: Trajectories of Marxist-Feminism*, First International Marxist-Feminist Conference, Rosa Luxembourg Stiftung, Berlin, Marh, 20-22, 2015; *Building Bridges - Shifting and Strengthening Visions- Exploring Alternatives*, Second International Marxist-Feminist Conference, Academy of Fine Arts, Vienna, October, 7-9, 2016 y *Transforming Ourselves, Transforming the World*, Third International Marxist-Feminist Conference, Lund University, Lund Sweden, October, 5-7, 2018.

identidades) dentro de las formaciones sociales se ven afectados significativamente por su posición de clase. Las mujeres trabajadoras no sólo son responsables de la reproducción de la fuerza de trabajo, de la supervivencia económica de sus familias y de la clase obrera: *forman parte* de la clase obrera. De hecho, son más de la mitad de la clase trabajadora del mundo, dado que «su ubicación común en relaciones de producción y reproducción es una base material universal, aunque histórica, para su potencial movilización y organización política no como mujeres y no como trabajadoras, sino como mujeres trabajadoras»^[32].

Por lo tanto, es hora de que, cuando se escriba y se hable sobre cuestiones que importan a las mujeres, se especifique su ubicación de clase, su estatus socioeconómico y cualquier otra característica relevante, como si son mujeres latinas de clase trabajadora, mujeres blancas capitalistas, mujeres inmigrantes centroamericanas de clase trabajadora, mujeres de clase media (en términos de estatus socioeconómico), mujeres afroamericanas, etcétera. No se trata de describir identidades complejas, sino de llamar la atención sobre la naturaleza ubicua de la clase como espacio social, económico y político donde se desarrollan inevitablemente las vidas de todos, independientemente de la conciencia que tengan las personas de su posición de clase.

Hoy en día, a medida que crece la desigualdad económica, las perspectivas económicas de los hombres de clase trabajadora, en particular de los que tienen un bajo nivel educativo, han ido disminuyen

do, como ha ocurrido durante décadas. La productividad crece mientras los salarios se estancan. La formación de la familia de la clase trabajadora es cada vez más difícil e inestable, especialmente a medida que el capital recurre a la mano de obra femenina para reducir los costes laborales. A medida que las mujeres siguen aumentando su participación en la fuerza de trabajo, su responsabilidad en el trabajo de reproducción social también se ha intensificado^[33]. Estos cambios a nivel macro en la demanda de mano de obra y la participación de la mujer en la fuerza de trabajo exacerban las divisiones dentro de la clase obrera, en particular los antagonismos entre trabajadoras y trabajadores, fomentados por la política de identidad favorecida por la clase capitalista.

Mientras la opresión de las mujeres y otras opresiones ocupen el centro de la política y la teoría feministas, mientras la clase permanezca en los márgenes, el feminismo contribuirá involuntariamente a mantener la clase apartada de la conciencia colectiva y de los límites del discurso político aceptable. Para convertirse en una fuerza política e ideológica unificadora, en lugar de divisoria, el feminismo marxista del siglo XXI necesita ser un feminismo de mujeres abiertamente obrero, solidario con la clase obrera en su conjunto, que apoye las luchas de *todos* los trabajadores, mujeres y hombres, y personas con variantes de género de todas las razas, orígenes nacionales, diferentes estatus de ciudadanía, etcétera; encabezando así el proceso hacia la organización de la clase obrera y el muy necesario retorno a la clase en la política estadounidense.

32.- Marta E. Giménez, *Marx, Women and Capitalist Social Reproduction*, p. 342.

33.- Andrew J. Cherlin, *Labor's Love Lost. The Rise and Fall of the Working-Class Family in America*, New York, Russell Sage, 2014.

Sobre culturas históricas marxistas y marxismo difuso*

Francisco Erice
Universidad de Oviedo

Habitualmente, el análisis de la influencia de las ideas marxistas se ha centrado en su plasmación o incorporación sistemática, más o menos ortodoxa o heterodoxa, por parte de distintos autores o como *corpus* teórico de organizaciones políticas determinadas. Casi siempre se ha descuidado su proyección difusa o parcial, su capacidad de impregnación del pensamiento de filósofos, científicos sociales, activistas o movimientos sociales que a menudo no se reconocen como marxistas, al menos en sentido pleno. Con ello se ha desdeñado o infravalorado uno de los aspectos fundamentales de la huella del marxismo y su función en sentido amplio, por utilizar la expresión de Gramsci, como un «momento de la cultura» del siglo XX.

El libro colectivo editado por Berger y Cornelissen, basado en un coloquio germano-italiano celebrado en 2014, tiene la virtud de ampliar en ese segundo sentido el campo del marxismo occidental, desde la historia de los movimientos sociales y con el frecuente recurso al concepto de

*Reseña de Stefan Berger y Christoph Cornelissen (eds.), *Culturas históricas marxistas y movimientos sociales en la Guerra Fría. Estudios de caso de Alemania, Italia y otros estados de Europa occidental*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2021, 361 pp.



cultura histórica de Jörn Rüsen, quien la define como «la articulación práctica y operativa de la conciencia histórica en la vida de una sociedad»; noción, dicho sea de paso, poco usada en nuestros círculos historiográficos frente a otras con cuyos contenidos mantiene zonas de in-

tersección, como la de *memoria colectiva* o *cultura política*. Lo que el volumen nos ofrece son, en total, doce trabajos de valor y alcance desigual, pero todos ellos interesantes y la mayoría merecedores de la máxima atención.

El primero, el más general, viene a ser una especie de introducción de los dos editores en la que se plantea la relación, no siempre reconocida, entre marxismo y movimientos sociales. En él se resalta el papel particular del «marxismo no ortodoxo» en la cultura histórica de Europa occidental; una influencia no siempre basada en la ideología sino también en un *habitus* y un sistema de relaciones prácticas muy presente en los distintos movimientos de protesta. En ese sentido, la herencia matricial del antifascismo parece haber desempeñado un rol insustituible.

Es precisamente esa última cuestión (el antifascismo) la que aborda Arnd Bauerkämper para el período de la Guerra Fría en sentido lato. Lo que tras la Segunda Guerra mundial había sido a la vez «un dogma ideológico, un llamamiento a la concentración política y un paradigma en la investigación», quedó opacado en los peores años de la bipolaridad para revivir en los movimientos de protesta de los años sesenta, traspasando las fronteras nacionales. Los casos —bien diferentes y con cronologías dispares— de Gran Bretaña, Austria, Italia o Francia así parecen avalarlo. El antifascismo en las democracias de posguerra «apuntaló las culturas históricas marxistas que, sin embargo, se extendían más allá de socialistas y comunistas».

Aunque ubicado más adelante en el índice del libro sin que podamos deducir los criterios aplicados, Dieter Ruch reflexiona, en términos generales, sobre las relaciones entre labor académica y com-

promiso político en los estudios acerca de los movimientos sociales. Ruch defiende, entre las opciones posibles, una «simpatía reflexiva» que, sosteniendo unos valores generales, asuma los estándares científicos y rechace el partidismo ciego, aunando de forma paradójica la proximidad (para comprender mejor el significado de la acción) y la distancia (con el fin de resguardar los criterios científicos, la fiabilidad y la representatividad).

Algunos de los textos se centran fundamentalmente en interpretaciones y debates entre historiadores. Thomas Kroll, el primero de ellos, analiza la historiografía marxista dentro de la cultura histórica comunista y sus derivaciones transnacionales, insistiendo en la relevancia de controversias como la de la transición del feudalismo al capitalismo, la influencia de Gramsci o la proyección de Soboul y su historia de la revolución francesa o la «historia desde abajo» en otros ámbitos nacionales. También Gilda Zazzara fija su atención en la historiografía, en su caso la desarrollada en Italia en los años cincuenta y en el entorno del PCI, con referencias particulares a la Biblioteca Feltrinelli de Milán, la Fundación Antonio Gramsci en Roma y la labor de los institutos históricos de la Resistencia. Nuevamente la resurgencia del antifascismo en los movimientos juveniles se reveló como crucial. En todo caso, la huella de los historiadores marxistas de posguerra y sus trabajos sobre el fascismo y el movimiento obrero aparece claramente demostrada en la historiografía académica de los años ochenta y posteriores.

Los debates e interpretaciones marxistas acerca de la revolución alemana de 1918-1919 durante la Guerra Fría cierran el bloque de trabajos dedicados a la práctica historiográfica. Ralph Hoffrogge se sumerge en la historiografía de las dos

Alemanias y la memoria de la revolución frustrada, con relatos contrapuestos pero a la vez similares que, por ejemplo, coincidían en restar importancia al movimiento consejista. Desde los años sesenta, la diversidad de interpretaciones se relaciona a menudo con las opciones políticas presentes en la izquierda, desde las más *reformistas* hasta las inspiradas en principios marxista-leninistas o maoístas, pasando por los del *operaísmo* o similares. El autor, tras resaltar la presencia clara de los conflictos entre fracciones de la izquierda en la interpretación de la revolución alemana, subraya que el resurgir de una cultura marxista de la historia en la RFA fue «un proceso fragmentado y caracterizado por rupturas y eslabones rotos» y se basó en la exégesis de los textos clásicos más que en la tradición oral o la memoria organizativa de los grupos obreros.

La segunda parte del libro incluye seis trabajos que constituyen análisis de casos acerca de otros tantos movimientos sociales. El mismo Berger, junto con Christian Wicke, se adentra en el pacifismo y las reflexiones sobre el mismo del historiador (y activista, no lo olvidemos) Edward P. Thompson; concretamente, en las estrechas relaciones entre su inspiración marxista, su obra histórica y su compromiso por la paz. Desde luego, no todos los integrantes del movimiento compartían el humanismo socialista thompsoniano ni la controvertida noción de *exterminismo*, que atribuía una lógica propia a la dinámica de bloques, no reductible ni explicable con las críticas marxistas clásicas al capitalismo y al imperialismo. En cualquier caso, la intervención de Thompson muestra que el marxismo jugó un papel influyente en el movimiento antinuclear de los años setenta-ochenta del pasado siglo.

También en relación con el movimiento por la paz, Alrun Berger nos introduce en la Alemania occidental de los años sesenta y la evolución de las llamadas «marchas de Pascua» (Ostermarsch). Utilizando una vez más el concepto de cultura histórica de Rüsen, el autor observa la impregnación marxista gradual (siempre en términos de hibridación con otras influencias) del movimiento, y el papel de las organizaciones juveniles socialistas, a través de sus distintas etapas, desde el cristiano-pacifismo inicial a la fuerte politización del período final.

Benedikt Sepp, por su parte, nos sitúa en la emergencia del movimiento estudiantil germano-occidental en 1961-1962, su «estética» y sus lecturas marxistas, que combinaban un «retorno a los clásicos» con diferentes interpretaciones de la práctica política. David Bebnowski añade una aproximación al análisis de las publicaciones periódicas de la Nueva Izquierda alemana entre 1959 y 1976, aunque en perspectiva comparada con otros países, subrayando que el marxismo no fue su única fuente de inspiración.

También en términos comparativos, Petra Terhoeven utiliza los casos alemán e italiano para ilustrar la pulsión antiimperialista de la Nueva Izquierda en ambos países y su fascinación por la violencia revolucionaria, compitiendo con otras culturas, como la católica o la comunista mayoritaria. Este antiimperialismo contribuyó a una cierta atracción por la acción armada, a la que sucumbieron un pequeño número de jóvenes en Alemania y muchos más en Italia, frente a las críticas por voluntarismo desde el marxismo ortodoxo y la búsqueda por la mayoría de formas pacíficas de «tercermundismo», resultado también de una decepción moral que muchos otros, en cambio, «tuvieron que pagar con sus vidas». El libro se

cierra, precisamente, con un trabajo sobre el tercermundismo en Italia, obra de Guido Panvini, que analiza su influencia en los intelectuales y también el peso de la tradición católica y el diálogo marxista-cristiano tras el Concilio Vaticano II, con inevitables referencias, una vez más, a la exaltación de la violencia en los movimientos juveniles del momento.

En conclusión, más allá de las valoraciones particulares de cada uno de los trabajos incluidos, no creemos exagerado recomendarlo como lectura casi obligada para marxistas, marxianos, marxólogos y/o estudiosos de los movimientos sociales. Es a la vez un ejemplo de lo que también podría abordarse en nuestra propia historiografía, para lo cual los trabajos sobre Italia o Alemania (y las referencias adicionales a otros países) constituyen una buena fuente de inspiración y sugerencias. Hablar de «marxismo difuso», de «marxismos fugaces» (como se hace en alguno de estos trabajos), de huellas más o menos visibles y de impregnaciones en las culturas históricas de los movimientos analizados, enriquece a la vez el co-

nocimiento de los fenómenos estudiados y del propio marxismo en general en su proyección histórico-social. Por supuesto no se puede pretender sistematicidad en una recopilación de este tipo o unas jornadas de debate como las que sustentan el contenido del libro; pero uno se pregunta, entre otras cosas, por qué no aplicar la misma idea a otros campos y objetos, como el de los feminismos o los ecologismos, a movimientos identitarios de algunas minorías... o al propio movimiento obrero, siempre alimentado con influencias diversas y a menudo heterogéneas, más allá de las que constituyen su autodefinición explícita.

Resulta oportuno y es de justicia señalar, finalmente, que el libro forma parte de la excelente colección «Historia Global», dirigida por Carlos Forcadell, que entre otras cosas permite el acceso en nuestro idioma a interesantes desarrollos de historiografías y reflexiones sobre la Historia que no proceden del área francófona o anglófona y que, por ello, resultan mucho menos conocidas que éstas en nuestro país.

Para entender la ofensiva social y cultural del nacionalismo español*

Julián Sanz Hoya
Universitat de València

Después de décadas afirmando enfáticamente una supuesta debilidad del nacionalismo español o de la identidad nacional española, los éxitos de la selección de fútbol masculino causaron sorpresa a algunos comentaristas, ensayistas y hasta expertos. No tanto, desde luego, a una serie de investigadores que venían estudiando desde planteamientos renovados el *nation-building* en España, esto es, cómo se había producido y reproducido, creado y recreado, inventado y reelaborado la idea de nación y la identidad nacional, atendiendo a la creciente y fértil historiografía internacional sobre el asunto, incluyendo en su enfoque los planteamientos —tan citados, pero parece que no siempre bien digeridos— de M. Billig sobre el nacionalismo banal. Con posterioridad, el denunciado peligro para la nación —ay, ese ente siempre atacado y amenazado, según sus nacionalistas y «no nacionalistas»— que fue de la mano del *procés* en Cataluña y de los cambios sociales, políticos y culturales asociados a la revitalización de la izquierda y al empuje feminista generaron una extensa, duradera y agónica reacción nacionalista que está demostrando sobradamente el fuerte anclaje no ya solo de la identidad

*Reseña de Pablo Batalla Cueto, *Los nuevos odres del nacionalismo español*, Gijón, Trea, 2021, 408 pp..



españolista, sino también de las lecturas, los esquemas y los mitos nacionalistas reaccionarios o ultraconservadores en torno a España.

En los últimos tiempos, al calor del avance de Vox y de la radicalización de amplios sectores del PP, vienen proliferando los ensayos, los artículos y los libros colectivos que analizan este fe-

nómeno, para algunos novedoso o excepcional, para otros casi inseparable de la trayectoria histórica de la derecha española. Los historiadores sabemos que los fenómenos no surgen de la nada, que siempre tienen raíces sociales y culturales, por más que puedan presentarse de forma novedosa, y que, por tanto, más allá del análisis de Vox, del PP y de sus discursos, hacía falta conocer el *humus*, el contexto cultural que explicaba el éxito y el alcance de la identificación con los mitos nacionalistas.

Aquí precisamente se encuadra el mérito y la oportunidad de *Los nuevos odres del nacionalismo español*, obra del ensayista asturiano Pablo Batalla Cuento. Licenciado en Historia, periodista y persona enraizada en la tradición de la izquierda, Batalla ha sabido leer la necesidad de un análisis cultural de la epidemia de exaltación de los tercios, la Reconquista, Blas de Lezo y la selección que encarna para algunas gentes la españolidad frente a izquierdosos, separatistas, musulmanes y demás ralea que amenaza a la patria. Lo hace en un ensayo de lectura ágil y agradecida, de pluma suelta, con buena base teórica —el autor conoce bien los debates sobre la construcción nacional y la trayectoria del nacionalismo hispano— y mostrando buen olfato para el análisis, la hipótesis, la relación y la comparación.

Uno de los méritos del libro es la capacidad de acercarse a una multiplicidad de expresiones y vectores de la expresión y la recreación del nacionalismo español, especialmente en su versión más derechista. Así, toca el «nacional-futbolismo», la pintura histórica (con su concreción en Augusto Ferrer-Dalmau), los videojuegos y su «gamificación del imperialismo», pero también los orígenes intelectuales y el desarrollo de las

teorías sobre la historia patria de Gustavo Bueno, tan influyentes en los medios nacionalistas de los últimos tiempos. Del «imperio generador» a los héroes del Rif y la búsqueda de los enemigos internos y externos, inevitablemente llega a la operación propagandística que encumbró a Roca Barea y su victimismo en torno a la malvada Leyenda Negra, que tan mal se compadece con cualquier análisis historiográfico riguroso.

Como no puede ser menos en un análisis sobre estas cuestiones, hay espacio asimismo para el relato nacional en su formato clásico, la «nación novelada». Repasa por ello la invasión de novelas históricas, frecuentemente infumables, que llenan las librerías y generan ávidos seguidores que leen sobre «nuestros antepasados» o directamente sobre «los españoles» en la Prehistoria, la Hispania romana, la Reconquista y los tiempos medievales, las gestas imperiales («Terциomanía», titula uno de sus apartados) o la «conquista del Oeste» de los Núñez de Balboa y compañía, sin que falte la mención a la particular visión histórica —tan nacionalista, heroica y pesimista— del recurrente Pérez-Reverte. Desde luego, las formas más modernas del relato en la cultura de masas no están tampoco ausentes: Batalla aborda asimismo los relatos televisivos, con especial atención al ejemplo del *Ministerio del Tiempo*. Y el más puro nacionalismo banal aparece en el análisis sobre la exaltación de la gastronomía patria, quizá uno de los elementos que más consenso y orgullo generen en muchos habitantes del «Estado español», incluidos nacionalistas periféricos.

Los nuevos odres también se detiene en aquellos identificadores más clásicos o formales del nacionalismo. Así, la fiesta nacional del *Doce de Octubre* y su reactivación, que se viene mostrando cada vez

más exaltada y sectaria —como venimos viendo— en el siglo XXI, o la cuestión de los monumentos y su resignificación (con la curiosa transición del Bolívar franquista al furibundo rechazo al personaje y no digamos al nuevo bolivarismo). Así, la apropiación conservadora y ultra de la rojigualda como «enseña partisana, vinculada a las derechas», pese a los intentos de resignificación de Errejón y otros. Entrando en aspectos concretos del debate político, formal o informal, señala la difusión de discursos antiglobalistas e islamófobos, aunque no profundiza en ello, y se detiene en la campaña de mentiras y paranoia en torno al 11-M, que define como «nuestro (sic) caso Dreyfus», y en el espíritu de las concentraciones de la plaza de Colón, auténtico frente unido del nacionalismo derechista español. Por último, dedica unas páginas al fenómeno del rojipardismo o, más ampliamente, la izquierda más definidamente nacionalista española, una «izquierda Viriato» que caracteriza como «una galaxia de contornos lábiles y escurridiza sistematización».

«Presentismo, mito, drama, trascendencia, emoción: persiguiendo tales propósitos pinta Ferrer-Dalmau sus pinturas de sentimiento histórico, y al hacerlo, alimenta una concepción del tiempo característica de la psique nacionalista, por la cual el pasado, el presente y el futuro se deslíen, el pasado reciente se vive como

remoto y el reciente como remoto». Pienso que este fragmento en que Pablo Batalla analiza la obra de este pintor catalán, cercano al tradicionalismo, amigo de Pérez-Reverte y cuyos cuadros son reverenciados por muchos «patriotas» manifiesta bien el objeto, el enfoque y el estilo de *Los nuevos odres del nacionalismo español*.

Como ensayo de estilo suelto, a veces de aire despreocupado, quizá pueda achacarse al libro que salte demasiado de un lado hacia otro, que carezca de una sistematicidad ordenada, que abra muchas cuestiones sin profundizar en ellas. Aunque quizá estas últimas sean objeciones que muestren sobre todo los hábitos gremiales del reseñista, por más que en esta recensión haya optado por una aproximación general e impresionista a la obra y los temas que trata. En todo caso, estamos ante un libro que tiene la virtud de plantear muchas cuestiones interrelacionadas, generando el interés del lector, y que contribuye a las aproximaciones en curso que nos permitirán conocer mejor el trasfondo y las bases culturales de la ofensiva social, cultural y política que viene planteando el nacionalismo español en su versión más derechista. Un movimiento y un fenómeno que, como bien apunta Batalla con ejemplos aquí y allá, lejos de moverse en alguna supuesta excepcionalidad, se integra bien en las tendencias internacionales de rearme nacionalista.

La recuperación de la democracia desde abajo y por los de abajo*

Óscar J. Martín García

CSIC-Universitat Politècnica de València

Corría 2003 cuando cayó en mis manos *Quan el carrer va deixar de ser seu: moviment obrer, societat civil i canvi polític, Sabadell (1966-1976)*, la monografía nacida de la tesis doctoral de Xavier Domènech. Por entonces quien escribe estas líneas era un becario predoctoral que comenzaba a investigar sobre protesta y democratización en la provincia de Albacete. Aquel libro supuso una auténtica fuente de inspiración y un punto de referencia en mis primeros pasos por los derroteros de la historia social del tardofranquismo. En adelante leí con interés la larga y sugerente lista de publicaciones de Xavier Domènech, especialmente las que abordaban la contestación obrera contra la dictadura, una parte de las cuales, ampliadas y actualizadas, integran la obra aquí reseñada: *Lucha de clases, franquismo y democracia. Obreros y empresarios (1939-1979)*, un libro resultado de dos décadas de investigación y del afán por recuperar las victorias colectivas de los de abajo y desde abajo.

Este libro representa una crítica rigurosa a los paradigmas que han hegemonizado las explicaciones y representaciones del cambio de régimen en España en la segunda mitad de los años setenta. Utilizando una cronología amplia, el trabajo pone

*Reseña de Xavier Domènech Sampere, *Lucha de clases, franquismo y democracia. Obreros y empresarios (1939-1979)*, Madrid, Akal, 2022, 416 pp.



en tela de juicio aquellas interpretaciones que beben de la teoría de la modernización elaborada (con una clara connotación anti-comunista) en Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, y que consideran que el desarrollo económico y las transformaciones sociales de los años sesenta crearon las condiciones estructurales y culturales que hicieron inevitable una transición de-

mocrática, pacífica y moderada una década después. La obra de Domènech también cuestiona las lecturas que, en la línea de la «transitología» de cuño liberal que desde mediados de los 1980s arraigó con fuerza en la ciencia política comparada, argumentan que el cambio democrático estuvo guiado por las elites políticas (principalmente las posfranquistas), las cuales tuvieron un amplio margen de maniobra ante la pasividad de una sociedad anestesiada por los frutos del desarrollo y temerosa de los radicalismos ideológicos que amenazaban con la reedición de un pasado violento y fratricida.

Unas versiones y otras vinculan la restauración de la democracia con el ideal de modernización, con las emergentes clases medias urbanas, con la moderación y el consenso, al mismo tiempo que la desligan del conflicto colectivo y de la confrontación política y social. De esta forma, proveen el sustrato intelectual sobre el que se ha construido un relato mítico de la transición, trunfo de un discurso triunfalista que funciona con la clara intención de legitimar ideológicamente a las instituciones, valores y acuerdos en los que descansa el llamado régimen del 78. Este relato normativo conecta con los consensos culturales que han articulado la sociedad española durante los últimos cuarenta años, estableciendo las coordenadas del debate público sobre el final de la dictadura y la consecución de las libertades democráticas. No en vano, dicha mistificación ha llegado incluso a impregnar la relectura crítica de la transición surgida al calor del 15M y su impugnación del sistema político nacido tras la muerte de Franco. Sustanciada en el concepto de *Cultura de la transición*, dicha crítica es en sí misma deudora del discurso hegemónico que reduce el papel de las clases trabajadoras al de meras espectadoras de un proceso pilotado desde arriba. En otras palabras, la enmienda a la totalidad de la transición que

eclosionó a partir de 2011 se ha movido en los confines de los esquemas preponderantes, asumiendo y reproduciendo, aunque sea involuntariamente, las narrativas proyectadas desde el poder político, mediático y editorial, incluidas aquellas referentes a la flaqueza de la resistencia obrera y su escasa contribución en la recuperación de la democracia en España.

De ahí la importancia del libro de Xavier Domènech y su implícita reivindicación de la movilización antifranquista como referente alternativo para imaginar un presente y un futuro distintos. El autor escudriña un periodo en el que otros caminos estaban abiertos, en el que la discusión sobre el capitalismo y sus alternativas aún no había sido clausurada. Alumbrar las victorias y logros de la movilización en la calle, pero también los proyectos y «futuros perdidos» que no se materializaron, pero que fueron plausibles y deseables en esa coyuntura histórica, es sin duda una de las principales aportaciones del libro. El autor utiliza el concepto de lucha de clases como instrumento analítico y metodológico, a través del cual reflexiona sobre la construcción de la democracia en España y sobre las limitaciones de la lucha colectiva y del cambio político. La obra disecciona con brillantez la emergencia de la clase obrera como sujeto político bajo el franquismo. Entre otras cuestiones, presta atención a las experiencias y tradiciones procedentes de la «vieja» clase obrera de los años treinta, a las múltiples identidades obreras unidas por una misma conciencia (y solidaridad) de clase, a los repertorios de movilización y a los espacios y redes que dieron forma a la «nueva» militancia de la década de los sesenta. De este modo, el libro consigue perfilar con nitidez la naturaleza de una conflictividad social a la que a menudo se ha intentado despojar de su carácter político. Escasean en este análisis las va-

riantes y matices de la lucha de clases en las zonas menos desarrolladas del país, en donde las fuerzas y debilidades de la contestación social plantean un buen antídoto contra las lecturas populistas de izquierdas. Tampoco se tratan en profundidad las conexiones y experiencias transnacionales presentes en la recomposición del activismo obrero del periodo. Ausencias que no alteran la calidad de la obra en conjunto, basada en la recopilación de un amplio y variado corpus documental, en cuyo análisis subyace un rico aparato teórico que va de E. P. Thompson a Antonio Gramsci, pasando por Josep Fontana y otros referentes de la historia social. No obstante, dicho marco teórico se podría haber beneficiado de un mayor diálogo con campos cercanos como la sociología histórica o la sociología de la acción colectiva.

Resultado de un esmerado trabajo de investigación histórica, el autor demuestra de manera convincente que la recuperación de los derechos políticos y sociales no fue ni la consecuencia inevitable de un determinismo estructural de naturaleza tecnocrática, ni la obra de ingeniería política de las elites postfranquistas, sino el logro de las fuerzas populares y del movimiento obrero que, a través de su lucha, generaron las condiciones políticas para el cambio de régimen. La obra pone de relieve que la relación entre la lucha de clases y la democracia se remonta a los años sesenta, si bien su representación más nítida se produjo en 1976, cuando los meses posteriores a la muerte de Franco fueron testigo de una imponente oleada huelguística que echó por tierra el plan aperturista del gobierno de Arias Navarro, provocando su cese y haciendo inviable la supervivencia del franquismo sin Franco. No obstante, la correlación de fuerzas en la lucha de clases no permitió ir más allá.

Por aquel entonces, argumenta Domènech, la clase obrera no sólo había ero-

sionado significativamente la hegemonía política, social y cultural franquista, sino también la de uno de sus principales compañeros de viaje, el poder empresarial. A mitad de la década de 1970, la contestación en barrios y fábricas había convertido a la dictadura franquista (un régimen de clase) en un aliado incómodo para los empresarios, una pesada carcasa incapaz de asegurar la tasa de beneficios, contener las subidas salariales y neutralizar la alteración del orden público. El autor analiza con destreza las estrategias y las organizaciones puestas en marcha por las elites empresariales para recuperar la hegemonía perdida. Domènech pone de relieve el rápido proceso de recomposición del empresariado y su integración en el nuevo bloque de poder conformado bajo el telón de fondo de la nueva ofensiva neoliberal de finales de los años setenta. En ese contexto, perdieron fuelle las posibilidades de una profunda transformación abiertas tras la muerte del dictador. La obra apenas se detiene en estudiar el contexto geo-político e internacional que también coadyuvó el cambio de la coyuntura doméstica, pero sus páginas traslucen la emergencia de una nueva economía política global, que —en conjunción con otros procesos de carácter interno— contribuyó a establecer los márgenes del cambio de régimen en España. A este respecto, ¿podríamos entender la transición española como el último capítulo europeo del largo 68? Lo que parece obvio es que los sueños de ruptura y cambio radical quedaron neutralizados por una *cuarta ola* de las democratizaciones que trajo consigo la restauración de la estabilidad y el orden al sur del continente.

En definitiva, se trata de un libro bien documentado, en el que abundan las fuentes de archivo, con una firme fundamentación teórica y un inusual ejercicio de reflexión historiográfica. Sin duda, esta-

mos ante una contribución imprescindible para pensar la historia del tardofranquismo y de la transición democrática desde la perspectiva de la lucha de clases. Espero

que esta obra pueda tener el mismo efecto formativo e inspirador entre los/as jóvenes historiadores/as como el que tuvo en mí la primera monografía de Xavier Doménech.

Al asalto de las ondas*

Vicent Bellver Loizaga
Universitat de València

Vivimos en una época «dominada» por los *podcasts*. Desde nuestros dispositivos móviles y con una conexión a Internet tenemos acceso «fácilmente» —si es que disponemos de dichos medios— a escuchar o crear los más variados programas, tanto en temáticas, enfoques como idiomas. Aunque en cierta medida podría considerarse a los *podcasts* como «herederos» del fenómeno de las radios libres, en el que se centra el libro aquí reseñado, estas facilidades técnicas han hecho que pueda resultar «lejano» imaginar una escena como la siguiente: gente reuniéndose, puede que de manera clandestina, alrededor de equipos radiofónicos y antenas, en muchos casos precarios e incluso contruidos por esas mismas personas, en unas emisiones que podían acabar con la entrada en el aire de la policía, poniendo fin a estas. El libro de José Emilio Pérez Martínez nos devuelve, justamente, a ese ambiente: el de expansión (y posterior crisis) del movimiento de las radios libres. Más concretamente, a aquellos proyectos que emitieron en y desde la Comunidad Autónoma de Madrid, ya fuera que tuvieran un alcance de distancia de escasas manzanas o que, en cambio, pudieran escucharse en diversos municipios madrileños. Desfilan, pues, a través de las páginas de *La voz de las sin voz* las historias de Radio Cero, La Cadena del Water, Radio

* Reseña de José Emilio Pérez Martínez, *La voz de las sin voz. El movimiento de radios libres entre la Transición y la época socialista (1976-1989)*, Madrid, Silex, 2022



Latina, Onda Verde, Radio Carcoma, Antena Vilcálvaro, Radio Fhortaleza u Onda Sur entre otras. Unas historias que se unen a la de otros nombres del resto del Estado como Ona Lliure, Osina Irratia, Ràdio Klara o Radio Cucaracha, «actores» de la vida sociocultural de la España de los años setenta y ochenta que no siempre han sido tenidos en cuenta en las narrativas sobre la «transición» y la «época socialista».

Señala José Carlos Rueda en el prólogo del libro que la radio es la «Cenicienta» o «hermanita pobre» en los estudios de comunicación (p. 15), pero seguramente habría que añadir que también lo es de la historia cultural. De hecho, en la actualidad disponemos ya de interesantes trabajos, tanto generales como específicos, sobre el cine, los cómics, la literatura o la música que se produjeron y circularon en los ambientes contraculturales (y que incluso los «superaron»). Pero no contábamos aun con demasiados trabajos que se acerquen a las radios alternativas y, menos todavía, que lo hagan de manera monográfica. El libro de Pérez, por tanto, realiza un ejercicio de recuperación de una historia, heterogénea y conflictiva (como suelen ser todas). Elaborado, además, por un autor que conoce bien el mundo radiofónico y su praxis, pues ha formado parte de programas como *Mnemos* en Radio Almenara y del *podcast Radio Conchita*.

El libro se divide en tres partes. En la primera, que corresponde al primer capítulo, Pérez nos ofrece un amplio y sólido marco teórico desde el que pensar el fenómeno del movimiento de las radios libres. Desde mi punto de vista de este cabe destacar su propuesta de entender el surgimiento del movimiento dentro de lo que denomina una «anomia comunicacional». Una anomia derivada del *décalage* existente entre cierta efervescencia «desde abajo» y una realidad institucional esclerotizada. Encontramos así que, por un lado, el derecho a la comunicación y libertad de expresión para la población habían sido reconocidos desde instancias internacionales y que se había producido cierta democratización, tanto del conocimiento, a través del aumento de la alfabetización de la población, como «material», debido al abaratamiento de la tecnología necesaria. Todo esto generaba inquietudes, deseos de cambio, de expresarse entre ciertos sectores de la sociedad.

Mientras que, por el otro lado, los medios de comunicación seguían concentrados en manos del Estado, los públicos, y por ciertos conglomerados empresariales los privados. Esto representaba una fractura, en un contexto especialmente convulso como era el de la situación abierta tras la muerte de Franco, que supuso una oportunidad para el «asalto» a las ondas.

La segunda parte, compuesta por el segundo y tercer capítulo, nos ofrece el marco contextual de la evolución de las radios libres en el conjunto del Estado español (capítulo dos) y la Comunidad Autónoma de Madrid (capítulo tres). Marco que cronológicamente nos lleva desde las primeras emisiones en 1976 hasta la situación de incertidumbre abierta por la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) promulgada por gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en diciembre de 1987. Vemos desfilar por estas páginas cómo surgen —y cierran— proyectos radiofónicos por toda la geografía madrileña, las diferentes formas de entender las radios libres, el papel —polémico— de ciertas personalidades, como Esteban Ibarra, y las tensiones y conflictos entre proyectos. De esta segunda parte, me parece relevante señalar el hecho de que, pese al tardío desarrollo del movimiento, la Comunidad de Madrid cobró importancia en la geografía de las radios libres a partir de 1983, ampliando el hasta entonces eje dominante entre el País Vasco y Cataluña (con algún otro núcleo como el País Valenciano). También es destacable la atención que el autor dedica a las diferentes repuestas que se generaron a la LOT desde las radios libres y comunitarias madrileñas. En ese sentido, Pérez Martínez sostiene una interesante tesis sobre por qué el PSOE promulgó dicha ley y es que se trataba de unas radios que habían desbordado los márgenes de participación institucionales. Sin dejar tampoco de lado que se

habían alineado mayoritariamente a favor del «No» en el Referéndum sobre la permanencia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en marzo de 1986.

La última parte, que se desarrolla en el cuarto capítulo, el más extenso, es de carácter analítico. En ella encontramos un análisis pormenorizado de los diferentes proyectos de radios libres y comunitarios madrileños, un total de cuarenta y cuatro presentados por orden alfabético (lo que facilita la búsqueda concreta de cada uno). Se trata de la aportación más novedosa e interesante, ya que podemos acercarnos a cómo empezaron estos proyectos, qué tipos de programa había, qué relaciones tenían con la audiencia...

Respecto al conjunto del libro, me gustaría señalar, primeramente, la cantidad y pluralidad de fuentes que maneja Pérez para la redacción de la obra. De hecho, utiliza a lo largo de toda la investigación actas de encuentros, carteles, fanzines, guiones de programas, entrevistas a antiguas y antiguos participantes o pegatinas que ofrecen al lector o lectora una rica y variada mirada sobre el fenómeno de las radios libres. En ese sentido, son especialmente relevantes las transcripciones por parte del autor de cuñas o fragmentos de programas que nos acercan no solo a los contenidos de estos y los lenguajes utilizados, sino también a las formas de ver el mundo subyacente a estos y las formas de vinculación y creación (o no) de una comunidad con las y los oyentes. Este esfuerzo es especialmente encomiable cuando se trata de un movimiento que carece de un archivo institucional y del que, en muchas ocasiones, resulta difícil seguirle la pista (como el autor señala honestamente a lo largo de algunos pasajes). También me gustaría destacar el notable esfuerzo teórico de Pérez Martínez, con una destacada influencia de los estudios culturales. En ese sentido, anteriormente

he señalado el marco comprensivo del fenómeno como una «anomia comunicacional», pero también resultan interesantes sus reflexiones sobre la subcultura alternativa que nutrió y reprodujo el movimiento de radios libres. También resulta útil la clarificación conceptual que hace clasificando las radios libres y comunitarias en radios sociales, «políticas» y epicúreas. Todo esto convierte a *La voz de las sin voz* en un serio intento de abordar la historia de las radios libres en nuestro contexto que seguro se convierte en una referencia para nuevas investigaciones de carácter territorial o que intenten abordar el fenómeno en el conjunto del Estado.

Sin embargo, hay también algunos aspectos de la obra que merece la pena abordar de manera crítica. En la introducción, el autor incardina su investigación dentro del ya importante campo de estudios críticos sobre la «transición» (pp. 20-22). El decantamiento hacia estos viene, en parte, marcado por el tipo de fenómeno que han sido las radios libres —recordemos que entre sus características se encontraba el funcionamiento democrático de estas y su afán participativo (p. 30)—, así como por los sujetos que las animaron: militantes de partidos políticos de izquierda, jóvenes sin trabajo, precarias y precarios, miembros de las asociaciones de vecinos, ecologistas, feministas... Sin embargo, las posibilidades de diálogo con el campo de los estudios críticos no son del todo exploradas. Por ejemplo, y sin afán de ser exhaustivo, Pérez cita los trabajos de Germán Labrador o Brice Chamouleau. Ambos han elaborado hipótesis sobre qué supuso que una parte del activismo del antifranquismo o de los primeros años de la «transición» se convirtiera, ya en democracia, en funcionarios o altos cargos políticos. Un hecho que planea sobre algunas partes de la investigación, pero en las que el autor no acaba de profundizar en

sus consecuencias subjetivas. Esto puede servir como botón de muestra de cómo algunas problemáticas historiográficas y políticas que genera pensar los períodos de la «transición» y la «época socialista» quedan soslayadas. Ligado a esto, y quizás debido a mi propia trayectoria dentro de la historia oral, también he echado en falta una mayor profundización en la vertiente de las subjetividades en los testimonios orales. Si bien la obra cuenta con una rica colección de entrevistas —treinta y cinco que comprenden a unas treinta y siete personas— con inte-

resantes datos técnicos, geográficos y sobre el desarrollo de los proyectos y programas, no encontramos tanto el espacio a las expectativas de las personas que participaron, el significado que le daban a formar parte del movimiento, sus utopías y decepciones. Por último, y aunque sea casi de carácter anecdótico, el título completo de la obra no hace referencia a que el estudio se centra en la Comunidad de Madrid, dando, en cambio, la imagen de que se trata de una obra referida al conjunto del Estado (lo que solo es parcialmente cierto).

La relevancia histórica de los instrumentos represores para entender el franquismo*

Irene Abad Buil

Universidad de Zaragoza

Si hay dos cosas que nos aporta la lectura de *Seguimos siendo culpables* es un claro ejercicio de relevancia histórica, al cual se suma el análisis histórico desde la perspectiva de género.

El objeto de estudio principal de este trabajo es la Ley de Responsabilidades Políticas: una herramienta de coerción contra la sociedad considerada «disidente» y de fortalecimiento dictatorial a partir del uso de la violencia. Esta ley fue aprobada en marzo de 1939 y estuvo en vigor hasta 1966, pero ni surgió de la nada, ni sus efectos desaparecieron de manera instantánea. Según la autora, la mencionada ley representaba la continuación, confirmación y ampliación de la judicialización del expolio que ya se había comenzado previamente con la Comisión de Incautación de Bienes y, al mismo tiempo, hacía explícito por primera vez el concepto de «responsabilidad política». Una responsabilidad cuyos efectos serán prolongados por la víctima a lo largo de los años en forma de culpabilidad. El carácter retroactivo que adquiriría este instrumento (inculpando acciones políticas llevadas a cabo incluso

Reseña de Mélanie Ibáñez Domingo, *Seguimos siendo culpables. La Ley de Responsabilidades Políticas contra las mujeres en Valencia (1939-c.1948)*, Valencia: Universitat de València, 2021, 306 pp.



durante la época republicana) y su condición *ad hoc* (creada para responder a las necesidades específicas y concretas de un nuevo régimen basado en el castigo) conseguían revertir los significados: convertir lo oficial en ilegal y a la inversa, asignando a esa nueva ilegalidad un carácter de responsabilidad punible.

Cuando hablamos de relevancia histórica nos referimos al impacto de un acontecimiento histórico en nuestro presente y, en este caso, el propio título de la obra de Mélanie Ibáñez ya nos introduce cómo los efectos de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas se proyectaron a lo largo del tiempo para prolongar la culpabilidad política que a sus víctimas se les atribuía. Pero existen otros medidores de la relevancia histórica, como son las conexiones que el evento en cuestión construye con otros acontecimientos, contextos y procesos y la influencia que adquirió sobre la sociedad. En cuanto a los vínculos de la Ley de Responsabilidades Políticas la autora nos presenta un claro panorama de cómo esta ley completaba todo el entramado represor construido por el franquismo para castigar la disidencia. Como especifica en la página 53, «la represión de posguerra fue un fenómeno polifacético o poliédrico, en el que se conjugaron múltiples mecanismos de manera simultánea e interconectada, de ahí su complejidad». Resulta especialmente significativo que las sanciones estuvieran sometidas a una clasificación, lo cual parecía entrever que los cimientos sobre los que se construía la violencia del franquismo eran una estructura sólida, controlada e impecablemente gestionada. Esta percepción chocaba frontalmente con «la cruda realidad de una jurisdicción incapaz de resolver las causas incoadas masivamente en un espacio de tiempo razonable» (p. 38).

Si esta ley representa un buen ejemplo de la evolución experimentada la represión (en este caso económica) también sirve para entender las dimensiones de la pobreza, pues como la propia autora señala los expedientados por esta ley «vivían literalmente embargados» (p. 34) y constantemente vigilados y controlados, según pretendió el conjunto formado por la justicia militar y las jurisdicciones especiales (p. 56).

El estudio histórico desde la perspectiva de género es un enfoque que aporta la posibilidad de comprender cómo las categorías de género (entendiendo como tales los roles asignados a hombres y mujeres en determinadas épocas históricas —en este trabajo también existe una clara dedicación a esta construcción de roles—) han influido a los acontecimientos históricos y, a su vez, se han visto influenciados por dicho acontecimiento histórico en cuanto a la construcción de las estructuras sociales y a las relaciones de poder. Evidentemente para alcanzar la perspectiva de género el primer paso consiste en visibilizar el papel de las mujeres como sujetos históricos. De ahí el capítulo dedicado por la autora a la mujer (pp. 62-71). Dicho capítulo no persigue la intención de convertir a la mujer en «un capítulo aparte» de lo aquí contado, sino como un intento por hacerla visible para, posteriormente, usarla como categoría de análisis de la ley de Responsabilidades Políticas, como puede comprobarse en los capítulos IV y V dedicados a los expedientes contra las mujeres, presentando a una víctima emergente tanto desde el «delito consorte» como desde la acción política directa y definiendo sus perfiles a partir de características como la procedencia, la edad, el estado civil, sus circunstancias económicas, su formación y, por supuestísimo, su filiación política (si la había, claro).

Y aquí vamos a hacer una parada especial, teniendo en cuenta que es el centro de interés fundamental del estudio de Ibáñez. La especificidad de los expedientes que esta ley abrió hacia las mujeres respondió a una característica similar a los abiertos a los hombres: la prolongación de los procesos. Una prolongación que se tradujo en tiempo y que, por ende, también tuvo sus efectos en la anteriormente mencionada resignificación de la culpa. Como plantea la autora, de la investigación de los expedientes femeni-

nos abiertos en Valencia se extrae la conclusión de que «los plazos no se cumplieron, ni estuvieron cerca de lograrlo» (p.137). Un incumplimiento que encontraba sus razones en la saturación y/o colapso de los juzgados instructores ante la avalancha de causas, la insuficiencia de recursos o la falta de eficiencia del propio personal.

En contraposición a los expedientes abiertos a los hombres, los expedientes trabajados para este estudio llevan a la autora a afirmar que en las causas abiertas contra las mujeres encontraron en el sobreesimiento la principal vía de resolución (especialmente entre aquellas que no habían sido condenadas por consejo de guerra). Esta afirmación no encuentra una respuesta concreta y se sustenta en la hipótesis de una menor «peligrosidad» que los hombres en cuestiones políticas por la menor presencia femenina en espacios públicos durante épocas previas.

Los estudios de género ahondan en los elementos que permiten entender las relaciones de género a lo largo del tiempo histórico. La dictadura se encargó, a través de numerosos instrumentos, de definir, imponer y hacer cumplir el modelo franquista de mujer ensalzando los valores católicos de la sumisión, la obediencia y el recato y despreciando, e incluso castigando, cualquier actitud considerada alejada de los mencionados principios. De ahí, que los propios expedientes de Responsabilidades Políticas, y desde un plano discursivo, proyectaron una imagen negativa de las represaliadas (p. 149). Como especifica la autora, «las sentencias militares construyen, ratifican y proyectan una imagen determinada de las mujeres represaliadas» (p. 158), presentándolas como «mujeres de moral relajada, deslenguadas, chulescas, gritonas, temibles» (p. 159).

El propio planteamiento de la obra se hace desde una serie de niveles de concreción que permiten abordar la ley de

Responsabilidades Políticas como un todo enmarcado en una época que la necesitó y la readaptó para construirse como estado dictatorial, erradicador y vigilante. Así, en una perfecta combinación entre la metodología académica (por la cantidad de fuentes utilizada y la innovadora operativización de la represión gracias a la aportación de cifras que la cuantifican) y el estilo divulgativo potenciado por la incorporación de fragmentos extraídos de expedientes con nombres y apellidos concretos, nos permite transitar desde un andamiaje normativo construido en un contexto de violencia estructural (capítulos 1 y 2), hasta su aplicabilidad a espacios territoriales (la Valencia de posguerra en el capítulo 3), de género (capítulos 4 y 5) y cotidianos (capítulo 7). De arriba a abajo, de lo general a lo local. Y aquí encontramos la otra gran aportación de la obra de Mélanie Ibáñez en cuanto a estudio local se refiere, permitiendo contribuir a la especificidad de la Historia.

Los estudios locales acercan la lupa un poco más a aquellos aspectos que ya han sido estudiados desde una óptica general, por lo que *Seguimos siendo culpables* ayuda a completar el puzzle de la Ley de Responsabilidades Políticas ya existente hasta la fecha y no sólo desde los numerosos aspectos ya anteriormente mencionados, sino también como un instrumento de largos tentáculos sobre el territorio valenciano y su población, hasta el punto que sus efectos influyeron en la construcción de identidad comunitaria de sus víctimas, aquellas que desde 1939 hasta 1946-1947 quedaron inmersas en una Valencia marcada por «el círculo vicioso del hambre, la miseria y las enfermedades infecciosas» (p.51).

Las consecuencias de la aplicabilidad de esta ley no sólo tuvieron efectos contables sobre sus víctimas (como fue la pobreza), sino que también los tuvo incontables, aquellos que se produjeron en el terreno de

las emociones y los sentimientos. ¿Acaso hay alguna manera de medir el miedo generado por las multas, la represión, la vigilancia, el destierro? El control constante al que sometió esta ley prolongó la vulnerabilidad a lo largo de la vida de sus víctimas. Resulta significativo, y por eso se utilizará como broche de cierre de esta reseña, el testimonio de Ángeles Malonda, el cual aglutina toda la esencia del trabajo de Mélanie Ibáñez:

«Hemos sido y seguimos siendo ‘culpables’. Sobre nuestras cabezas pende aún, y no sabemos por cuánto tiempo, la famosa espada de Damocles. Vivimos, en suma, pendientes de la menor circunstancia adversa. Estamos ‘condenados’ a una pena. A algunos se nos ha dejado en esta libertad que solo es relativa, condicionada... Una ‘concesión graciosa’ que se nos hace y que se nos puede retirar con el menor pretexto». (p.261)

nuestra historia

Revista de Historia de la FIM

Todos los números de **Nuestra Historia** están disponibles en revistanuestrahistoria.com



núm. 1 | 2016



núm. 2 | 2016



núm. 3 | 2017



núm. 4 | 2017



núm. 5 | 2018



núm. 6 | 2018



núm. 7 | 2019



núm. 8 | 2019



núm. 9 | 2020



núm. 10 | 2020



núm. 11 | 2021



núm. 12 | 2021



núm. 13 | 2022



núm. 14 | 2022



núm. 15 | 2023

fundación de
investigaciones
marxistas



transform!
europe

La memoria de la XIII Brigada Internacional en el norte de Córdoba

Manuel Vacas Dueñas

Historiador

Resultaba, cuanto menos extraño, observar la comitiva que rodeaba la iglesia de Valsequillo. Se trataba de un grupo de personas que, con paso lento, portaban diferentes banderas (republicanas españolas, de la Brigada Garibaldi o con la estrella de tres puntas de las Brigadas Internacionales) pero todas ellas ofreciendo un llamativo contraste con todo cuanto los rodeaba: las calles desiertas a esta hora de la tarde salvo algún transeúnte que los miraba extraño. Mientras las portaban, no dejaban de observar con atención la torre de la iglesia, buscando el lugar sobre el que tantas veces habían leído y que ahora, finalmente, tenían delante.

Los que paseaban por estas calles no eran otros que varios miembros de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales acompañados de algunos integrantes de la polaca Stowarzyszenie Ochołnicy Wolności (Asociación Voluntarios de la Libertad). Estos últimos descendientes de aquellos brigadistas que, en abril de 1937, lucharon por la estación de Valsequillo, por el pueblo, por Los Blázquez, La Granjuela, Sierra Noria o Cerro Mulva. En la plaza esperaban algunos integrantes de la Asociación para la Restitución de la Memoria Democrática del Guadiato junto a personal del Ayuntamiento y algunos historiadores con el obje-

tivo de conducirlos hasta el lugar donde se habían desarrollado los combates 86 años atrás.

Para comprender la situación deberíamos retroceder hasta marzo de 1937 y analizar el contexto que sitúa esta pequeña comarca de la provincia de Córdoba en los mapas de operaciones militares. En estos momentos desde el Cuartel General de Queipo de Llano se establece un plan de operaciones cuya finalidad es ocupar la comarca cordobesa de Los Pedroches. Las columnas franquistas comienzan su avance el 6 de marzo en dirección a Villanueva del Duque, Alcaracejos y Pozoblanco, localidad que prácticamente han rodeado el día 24 tras la ocupación de los dos primeros pueblos. La presión es enorme y la defensa republicana se hace ya en las primeras casas. En su interior, Joaquín Pérez Salas, jefe republicano del sector insiste continuamente en la necesidad de refuerzos que permitan frenar al enemigo.

A cuentagotas, con una lentitud exasperante, los refuerzos van haciendo acto de presencia en la castigada localidad lo que permitirá frenar a los atacantes en los cercados que rodean Pozoblanco. En este contexto, los batallones 8º y 10º de la XIII Brigada Internacional son movilizados de urgencia desde las posiciones que ocupa-

ban en Sierra Nevada para ser trasladados inmediatamente al norte de Andalucía. El viaje se hace lento y pesado. Unos se desplazan en tren, otros en camiones, pero todos con la esperanza de un relevo justo después de haber soportado las duras condiciones climáticas en las montañas más altas de la Península. A pesar de todo, conforme avanzan, van siendo conscientes de que su destino no es el descanso, sino otro frente en el que combatir^[1].

Su recorrido acaba el 1 de abril cuando el convoy se detiene en una pequeña localidad al noreste de Pozoblanco, Pedroche. En este lugar retirado al norte de Córdoba ponen pie en tierra hombres que ya han conocido la persecución política y el sufrimiento, la tortura y el encarcelamiento en muchos países de Europa, que han escapado de los sótanos de las SS y las SA, de los campos de concentración y que luego se han curtido todavía más en Teruel, en Málaga y lo harán ahora en Córdoba. Según Kantorowicz conocen el fascismo a la perfección y aquí llegan los mejores, los que han superado todos los obstáculos. Son la cuadrilla que lucha por la libertad, los mejores, los más fuertes, los más estoicos, los más tenaces, los más valientes, los más leales, los más conciencizados, los más resistentes de sus pueblos y ciudades^[2].

A su llegada a este frente la XIII Brigada Internacional está compuesta por el batallón Chapaiev y el Henry Vuillemin y además se le han incorporado los batallones españoles Juan Marco y Otumba. Es preciso insistir en la enorme complejidad que encierra el estudio de esta brigada tanto por su composición interna como por la evolución que experimentó a lo largo de toda la

1.- Para más información ver Manuel Vacas, *Hasta la última gota de sangre. El norte de Córdoba, frente de guerra (Los Pedroches y el Guadiato)*, Pedroche, 17pueblos, 2021.

2.- Alfred Kantorowicz, *Diario de la Guerra Civil Española, Contraescritura*, 2023, p. 256.

41

REPÚBLICA ESPAÑOLA Poste de Commandement le 6/5/37
 COMISARIO DELEGADO DE GUERRA DE DE 1937
 XIII BRIGADA MIXTA
 (III BRIGADA INTERNACIONAL)

LISTE DES NATIONALITES
 =====

<p>I^o BATAILLON =====</p> <p>Polonais 77 Allemands 71 Autrichiens 45 Espagnols 43 Tchéc.Slov. 24 Suisses 19 Slovaques 19 Danois 8 Hollandais 8 Suédois 7 Luxembg. 5 Français 4 Italiens 3 Yougoslav. 3 Slovènes 2 Croates 2 Bulgares 2 Norvégiens 2 Roumain 1 Palestinien 1 Brésilien 1 Russe 1</p> <p style="text-align: right;">----- 348</p>	<p>2^o BATAILLON =====</p> <p>Français 161 Espagnols 22 Belges 8 Polonais 3 Suisses 2 Luxembourg. 1 Grec 1 Russe 1</p> <p style="text-align: right;">----- 189</p> <p style="text-align: center;">GENIE =====</p> <p>Espagnols 16 Français 8 Polonais 5 Allemand 1 Belge 1 Arabe 1</p> <p style="text-align: right;">-----</p> <p>Transmissions/32 =====</p> <p>Français 18 Espagnols 2 Autrichiens 2 Tchéc.Slov. 2 Roumain 1 Yougoslave 1 Brésilien 1 Polonais 1 Italien 1</p> <p style="text-align: right;">----- 29</p>
---	---

Composición de los batallones Chapaiev y Henry Vuillemin. (Fuente: RGASPI).

guerra. En primer lugar, desde su creación en noviembre de 1936 hasta su disolución en el verano de 1937 había reunido 25 nacionalidades distintas. Sin ir más lejos, el batallón Chapaiev era conocido como el de las 21 nacionalidades y en mayo de 1937 estaba integrado por 22^[3]. Por otra parte, esta brigada integró a polacos de la Brigada Dombrowski que, para febrero del 37 ya habían pasado por la XI, XII y XIII Brigada

3.- El 6 de mayo de 1937 la composición de brigadistas era de: 77 polacos, 71 alemanes, 45 austriacos, 43 españoles, 24 checoslovacos, 19 suizos, 19 eslovacos (sic), 8 daneses, 8 holandeses, 7 suizos, 5 luxemburgueses, 4 franceses, 3 italianos, 3 yugoslavos, 2 eslovenos, 2 croatas, 2 búlgaros, 2 noruegos, 1 rumano, 1 palestino, 1 brasileño y 1 ruso. En total 348 hombres. Archivo Estatal de Rusia de Historia Sociopolítica (RGASPI), fondo 545, inventario 3, caso 221, imagen 36. En junio se había complicado un poco más la diversidad de nacionalidades al existir 20 palestinos, 11 húngaros, 10 suecos, 9 daneses, 4 ucranianos, 2 belgas, 2 bielorrusos y 1 griego en A. Kantorowicz, *Diario de la Guerra Civil Española*, p.228).

Internacional; posteriormente muchos se integraron en la 150 Brigada Internacional y, en agosto de 1937 sus miembros sufrieron una nueva reorganización al pasar a formar parte de la *nueva* XIII Brigada Internacional^[4].

De entre las compañías que lo componen, la más homogénea es la 2ª, la Compañía Mickiewicz, integrada mayoritariamente por polacos. Las restantes mantienen la amalgama de lenguas y nacionalidades donde se mezclan húngaros, suecos, daneses, españoles, palestinos...^[5]

El batallón número 2 era el Henry Vuillemin que procedía, a su vez, de la fusión entre este y el Louis Michel debido al enorme número de bajas habidas en los combates de Teruel a finales de 1936. Un mes después de su aparición en el frente de Córdoba lo integraban 7 nacionalidades^[6].

Antes de entrar en combate en este frente, la XIII Brigada Internacional puede aportar a la contraofensiva republicana un total de 1.428 efectivos. El batallón Chapaiev 487, el Henry Vuillemin 330, el Juan Marco 414 y el Otumba 435^[7]. Su composición, según el oficio que desempeñan, es sintomática del verdadero sentir de los internacionalistas y está en consonancia con la fuerza y concienciación del movimiento obrero en los años 30. De entre todos los internacionales que conforman esta brigada, el 79% eran obreros^[8].

4.- Alfred Kantorowicz, *Tschapaiev. El batallón de las 21 naciones*, Berlín, Imprenta del Ministerio de Defensa Nacional de la RDA, 1956. Traducción y notas de Isabel Esteve, Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, Valencia, 2022, p.159.

5.- *Ibid*, p. 19.

6.- 151 franceses, 22 españoles, 8 belgas, 3 polacos, 2 suizos, 1 luxemburgués, 1 griego y 1 ruso en RGASPI, fondo 545, inventario 3, caso 221, imagen 36.

7.- *Ibid*, fondo 545, inventario 3, caso 245 imagen 14.

8.- *Ibid*. Imagen 17.

Antes de llegar a Pedroche los brigadistas se apean a las afueras de Pozoblanco. Tan solo unas horas antes se combatía en las inmediaciones de este pueblo y los efectos de la lucha causan impresión a estos experimentados combatientes. Atraviesan una localidad destrozada donde los escombros de las casas se mezclan con los restos carbonizados de muebles quemados. La población había sido evacuada y reinaba el silencio. Finalmente reciben la orden de marchar a Pedroche, a 7 kilómetros de Pozoblanco. Aquí ya son plenamente conscientes de que su destino no es el reposo que llevan pidiendo desde los duros días de combate entre la nieve de Sierra Nevada, sino que van a formar parte de una contraofensiva cuyo objetivo es recuperar los pueblos de Valsequillo, Los Blázquez y La Granjuela, en la vecina comarca del Guadiato.

Mientras se organiza la operación pasan varios días conviviendo con los extrañados vecinos de la localidad que, entre curiosos y temerosos, acogen en sus casas a hombres extraños venidos de muy lejos. Hacen prácticas de tiro, los expertos instruyen a los más jóvenes en el empleo de máscaras antigás, se bañan en los arroyos de los alrededores... al segundo día, a su vuelta del ejercicio rutinario son convocados todos los jefes de las compañías para recibir las órdenes.

Al atardecer todos los hombres se reúnen en la plaza donde el comandante del batallón Chapaiev, Otto Brunner, y el comisario Edwal Fischer, dirigen una charla motivadora donde inciden en el sentido de la lucha que los ha traído hasta aquí y a las cinco de la tarde todo el batallón está listo para marchar en dirección a Pozoblanco.

El objetivo de esta brigada es de suma importancia para el mando republicano. La contraofensiva que se inició a finales de marzo ha conseguido poner en un serio



Foto de Tommy Flynn. (Fuente: A. Kantorowicz, *Tschapaiev. El batallón de las 21 naciones*).

aprieto la importante localidad minera e industrial de Peñarroya-Pueblonuevo. Varias brigadas republicanas avanzan desde Villanueva del Duque y es imprescindible que la XIII internacional cumpla con su objetivo de recuperar las localidades del Guadiato si se quiere que la maniobra de tenaza que se va a desarrollar sobre Peñarroya-Pueblonuevo tenga éxito. Si los batallones internacionales triunfan, otras brigadas podrán ocupar Fuente Obejuna asegurando un rotundo éxito.

Para situarse en el punto de ataque deben viajar en camiones en dirección a Hinojosa del Duque (ahora llamada del Pueblo) hasta llegar al apeadero de Mármol, en este punto subirán a un tren blindado que los conducirá hasta las inmediaciones de la estación de Valsequillo para, al amanecer, comenzar su ocupación. A la salida de Pedroche los hombres del batallón charlan distraídamente mientras uno de los dos in-

gleses que integran este babel de culturas intenta animar el ambiente con canciones en alemán. Se trata de Tonny Flynn, el portaestandarte del batallón. Este joven estudiante inglés es conocido por su buen humor y sus divertidas aportaciones y, como no fue capaz de articular varias frases seguidas en un idioma para él desconocido, prefirió tocar música con el laúd^[9].

Para asegurar la sorpresa, el traslado de fuerzas debía realizarse en la más completa oscuridad, con lo que los camiones se movían lentamente en dirección a Hinojosa del Pueblo. Sobre las doce de la noche se desviaron por un camino y, en poco tiempo, llegaron al apeadero de Mármol, su primer destino. Ahora tocaba esperar hasta que el tren blindado estuviera preparado y pudiera transportar a 700 hombres hasta el punto donde se iniciaría el ataque. Cuando finalmente llegó, los atacantes tuvieron que buscar acomodo entre los escasos vagones con que contaba el convoy. Hombres de más de veinte nacionalidades se apretujan impacientes y comienzan de nuevo a cantar en voz baja para mitigar un poco el nerviosismo. Canta Moritz Aisenberg, judío polaco de 36 años, que, debido a su actividad en la lucha obrera se había visto obligado a huir a París desde Varsovia y desde allí, a pesar de su debilidad física, no dudó en venir a España^[10]; canta el austriaco Franz Bauer, de 26 años; también Stalislav Drukala, comunista polaco nacido en 1895 y emigrado a Francia buscando trabajo. Debido a su edad fue propuesto para tareas en retaguardia, algo a lo que se negó rotunda-

9.- Isabel Esteve, *Recuerdos de brigadistas alemanes sobre la guerra de España (1936-1939)*. 2ª parte. Traducción y nota, https://www.academia.edu/38076005/Recuerdos_de_brigadistas_alemanes_sobre_la_Guerra_de_Espa%C3%B1a_1936_1939_Parte_2_2, p. 388 (consulta: 2 de junio de 2023) y A. Kantorowicz, *Diario de la Guerra Civil Española*, p. 161.

10.- A. Kantorowicz, *Tschapaiev*, p. 138.

mente «yo he venido a España para luchar» afirmó, y así combatió en Málaga, Granada y Córdoba^[11]. Se impacienta también Karl Ebener, alemán, capitán de ametralladoras del Batallón Chapaiev y que antes de subir a este tren ya había pasado por Italia, Suiza y Francia; dormita el francés Etienne Francois, el español Alfonso González, el palestino Isaak Joffe, el sueco Holmi Torsten o el jovencísimo Sepp Willinger^[12].

Todos estos cantos y duermevelas fueron alterados cuando el tren disminuyó su velocidad hasta detenerse. La vía está completamente destrozada. De haber podido seguir por ella hubieran podido rodear Valsequillo, pasar La Granjuela y llegar incluso hasta Peñarroya-Pueblonuevo, territorio enemigo y objetivo de la contraofensiva. El último tramo debe hacerse andando, portando únicamente lo indispensable para el ataque y en el más absoluto de los silencios. Tras unos minutos andando se llega al punto en el que va a iniciarse el ataque, sin embargo, todavía está demasiado oscuro y deben esperar unas horas para poder llevar a cabo la operación.

El batallón Chapaiev y el Juan Marco deberán dirigirse hacia Valsequillo y ocuparlo; el Henry Vuillemin avanzará hacia el oeste para situarse ante Los Blázquez, que debe ocupar a las 6:00 con el apoyo de vehículos blindados. El último batallón, el Otumba, quedará en reserva. Desde aquí el ataque debe dirigirse hacia el sur para amenazar directamente Peñarroya-Pueblonuevo en cuyo camino hay dos obstáculos importantes: Sierra Noria y Cerro Mulva.

A las 4 de la madrugada está casi todo listo y en voz baja comienzan a repetirse órdenes. Parece ser que el peso de todo el ataque a Valsequillo lo va a llevar el Bata-

llón Chapaiev que, al llegar al pueblo deberá desplegar sus compañías: la 1ª irá a la derecha del terraplén de la vía para atacar frontalmente la estación; la 2ª y 3ª irán a la izquierda para atacar el pueblo.

Poco a poco la situación se va haciendo más tensa, se acerca el momento del combate y ya nadie puede dormir «nos queda más de una hora. La noche es helada, tenemos frío. El tiempo pasa con una lentitud inaguantable. Por fin, a las 4 horas, Otto da la orden de ataque [...] a las 4:15 comienza el ataque sobre el enemigo que se encuentra detrás de la negrura»^[13]. La 1ª compañía comienza su marcha a la derecha del terraplén de la vía, sin embargo, no consiguen localizar al enemigo, algo que resulta tremendamente angustioso cuando el día empieza a clarear. Comienzan a darse cuenta de que una serie de errores e inexactitudes en los cálculos pueden ponerlos en serio aprieto si se hace de día. La distancia hasta la estación es el doble de la que se suponía y el terreno por el que avanzan es llano y descubierto. A punto de amanecer, muy cerca ya de la estación, pero extrañados por la ausencia de movimientos enemigos, las ráfagas de ametralladoras comienzan a barrer el terreno descubierto.

A la carrera, la 1ª compañía consigue colocarse tras unas traviesas amontonadas frente al almacén del apeadero, pero se encuentra en el punto más vulnerable ya que la mayoría de las troneras abiertas en los muros están orientadas hacia este punto. Uno de los que se encuentra protegido detrás de todo este montón de material es el joven Tonny Flynn, agachado ante la cantidad de disparos que están recibiendo desde el edificio. Cuando intente asomar la cabeza para apuntar con su ametralladora ligera recibirá un impacto convirtiéndose en la primera víctima mortal del asalto a la estación.

11.- *Ibid.*

12.- Listado de fallecidos en el asalto a la estación procedente de RGASPI, fondo 545, inventario 3, carpeta 255, imagen 25.

13.- Isabel Esteve, *Recuerdos de brigadistas...* p. 65.



Torre de la iglesia de Valsequillo en 1937 (Fuente:Junta de Andalucía. Regiones devastadas).

Apenas 20 metros separan a los internacionales del almacén, pero no encuentran la manera de reducir el edificio convertido en un auténtico búnker defensivo. La opción elegida será la más dramática y arriesgada, ya que consistía en intentar acercarse lo máximo posible a las troneras para colar una granada en su interior. Hasta que se consiga morirán intentándolo Casimir Dudek y Moritz^[14].

Simultáneamente, la compañía Miciekiewick se despliega dejando el terraplén de la vía a su derecha para atacar directamente el pueblo. La situación con la que se encuentran es similar a los que combaten en la estación, agravada, además por el hecho de que reciben fuego de flanco, desde la anterior ubicación y de frente, desde el pueblo. En este caso todas las entradas están

protegidas con parapetos y tienen que hacer frente también al fuego de una ametralladora que se ha instalado en la torre de la iglesia. Al igual que ya lo habían intentado Dudek y Moritz en la estación, en este caso es Moritz Aisenberg quien intenta reducir al enemigo colando granadas por las troneras de los parapetos y aunque lo consigue, también le costará la vida, al igual que a sus compañeros Stanislaw Drukala, Albin Gosiewski, Jerzy, comisario de la compañía o Isaak Joffe.

Progresivamente y no sin enormes sacrificios, las tropas sublevadas atrincheradas en Valsequillo van siendo reducidas. La estación cae tras cuatro horas de lucha y la llegada de los tanques gubernamentales consigue desalojar la ametralladora del campanario e ir abriendo camino por las calles del pueblo. Para las 10 de la mañana la población está completamente ocupada

14.- *Ibid.* p. 125.

a pesar de que el recuento de bajas es considerable siendo la compañía Mickiewicz la más castigada con 28 muertos^[15].

La ofensiva, no obstante, no debe detenerse aquí. Aunque Los Blázquez y La Granjuela van a ser ocupados fácilmente, ya que sus defensores han huido al oír los combates de Valsequillo, no sucederá lo mismo con los cerros y alturas que jalonan el camino hacia Peñarroya-Pueblonuevo. Nuevamente será la compañía Mickiewicz la que encabece el ataque en dirección sur, en este caso apoyada por parte del batallón Otumba contra Sierra Noria. Que este punto sea de vital importancia para la defensa de Peñarroya-Pueblonuevo lo demuestra el hecho de que su desalojo por parte de las fuerzas franquistas que lo defendían conllevó la apertura de un expediente militar contra ellos^[16].

No obstante, el avance es cada vez más lento, al igual que sucede en otros sectores de la contraofensiva republicana. Falta aviación, falta decisión y organización para rematar las principales operaciones que hubieran supuesto un serio revés para los rebeldes de haberse completado. El frente se va estabilizando, los internacionales se quedan a las puertas de la localidad industrial, fortificados en las alturas de Sierra Noria y Cerro Mulva, apenas a unos kilómetros de su objetivo, viendo desde sus puestos de observación las chimeneas del cerco industrial de Peñarroya-Pueblonuevo.

El balance de las operaciones desarrolladas por la XIII Brigada Internacional es demoledor para los batallones formados por extranjeros, especialmente el Chapaiev y su compañía polaca, que han sido la principal fuerza de choque y la que más bajas ha sufrido. En el mes de abril, el Batallón Chapaiev ha tenido 181 bajas (53

muertos y 128 heridos); el Batallón Henry Vuilleimin 95 bajas (11 muertos y 84 heridos); el Juan Marco 145 (16 muertos y 129 heridos) y el Otumba 47 bajas (solamente 1 muerto)^[17].

Todavía quedarían varias semanas de estancia en este frente olvidado donde los internacionales sufrirían algunas incomodidades del sur de España a las que no estaban acostumbrados. El calor cada vez más intenso, las molestias de los insectos, la falta de agua o el tedio de moverse al compás de la sombra de las encinas. También el sentirse olvidados y abandonados en un frente secundario lejos de cualquier población de importancia donde son diariamente castigados por las bombas de la aviación enemiga. Tal será su hastío que, tras ser trasladados al frente del centro, no podrán soportar más estas duras condiciones y provocarán un motín.

El paso de la XIII Brigada Internacional por el norte de Córdoba fue algo fugaz, sin embargo, ahí quedaron los cuerpos de muchos de estos combatientes. En el año 2023, 86 años después de los combates de la estación, se intenta recuperar la memoria de todas aquellas personas que dieron su vida en este pequeño rincón del norte de Córdoba. En ese mismo año se iniciaron los trabajos de investigación y documentación para localizar el lugar donde fueron enterrados quienes murieron en los combates por la estación^[18].

15.- *Ibid.* p. 126.

16.- M. Vacas, *Hasta la última gota de sangre*, p. 164.

17.- RGASPI fondo 545, inventario 3, caso 245, imagen 17.

18.- C. Jiménez Aguilera y M. Vacas Dueñas, *Informe final estudio e investigación para la localización y delimitación de fosas en la zona norte. Fosas de Valsequillo y Los Blázquez*. Delegación de Memoria de la Diputación de Córdoba y Asociación para la restitución de la Memoria Democrática del Guadiato, junio, 2023.

nuestra historia

Revista de Historia de la FIM

Todos los números de **Nuestra Historia** están disponibles en revistanuestrahistoria.com



núm. 1 | 2016



núm. 2 | 2016



núm. 3 | 2017



núm. 4 | 2017



núm. 5 | 2018



núm. 6 | 2018



núm. 7 | 2019



núm. 8 | 2019



núm. 9 | 2020



núm. 10 | 2020



núm. 11 | 2021



núm. 12 | 2021



núm. 13 | 2022



núm. 14 | 2022



núm. 15 | 2023

fundación de
investigaciones
marxistas



transform!
europe

Crónica de una exhumación: las cuatro víctimas de Bértoa

Carmen García-Rodeja

(ARMH)

Carmela Galego

(ARMH)

El jueves, 21 de septiembre de 2023, apareció el primer cuerpo. La expectación era grande entre familiares, vecinos, artistas, amigos, testigos e investigadores.

Desde unos días antes, el equipo técnico de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) había empezado el trabajo de prospección en el cementerio de Bértoa del Ayuntamiento de Carballo (A Coruña) pero la tierra había sido removida y sólo aparecían restos de piedras talladas, huesos rotos o adornos de lápidas. Estaba hecho un desastre.

Teníamos dos lugares posibles de enterramiento. El primero, indicado por la testigo, Trinidad Martínez, quien nos contó cómo el párroco, llamado Narciso, no había permitido que los cuerpos acribillados, aparecidos el 29 de septiembre de 1936, quedarán tirados en A Costa da Pala en Queo de Arriba. El sacerdote, el padre de la testigo, el mayordomo de la iglesia, un concejal y varios vecinos los recogieron, encargaron unas cajas y después de velarlos los enterraron junto a la puerta de entrada. Ella lo había visto siendo una niña.

Según avanzaba el trabajo se decidió continuar unos tres metros más adelante como estaba previsto en el informe. Entre el público estaba una vecina, María, quien



Un momento de la excavación (Fuente: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica).

nos informó que su padre Manuel Díaz contaba cómo los cuatro cadáveres estaban a tres zancadas a partir de la sepultura de su abuelo. La documentación escrita nos informaba de la hora y el lugar de fallecimiento; de los nombres y las características



Detectando metales (Fuente: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica).

de los asesinados y del lugar aproximado del enterramiento.

Las remodelaciones en el cementerio hacían difícil que los cuerpos pudieran ser encontrados, pero aparecieron. El primer cuerpo tenía botas; el segundo, alpargatas, teniendo restos de violencia, pero los otros dos tardaron en ser localizados. Después de un trabajo minucioso y un par de metros en dirección oeste, fueron hallados. De los dos que faltaban, uno de ellos era de pequeña estatura, el otro tenía los restos de un chaleco y de un pantalón y, a diferencia de otras exhumaciones, estaban en unas cajas, pero no unas sencillas de pino, sino que contenían cristal, agarraderas y una de ellas pintada de azul. Eran extrañas unas cajas de tan buena factura. La duda de saber si eran los cuerpos que buscábamos se resolvió al constatar el equipo técnico que estaban los dos acibillados a balazos. Las cajas habían sido obra de Serrano, el carpintero, encar-

gadas por indicación del párroco quien tras aquel año de 1936 hubo de sufrir represalias. Ochenta y siete años después los vecinos de la parroquia lo siguen recordando, mientras que el párroco actual, borracho de odio, estuvo sembrando maldad en contra de la recuperación de los cuerpos.

La gente vio cómo se hacía el trabajo y vino a ayudar y a apoyar. Las familias, las que estaban en el lugar y desde la distancia, siguieron paso a paso el proceso y el trabajo.

«Hoy ha sido unos de los días más importantes para Galicia, hemos recuperado al pintor Francisco Miguel» decía emocionado el escritor Miguel Anxo Fernán Vello. A través del hilo que se inició para recuperar a Francisco Miguel Fernández Díaz, supimos de sus compañeros de infortunio.

Juan Boedo Pardo tenía 28 años, era de la aldea de San José en Meicende (A Coruña) y trabajaba, junto a su hermano Manuel, en la compañía coruñesa de gas y electricidad. Cuando estalló el golpe de estado de 1936 fueron con otros individuos, a la estación del tren a recoger unas armas que nunca llegaron. A partir de ahí se inició la persecución. Juan fue detenido por los falangistas y la Guardia Civil, siendo secuestrado y posteriormente asesinado en Queo de Arriba, en Bértoa (Carballo). A su hermano le salvó el jefe de la compañía de gas. Juan Boedo dejó viuda y dos hijos pequeños.

Andrés Pinilla Fraga era conserje en el colegio notarial de A Coruña. Había nacido en Madrid. Era viudo y tenía cuatro hijos jóvenes. Estaba implicado en la obtención de mejoras sociales para el pueblo, siendo uno de los promotores de la sociedad «Unión Campesina Republicana», después «A casa do Pobo de Nós», en Oleiros (A Coruña). En septiembre de 1936, secuestraron a dos de sus hijos. Sabemos de sus lágrimas en el cuartel de la Guardia Civil: «*Fillos, fillos do meucorazón*», indicaba Andrés cuando nadie le daba información sobre ellos, los



Uno de los objetos encontrados (Fuente: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica).

cuales eran Andrés y Enrique Pinilla Calvente, de 29 y 23 años respectivamente, cuya desaparición tuvo lugar el día 25 de julio. Nunca más se supo de ellos.

El padre, Andrés Pinilla Fraga, salió del cuartel. A los dos días él y su otro hijo, Pedro, fueron detenidos y asesinados por miembros de la Falange local y de la Guardia Civil. Sus cuerpos aparecieron también en la Costa da Pala en Queo de Arriba.

El testimonio de la desesperación de ese triste padre fue descrito por Syra Alonso, la mujer del pintor Francisco Miguel, en sus «*Diaris*», cuando ella también iba a preguntar por su marido, sin saber que iba a correr la misma suerte que ese padre y su hijo.

El artista Francisco Miguel Fernández Díaz había nacido en A Coruña en 1897. Fue pintor, ilustrador, crítico de arte y dueño de

la librería de arte de la calle Real. Colaboró activamente con la revista de arte *Alfal*, de la que fue director artístico, y participó en la actividad intelectual de la ciudad. Hizo numerosos viajes con los que tuvo acceso a nuevas experiencias artísticas como el hecho de viajar a París donde estuvo en contacto con movimientos como el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo, y junto con su esposa se acercaron al arte del siglo XX.

A lo largo de su vida realizó múltiples estancias y cambios de residencia: entre 1921 y 1923 estuvo en París, donde se formó en el arte del batik y entre 1926 y 1933 estuvo en Cuba y en México, donde nacieron sus hijos Juan Ramón y Sandro y donde formó una comuna de artistas junto al muralista David Alfaro Siqueiros. La estancia mejicana que duró siete años le permitió ponerse

en contacto nuevamente con representantes de la vanguardia artística del momento como: Diego Rivera, Frida Khalo, Blanca Luz Brum, Dolores Olmedo, etc, estos son algunos de los nombres con quien tuvo una relación personal y artística.

En 1933, Francisco Miguel regresó con su familia a España y se instalaron en Oleiros (A Coruña) en «La casa de la dicha». Fue en ese lugar, el 3 de agosto de 1936, cuando fue detenido por la Guardia Civil acusado de «actuar contra el régimen de Franco». Su delito era haber ayudado a perseguidos como Césareo del barrio de Santa Lucía o al presidente del semanario «*Despertar marítimo*» y a sus compañeros. La mujer, Syra, movió sus influencias y consiguió la libertad de su marido. Pero, el 19 de septiembre fue capturado de nuevo y trasladado a la comisaría, a la comandancia militar y después a la cárcel de donde fue sacado el 29 de septiembre para asesinarlo.

Su cadáver apareció junto a las otras tres personas cruelmente ejecutadas, con heridas de arma de fuego en el Campo de Morgade, Queo de Arriba. Posteriormente fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Bértoa, Carballo.

En palabras de su nieta Jey:

«Mi abuela llevaba a la cárcel la cena para su marido en un cesto, y en el fondo depositaba un mantelito, una servilleta bordada prendida con unos alfileres. Era una clave... si una mañana recogía mi abuela el cesto sin la servilleta, es que esa noche habían sacado a Paco a pasear. Así ocurrió la mañana del 29 de septiembre, cumpleaños de Paco. Hacia el mediodía, mi abuela Syra se enteró de los paseados de Bértoa y allí se encaminó. Cuando llegó, obvio, ya habían sido sepultados. El cura de la parroquia, le dijo a mi abuela que le había llamado la atención que en las ropas de uno de ellos había una servilleta bordada, prendida por

el interior de la camisa, que se la había quitado -me está costando trabajo escribirlo- y le entregó la servilleta a mi abuela»^[1].

Syra, su mujer, siguió su pista, yendo innumerables veces a Carballo, siendo allí donde supo dónde estaba enterrado y aprovechaba para llevarle flores. Estuvo informándose de lo sucedido y tuvo conocimiento que el juzgado de Carballo había realizado un informe que decía: «cadáver que apareció en un punto de Morgade, en el lugar de Queo de Arriba, de la parroquia de Bértoa. Un hombre de treinta a treinta y tres años, alto, viste traje gris, camisa blanca, jersey color beige, zapatos y calcetines castaños; todo en buen uso. Tiene la cabeza deshecha y tres heridas, una en el hombro izquierdo y dos en el vientre, al parecer de bala». El propio juzgado le permitió leer el informe pero le dieron a firmar otro en el que se afirmaba que la muerte había sido provocada por un «colapso cardiaco»^[2].

En dicho libro, Syra Alonso reproduce lo siguiente:

«Número 29: Nombre y apellidos: Francisco Miguel Fernández Díaz. En la villa de Carballo, provincia de A Coruña, a las diecisiete horas y quince minutos del día cinco de octubre de mil novecientos treinta y seis, se procede a inscribir la defunción de Francisco Miguel Fernández Díaz, de treinta y seis años de edad, natural de A Coruña, provincia de A Coruña, hijo de don Ramón y de doña Marcelina, domiciliado en la referi-

1.-Entrevista realizada a Jey Fernández, nieta de Francisca Miguel en septiembre de 2023, por Carmen García-Rodeja.

2.-Acta de defunción y levantamiento de cadáver por el juzgado de Carballo el 5 de octubre de 1936, en Syra Alonso, *Diarios*, Vigo, A Nosa Terra, 2000. Fue de gran importancia porque la documentación histórica del juzgado de Carballo (A Coruña), debido a múltiples cambios de sede, está desaparecida.



Homenaje (Fuente: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica).

da ciudad de A Coruña, de profesión pintor y de estado civil casado con Syra María Alonso Brufau, matrimonio del que deja tres hijos llamados Francisco Alberto, Juan Ramón y Sandro de trece, siete y tres años de edad. Francisco Miguel falleció de un colapso cardíaco, en el punto llamado campo de Morgade, del lugar de Queo de Arriba de la parroquia de Bértoa. Firman el juez y más testigos».^[3]

Después, Syra acudió al párroco llamado Narciso quien la consoló y le explicó por escrito donde lo habían enterrado y finalmente le dijo: «Con la modesta limosna de los labradores de esta aldea compré la caja que guarda a su marido». Una de esas cajas hermosas que aparecieron y que nunca habíamos encontrado en una exhumación de represaliados por el fascismo.

3.- *Ibidem*.

Ochenta y siete años después, se ha logrado recuperar los cuatro cuerpos de las víctimas en ese lugar, donde permanecían sin nombre. Y seguimos reivindicando su memoria.

«[...] Ti regresas agora e de súbito somos unha maré que ferve, as palabras acesas o pobo a recibirte, toda a memoria viva, o triunfo da verdade [...]»

Fernán Vello^[4]

4.- Miguel Anxo Fernán Vello, «A Francisco Miguel, pintor coruñés asasinado polos fascistas de 1936».

Ferrol, una historia de sangre silenciada

Antonio Blanco Carballo

Comisión Pro Memorial a las Víctimas del franquismo en Ferrolterra

Ferrol es una ciudad caracterizada por una estratificación social antagónica entre la Marina de Guerra y la conciencia de clase del proletariado de los astilleros. Tras el golpe de Estado de 1936, en Ferrol apenas hubo guerra pues los fascistas se hicieron pronto con el control de la ciudad; pero lo que sí hubo fue una represión sistémica que derivó en horrendos crímenes. En 1946 se produjo en los astilleros una de las primeras huelgas obreras en la España de Franco y la primera de Galicia, conocida como «Huelga del Aceite». El 10 de marzo de 1972 durante una huelga en la Bazán, la policía asesinó a Daniel Niebla y Amador Rey e hirió de bala a más de 50 personas. En 1997, el Parlamento de Galicia declaró esa fecha como «Día da Clase Obreira Galega».

Constitución de la Comisión Pro Memorial a las Víctimas del franquismo en Ferrolterra

Por defender los ideales de la legalidad republicana, 904 hombres y mujeres fueron asesinados por el fascismo en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal entre 1936 y 1975.

Los historiadores Xosé Suárez y Bernardo Máiz han elaborado un listado de las víctimas de la represión franquista en las tres comarcas. Con esos datos y a iniciativa de Vicente Couce, ex preso en la cárcel con-

cordataria de Zamora y concejal por el Partido Comunista de España en las primeras elecciones municipales, un grupo de personas plantearon levantar un monumento a las víctimas. La propuesta se materializó con sendas mociones en el Ayuntamiento de Ferrol en los años 2017 y 2020. Fueron aprobadas, pero el monumento no se erigió.

El 2 de junio de 2021, Vicente Couce y Anxo Currás, ambos ex curas obreros juzgados en el Tribunal de Orden Público y encarcelados por dar cobertura a las clandestinas Comisiones Obreras (CCOO), nos convocaron a una asamblea, donde nos expusieron el bloqueo institucional del Ayuntamiento y la negativa del alcalde, el socialista Ángel Mato, a recibirlos. La frustración de quienes habían iniciado las mociones provocó que se fueran diluyendo con el tiempo.

En esa coyuntura, Vicente Couce, de 82 años y muy mermado físicamente (de hecho, falleció en 2022), solicitó un relevo. Quedó patente que la aprobación de una moción no era suficiente. Había que presionar y, para ello, debíamos explorar acciones alternativas, unas de vanguardia y otras de masas, que rompiesen la inacción municipal y la torpeza del alcalde.

El 8 de julio de 2021 se fraguó la primera reunión de la «Comisión Pro Memorial de las Víctimas del franquismo en Ferrolterra», conformada por Anxo Currás, ple-



Pancarta en la Plaza de Armas, frente al Ayuntamiento de Ferrol. 18 de julio de 2021 (Fuente: Comisión Pro Memorial a las Víctimas del franquismo en Ferrolterra).

tórico de entusiasmo a sus 84 años; Ton Blanco, jubilado y ex sindicalista de CCOO; Iván Rivas, concejal del Bloque Nacionalista Galego (BNG); Suso Basterrechea, concejal de Ferrol en Común (FeC) y los historiadores Xosé Suárez, Bernardo Máiz y Malay Sobrín. Posteriormente se incorporaron, Javier Dongil, presidente del Ateneo Ferrolán, Sabela Díaz, Anxo Vilarinho y Nerea Purriños. Contábamos con el apoyo político del BNG y de FeC. Teníamos que implicar a la sociedad y visibilizar las consecuencias de la represión.

Acto en la Plaza de Armas

El domingo 18 de julio del 2021 celebramos frente al Ayuntamiento una concentración de gran calado político y de enorme carga simbólica y conceptual: por primera vez en la historia de la ciudad se leyeron los

nombres de los hombres y mujeres asesinados por los fascistas, en medio de un respetuoso silencio y un emotivo aplauso al término de cada bloque de nombres. La lectura contó con una participación ciudadana: familiares, represaliados y miembros de nuestra Comisión. Fueron algo más de dos horas de lectura frente a una pancarta que recogía los nombres de los asesinados. Al finalizar, hicimos hincapié en que aquello era solo un primer paso; que volveríamos a requerir de la solidaridad de los presentes hasta alcanzar el objetivo. El acto tuvo una gran repercusión mediática, pero quedaba mucho por hacer.

Moción en el Ayuntamiento de Ferrol

Días después del anterior acto, se presentó la moción para la construcción del monumento a través de los grupos municipales

del BNG y de FcC. Teníamos muy presente que, tras las frustrantes experiencias anteriores, había que marcar al Ayuntamiento un plazo de ejecución. La moción decía así:

«Los represaliados y represaliadas por la sublevación militar fascista y la dictadura franquista con resultado de muerte pertenecientes a veinticinco ayuntamientos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, en sus diferentes formas, fusilamientos, aplicación de la ley de fugas y los trágicos paseos, muchos de ellos crímenes de lesa humanidad merecen ser recordados y recordadas evitando que tantas víctimas, durante todo el tiempo de pervivencia de aquel régimen dictatorial, continúen padeciendo la discriminación y la injusticia y que el paso del tiempo lleve a su olvido. En unos casos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en otros de consejos de guerra en los que prevalecía la indefensión y la práctica del terrorismo de Estado.

El número de asesinados y asesinadas, que abarca el período 1936-1976, a día de hoy es de 984 hombres y mujeres pasados por las armas, aunque la lista no es definitiva, pues las investigaciones continúan. Estos hombres y mujeres que vivieron el terror impuesto por una dictadura atroz y sufrieron persecución y represalias y que, a pesar del enorme riesgo, lucharon y dieron la vida por los valores democráticos, por la libertad y en contra del fascismo, merecen nuestro reconocimiento.

Pero lo cierto es que pese a haberse aprobado de manera reiterada en dos plenos municipales, 2017 y 2020, la propuesta de erección de un Monumento que recoja los nombres y la cronología de los asesinados por el franquismo, aún estamos esperando por que se dé cumplimiento a los referidos acuerdos por parte del Ayuntamiento de

Ferrol. Ante ese abandono, la Comisión Pro Memorial de las Víctimas del franquismo, historiadores, familiares de los asesinados, agentes sociales y la ciudadanía en general, exigimos el cumplimiento de los acuerdos del pleno del Ayuntamiento y la construcción ya de dicho monumento. Queremos de este modo honrar a estas víctimas, nuestros conciudadanos que lucharon por la justicia, por la legalidad y la democracia.

Por todo esto, el grupo municipal del BNG y el grupo municipal de FeC proponen al Pleno de la corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 1. El pleno del Ayuntamiento de Ferrol acuerda instar al Alcalde de la ciudad y al gobierno local a la ejecución de un monumento a las víctimas del Franquismo donde se recojan los nombres y cronología de los asesinados y de las asesinadas, a situar en las cercanías del antiguo Cementerio de Canido y en el plazo de 6 meses a contar desde su aprobación plenaria.

Ferrol, 26 de julio de 2021. Iván Rivas Rico y Jorge Suárez Fernández, portavoces Municipales del BNG y de FeC».

Anxo Currás presentó el texto y apeló al alcalde, afirmando que tenía en sus manos pasar a la historia como el edil bajo cuyo mandato se había erigido el monumento a las víctimas del franquismo. El documento se aprobó con los votos del BNG y de FeC, a los que se sumó el PSOE. El PP se abstuvo.

Al concluir el pleno, previa autorización del alcalde, Anxo Currás, Suso Bastarachea, Iván Rivas, Xosé Suárez y Ton Blanco colocamos una pancarta en la fachada del Ayuntamiento. Para nuestra sorpresa, el alcalde ordenó retirarla al día siguiente, demostrando falta de sensibilidad y respeto hacia las víctimas. Habíamos logrado ganar la moción, ahora teníamos frente a nosotros el reto de exigir su cumplimiento.



Colocación de la pancarta en la balconada del Ayuntamiento de Ferrol. De izquierda a derecha: Suso Basterrechea, Anxo Currás, Iván Rivas, Xosé Suárez y Ton Blanco (Fuente: Comisión Pro Memorial a las Víctimas del franquismo en Ferrolterra).

Mesa de la Memoria Histórica

Ante el estancamiento municipal, a mediados de septiembre solicitamos una reunión con el alcalde, Ángel Mato, para comenzar el proceso de construcción del monumento. Ni nos respondió ni nos recibió.

Unos días después, la concejala socialista Eva Martínez convocó a los grupos políticos, a la Comisión Pro Memorial Víctimas del franquismo y a la Asociación de Memoria Histórica Democrática, para constituir una Mesa de la Memoria Histórica (MMH). Desde el primer momento sospechamos que la pretensión de la Mesa era la de capitalizar la iniciativa de construcción del monumento. El tiempo corroboró nuestra sospecha.

A mediados de diciembre celebramos nuestra II Asamblea, donde informamos de la lentitud municipal y del calendario de

actos previstos para el año 2022. Empezamos a diseñar la celebración de uno en el teatro más regio de la ciudad, el Jofre, con la participación de familiares, miembros de la Comisión y representantes institucionales.

Excusas y más excusas

El 19 de enero de 2022, la MMH nos convocó y nos aseguró que el Ayuntamiento mantenía la ejecución de la obra en ese año. Manifestamos que habían transcurrido ya seis meses y que no se podían acumular más retrasos. Decidimos adoptar medidas de presión y, el 4 de abril, anunciamos en rueda de prensa que no desistiríamos «de nuestro empeño para llevar adelante el monumento a las 904 víctimas mortales y por consideración al sufrimiento de sus familiares y para recordarle a la sociedad de esa página negra que fue la dictadura;

para que nunca más se cometan semejantes atrocidades»^[1]. En todas estas acciones estuvimos acompañados por los concejales Iván Rivas (BNG) y Suso Basterrechea (FcC).

Días después, la concejala de Patrimonio expuso en la MMH que no había abandono, sino complejidad de unos trámites que afectaban a varias concejalías. El Ayuntamiento optó por la contratación directa del escultor Manuel Patinha y se comprometió a inaugurar el monumento a lo largo del 2022. Patinha manifestó que se sentía «muy honrado y emocionado por su elección» y que haría la obra sin coste alguno.

Parálisis

Dado que los contactos con la alcaldía no eran fáciles, volvimos a concentrarnos. «La Comisión Pro Monumento pide que el memorial a las víctimas del franquismo de Ferrol sea una realidad este año», titulaba la prensa^[2]; y añadía que Ton Blanco había expresado que harían «fuerza» para que el gobierno local cumpliera su compromiso. Xosé Suárez añadió que sería «el único monumento del Estado que tiene la característica de que reúne a las víctimas de toda la etapa del franquismo, desde el Alzamiento hasta el asesinato de Moncho Reboiras», el dirigente nacionalista fallecido por disparos de la policía franquista en 1975 en Ferrol.

El escultor Patinha, que mostraba escepticismo con la Administración, nos comentó que para comenzar la obra le había propuesto a la concejala de Patrimonio adelantar el dinero de su bolsillo. Estábamos a cuatro meses de que finalizase el año y nos daba la sensación de que el monumento se

les atragantaba. La presencia del BNG y FeC en nuestra Comisión les representaba un hándicap en clave electoral.

Ante la persistencia del bloqueo, adoptamos medidas más drásticas. A través de Suso Basterrechea emplazamos al secretario del Ayuntamiento a que el alcalde nos recibiera en tres días; de no ser así, denunciaríamos de forma abrupta su desidia. De forma inmediata, nos llamó la concejala de Patrimonio. No obstante, viendo que todo eran excusas, el día 13 de noviembre solicitamos, una vez más, una reunión con el alcalde. No se dignó a recibirnos. Tres días después, el periódico *La Voz de Galicia* titulaba: «El monumento en memoria de las víctimas del franquismo se erigirá en Ferrol antes de fin de año» y añadía que la edila de Patrimonio Histórico había insistido en que el monumento se erigiría en el parque Antón Varela antes de que acabase el año^[3].

Concluyó 2022 sin inauguración. Después de pedir otra reunión, se nos comunicó por correo electrónico que se reconduciría el proceso y el acto del Teatro Jofre a través de la Mesa de Memoria Histórica. A principios de febrero volvimos a concentrarnos. Consciente el alcalde de que los ánimos estaban caldeados, nos recibió ese mismo día. El diario digital *Galicia@PRESS* reflejó los retrasos continuos en la inauguración del monumento, de forma que «va a acabar el mandato y está sin hacer», según explicó Ton Blanco. Anxo Ferreiro, otro de los portavoces de la Comisión, recordó que «durante el mes inmediatamente anterior a la celebración de los comicios locales no se puede inaugurar ninguna obra y el tiempo, por lo tanto, apremia»^[4].

1.- «Reclaman celeridad al Concello en la tramitación del monumento por las víctimas del franquismo», *Ferrol360*, 4 de abril de 2022.

2.- «La Comisión Pro Monumento pide que el memorial a las víctimas del franquismo de Ferrol sea una realidad este año», *Ferrol360*, 29 de julio de 2022.

3.- «El monumento en memoria de las víctimas del franquismo se erigirá en Ferrol antes de final de año», *La Voz de Galicia*, 16 de noviembre de 2022.

4.- «El alcalde de Ferrol promete agilizar los trabajos técnicos para la creación del Memorial a las víctimas del franquismo», *Galicia@PRESS*, 3 de febrero de 2023.

Galicia@PRESS
TE INFORMA

El alcalde de Ferrol promete agilizar los trabajos técnicos para la creación del Memorial a las víctimas del franquismo

La comisión lamenta los continuos retrasos y recuerda que el monumento, obra de Manuel Patinha, ya está hecho

Europa Press 7 de febrero de 2023



El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, se ha comprometido con los portavoces de la Comisión pro Memorial ás Víctimas do franquismo de Ferrolterra a que los trabajos técnicos para la instalación del monumento en el barrio de Canido estén listos en los próximos días. La reunión, solicitada por la entidad promotora en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses, se produjo justo después de una concentración en la que la Comisión lamentó "los retrasos continuos en la inauguración del monumento", según explicó Antón Blanco.

Otro de los portavoces, Anxo Ferreiro, recordó que durante el mes inmediatamente anterior a la celebración de los comicios locales (28 de mayo) no se puede inaugurar ninguna obra y que el tiempo, por lo tanto, "apremia". Subrayó la importancia de que Ferrol cuente con un memorial de la represión franquista e incidió en que casi un millar de personas de Ferrol, Eume y Ortegal fueron asesinadas aquellos años.

Alcaldía, promesas incumplidas (Fuente: *Galicia@Press*, 3 de febrero de 2023).

La prensa siguió prestando cobertura al proceso. El 6 de marzo de 2023, *Galicia@PRESS* recogía las palabras de Ton Blanco quien denunciaba las «razones objetivas para alarmarse de la desidia de la Alcaldía», y añadía que «se les puede echar la culpa a los técnicos del Ayuntamiento o también a los arquitectos, pero no es convincente»^[5]. Por su parte, *La Voz de Galicia* volvía sobre la cuestión: «La Comisión que promueve el memorial recuerda que el Concello se había comprometido a inaugurar el pasado año»^[6]. Continuaba con la inclusión de unas

5.- «Denuncian retraso en colocar un monumento a víctimas del franquismo en Ferrol y el gobierno local dice trabajar en ello», *Galicia@PRESS*, 6 de marzo de 2023.

6.- «Críticas al retraso del monumento a las víctimas del franquismo en Ferrol», *La Voz de Galicia*, 7 de marzo de 2023.

palabras de la Comisión: «Consideramos que es un sinsentido que el monumento lleve un mes realizado y no se pueda inaugurar por no tener hecha la base». La redacción digital de la COPE titulaba: «Los integrantes de la Comisión Pro Memorial piden que se ejecute antes del fin de mandato»^[7].

Acto de homenaje en el Teatro Jofre

Ante las dilaciones del Ayuntamiento, la Comisión decidió adelantar el acto del Jofre. Acompañados de los concejales Suso Basterrechea e Iván Rivas, reservamos el teatro para el viernes 28 de abril. Era «un desagravio» para quienes habían sido ejecutados «por defender la legalidad, la democracia y la libertad»^[8]; era, a su vez un «resarcimiento a los familiares que sufrieron en soledad el oprobio del régimen fascista». A los dos días daba la noticia de que el Gobierno de Mato había anunciado que «El memorial a las víctimas del franquismo de Canido se instalará en las próximas semanas». El periódico digital *Praza.gal* se hacía eco del acto y recogía las palabras de la Comisión de que «El memorial es para conocimiento de las generaciones presentes y futuras»^[9].

Pocos días después realizamos otra rueda de prensa para divulgar el acto, para el que invitamos a intervenir al alcalde. La Cadena SER informó de que la concejala de Patrimonio Histórico había explicado «que en las últimas semanas se realizaron una serie de estudios, que no estaban contemplados inicialmente, para poder instalar el

7.- «Los integrantes de la Comisión Pro Memorial piden que se ejecute antes del fin de mandato», *cope.es*, 7 de marzo de 2023.

8.- «Homenaje en el Jofre a las víctimas de la sublevación franquista en Ferrolterra», *Enfoques.gal*, 28 de abril de 2023.

9.- «Ferrol homenaxea as mil persoas asasinadas polo franquismo na comarca, `executadas por defender a liberdade e a democracia´», *praza.gal*, 20 de abril de 2023.



**A COMISIÓN PRO MEMORIAL DAS VÍTIMAS DO FRANQUISMO DE FERROLTERRA, EUME E ORTEGAL CONVIDA
AO ACTO DE HOMENAXE QUE SE CELEBRARA NO TEATRO JOFRE O VENRES 28 / 4 / 2023 AS 19:00**

Cartel elaborado por la Comisión Pro Memorial a las Víctimas del franquismo en Ferrolterra (Fuente: Área 7. Imprenta Taller gráfico).

monumento. Ahora todos los trámites están listos y la intención es que a mediados de mayo se pueda colocar el memorial»^[10]. La Comisión Pro Memorial remarcó que quería «ver hechos».

El acto del Jofre fue un auténtico éxito. El teatro estaba a rebosar, los familiares conmovidos, los artistas entregados, el público volcado y los oradores emocionados. Ni el alcalde ni la concejala de Patrimonio comparecieron: delegaron en el edil Germán Costolla. Acudieron, eso sí, alcaldes y concejales de otros ayuntamientos de la comarca y personalidades de Galicia. Editamos mil ejemplares del cuaderno divulgativo de 32 páginas sobre la represión en Ferrol, que entregamos a los asistentes; de alguna ma-

nera, completaba el artículo de Anxo Currás publicado en la revista del Ateneo Ferrolán. Creemos de interés reproducir la crónica del acto, escrita por Marta Corral^[11]:

«Las palmadas al unísono acompañaron la melodía de un *Bella Ciao* que sirvió para invocar a las almas de los «muertos que luchan junto a nosotros». La canción partisana sonó en el Jofre a las cuatro manos de las pianistas Alexandra Pita y Lidia Espido. Retumbó como el himno antifascista que siempre será y lo hizo con esa mezcla de memoria, dignidad y alegría que empapó todo el acto de homenaje a las 904 personas asesinadas por el franquismo en Ferrol-

10.- «Ferrol rendirá homenaje a las víctimas del franquismo en las comarcas», *cadener.com*, 24 de abril de 2023.

11.- «Un acto para curar 'miradas heridas' e invocar a los 904 asesinados por el franquismo en Ferrol», *Ferrol 360*, 29 de abril de 2023.



La ciudadanía con las víctimas del franquismo. Acto en el Teatro Jofre, 28 de abril de 2023 (Fuente: Alicia Seoane, *Ferrol 360*).

terra. Una cita necesaria, impulsada por la Comisión Pro Memorial, y que logró llenar el teatro trayendo también, rescatadas del olvido, a ese casi millar de víctimas que fueron nuestros abuelos, nuestras vecinas, que fueron padres, madres e hijos».

La también periodista Verónica Vázquez presentó el homenaje. Decimos «también» porque desde la Comisión, valoramos y agradecemos la labor de los profesionales de los medios de comunicación por la cobertura que nos han brindado en todo momento.

En el teatro Jofre, y en nombre de la Comisión, Ton Blanco manifestó que frente al olvido de los asesinados está el deber de recordarlos a ellos y a sus familias, que sufrieron lo indecible. El régimen de Franco había agonizando matando en Ferrol a Daniel y Amador, militantes de CCOO, y a

Moncho Reboiras, dirigente de la Unión do Povo Galego.

Suso Basterrechea, edil de FeC, recordó a todas las personas asesinadas en defensa de sus ideas, apeló a la retirada de la placa de la casa natal del dictador y a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Iván Rivas, del BNG, explicó que el franquismo en Galicia no había sido una guerra: fue un exterminio. Denunció el blanqueamiento de la dictadura y recordó que en un pleno municipal se había votado en contra de la retirada de 40 símbolos franquistas de Ferrol. Los historiadores Xosé Manuel Suárez y Bernardo Máiz, por su parte, recordaron que, en ese mismo teatro, el 14 de junio de 1936, apenas a un mes del golpe de Estado, se había celebrado un mitin para aprobar el Estatuto de Autonomía. Ocupaban las mismas butacas muchos de los que después fueron asesinados.

Libertad Barcia, Amada Toimil y Matías Usero, familiares de las víctimas, cerraron las intervenciones hablando de dignidad, resistencia y solidaridad. Escuchamos música de Bernardo Irati, de Alexandra Pita y Lidia Espido y de María Manuela y Manolo Bacalhau. Se proyectó el documental *Casi un millar de nombres*, de Carlos A. Quirós, y un montaje con las fotos de las víctimas, que estuvo en pantalla durante las dos horas del acto. Todas estas personas, así como Manuel Patinha, también presente en el acto, respondieron de forma solidaria y desinteresada.

Por fin

El 28 de mayo de 2023 se celebraron elecciones municipales. Y ganó el Partido Popular. La Comisión solicitó una reunión al nuevo alcalde para «estar a la altura de

los países avanzados en la condena del fascismo y los crímenes que tuvieron lugar en Ferrolterra»^[12]. Nos recibieron el teniente alcalde, la concejala de Patrimonio y el concejal de Cultura, quienes manifestaron el compromiso de la nueva alcaldía con la inauguración del monumento. Tras múltiples reuniones con Carmen García, concejala de Patrimonio, Ponte Far, concejal de Cultura, y otros actores involucrados en el proyecto, el Ayuntamiento rescindió el contrato a la empresa constructora y convocó un nuevo contrato.

La inauguración del monumento será, probablemente, en enero del 2024. En el protocolo institucional del acto, que está ya redactado, la Comisión ha conseguido dar protagonismo a las familias de las víctimas del franquismo. La tenacidad y la combatividad de la Comisión Pro Memorial han sido claves en este proceso^[13].

12.- «El monumento a las víctimas de la represión franquista de Ferrol sigue en espera», *Enfoques.gal*, 27 de junio de 2023.

13.- «Satisfacción de la Comisión Pro Memorial tras el encuentro con el gobierno local», *Diario de Ferrol*, 1 de agosto 2023.

José Gómez Gayoso. Vivir y morir por la causa

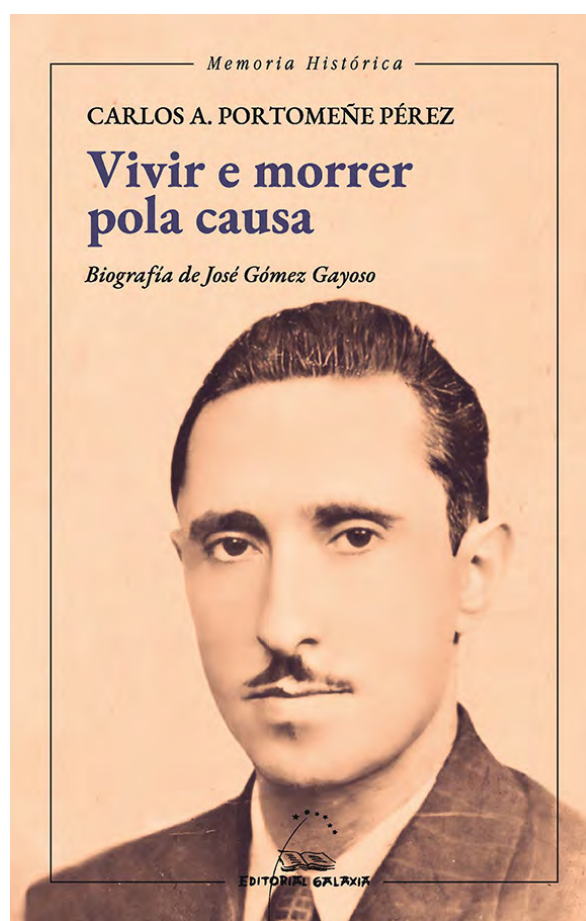
Carlos A. Portomeñe Pérez
Autor de Vivir e morrer pola causa

«Querida Conchi: Hoy después de más de cinco años te escribo. Por cierto, que en situación poco envidiable. Lo hago con un esfuerzo sobrehumano, pues tengo las manos deshechas. Llevo en España cuatro años y medio. Los mejores de mi vida. Desde que la dirección del Partido me concedió el honor de venir a luchar al interior, mi mayor anhelo era ver llegado el momento en que pisara tierra española. En estos cuatro años y medio hice todo lo que a mi alcance estaba por cumplir con mis deberes de comunista. Los dos últimos años he dirigido la organización de Galicia. En este puesto he caído el 11 de julio en La Coruña».

Estas palabras forman parte de la primera carta que el gallego José Gómez Gayoso escribió a su compañera y camarada, Concepción Abad, el 6 de septiembre de 1948 desde la prisión provincial de A Coruña. Exactamente dos meses después sería fusilado en la misma ciudad junto a Antonio Seoane Sánchez, jefe del Ejército Guerrillero de Galicia.

Primeros años

José Gómez Gayoso nace en Maceda (Ourense) el 20 de septiembre de 1910, aunque su infancia transcurre en el concello de Lavadores (actualmente un barrio de Vigo), a



donde su familia se traslada siendo niño. Desde muy joven se contagia de la efervescencia política y sindical que caracteriza la localidad, conocida popularmente como la «Rusia chiquita». En ese ambiente de movilizaciones obreras conoce a la militante comunista Carmen Díaz Brunet, trabajadora y sindicalista del sector conservero, que

le introduce en el entorno político del PCE. La pareja se casará por lo civil y tendrá dos hijas. Gayoso compagina su empleo como administrativo en una de las principales fábricas viguesas con los estudios de Magisterio, que una vez finalizados le permitirán ejercer como maestro nacional, pasando a formar parte de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT).

El advenimiento de la II República se vive con especial intensidad en la comarca de Vigo. Pese a ello, los comunistas recelan de la nueva República por considerarla de naturaleza burguesa y desconfían de su capacidad para establecer los cambios profundos que consideran ineludibles. El 23 de agosto se constituye legalmente el radio del Partido Comunista de España (Sección Española da Internacional Comunista) en Vigo, que comparte sede con el Comité Regional de Galicia. Su presidente será Perfecto Dávila Ubeira^[1], que años antes ya había sido el primer secretario de la Federación Comunista de Galicia.

En el IV Congreso el PCE, celebrado en marzo de 1932, los gallegos Eustasio Garrrote (responsable político del Comité de Galicia) y José Silva entran en el Comité Central, pasando a ocuparse este último de la responsabilidad federal de agitación y propaganda. La Federación gallega contará con el apoyo decidido de la dirección central del PCE para su desarrollo organizativo. Dolores Ibárruri participa, junto a otros destacados dirigentes comunistas gallegos, en el mitin del primero de mayo de 1933 celebrado en la plaza de toros de Pontevedra. Siete días más tarde, «Pasionaria» impartirá una conferencia en los locales de la Unión de Trabajadores de las Fábricas de Conservas de la Ría de Vigo, de tendencia comunista, bajo el título «*Condiciones de*

1.- Perfecto Dávila Ubeira (Bembrive, Lavadores, 1880-1934), falleció siendo presidente del radio comunista de Vigo.

trabajo y reivindicaciones de los obreros». En este entorno de expansión y crecimiento de la organización comunista gallega va madurando la militancia política de Gómez Gayoso, que a finales de 1932 pasa a militar en el Partido.

En agosto de 1934 es detenido, juzgado y condenado a una pena de dos meses y un día de arresto por el Juzgado de Instrucción de Tui (Pontevedra) acusado de «injuriar, menospreciar y escarnecer» al juez Cándido Conde Pumpido^[2] en un artículo satírico en el cual Gayoso destaca «el odio profundo que profesa» el magistrado a «todo lo que huele a socialismo y anarquismo». Su encarcelación coincide con la huelga general convocada en todo el país, que en Asturias adquiere carácter insurreccional y revolucionario. En noviembre, Gayoso participa en la constitución y desarrollo de una Comisión de ayuda a los niños huérfanos de los revolucionarios asturianos en la localidad de Porriño^[3].

En 1934 se convierte en secretario político del Comité local de Vigo^[4] y a finales del año 1935 entra a formar parte del Comité Regional del PCE con el cargo de secretario de organización, coincidiendo con la elección de Eduardo Araujo como secretario general. Con ambos dirigentes a la cabeza, el Partido continuará su etapa de expansión en Galicia. En noviembre, veinte mil personas llegadas desde diversos puntos de Galicia^[5] celebran una gran concentración antifascista en Lavadores organizada por el

2.- Sentencia 125/34 de 4 de septiembre de 1934, dictada por el Juzgado de Instrucción de Tui. Cándido Conde Pumpido fue abuelo del juez del mismo nombre y actual presidente del Tribunal Constitucional.

3.- *El Pueblo Gallego*, 21 de noviembre de 1931, p. 11.

4.- Testimonio de José Gómez Gayoso, aunque no especifica la fecha del nombramiento, Causa militar 370/48, Archivo Intermedio de la Región Militar Noroeste.

5.- «Un gran gentío asistió a la concentración antifascista», *El Pueblo Gallego*, 12 de noviembre de 1935, p. 3.



Santiago Álvarez y José Gómez Gayoso durante la guerra (Fuente: archivo personal de José Gómez Abad).

Partido, interviniendo Dolores Ibárruri en representación del Comité Central del PCE. En febrero de 1936, Gayoso y la Federación Gallega se vuelcan en la campaña del Frente Popular para las elecciones generales, cuyos resultados otorgarán un acta de diputado por la provincia de Pontevedra al comunista cordobés Adriano Romero Cachinero.

El golpe militar y la guerra

En junio de 1936, el comunista gallego inicia un viaje que, sin saberlo, será el comienzo de un periplo político y vital que, en solo doce años, le llevará por varios frentes de guerra y diversos países de dos continentes. En esa fecha se desplaza a Madrid para participar en una Escuela de Formación destinada a cuadros comunistas procedentes de toda España, organizada por el PCE con el apoyo de la Internacional Co-

munista^[6] y dirigida por el búlgaro Rubén Avrámov. De la delegación gallega también forma parte Santiago Álvarez, quien en cuestión de semanas se convertirá en el mítico comisario político del Quinto Regimiento. La Escuela de Formación se celebra en el centro neurálgico del conflicto social y político que sacude el país en los días previos al golpe militar. Horas después del alzamiento, Gayoso se incorpora a las milicias populares y parte con destino a la sierra de Guadarrama, donde combatirá hasta el 2 de septiembre, fecha en que se incorpora a la columna de voluntarios que parte para el Frente de Andalucía con la misión de organizar la propaganda. En noviembre, regresa a Madrid para desempeñar el cargo de secretario general del Comisariado General del Ejército del Centro, pasando a trabajar directamente con su máximo responsable,

6.- Santiago Álvarez, *Memorias II. La Guerra Civil de 1936/1939*, Sada, Edición do Castro, 1986, pp. 13-35.

el comunista Francisco Antón.

El gallego se ocupa de la propaganda del Comisariado dirigiendo varias publicaciones y colaborando, simultáneamente, en tareas organizativas del Comité Central del PCE. Una de las publicaciones que encabeza es *Nueva Galicia. Portavoz de los antifascistas gallegos*, un semanario de orientación comunista que tiene como principal objetivo promover la unidad de los antifascistas gallegos en torno a la política del Frente Popular^[7]. En su redacción colaboran destacados miembros del Partido Galeguista, entre los cuales sobresale la figura del diputado Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. El 8 de agosto de 1937, el semanario también comienza su versión radiofónica con el inicio de una emisión para América que se retransmitirá cada domingo. Gayoso interviene en el primer programa como director de *Nueva Galicia*, y proclama^[8]:

«Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada, Jarama, Toledo, han visto flamear victoriosa la bandera azul y blanca de nuestro Batallón, que forma parte de la legendaria 11ª División. De esta 11ª División que mandan dos gallegos. Enrique Líster, el Líster a quien los fascistas califican de general ruso, a quien ya han matado en varias ocasiones, pero que es un cantero de Galicia, rudo como la piedra que él trabajó, hijo de campesinos, y que hoy es uno de los jefes más prestigiosos del Ejército popular. Otro, Santiago Álvarez, campesino de Orense, rudo hijo de la tierra, que sabe de las amarguras de los segadores gallegos que todos los años tenían que venir a Castilla a servir de herramienta barata».

7.- El primer número de la revista se publicó el 17 de mayo de 1937. Sus ejemplares pueden consultarse en la edición facsímil, *Nueva Galicia, portavoz de los antifascistas gallegos*, Sada, Ediciós do Castro, 1997.

8.- «Nueva Galicia inicia con gran éxito sus emisiones para América», *Nueva Galicia*, 13, 15 de agosto de 1937, p.2.

En el otoño de 1937 es destinado a Valencia para continuar su actividad en el Comisariado y trabajar en la redacción del periódico *Mundo Obrero*. En la ciudad de Turia conoce a quien será su compañera, la valenciana Concha Abad, que trabaja en la Comisión Político-Militar del Comité Central del PCE.

En febrero de 1938, Gayoso integra una delegación formada por un centenar de combatientes que realizarán estudios políticos y militares en la Unión Soviética, regresando a Barcelona tres meses después para ocuparse del aparato de propaganda del Comisariado del V Cuerpo del Ejército —más conocido por Ejército del Ebro— a las órdenes de su comisario general, Luis Delage.

El exilio

La definitiva derrota republicana en el frente de Cataluña obliga a Gayoso y Concha Abad a pasar a Francia por los Pirineos junto a los restos del Ejército Popular, en febrero de 1939. Serán internados en el campo de concentración de Saint-Cyprien, junto a otros 70.000 refugiados españoles. Gayoso es destinado a la Comisión político-técnica del PCE con sede en Toulouse, adscrita al Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles (SERE). Su compañera aún tardará cinco meses en reunirse con él, tras una fuga coordinada entre el PCE y el PCF. Tras la ilegalización de ambos partidos en septiembre, la pareja se ve forzada a regresar a la vida clandestina. El 22 de noviembre de 1939, el SERE les comunica su inclusión en las listas de embarque del vapor *Lasalle* con destino a Santo Domingo (República Dominicana). En el país caribeño integrarán la colonia Pedro Sánchez, creada por el PCE en régimen de cooperati-

va agrícola^[9]. Será una estancia corta, porque tres meses después deben trasladarse a La Habana por indicación del Partido, arribando a la isla el 19 de marzo de 1940.

En Cuba reanudan su actividad política de manera inmediata, trabajando con las asociaciones del exilio español y los colectivos de solidaridad con la causa republicana, además de su labor en el Partido. En el ejercicio de sus funciones establecen estrechos lazos con los principales dirigentes del cubano Partido Socialista Popular (PSP), algunos de los cuales ocuparán en el futuro importantes cargos tras el triunfo revolucionario en la isla. Entre las funciones principales de Gayoso están las labores de Información que desarrolla en coordinación con Julián Grimau. Por primera vez la pareja tiene posibilidad de una convivencia con cierta estabilidad y Concha Abad dará a luz a un hijo exactamente un año después de su llegada a la isla, en marzo de 1941. En septiembre, Gayoso parte en dirección a Nueva York por indicaciones del Partido, que tiene intención de trasladarle a España para continuar la lucha contra el régimen dictatorial. Es el deseo que ronda su cabeza desde el preciso momento en que partió al exilio.

La estancia de Gayoso en la ciudad de los rascacielos se prolongará durante catorce meses, hasta finales de 1942. En esa fecha emprende viaje a ciudad de México, donde se encuentra el grueso de la dirección política del Comité Central del PCE en el exilio americano. En la ciudad azteca colabora con los integrantes de la Comisión Gallega del PCE elaborando el *Boletín Galego de Información*. Constantes problemas de salud le mantienen ingresado durante dos meses en un sanatorio vinculado al Partido. A pesar de ello, continuará desarrollando su labor política en el propio recinto hospitalario,

9.- Santiago Álvarez, *Memorias II*, pp. 175-179.

Generales del poseedor de este permiso _____
 Edad, 30 años sexo masculino
 Raza caucásica
 Color blanco ; país
 de origen España
 nacionalidad española
 peso 75 Kls. ; altura 1.70 Mts.
 color de los ojos castaños
 estado casado
 Señas particulares visibles _____



Permiso de residencia en la República Dominicana (Fuente: archivo personal de José Gómez Abad).

realizando copias de dossieres con información aportada por personas recién llegadas de España y participando en grupos de estudio con otros camaradas. Cuando los problemas de salud remiten es trasladado a Ciudad de México, pasando a trabajar directamente para la dirección del Partido, con Vicente Uribe al frente. Durante meses, su actividad política y periodística es frenética e incluye la redacción de varios artículos para la revista *Nuestra Bandera*. Dos años después de su salida de La Habana recibe el plázet para unirse a la lucha clandestina en España. Tras una efímera estancia en Santiago de Chile llega a Buenos Aires, desde donde zarpará en dirección a Bilbao.

El regreso

En junio de 1944, Gayoso entra clan-

destinamente por el puerto bilbaíno con la instrucción de establecer contacto con la Delegación Central del PCE en Madrid que dirige Jesús Monzón, debiendo enlazar con Casto García Roza. Es asignado a la Secretaría de Agitación y Propaganda que dirige Gabriel León Trilla, y la comunista madrileña María Blázquez del Pozo se convierte en su colaboradora directa. Cuando en la primavera de 1945 el Buró Político decide la substitución de toda la dirección monzonista, Gayoso es llamado a Toulouse, recibiendo la orden de ocupar el puesto establecido.

El 17 de julio Santiago Álvarez llega a Madrid vía Barcelona, desempeñando provisionalmente un puesto como ayudante de Gayoso en la Secretaría de Agitación y Propaganda. Los dos paisanos, camaradas y amigos no habían vuelto a verse desde su estancia en La Habana y vuelven a encontrarse en la capital, esta vez en clandestinidad. Pueden realizar varias reuniones organizativas, pero su colaboración será breve, dado que el cerco de las fuerzas represivas se ha estrechado. El 25 de agosto, Santiago Álvarez y Sebastián Zapirain son arrestados en las inmediaciones de la Estación del Norte.

El Buró Político del PCE ha ordenado la reestructuración organizativa en el interior del país y Gayoso recibe instrucciones para ponerse al frente del Partido en Galicia. La máxima dirección también envía a los gallegos Antonio Seoane, Manuel Blanco Bueno y Manuel Fernández Soto. En abril de 1946, el de Maceda ve cumplido el sueño de regresar a su tierra natal para continuar la lucha y se establece temporalmente en Pontevedra. El primer Comité dirigido por Gayoso está compuesto por el secretario de organización, Eusebio García; el responsable del movimiento sindical Manuel Blanco y Manuel Crespo, al frente de las guerrillas,

auxiliado por Antonio Seoane^[10], aunque este último asumirá la jefatura del Ejército Guerrillero de Galicia muy pronto, a finales de 1946.

Al poco tiempo se produce el Congreso de reunificación entre el Ejército Guerrillero de Galicia y la Federación de Guerrillas de León-Galicia, que finalizará con un rotundo fracaso. No obstante, con la nueva dirección del PCE en Galicia se inaugura un período de auge de las guerrillas comunistas, que reciben un fuerte impulso organizativo. A este éxito contribuyen decisivamente las dotes organizativas, periodísticas y propagandísticas de Gayoso. En marzo de 1948 reciben la «Carta a Galicia» dirigida por el Buró Político del PCE al Comité Regional, iniciándose con las felicitaciones por el excelente trabajo realizado, destacando el amplio desarrollo alcanzado en el aparato de prensa y propaganda^[11]. El documento de la máxima dirección del Partido contiene las orientaciones políticas que debe seguir la organización gallega, pero Gayoso y Seoane apenas podrán difundir su contenido entre las diversas agrupaciones porque, paralelamente al apogeo político y militar, también se intensifica la labor represiva del régimen.

El día 10 de julio de 1948 caen en A Coruña Antonio Seoane y su compañera Josefina González Cudeiro cuando proceden a realizar la reunión de seguridad con un ayudante del jefe guerrillero, Eugenio Rueda Perosanz. Al día siguiente son arrestados Gayoso y María Blázquez cuando acuden al domicilio de Seoane para preparar la marcha a la Agrupación de Ourense. Al abrir la puerta del piso son encañonados por dos policías. María trata de cerrar la puerta y se abalanza sobre uno de los guardias para cu-

10.- Víctor Manuel Santidrián Arias, *Historia do PCE en Galicia (1920-1968)*, Sada, Edicions do Castro, 2002, pp. 287-298.

11.- Causa militar 370/78, Archivo Intermedio de la Región Militar Noroeste, folios, 77-88.



Campaña de homenaje a Gayoso y Seoane, La Habana, 1949 (Fuente: archivo personal de José Gómez Abad).

brir la fuga de su camarada, pero recibe un disparo en el vientre. Escaleras abajo, Gayoso es herido por un disparo que entra por su sien izquierda y le vacía un ojo. Minutos después, tras una breve fuga, será detenido.

Los cuatro arrestados son sometidos a sádicas torturas durante días. María Blázquez es interrogada en el propio hospital, a pesar de estar herida y embarazada de un niño que nacerá durante su estancia en prisión. Sin embargo, pese a la caída de los dos máximos dirigentes de Galicia, las fuerzas represoras únicamente consiguieron el arresto de once personas. Junto a ellos serán detenidos y procesados los gallegos José Rodríguez Campos, Juan José Romero Ramos, Clementina Gallego Abeledo y Juan Martínez Montero; los valencianos José Bartrina Villanueva y Carmen Orozco Muñoz; y el madrileño Luis García Jiménez.

Los diferentes aspectos relacionados con las detenciones y el proceso son detallados en las cartas que Gayoso y Seoane consiguen enviar desde la prisión a sus respectivas familias, al Partido y a las agrupaciones guerrilleras. En concreto, las epístolas del secretario general son ampliamente difundidas por los órganos del PCE y reproducidas a nivel internacional, convirtiéndose en símbolos de la lucha antifranquista y en denuncia de la barbarie del régimen dictatorial. De hecho, tendrán un papel fundamental en la amplia campaña internacional que se desenvuelve en varios países europeos y americanos para intentar salvar sus vidas, con especial incidencia en Cuba, Argentina y México. Es precisamente la amplia repercusión internacional que adquiere el proceso, la que provoca que la vista del consejo de guerra con carácter sumarísimo prevista para el día 18 de octubre en A Coruña se

celebre con presencia de público, incluyendo la asistencia de cinco cónsules. El salón donde se celebra el juicio está abarrotado y las autoridades se ven obligadas a desplegar un amplio operativo de seguridad durante el trayecto entre la prisión provincial y el cuartel donde se celebra la vista, que se convierte en una farsa jurídica. Aun así, el presidente del tribunal concede el uso de la palabra a Bartrina, Seoane y Gayoso, disponiendo este último de diez minutos donde condena la barbarie del Régimen, defiende el papel del Partido y elogia la lucha guerrillera, hasta que es obligado a sentarse y guardar silencio. Los tres dirigentes serán condenados a muerte, aunque a Bartrina le será conmutada la pena por treinta años de cárcel y fallecerá en la prisión de Burgos en 1956. En la celda de los penados a muerte, Gayoso y Seoane escriben una carta dirigida a los guerrilleros de la IV Agrupación Pasionaria^[12]:

«[...] Cuando ese día llegue, que llegará pronto, sólo os pedimos que no os domine el espíritu de venganza, pero haced justicia, no olvidéis, ni perdonéis a los victimarios de nuestro pueblo».

La Guardia Civil tiene prisa por acelerar la ejecución, e incluso organiza un acto de provocación en el exterior de la prisión

para incitar a los militares a apurar el procedimiento. Durante días, en la prisión se rumorea que serán ejecutados a garrote vil. Aunque, finalmente, el 6 de noviembre de 1948, José Gómez Gayoso y Antonio Seoane Sánchez son conducidos en medio de un fuerte operativo de seguridad al Campo da Rata de la ciudad herculina, donde serán fusilado por un pelotón de ejecución. Seoane y Gayoso se convertían en mitos inseparables de la lucha antifascista en nuestro país. Así fue como les cantó el poeta Rafael Alberti en las *Coplas de Juan Panadero*^[13]:

«¿A quién nombraré primero?
Nadie es segundo en mi lengua
cuando es de hacer el acero.
Si uno es glorioso, en glorioso
al otro no hay quien le gane.
Si digo Gómez Gayoso,
ya estoy diciendo Seoane».

Las epístolas de José Gómez Gayoso están recogidas en el libro *Vivir e morrer pola causa*, una monografía prologada por el profesor Xesús Alonso Montero que, además de su biografía, incluye un apéndice gráfico con fotografías y documentos pertenecientes a su propio archivo personal, así como las diferentes expresiones artísticas y literarias que han tenido al histórico dirigente comunista gallego como inspiración^[14].

12.- Comisión Organizadora del homenaje a Gayoso y Seoane, *Héroes de Galicia y de España*, Buenos Aires, Impresiones el Indio, 1949, pp. 41-46.

13.- Rafael Alberti, «Coplas para las GUITARRAS españolas de hoy. (En memoria de José Gómez Gayoso, Antonio Seoane y tantos otros héroes caídos en nuestra resistencia)» en *Coplas de Juan Panadero*, Montevideo, Pueblos Unidos, 1949.

14.- Carlos A. Portomeñe Pérez, *Vivir e morrer pola causa. Biografía de José Gómez Gayoso*, Arteixo, Galaxia, 2022.

AUTORES

Secciones: Dossier y Autor Invitado

Rolando Álvarez Vallejos. Historiador perteneciente al Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Su campo de especialización es la historia política de Chile en los siglos XX y XXI. Entre sus publicaciones se encuentran los libros *Gremios empresariales, política y neoliberalismo. Los casos de Chile y Perú (1986-2010)*, *Forjando la vía chilena al socialismo: El Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales (1931-1970)*; *Cuando se templó el acero. Las Juventudes Comunistas de Chile en los primeros años de la dictadura, 1973-1979*.

Franco Carreño, licenciado en Educación por la Universidad de la Frontera. Su línea de investigación se centra en la izquierda revolucionaria en Chile desde una perspectiva territorial

Karen Donoso Fritz. Historiadora. Se ha especializado en historia político-cultural chilena, abordando materias como la cultura popular, el folclor, la censura y las políticas culturales durante el siglo XIX y XX en Chile. Es autora del libro *Cultura y Dictadura. Censuras, proyecto e institucionalidad estatal en Chile. 1973-1989* (2019) y del tercer volumen de la obra *Populismo en Chile. De Ibáñez a Ibáñez* titulado *Populismo y Políticas Culturales* (2023). Docente por horas de la Universidad Alberto Hurtado, Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación y de la Universidad de Santiago de Chile.

Eduardo López Bravo. Doctor en Estudios Americanos, mención Historia, del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Universidad de Santiago de Chile (USACH). Investigador responsable del Proyecto del Departamento de Historia Fondecyt Postdoctorado N°3220287, «Chile 1973–1979: La Dictadura en la encrucijada y Corea del Sur como modelo posible» y miembro del Chilean Korean Study Center (ChKSCP) del IDEA – USACH. Sus trabajos se interesan por la historia económica de Chile y la historia de las relaciones económicas internacionales. Cruzan estos campos de trabajo los temas asociados a los estilos de desarrollo y los esquemas de inserción económica internacional.

Cristina Moyano Barahona. Doctora en Historia por la Universidad de Chile. Profesora Titular del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Decana de la Facultad de Humanidades de la misma casa de estudios. Sus estudios se han centrado en historia política reciente, historia intelectual de la izquierda, sus élites, así como también la disputa por la construcción social del tiempo presente. Sus últimas publicaciones «Ya no queremos más promesas». Tiempo histórico, expectativas y conflicto social en la mo-

vilización de las familias allegadas en los primeros años de la transición a la democracia» (2023) y «De márgenes e institucionalizaciones. Huellas del feminismo intelectual en la Revista de Crítica Cultural, Chile 1990-2007» (2022).

Valentina Pacheco Parra. Licenciada y profesora de Historia. Magíster en Literatura Latinoamericana y candidata a Doctora en Historia por la Universidad de Santiago de Chile. Sus trabajos se han centrado en la Historia reciente, política e intelectual desde una perspectiva de género. Especialmente se ha dedicado a estudiar el feminismo y los movimientos de mujeres desde la década de los 80 hasta la actualidad. En ello se enmarca su última publicación «De márgenes e institucionalizaciones. Huellas del feminismo intelectual en la *Revista de Crítica Cultural*, Chile 1990-2007» (2022).

Mariana Perry. Doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden y académica del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastian, ocupando el cargo de secretaria Académica del Doctorado en Historia. Entre sus principales publicaciones se encuentra *Exilio y Renovación Transferencia política del socialismo chileno en Europa Occidental, 1973-1988* (2020) y «Challenging Bipolarity: The Socialist International and the ‘Chilean Democratic Cause’ during the Cold War» (2023).

María Olga Ruiz. Doctora en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Historia por la Universidad de Chile. Investigadora académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Frontera. Investigadora responsable del proyecto DI UFRO 23-0036 «Emociones para y desde la revolución. Una aproximación cultural a las militancias de izquierda en el cono sur latinoamericano en los largos sesenta del siglo XX».

Alessandro Santoni. Doctor en Historia política por la Universidad de Bolonia y académico asociado del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, ocupando entre 1917 y 2023 el cargo de Director del Magister en Estudios Internacionales de esa institución. Entre sus principales publicaciones se encuentran los libros *Il PCI e i giorni del Cile. Alle origini di un mito politico* (2008) y , junto con Olga Ulianova y Raffaele Nocera, *Un protagonismo recobrado: la DC chilena y sus vínculos internacionales, 1973-1990* (2021).

Pablo Seguel. Sociólogo de la Universidad de Chile, candidato a Doctor en Historia y Magíster en Historia de la Universidad Santiago de Chile. Becario doctoral de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Se ha especializado en historia reciente y en derechos humanos. Es autor del libro *Soldados de la represión. Anticomunismo, contra-subversión y seguridad nacional en las fuerzas armadas chilenas* (2022).

Consuelo Telechea. Magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de La Frontera y socióloga (Pontificia Universidad Católica de Chile). Sus líneas de investigación son memorias de segunda y tercera generación, historia reciente de Chile.

fundación de
investigaciones
marxistas



www.fim.org.es